

Con un análisis del gobierno de Unidad Popular en Chile, de las distintas etapas que atravesó y de la polémica que se desarrolló en el seno de los partidos que la integraban —especialmente en el socialista—, Gabriel Smirnow sostiene que la "vía chilena al socialismo" dejó una revolución desarmada, indefensa ante las fuerzas agresoras de la burguesía y el imperialismo. Más que un deslinde de responsabilidades, el presente libro quiere recoger la lección que arrojan la reciente historia de Chile y el drama de sus organizaciones proletarias y su gobierno constitucional, criminalmente agredidos.

Entre la ya abundante documentación sobre los años de la Unidad Popular, *La revolución desarmada* ofrece el punto de vista de su sector más radical: una contribución esencial a la actual (e importantísima) polémica sobre el acceso de la izquierda al poder por la vía electoral.

En la misma colección

SP29 Carlos Mistral
**Chile: del triunfo popular
al golpe fascista**

SP37 Ruy Mauro Marini
**El reformismo y
la contrarrevolución**
Estudios sobre Chile

SP43 Susana Bruna
Chile: la legalidad vencida



Chile 1970-1973

**Gabriel
Smirnow
La
revolución
desarmada
Chile
1970-1973**



**Serie
popular
Era**





**Gabriel
Smirnow
La
revolución
desarmada
(Chile 1970-1973)**



**Serie
popular
Era**

INDICE

Introducción,	11
Abril de 1971: avances y retrocesos,	23
El debate sobre las clases medias,	34
El proyecto económico y las leyes del mercado,	54
El desarrollo de la lucha de clases,	75
Octubre de 1972: primera insurrección burguesa,	99
El poder popular,	121
Marzo de 1973: la "vía parlamentaria" de la derecha,	148
Las instituciones del Estado capitalista,	175
Septiembre de 1973: el triunfo de la reacción,	206
¿Una vía chilena al socialismo? ,	231
Ideología y transformación,	252

A los trabajadores de mi patria,
cuya sangre no habrá corrido en vano
el día que el imperialismo
y la burguesía sean derrotados.

INTRODUCCION

Las diversas formas que asume el sistema capitalista en la dirección de las sociedades latinoamericanas corresponden en un grado importante a las tradiciones de los mecanismos de dominación que han desarrollado las clases hegemónicas en los distintos países de este continente.

La profundización de la democracia, el ascenso de los niveles de organización y conciencia de los trabajadores, y la división en las filas del amplio espectro de intereses burgueses hicieron que los detentadores del poder económico, social y político de Chile, fieles a esas tradiciones, entregaran la presidencia de la República, el 4 de noviembre de 1970, a Salvador Allende y a la coalición de partidos de la Unidad Popular. En esta forma se inició un proceso cuya originalidad concitó la atención y el estudio de su desarrollo, no solamente en sectores que impugnan el sistema capitalista, sino también en los que lo defienden.

Por primera vez en la historia de América Latina y del mundo, un conjunto de partidos basado fundamentalmente en la unidad comunista-socialista y un hombre que se declaraba marxista accedieron mediante elecciones democráticas a la dirección de los asuntos estatales de un país capitalista y dependiente.

Posteriormente, la intervención descarada e impúdica de las empresas transnacionales y de organismos del gobierno norteamericano contra el gobierno de la Unidad Popular, el carácter democrático y pluralista del mismo y el avance de las fuerzas revolucionarias durante su mandato, la traición de los generales complotados y la violencia fascizante de la represión que azotó al pueblo chileno son todos factores que explican y justifican el interés por este proceso y la inmensa solidaridad que suscita la resistencia a la dictadura.

Sin embargo, con contadas excepciones, los elementos que se utilizan como explicación de la derrota del proceso transcurrido durante los mil días que duró el gobierno del presidente Allende, señalan solamente la intervención del imperialismo norteamericano y la felonía de los altos militares que se alzaron contra el régimen constitucional.

La presencia de funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia en suelo chileno, desde antes incluso que asumiera Allende, es hoy materia comprobada; también es de público conocimiento el financiamiento del diario reaccionario *El Mercurio* y de otros medios de comunicación: su participación en el asesinato del general constitucionalista Schneider, su ayuda en la compra masiva de miles de propietarios de camiones que actuaron en dos oportunidades como detonantes de movimientos sediciosos de la burguesía. Más importante aún fue el "bloqueo económico", que denunciara Allende en varias oportunidades (Naciones Unidas, 4 de diciembre de 1972), y que significó la cancelación de préstamos y créditos de todos los organismos financieros dirigidos por los norteamericanos, así como de las empresas privadas: suspensión de importaciones, nuevas exigencias en la cancelación de la deuda externa, embargo de los envíos de cobre; en fin, un cúmulo de actividades "legales" que llevaron a un semi-caos a la economía de un país tradicionalmente dependiente de Estados Unidos, como lo era Chile en noviembre de 1970.

La experiencia chilena amenazó en alto grado los intereses imperialistas en un plano estratégico que superaba ampliamente sus fronteras geográficas, y por tanto concentró la atención y esfuerzo de los departamentos pertinentes del Estado norteamericano. Tan temprano como el 14 de septiembre de 1970, y por lo tanto antes que asumiera el presidente electo, el secretario de Estado Kissinger se refería a esta "posibilidad" en los siguientes términos:

Es bastante fácil predecir que, si Allende gana, hay muchas posibilidades de que se establezca durante un periodo de años una suerte de gobierno comunista. En este caso, no tendríamos un gobierno de este tipo en una isla que no tiene relación tradicional ni impacto en América Latina, sino un gobierno comunista, unido por ejemplo a Argentina con la que tiene una larga frontera —que ya está profundamente dividida—, unido a Perú que se ha estado moviendo en direcciones que dificultan tratar con él y unido a Bolivia que también ha avanzado en una dirección más izquierdista, contra EU, incluso sin ninguna de esas características. Así que yo creo que no debemos engañarnos con que la subida de Allende al poder en Chile no nos presente problemas masivos a nosotros y a las fuerzas democráticas y favorables a EU en América Latina, y por cierto a todo el hemisferio occidental.

La traición de los generales encabezados por Pinochet es también suficientemente conocida y, en un plano estrictamente ético, este hombre faltó a su "palabra de honor", tan apreciada en los medios castrenses. Pero al actuar así lo hizo arrastrando a las fuerzas armadas en su conjunto, y por tanto conduciéndose como en definitiva lo hicieron todas las instituciones del Estado chileno, que debiendo respeto y obediencia a la Constitución, fueron parte integrante del plan sedicioso que derrotó a los trabajadores y terminó con la democracia.

La actividad del imperialismo norteamericano es tan obvia en defensa de sus intereses que todo dirigente popular que se proponga perjudicarlos debe estar preparado para enfrentarla. Asimismo, el papel de las fuerzas armadas, en América Latina en particular y en el mundo capitalista en general, es parte de la cultura política de la que estaban bien provistos los dirigentes chilenos (incluyendo todas las especificidades de los institutos militares nacionales).

En consecuencia, toda explicación simplista de la derrota del gobierno del presidente Allende tiende a disimular y pretende ignorar o minimizar los errores tácticos o lo equivocado del proyecto que se llevó a cabo durante los tres años de Unidad Popular.

La historia del movimiento obrero y popular así como la difusión de un pensamiento socialista en Chile —a diferencia del resto de América Latina— se remonta a los últimos años del siglo pasado. Las primeras huelgas masivas son reprimidas a sangre y fuego, particularmente en las salitreras, donde la explotación extranjera estaba unida a la concentración de miles de trabajadores en pequeños centros urbanos. Es así como en 1907, 1921 y 1925, el ejército aplasta sus reivindicaciones económicas y sociales con verdaderas masacres que tienen como consecuencia el reflujo de las organizaciones del naciente proletariado. Sin embargo, éstas se siguen ampliando y, desde la fundación del Partido Socialista Obrero, por Luis Emilio Recabarren, en 1912, mantienen un carácter independiente de clase que las hace perseguir sus propios objetivos políticos. En el año 1938 comienza un periodo de modernización de las estructuras económicas dirigido por el Partido Radical, que se convierte en la expresión de nuevos sectores burgueses, industriales y comerciales, desplazando por largos años a la oligarquía chilena del ejercicio directo de los poderes públicos. Este es un periodo caracterizado también por un reflujo de los niveles de conciencia y organización obreras y de su actividad independiente, pues marchan a la zaga del programa del Frente Popular en el gobierno reformista. En el año 1953 se reinicia un proceso de avance, jalonado de masacres, de luchas legales y huelgas sometidas violentamente, de sindicalización obrera y campesina, de desarrollo de los partidos populares que ven crecer su público en forma ininterrumpida. A partir de 1967, asistimos a un nuevo y decisivo auge iniciado con la huelga general declarada por la Central Unica de Trabajadores, que demuestra el poderío alcanzado en el

seno de la sociedad chilena por sus trabajadores, encabezados por el proletariado industrial. Este periodo de nuevo ascenso de las luchas populares conduce a la victoria del 4 de septiembre de 1970, que señala la extensión, la capacidad y la potencialidad de las mismas para transformar un sistema social que hasta la fecha no había resuelto los problemas básicos de la mayoría de la población ni encontrado el camino para incrementar la economía ni siquiera en términos de una expansión capitalista satisfactoria.

Pero ya en febrero de 1971 los asistentes al Congreso del Partido Socialista enfatizan que “el gobierno popular es una herramienta para la conquista del poder por los trabajadores” y, como hemos podido comprobar posteriormente, las herramientas se pueden usar bien o mal. . .

Una rara unanimidad se ha dado en torno al proceso chileno. Partidarios de profundas transformaciones, ya sea a través de la “vía político-institucional” como de la “vía revolucionaria”; enemigos de esas transformaciones, como los partidarios del Estado “comunitario” o “autoritario”, todos están de acuerdo para afirmar que el 4 de septiembre de 1970 se inició un periodo que amenazaba la estabilidad de las instituciones políticas de Chile y por tanto, todas sus relaciones sociales y económicas. En todos los procesos sociales —y más aún en los procesos revolucionarios— existe una constante interacción entre las fuerzas adversarias, los errores de un sector se traducen en acumulación de energía y solidez del contrario, las debilidades tácticas se convierten eventualmente en debilidad estratégica, y un proyecto teóricamente equivocado conduce fatalmente a la derrota en su realización.

Al caracterizar las distintas etapas e influencias que marcaron ese proceso es indispensable, entonces, señalar que la actividad del imperialismo y la traición de los generales constituyen factores sin duda importantes pero no los fundamentales, pues éstos no son suficientes para derrotar por sí solos una correlación de fuerzas favorable

a los trabajadores, como lo demuestran la experiencia histórica en general y la chilena en particular.

Las elecciones de septiembre de 1970 se realizan en una situación tripolar, con la presentación de los candidatos Jorge Alessandri, por el Partido Nacional y la Democracia Radical; Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana, y Salvador Allende por la Unidad Popular. Es necesario explicar brevemente por qué las fuerzas no socialistas llegaron divididas a este proceso, ya que ello encierra también elementos importantes para comprender el desarrollo futuro del enfrentamiento que se da en el interior de las instituciones del Estado.

Ya en la consulta presidencial de 1964 se produjo un fenómeno inquietante para los partidos políticos que presentaban distintos modelos de administración capitalista —en función de los intereses de diferentes fracciones de las clases dominantes— para la sociedad y la economía chilenas. Inicialmente los candidatos eran tres: Julio Durán por los partidos Radical, Liberal y Conservador; Eduardo Frei por la Democracia Cristiana, y Salvador Allende por las organizaciones que en esencia constituirían posteriormente la Unidad Popular. Unas elecciones inesperadas, provocadas por el remplazo de un diputado, dieron como resultado la evidencia de un avance impresionante de las fuerzas de izquierda. De mantenerse los tres candidatos, resultaba evidente a todos los análisis que Salvador Allende obtendría la primera mayoría. La consecuencia de esto fue que, precipitadamente, los partidos Conservador y Liberal restaron su apoyo al candidato que mejor representaba sus intereses y volcaron todos sus esfuerzos electorales tras la figura de Eduardo Frei, obteniendo éste un porcentaje superior a la mitad de los sufragios.

Ya en la presidencia, Frei llevó adelante un programa de modernización de las atrasadas estructuras económicas chilenas, especialmente en la propiedad agraria, donde una reforma bastante importante permitió el traspaso de parte

de la misma a un sector que en esa forma accedía a niveles superiores de consumo con el consiguiente estímulo a la producción industrial. Pero esta política también tuvo como resultado enajenar la voluntad de la oligarquía chilena que conservaba fuertes intereses en el campo. Asimismo, las líneas de crecimiento económico de Frei estaban ligadas a fracciones más dinámicas de la burguesía industrial, que irrumpieron desplazando con fuerza, especialmente en la utilización de los créditos que el Estado distribuía, a los monopolios que tradicionalmente detentaban los principales centros de poder. En esta forma se abrió una zanja profunda entre la Democracia Cristiana y el recién creado Partido Nacional (fusión de los partidos Conservador y Liberal).

Por otra parte, a partir del año 1967, la situación económica del país entra en una etapa de profundo marasmo. La tasa promedio de crecimiento para los cuatro años comprendidos entre 1967 y 1970 fue de un 2.7% anual, apenas superior a la tasa de incremento de la población (2.3%) y ciertamente inferior a la casi totalidad de los países latinoamericanos. Asimismo, la cesantía alcanzaba para ese mismo periodo un promedio del 5.2% de la población activa, de acuerdo a las cifras oficiales (Oficina de Planificación Nacional, 1971).

Para enfatizar aún más claramente el fracaso de las pretendidas medidas reformistas de Frei, que se estrellaban en las leyes inexorables de acumulación y concentración capitalista, señalemos que, el año 1970, un millón 265 mil trabajadores recibían ingresos inferiores al mínimo del sueldo vital y, en conjunto, este sector que representaba casi el cincuenta por ciento de la población activa percibía el 12% del ingreso nacional.

La economía chilena había entrado definitivamente en un periodo de neto estancamiento que solamente podía romperse recurriendo a políticas revolucionarias o intensamente reformistas, afectando en ambos casos —en distinta medida— a los sectores burgueses más retardatarios que

obtenían sus beneficios directamente de esta situación. Un programa de profundas transformaciones fue encabezado por Salvador Allende, pero la Democracia Cristiana se encontró en la senda de un reformismo desarrollista que dirigía su sector progresista, encabezado por Radomiro Tomic.

En esta forma, razones históricas y proyectos forzosamente distintos en el plano económico impidieron que se repitiera la unión de partidos que diera el triunfo en 1964 a Eduardo Frei. El año 1970, la “derecha económica” identificada con la “derecha política”, se embarcó a velas desplegadas tras la figura del septuagenario Jorge Alessandri, quien efectivamente recibió muchos más votos que el reformista demócrata cristiano Tomic, y que fue vencido por Allende por una diferencia electoral poco significativa.

En efecto, la noche del 4 de septiembre, la sorpresa invadió las mansiones de la clase propietaria chilena: con un 36.3% Allende había obtenido la primera mayoría relativa —Alessandri obtuvo un 34.9% y Tomic un 27.8%— y de acuerdo a la tradición institucional le correspondería asumir la presidencia de la República.

El periodo de sesenta días comprendido entre la fecha de la elección y el día de asunción efectiva del Poder Ejecutivo contó con un movimiento popular que se mantuvo a la defensiva, expectante y con todas sus fuerzas en tensión; sin embargo, el periodo estuvo caracterizado en lo esencial por la división en el interior de las clases dominantes en dos proyectos, desunión que se mantendría en el futuro durante un cierto plazo. Un sector se proponía limitar y reducir el Programa de la Unidad Popular hasta otorgarle un contenido meramente reformista, mediante su integración al desarrollo de la institucionalidad tradicional en Chile y la sujeción al mismo de los objetivos del movimiento popular; en tanto que el otro sector, consciente de las fuerzas sociales que se estaban desatando, pretendía impedir su ejecución desde el primer momento, aun a costa de hacer añicos esa

institucionalidad de la que estaban tan orgullosos los dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos chilenos.

Es así como, desde los primeros días inmediatamente siguientes a las elecciones, los hechos demostraron que esas reglas del juego establecidas tan laboriosamente en los últimos cuarenta años eran rápidamente desechadas por esos dirigentes al no servirles para mantener su dominación. Puesto que la legalidad, “su legalidad”, ya no les era útil, no vacilaron un instante en convertirse en hombres peligrosos que buscaban subvertir el orden público. Así, se inició una fuga de capitales que pretendió llevar el pánico a los corazones de la pequeña y mediana burguesía propietarias y derrumbar la economía del país, maniobra implementada por el ministro demócrata cristiano Andrés Zaldívar y la CIA. En los *Documentos secretos de la ITT*, publicados por Quimantú, la editorial estatal chilena, podemos leer el informe enviado por el agente Bob Berrellez el 29 de septiembre:

A pesar del pesimismo continúan los esfuerzos para mover a Frei y/o los militares a actuar para detener a Allende. También continúan los esfuerzos clandestinos para lograr la quiebra de una o dos de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo más importantes. Se espera que esto desencadene un pánico bancario y el cierre de algunas fábricas, lo que provocará un mayor desempleo.

Al fracasar este intento, en la segunda quincena de octubre de 1970, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general René Schneider, fue asesinado por negarse a colaborar en un golpe de Estado en el que participaban el Comandante del Ejército de la Guarnición de Santiago, el Comandante en Jefe de la Marina y el Director General de Carabineros, complot organizado por el general en retiro Roberto Viaux, que contó con la

participación de un sector de la Democracia Cristiana. En efecto, en el libro *Conversaciones con Viaux*, éste afirma sin jamás haber sido desmentido: “Por fin, alrededor de la tercera semana de septiembre, supe por mis contactos que el señor Frei se atrevería a actuar. También se me dijo que el Ministro de Hacienda, señor Zaldívar, haría una exposición de la hacienda pública, como en realidad lo hizo, en la que esbozaría la situación económico-financiera como desfavorable.” Y continúa más adelante: “Debe haber sido alrededor de la primera semana de octubre cuando don Guillermo Carey me informó que recién el presidente deseaba que se diera el golpe de Estado; es así entonces que entraría a gobernar una junta militar exiliando al presidente, con la condición de que no se supiese la participación del señor Frei en todo esto.” En otras palabras, Frei cuidaba su imagen de demócrata a toda costa, para así tener la posibilidad de llegar nuevamente a la primera magistratura.

Sin embargo, los facciosos fracasaron en su intento de arrastrar al conjunto de las fuerzas armadas y por lo tanto se vieron impedidos de llevar a cabo su plan conspirativo. Simultáneamente, una fracción importante de la Democracia Cristiana negociaba con Allende el llamado Estatuto de Garantías, que debía incorporarse a la Constitución, y a cuya aceptación supeditaba el otorgar sus votos en el Congreso Pleno, indispensables para la confirmación de éste como presidente de la República. Fundamentalmente, estos estatutos limitaban la autoridad e iniciativa del Poder Ejecutivo, haciéndolo más dependiente del Congreso, especialmente en diversos puntos que contemplaba el Programa popular.

De esta manera, el sector “progresista” de la Democracia Cristiana mostraba las uñas al mismo tiempo que confirmaba su aprecio por la institucionalidad chilena, su confianza en que ésta era suficiente para mantener a las fuerzas populares dentro de los márgenes que establecía la Ley Fundamental aprobada por la burguesía en 1925, y

aceptando la realización de un programa de reformas importantes siempre que éstas se ajustaran a los cauces e ideología que las clases dirigentes habían mantenido y afirmado en el país.

El 4 de noviembre de 1970, el imperialismo norteamericano y gran parte de la burguesía asistían estupefactos —pero no impotentes— a la investidura del primer marxista confeso que era elegido “libre y democráticamente” presidente de la República austral.

Como dijimos, la clase dominante no vaciló un momento en recurrir a todos los métodos para enfrentar la amenaza a sus intereses que constituía el gobierno de la Unidad Popular. Al actuar así no hacía más que confirmar reglas fundamentales del pensamiento teórico marxista y de la experiencia histórica universal: un organismo vivo en peligro de muerte se resiste con todos los medios a su enemigo. Y la clase propietaria chilena gozaba de muy buena salud. Derrotados los sectores que intentaron el colapso económico y el golpe de Estado en los días que antecedieron al traspaso del gobierno, la burguesía se retiró organizadamente: debilitada, peor aún, dividida, pero sin caer en el pánico y diseñando desde esa fecha los distintos modelos alternativos de enfrentamiento al proceso iniciado por el triunfo de Allende.

La Unidad Popular, por su parte, comienza el gobierno con un proyecto —que en lo esencial no cambiaría durante todo el transcurso del proceso— que consideraba la transformación gradual de las estructuras del país evitando los enfrentamientos violentos. Con mayor precisión, un proyecto fundamentalmente dirigido por el Partido Comunista Chileno, que podía constituir el antecedente directo y sumamente valioso para el desarrollo de la política de los partidos comunistas italiano y francés.

En el transcurso de los mil días del gobierno popular, veremos cómo la mayor parte de los dirigentes de izquierda fueron incapaces de modificar hasta el último instante su estrecha ligazón con la “legalidad” que les había

permitido alcanzar una parte de la administración del Estado, y el carácter no violento, institucional, que pretendían imprimirle al proceso político y a la lucha de clases en Chile.

En esta forma, se producía un fenómeno original y contradictorio: transformaciones de contenido revolucionario en los planos económico y social pretendían imponerse pacíficamente a la resistencia cada vez más encarnizada de los enemigos de los trabajadores chilenos. El resultado es conocido y la responsabilidad es de aquéllos que se negaron a aprovechar todas las coyunturas favorables que se dieron para golpear a la burguesía y sus instituciones. Pretendemos demostrarlo.

ABRIL DE 1971: AVANCES Y RETROCESOS

El programa de gobierno elaborado por la Unidad Popular fue fruto de una intensa discusión por parte de los partidos que la componían. Comunistas, socialistas, radicales, socialdemócratas, API* y MAPU respondían a distintas fracciones populares, tenían distintos orígenes y tradiciones históricas, visualizaban diferentes proyectos económicos, sociales y políticos para el desarrollo de Chile.

Comunistas y socialistas constituían el eje de la coalición en la cual el peso cuantitativo de la clase obrera era determinante. Ambos partidos también influían en amplios sectores de campesinos, empleados, pobladores, artesanos, pequeños comerciantes y estudiantes. Radicales, socialdemócratas y API representaban una amplia gama de intereses de las clases medias en la cual estaban comprendidos pequeños industriales, comerciantes, profesionales, funcionarios de la administración pública. Sin embargo, el peso de estos últimos dentro de la UP era manifiestamente minoritario, tanto en su número como en su perspectiva de aportar a las transformaciones que se consideraban indispensables.

Le correspondió al Partido Socialista imponer la candidatura de Salvador Allende como expresión del papel que debían asumir los partidos obreros en el proceso chileno, que debía "iniciar la construcción del socialismo" de acuerdo a lo expresado en el Programa de la Unidad Popular, resolución que no se alcanzó sin una intensa lucha de tendencias, particularmente con los sectores que tenían sus raíces en la historia institucional de Chile, en su papel de administradores e intermediarios políticos de las relaciones sociales.

* Acción Popular Independiente. [E.]

El resultado fue la introducción de ambigüedades y compromisos en el Programa de la Unidad Popular. Este, sin embargo, caracterizaba correctamente la sociedad chilena como capitalista y dependiente, y proponía un conjunto de medidas que apuntaban a la transformación profunda de las relaciones sociales y económicas. En el plano de las realizaciones de carácter nacional antimperialista, se contemplaba la nacionalización de las principales riquezas mineras —cobre, hierro, salitre, carbón—, la mayor parte de las cuales estaban en manos de empresas norteamericanas, así como la estatización de un número significativo de grandes monopolios industriales y del sistema bancario que también pertenecía a firmas transnacionales y a la gran burguesía financiera nativa. En el campo, se propugnaba la liquidación total del latifundio mediante la expropiación intensiva de todos los predios agrícolas superiores a las ochenta hectáreas de riego, y la constitución de nuevas formas cooperativas y estatales de producción. En el sector industrial, se pretendía la creación de un área de producción social que comprendería —mediante la expropiación de las principales 91 unidades fabriles— la parte más dinámica e importante del mismo. La participación de los trabajadores en la dirección de todas las empresas estatales introducía un elemento nuevo y revolucionario en las relaciones tradicionales de producción. La sustitución del sistema electoral-legislativo mediante la extensión del derecho al sufragio a nuevas capas de la población y la constitución de una cámara legislativa única; la reforma profunda del sistema judicial a través de un nuevo sistema de elección de los jueces y la creación de tribunales populares, en fin, eran todas medidas encaminadas a resquebrajar el sistema tradicional de dominación capitalista y abrían el camino para su destrucción y el inicio de la construcción del socialismo, como producto de una nueva relación de fuerzas entre las clases que componían la sociedad chilena.

Este proyecto de cambios revolucionarios contenía, sin

embargo, una importante dosis de ambigüedad. En él estaban contemplados los mecanismos para alterar las relaciones de fuerzas en favor de los trabajadores, pero no elaboraba las formas y vías que debían conducir a la desaparición de la burguesía como clase. Por el contrario, en él se otorgaban garantías para su mantenimiento en la confianza de que sería posible postergar la resolución de esa ecuación en un futuro indeterminado. En otras palabras, no se planteaba el problema del poder sino en una forma mecanicista que se basaba en el desarrollo democrático e institucional del Chile de los últimos cuarenta años, así como en las nuevas relaciones que se implantaban en el campo internacional. Consecuente con las premisas señaladas, el Programa de la Unidad Popular pretendía afianzar una alianza de clases que debía ser dirigida por el proletariado y abarcaba un amplio espectro de intereses que incluía a la burguesía no monopolística, bajo el nombre genérico de “clases medias”. Asimismo, se pretendía ignorar el carácter social y político de las fuerzas armadas chilenas y el papel que éstas habían jugado en su historia, como estamento separado de la sociedad y particularmente ajeno a los objetivos y reivindicaciones de la clase obrera.

En síntesis, podemos decir que este proyecto de profundas transformaciones contemplaba un tránsito “político-institucional”, no violento, principalmente de las estructuras económicas y sociales, las cuales se iban modificando gradualmente venciendo la resistencia que el imperialismo y la burguesía opondrían también dentro de las leyes democráticas establecidas y susceptibles de ser ampliadas considerablemente. Estos cambios permitirían generar nuevas relaciones de fuerza entre las clases de manera que la transformación de las estructuras políticas se realizaría a continuación y con “el menor costo social posible”. Ya desde su inicio, el gobierno popular pretendía extraer su mayor cuota de poderío de la legalidad mediante la cual había asumido el Poder Ejecutivo. Pron-

to veremos cómo dicha legalidad se constituyó en la fuente principal de la debilidad de todo el proceso revolucionario, y a partir de un momento dado, entorpeció y socavó la autoridad del régimen constitucional.

En abril de 1971, la Unidad Popular, identificada con el gobierno, había aumentado enormemente su popularidad. La fuerte redistribución de los ingresos, la disminución apreciable de la cesantía, de la inflación, las primeras expropiaciones y estatizaciones y la reforma agraria en el campo encontraban a una burguesía aún dividida, desunión que se expresaba políticamente en apreciables diferencias en las posiciones de demócrata cristianos y nacionales. Más importante aún, las masas populares demostraban una actividad incansable y se daban los primeros síntomas de su participación a todos los niveles. Los partidos Socialista y Comunista aumentaban diariamente el número de sus militantes y hasta esa fecha existían bases sustantivas de acuerdo sobre las medidas inmediatas. Las organizaciones sindicales se extendían en el campo y la ciudad, y un despertar político se afianzaba a través de todo el país.

Es en esas favorables circunstancias que se llevan a cabo las elecciones nacionales de regidores, en las cuales los partidos de izquierda obtienen el cincuenta y uno por ciento de la votación, siendo el resto repartido entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. En esas condiciones el Partido Socialista propone la realización de un plebiscito —contemplado en la Constitución y que posteriormente sería reclamado por la oposición cuando las condiciones electorales se habían tornado convenientes para ella— con el objeto de poner término al Congreso Nacional que ya se estaba convirtiendo en el principal reducto de enfrentamiento al cumplimiento del programa popular.

En esta forma, el Partido Socialista pretendía imponer, incluso dentro del respeto a la “vía institucional” preconizada por Allende, un aceleramiento en el ritmo del

proceso que había sido hecho plenamente factible a partir de los resultados de las últimas elecciones. Le corresponderá al Partido Comunista frenar esta proposición, como lo recordará Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista en carta pública que le dirigiera a Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista, interpretando así la actitud de este último:

En este sentido, los socialistas, conscientes de que cualquiera debilidad nuestra, aparente o real, estimula al adversario y desanima a las masas trabajadoras, nos hemos opuesto permanentemente a las actitudes de conciliación con los enemigos de clase, como el rechazo de la proposición formulada por nuestro partido de convocar a un plebiscito inmediatamente después de los comicios municipales de abril de 1971, aprovechando la victoria electoral conquistada entonces por la Unidad Popular. . .¹

Esta fue una extraordinaria oportunidad, la mejor tal vez dentro del esquema de desarrollo político-institucional, para avanzar sin riesgos excesivos para la estabilidad del gobierno. Lo comprueba el hecho de que la división de la burguesía en dos modelos contradictorios de oposición imposibilitaban a ésta para enfrentar con la energía necesaria un desafío del gobierno popular. En esa fecha las clases dominantes aún no se reponían de la derrota de septiembre y las elecciones de abril contribuyeron a desorientarlas. Más aún, las medidas de contenido antimperialista encontraban el apoyo o la pasividad de importantes sectores de la Democracia Cristiana y obligaban a otros del Partido Nacional a un prudente silencio (posteriormente la ley de nacionalización de las grandes empresas norteamericanas, propietarias de las minas de cobre, obtendría la unanimidad de los votos en el Congreso).

¹ Carlos Altamirano, *Decisión revolucionaria*.

También es importante señalar que en esa coyuntura los grupos golpistas de las fuerzas armadas se mantenían sumamente debilitados a raíz del abortado golpe de Estado de octubre de 1970. Esto es, en abril de 1971 se reunían tres condiciones que no se repetirían posteriormente: la mayoría del electorado se encontraba en las posiciones de la Unidad Popular, la oposición burguesa no había logrado reconstituir su unidad puesto que los dos modelos alternativos se conservaban vigentes y diferenciados, y la enorme mayoría de los aparatos represivos se mantenía leal al régimen constitucional.

Es ciertamente difícil analizar lo que hubiera sucedido de haberse aceptado la proposición del Partido Socialista, pero no cabe duda que habrían mejorado las condiciones para el afianzamiento de las iniciativas del gobierno y del movimiento popular, ya que un plebiscito exitoso habría indudablemente conducido a la disminución de la capacidad de maniobra y obstrucción de los representantes políticos de la burguesía en el Congreso.

La respuesta negativa del Partido Comunista no fue casual. Es ya en el mes de noviembre de 1970 cuando su línea de entendimiento con la Democracia Cristiana logra para sus posiciones la mayoría en la dirección de la Unidad Popular.² Esta política de diálogo con la principal fuerza de oposición al gobierno de Allende era consecuente con su estrategia de alianzas de clases y desarrollo económico, y a través de todo el periodo no sería jamás quebrada, a pesar de la línea distinta que impulsaban sectores importantes y en ocasiones mayoritarios del otro principal componente de la Unidad Popular, el Partido Socialista.

En efecto, incluso antes de abril de 1971 comienzan a delinearse en el interior de los partidos populares dos tácticas diferentes, dos estrategias divergentes, que tenían en co-

² Joan E. Garcés, *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*.

mún el programa de gobierno que todos habían suscrito, el cual se prestaba también a interpretaciones desiguales. En el transcurso del proceso veremos definirse ambos sectores, pero ya en mayo de 1971 levanta con energía la palabra la izquierda socialista para hacer los siguientes planteamientos:

La conquista del gobierno y ante todo de la presidencia de la República actualmente en las manos de un militante del Partido Socialista, entrega al movimiento popular un instrumento sin precedentes para acelerar la destrucción del orden burgués y comenzar la construcción de la sociedad socialista. Los trabajadores chilenos consideran que este triunfo es el resultado de una larga historia jalonada de masacres y de mártires. El proletariado ha llevado adelante esta lucha para conquistar el socialismo y no para detenerse a medio camino. Nosotros no debemos, sin duda, olvidar que un proceso debe seguir un cierto ritmo de acuerdo con las fuerzas que en él participan, y que es necesario destruir poco a poco los reductos del sistema capitalista. Pero con mayor razón es absolutamente necesario mantener nuestro objetivo —el socialismo— como un objetivo a corto plazo. Las elecciones del 4 de abril han demostrado que existe una voluntad mayoritaria del pueblo y de los trabajadores chilenos para proseguir hacia adelante con audacia la marcha hacia la construcción de una nueva sociedad. Si las elecciones dentro del marco jurídico burgués sirven para algo, es precisamente para medir el grado de conciencia de los trabajadores y del proletariado. Actualmente vivimos un momento decisivo en la conciencia del proletariado chileno, un mandato imperativo de llevar a cabo ahora un cierto número de objetivos fundamentales que se han transformado en tareas inmediatas:

10.] La destrucción de la base económica e institucional del imperialismo en nuestro país y la limitación

del poder de la burguesía nacional. Tras este objetivo es indispensable acelerar las nacionalizaciones y desmascarar definitivamente la Democracia Cristiana.

2o.] La democratización del poder legislativo y judicial. Estos dos objetivos se encuentran íntimamente ligados ya que, después de las elecciones, resulta inaceptable ver a estos dos órganos de la burguesía boicotear la voluntad popular. La disolución de estos dos poderes es actualmente la responsabilidad *inmediata* del gobierno del presidente Allende.

3o.] Democratización del poder militar del país. Es necesario un plan concreto para que las fuerzas armadas intervengan activamente en nuestra sociedad, integrándose conscientemente a la corriente de la voluntad mayoritaria. No se trata solamente de una tarea gubernamental. Al contrario. Los militantes socialistas deben impulsar la discusión, hacer tomar conciencia del problema al conjunto del movimiento popular.

El enfrentamiento armado entre las clases es inevitable. Nosotros creemos que las concepciones estratégicas y tácticas que se expresaban en las resoluciones de los Congresos de Chillán (1967) y de La Serena (1971) continúan siendo válidas, no solamente en lo que concierne al desarrollo de un Frente de Trabajadores como estrategia del reagrupamiento de clase, sino también en la afirmación de que la conquista definitiva del país, la destrucción del aparato de Estado burgués, la socialización de los medios de producción, pasa inevitablemente por un enfrentamiento armado entre las clases, por el aplastamiento de la sedición reaccionaria y burguesa.

La reacción golpeará nuevamente a la puerta de los cuarteles y nosotros debemos recordar que las fuerzas armadas con todas las particularidades que les conocemos, su respeto tradicional por la Constitución y el gobierno, han sido obligadas en épocas anteriores a tomar una parte activa en la represión. Nosotros tene-

mos confianza en los sentimientos patrióticos y el amor a la libertad que anima sin duda a los hombres que están bajo las banderas, pero es necesario recordar las palabras de Lenin que se aplican a nuestra situación: "Parece que es imposible luchar contra un ejército moderno, es necesario que éste se vuelva revolucionario [...] En realidad, la indecisión de la tropa, inevitable en todo movimiento verdaderamente popular, conduce cuando la lucha revolucionaria se acentúa a una verdadera lucha por el ejército."

En consecuencia, para hablar claramente, es necesario ganar previamente a las masas y no se trata de obtener una simpatía difusa o un buen resultado electoral sino más bien de lograr la movilización combativa de la clase obrera en sus sindicatos y en sus poblaciones dentro y fuera del cuadro de la CUT.

Un proceso está en marcha y no puede detenerse en ninguna otra parte que no sea el socialismo. Por consiguiente, debemos ser la vanguardia y prepararnos para estar a la altura de la coyuntura histórica.³

En esa fecha se estaban diseñando con mayor precisión las dos corrientes centrales de la izquierda chilena y quienes se identificaban con la que posteriormente sería llamada "izquierda revolucionaria" habían alcanzado un nivel apreciable de madurez en sus concepciones tácticas y estratégicas. Inicialmente, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, se restó al proceso electoral que condujo a la presidencia a Salvador Allende basándose en análisis simplistas de la experiencia histórica y del pensamiento marxista-leninista. Igualmente, importantes sectores del Partido Socialista no habían demostrado mayor entusiasmo durante la campaña. Estas corrientes consideraban inútiles las luchas encuadradas dentro del sistema de

³ Consejo de redacción de la revista *Indoamérica*, n. 6, Santiago de Chile, mayo de 1971.

las elecciones democrático-burguesas, consideraban impracticable alcanzar la presidencia dentro de esta vía y, por consiguiente, minimizaban las posibilidades de profundizar las conquistas democráticas que eran producto de las tradiciones de la sociedad chilena, y por tanto también de los esfuerzos de organización, conciencia y enfrentamiento desarrollados por los trabajadores en muchas décadas. La vida resultó mucho más rica que la experiencia. Sin embargo, la izquierda revolucionaria avanzó rápidamente en la maduración de la significación del proceso iniciado el 4 de septiembre y en las posibilidades que éste ofrecía al movimiento popular. El artículo citado también señala un avance en la comprensión de las instituciones del Estado burgués y alertaba correctamente sobre el papel particular de las fuerzas armadas.

El proyecto de la "vía político-institucional" correspondía a un nivel de elaboración teórica mucho mejor definido en el plano de las concepciones tácticas, y consultaba en detalle las posibilidades de desarrollo y maniobra a partir del gobierno. La separación de los poderes del Estado, el papel determinante que juega el Ejecutivo en la economía chilena sobre la base del sector estatizado de la misma, la neutralidad de los militares en las luchas de la superestructura política desde los primeros años de la década de los treinta, las diferencias entre las distintas fracciones burguesas y la división que se había producido a nivel de sus representaciones políticas eran factores cuyo análisis se había profundizado y que deberían permitir una alianza de clases tendiente a profundas transformaciones económicas y sociales.

Es así como Joan Garcés, consejero cercano del presidente Allende, resumía estas posibilidades:

En síntesis, las medidas tácticas que han permitido al gobierno popular aplicar en 1971 su política sin que haya habido crisis con el parlamento son las siguientes:
a) la utilización del gran margen de acción legalmente

reservado a las facultades de dirección administrativa del ejecutivo; b) la voluntad deliberada de evitar el conflicto con las clases medias y sus instituciones representativas (en los planes económico, social y político); c) la decisión del gobierno de actuar dentro del marco de las instituciones.⁴

Posteriormente, al analizar las etapas consecutivas y los distintos aspectos del proceso chileno, comprobaremos cómo esta capacidad táctica contenía en su seno una profunda debilidad estratégica, ya que a pesar de todos los esfuerzos desplegados por Allende y el Partido Comunista, le fue imposible al gobierno y a la Unidad Popular mantener la alianza con las clases medias, así como hacer aceptar a la oposición derechista que actuaba dentro del más irrestricto respeto a las instituciones vigentes.

Mientras tanto, limitémonos a constatar que un llamado a plebiscito inmediatamente después de las elecciones de abril de 1971, con la perspectiva de un nuevo y más importante triunfo popular que permitiera la aceleración del proceso, no era en absoluto incompatible con la táctica diseñada por los sectores dominantes de la UP y aplicada por el gobierno. Por el contrario, precisamente se trataba en ese momento de una rara posibilidad —con base en una conjunción de condiciones que no se repetirían— de acrecentar el margen de acción del gobierno y del movimiento popular en el interior de la constitucionalidad y legalidad establecidas, limitando y reduciendo los mecanismos de oposición parlamentaria que ya comenzaba a utilizar el Partido Nacional y que culminarían en una escalada sediciosa por parte de toda la burguesía unificada.

⁴ Joan E. Garcés, op. cit.

EL DEBATE SOBRE LAS CLASES MEDIAS

La Unidad Popular llegó al gobierno sobre la base de una coalición de partidos políticos que representaban distintas capas y clases sociales y mediante elecciones que se realizaron dentro del marco de la institucionalidad democrático-burguesa. En consecuencia, la política de alianzas de clases, que impulsaban la Unidad Popular y el Partido Comunista en particular, estaba fuertemente determinada por la necesidad de mantener la armonía de diversos intereses, especialmente en el plano social, con la perspectiva de aumentar la extensión del apoyo electoral expresado en la votación de abril de 1971. Simultáneamente la baja votación de la representación política de la pequeña y mediana burguesía en el interior de la Unidad Popular (el Partido Radical obtiene un poco más del 8%) obliga a los partidarios de la vía institucional, a pesar de la renuncia del Partido Socialista, a realizar mayores esfuerzos tendientes a encontrar una plataforma de entendimiento con la Democracia Cristiana.

Hasta esa fecha existía, sobre un fondo de estrategias diferentes, cierta unanimidad entre las fuerzas que integraban al gobierno para acometer la puesta en práctica de las transformaciones propugnadas. En esta etapa, la discusión se centraba más bien en el ritmo del proceso que en diferencias de fondo. Pero a partir de ese momento comienza a ponerse de relieve la dificultad que entraña obtener el consenso de intereses divergentes cuando no contradictorios y antagónicos, así como la estabilidad del apoyo de que dispone en amplios sectores sociales la Democracia Cristiana.

Es así como se intensifican las diferencias entre las dos tendencias principales de la Unidad Popular y la polémica se centra en torno a la política de alianzas de clases: es el gran debate sobre el papel de las "clases medias", que ya

no dejaremos de encontrar hasta el día del golpe militar.

En el movimiento socialista existieron desde temprano el análisis y la discusión sobre el papel que cumplen las distintas clases sociales, y si bien desde Marx en adelante las diferentes tendencias reconocen el papel motor y principal del proletariado, continúan hasta nuestra época las diferencias sobre las alianzas que éste debe poner en práctica para llevar a cabo el proceso revolucionario con éxito. Contribuye a oscurecer esta discusión un problema de indefinición social y semántica: ¿quiénes constituyen las clases medias?

Durante la Edad Media la sociedad descansaba en unidades autárquicas de producción que estaban compuestas fundamentalmente por dos estamentos: los señores, que componían la nobleza, y los siervos, que trabajaban el campo y realizaban otras labores secundarias. Pero a partir del siglo XIII, el desarrollo del comercio primero, la manufactura después, dan surgimiento a nuevas clases sociales. Ya en el siglo XVIII las ciudades albergan una numerosa población que, además de no pertenecer a ninguna de las dos clases anotadas, comprende distintos intereses con fuertes contradicciones entre ellos. A mediados del siglo XIX, encontramos claramente diferenciada la burguesía industrial, comercial y financiera que incluso había accedido a la administración de los negocios públicos después de la revolución francesa en la Europa continental. Sin embargo, la nobleza conservaba una cuota importante de poder político y económico además de privilegios sociales, por lo que continuaba siendo considerada la "clase alta". Entre ésta y las llamadas "clases bajas" compuestas por obreros y campesinos, encontramos un elevado porcentaje de la población compuesto por sectores con intereses bien diferenciados: son las "clases medias".

En la época actual, el nombre genérico de "clases medias" constituye —tanto desde el punto de vista sociológico como político— una generalización inaceptable que se presta no solamente a la confusión, sino que facilita la

falsificación del lugar que ocupan en la sociedad los sectores más numerosos de las mal llamadas clases medias. En efecto, para diseñar una política de alianzas es indispensable precisar el papel que desempeñan en la producción y el intercambio las diversas capas sociales, sus niveles de ingresos, su calificación profesional y los modelos que inspiran sus objetivos, con la finalidad de establecer los intereses particulares de cada una de ellas, que no solamente son diferentes sino incluso directamente contradictorios. Veamos los siguientes cuadros de la población activa de Chile, publicados en la revista *Nueva Economía*, septiembre-diciembre de 1971, de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN).

Cuadro 1
Agrupaciones de la mano de obra activa en el año 1970

	<i>Cifras en miles de personas</i>	<i>Cifras en porcentajes</i>
Población activa	3 189.2	100.00
Agricultura	738.0	23.14
Minería	99.2	3.11
Industria	567.3	17.79
Construcción	177.5	5.56
Comercio	451.5	14.15
Servicios	965.1	30.29
Población desocupada	190.6	5.96

Cuadro 2
Categoría ocupacional de la mano de obra

	<i>Cifras en miles de personas</i>	<i>Cifras en porcentajes</i>
Población activa ocupada	2 998.6	100.00
Empleadores	48.0	1.6
Por cuenta propia	665.7	22.2
Empleados	722.7	24.1
Obreros	1 388.3	46.3
Familiares y otros	173.9	5.8

Cuadro 3
Calificación de la población ocupada

	<i>Cifras en miles de personas</i>	<i>Cifras en porcentajes</i>
Directores, gerentes y funcionarios alto nivel	66.0	2.2
Profesionales técnicos	15.0	0.5
Otros profesionales con grado universitario	39.0	1.3
Técnicos a nivel universitario	9.0	0.3
Técnicos prácticos	24.0	0.8
Personal administrativo y otros de nivel medio	665.7	22.2
Trabajador calificado	968.5	32.4
Trabajador semi-calificado	203.9	6.8
Trabajador no calificado	1 007.5	33.5

No corresponde al presente trabajo intentar nuevas definiciones para los diversos sectores que conforman ese bloque heterogéneo que se encuentra entre el proletariado y la burguesía. Artesanos, profesionales, pequeños comerciantes, empleados particulares, funcionarios de la administración pública, pequeños y medianos industriales, pequeños propietarios campesinos son parte de esas "clases medias" cuya influencia se disputaban partidarios y opositores del gobierno tanto a través de la acción económica como de los modelos ideológicos que se expresaban en los medios de comunicación de masas.

Sin embargo, en los cuadros presentados podemos constatar algunos hechos importantes. El primero de ellos es el peso relevante de la clase obrera chilena que, con un 46.3% de la población ocupada, constituía ampliamente el sector social más numeroso. El segundo aspecto es la cantidad insignificante de los empleadores, esto es, de aquellos que daban ocupación (para explotarlos) a los trabajadores. Un tercer aspecto es la cantidad porcentualmente apreciable de los trabajadores por cuenta propia, que se encontraban en gran parte fuera de la industria.

Para completar la visión de este sector es necesario precisar que el 53% de estos trabajadores por cuenta propia tenían, en 1970, un ingreso inferior a un sueldo vital, esto es, correspondiente a un trabajador no calificado. Por otra parte, observamos que ese 22.2% de personal administrativo aproximadamente coincide con el 24.1% de empleados del cuadro 2. Esto significa, nuevamente, que la enorme mayoría de la población calificada en el rubro "Por cuenta propia" deben ser incluidos entre los trabajadores del cuadro 3.

Por consiguiente, el conjunto formado por obreros, empleados y trabajadores por cuenta propia, con ingresos inferiores a un sueldo vital, supera el 80% de la población activa chilena. Esto último es coincidente con la distribución del ingreso nacional, dado que más del 90% de la población ocupada obtiene una remuneración inferior a tres sueldos vitales, con el 45% del ingreso total.

Así podemos concluir que si bien las "clases medias" constituyen un porcentaje sumamente importante de la población nacional, la mayor parte de ellas tienen intereses comunes con el proletariado y diferencias sustanciales con la mediana burguesía propietaria, esto es, con esas 48 mil personas que forman el 1.6% de la población ocupada. Mayoritariamente, las "clases medias" están compuestas por empleados particulares y públicos, pequeños propietarios campesinos, pequeños comerciantes y artesanos que no ocupan personal y reciben ingresos sumamente reducidos.

El sector de pequeños y medianos industriales, de medianos comerciantes y medianos propietarios agrícolas constituye un sector minoritario de las "clases medias", claramente diferenciado por sus intereses económicos y sociales, no solamente de la clase obrera, sino también de esas amplias capas de la población enumeradas anteriormente. Por el contrario, sus contradicciones con la gran burguesía son secundarias, ya que tanto sus objetivos conscientes como la dinámica del sistema económico

capitalista los lleva a acrecentar el volumen de su empresa o a pauperizarse y desaparecer, y por tanto toda su actividad tiende a imitar y alcanzar a los sectores más elevados de su clase.

En su Mensaje al Congreso Nacional, el 4 de marzo de 1971, el presidente Allende expresaba lo siguiente:

Paralelamente, debemos ayudar en la ejecución de su aporte a los pequeños y medianos industriales, comerciantes y agricultores, que han sido durante muchos años un estrato explotado por los grandes monopolios. Nuestra política económica les garantiza un trato equitativo. No habrá más expoliación financiera, se terminará la extorsión del gran comprador frente al pequeño vendedor. Las industrias pequeñas y medianas tendrán un papel activo en la construcción de la nueva economía. Insertos en un aparato organizado más racionalmente y orientado a producir para la gran mayoría de los chilenos, apreciarán el respaldo del área social. Los límites de los sectores privado, mixto y social serán establecidos con precisión.¹

Esta línea de acción era ratificada por la dirección de la izquierda, que cuidaba permanentemente de reiterar, frente a los esfuerzos de la oposición, su apoyo a los pequeños y medianos empresarios, como lo hace en febrero de 1972, en la reunión de El Arrayán:

La Unidad Popular reconoce un lugar legítimo de permanencia y desarrollo a las amplias capas de pequeños y medianos propietarios. Se ha reiterado una y otra vez que el programa no es contradictorio con los intereses del sector privado no monopolístico, cuyas contradicciones efectivas se han dado históricamente y

¹ Citado en *El pensamiento económico del gobierno de Allende*.

siguen dándose con las grandes empresas monopólicas de la producción y la distribución.

Pero estos esfuerzos por convencer a los medianos propietarios, por garantizarles sus más amplios intereses, se estrellaban con sus modelos ideológicos y con sus objetivos potenciales de desarrollo, pues en la misma reunión citada, los dirigentes de la Unidad Popular constataban:

Sin embargo, esas bases objetivas no han llevado hasta ahora a un entendimiento generalizado y a formas de trabajo conjunto sistemático entre los organismos administrativos de gobierno y las organizaciones gremiales representativas de esos empresarios. Ha sido más fuerte la penetración ideológica de la reacción, que ha arrasado a algunas de estas últimas, por encima de sus verdaderos intereses, a solidarizarse con la gran burguesía monopólica y sumarse a un heterogéneo Frente Nacional del Area Privada.

En efecto, pese a todas las concesiones realizadas la Unidad Popular no lograba ganar la confianza de esos sectores propietarios y continuaba haciendo llamados a todos los componentes de las "clases medias" sin hacer distinciones entre ellas; sino considerando que el total de la misma respondía a los valores de los medianos empresarios.

En junio de 1972, a raíz de la discusión en torno a las dos líneas económicas que se plantearon en la reunión de la UP de Lo Curro, el informe del MAPU comprobaba lo siguiente:

[...] este gobierno, como ningún otro, ha beneficiado desde el punto de vista material a los pequeños y medianos empresarios. Todas las estadísticas lo prueban [...] La tasa de beneficios de los pequeños y medianos capitalistas ha aumentado. Sin embargo, estos beneficios materiales no se traducen en un apoyo

político importante de estas capas al gobierno popular. Al contrario, la burguesía monopólica, sus partidos y sus organizaciones han logrado atraer hacia ella a estos sectores y hacerlos enfrentarse al gobierno.

En efecto, la identificación de los intereses de los pequeños y medianos empresarios con el conjunto de las "clases medias" resultó profundamente negativa para la política de alianzas de la Unidad Popular. Los pequeños y medianos capitalistas eran fundamentalmente eso, capitalistas, y pese a obtener más beneficios que nunca, se atemorizaron ante el aumento de la participación popular en la conducción del país. No solamente deseaban obtener beneficios inmediatos; tanto o más que eso, querían garantías de que podrían continuar recibiendo en el futuro y, pese a todas las declaraciones que hiciera la Unidad Popular o el Partido Comunista, no le entregaban a éstos su representación política.

Las consecuencias fueron dobles. Por una parte, la identificación señalada facilitó el trabajo ideológico de la gran burguesía, que también pretendía que ese amplio sector formado por diferentes capas tenía los mismos intereses políticos. Así, los modelos inculcados durante décadas por la educación, la prensa, la radio, la televisión, la propaganda, los partidos políticos fueron puestos de relieve como amenazados por la Unidad Popular en tanto ésta se desesperaba por convencer a los pequeños y medianos capitalistas de que no era así. Esto es, los modelos de este último sector fueron impuestos, en un grado importante por responsabilidad de la directiva de la UP y del gobierno, a esas amplias capas de empleados públicos y privados, artesanos, pequeños comerciantes y otros, que por el contrario debieron haber sido aliados naturales de la clase obrera.

Por otra parte, los medianos industriales, esos medianos empresarios, no se reconocieron jamás representados en la UP pues correctamente consideraban imposible convivir

con objetivos estratégicos absolutamente contradictorios. El resultado fue que desde el primer momento se encontraban enrolados en las filas de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional y, en menor medida, en el movimiento corporativista Patria y Libertad. Esto quiere decir que ese sector al cual se dirigía incansablemente la Unidad Popular encontraba su natural ubicación política en los defensores del sistema capitalista, no solamente de ese periodo, sino también del futuro.

El resultado de lo anterior es que para poner en práctica una política de alianzas con las "clases medias" era necesario extenderse más allá de las fuerzas que componían la UP, y más precisamente con la Democracia Cristiana. Esto es, la indefinición de las "clases medias", su generalización en torno a los valores del sector predominante de la mediana burguesía industrial tuvieron como resultado arrastrar hacia los modelos de esa fracción capitalista a otras capas que debieron haberse identificado con el gobierno. Al dialogar la UP con la Democracia Cristiana sobre esta materia y reconocerle a ésta su representatividad de las "clases medias", esto es, de los pequeños y medianos empresarios, terminó de cohesionarse en torno a ésta un frente heterogéneo compuesto por diversos sectores de la población.

Claro está que no se trataba de "errores" de la Unidad Popular, sino del predominio en su seno de la corriente fundamentalmente inspirada por el Partido Comunista y coherente con sus concepciones del Frente de Liberación Nacional.

Por ello, las tendencias que consideraban correctamente las premisas tácticas del Programa de la UP como sujetas al desarrollo de una estrategia revolucionaria que debía iniciar la construcción del socialismo reclamaron frente a la política impuesta por el Partido Comunista. Le respondió al Partido Socialista, que contaba con una fuerte militancia obrera y de "pobladores" radicalizada, oponer directamente en la base una política anticapitalista agresi-

va y permanente ante las vacilaciones y conciliaciones del gobierno. Lo cual era expresado por Altamirano al referirse a las alianzas:

Los socialistas pensamos que a las capas medias no se las puede comprar con halagos, con un nivel de vida muchas veces imposible de mantener en nuestros países pobres o con proyectos de ley destinados a darles beneficios determinados. Las capas medias, históricamente, se colocan al lado de la clase victoriosa. Será la fuerza y energía del gobierno popular la que las atraerá o por el contrario la que las lanzará en los brazos de la reacción.²

Esta posición se expresaba también coherentemente en el rechazo a los acuerdos con la Democracia Cristiana, pero no fue jamás aplicada por la Unidad Popular, a cuya línea general terminaba siempre por someterse la dirección del Partido Socialista. Ese análisis, por otra parte, también cometía el error de hacer abstracción de las "capas medias" como un todo único.

Fue particularmente significativo el esfuerzo realizado por el Partido Comunista para encontrar una plataforma de acuerdo sustancial con la mediana burguesía, con la "burguesía nacional", como también ha sido calificada por éste, a mediados del año 1972 en el mes de junio, cuando los principales dirigentes de la Unidad Popular se reúnen con el presidente Allende en el encuentro de Lo Curro.

En esta ocasión se reafirma la política puesta en práctica hasta la fecha, si bien otorgando un mayor énfasis a la consolidación del proceso revolucionario, esto es, planteando detenerse en los niveles de realización del Programa ya alcanzados, y pasando a determinar de común acuerdo con la Democracia Cristiana el número y el nombre de las em-

² Carlos Altamirano, op. cit.

Propiedad

presas que debían pasar definitivamente al Área de Producción Social; terminar con la inflación mediante una serie de medidas técnicas que implicaban "eficiencia en la administración de las empresas estatales" (disminución de personal y aumento de la producción) y la reducción de la emisión monetaria con reajustes de sueldos y salarios limitados; todo ello en función de un nuevo equipo ministerial cuyo hecho sobresaliente lo constituía la salida del ministro de Economía Pedro Vuskovic, quien había impulsado la constitución acelerada del APS.

Esta política de generar confianza en sectores de importancia de la clase propietaria chilena se correspondía con las conversaciones para llegar a acuerdos fundamentales con la Democracia Cristiana, que en esa fecha estaba dirigida por su sector "progresista". La conclusión de los acuerdos fracasó a último momento por la presión que hiciera el ex-presidente Frei y cuyo significado veremos posteriormente. Lo importante de señalar es que el Partido Comunista consideraba absolutamente indispensable alcanzar esos acuerdos con la mediana burguesía. Como dijera Volodia Teitelboim, miembro de la Comisión Política:

Nuestra idea es la de continuar buscando la unión de todos los chilenos favorables a los cambios de estructura y abrir el camino a una nueva sociedad... Porque nosotros creemos que si se llegó a virtuales acuerdos, estropeados a último momento, sobre problemas de primera importancia y que siempre han significado la posibilidad de un progreso en el cumplimiento del programa de la Unidad Popular, en lo que éste tiene de común con amplias partes del programa de Radomiro Tomić [candidato de la DC a la presidencia en septiembre de 1970]. [...] no se trata de un hecho gratuito, sino de un hecho que corresponde a una necesidad profunda de la sociedad chilena, necesidad que continúa existiendo, en espera de su realización, ya que se

trata de un imperativo histórico.³

Esto es, la Unidad Popular cometió, reiteradamente y durante todo el proceso, la falla de considerar a la grande y mediana burguesías como fundamentalmente contradictorias entre ellas, sobrevalorando sus diferencias y pretendiendo ganar para una política de transformaciones profundas a una fracción importante de esta última. Los repetidos fracasos de estos intentos demuestran, por una parte, la unidad central de sus intereses comunes en la supervivencia de una sociedad dirigida por ésta como clase, y por otra parte, tendencias profundas en las necesidades del desarrollo capitalista.

Fueron parte de este equivocado análisis global la importancia concedida a las medidas de carácter económico y la carencia de una adecuada política en el plano ideológico, que configuró la sujeción de los medios de comunicación adictos al gobierno a la difusión de modelos favorables a las "clases medias", esto es, a la pequeña y mediana burguesía propietaria. Con la calificada excepción de algunas publicaciones de la Editorial Quimantú, las revistas, los diarios, la radio y la televisión controladas por la Unidad Popular difundían valores y objetivos que no correspondían a los de la clase obrera ni a los de una sociedad en transformación que debía iniciar la construcción del socialismo. En esta forma se afirmaba aún más el predominio ideológico de la gran burguesía sobre amplios sectores de la sociedad chilena.

Le correspondió a Orlando Millas, destacado dirigente del Comité Central del Partido Comunista, expresar con claridad esa política que no lograba concretar; en el Pleno de su partido, realizado el 3 de octubre de 1971, planteaba lo siguiente:

³ Diario comunista *El Siglo*. Santiago de Chile, 15 de junio de 1972.

Lo principal para que la sedición pierda su principal base de sustentación y se asegure el desarrollo democrático es resolver a favor del pueblo la pugna con la oligarquía financiera, lo que exige conformar orgánicamente el sector social de la economía, delimitar su área a fin de evitar temores injustificados de los industriales medios y pequeños.⁴

En la misma fecha, la tendencia orientada por el Partido Comunista criticaba con áspero lenguaje las posiciones revolucionarias con las cuales coexistía dentro de la Unidad Popular tratando simultáneamente de desarmar a éstas ideológicamente y de obtener el apoyo de la "burguesía nacional" al reducir las contradicciones a una pugna del pueblo con la oligarquía financiera. En la revista *Finanzas Públicas*, de la Dirección de Presupuesto, dirigida por importantes funcionarios inspirados definitivamente por las posiciones del Partido Comunista, leemos lo siguiente en el número correspondiente a octubre de 1971:

A la clase obrera le interesa vitalmente contar con aliados en escala social. Su hegemonía no puede concebirse si permite que se lo aisle. Han causado un mal tremendo los que con apresuramiento oportunista, han estimado más fácil proponerse la incorporación, sin ton ni son, y a la guerrucha, de cualquiera empresa al área social, en vez de sostener una acción sindical, social, política, económica y administrativa coordinada y eficiente que asegure los derechos de los trabajadores y gane a los empresarios para desarrollar la producción, construyendo las actividades especulativas y de sabotaje.

Evidentemente este programa tenía muy pocas posibilidades de ser aceptado por la mayor parte del Partido

⁴ Revista *Documentos Políticos*. Bogotá, agosto de 1972.

Socialista, del MAPU, y de fuerzas al margen de la Unidad Popular como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que tenían bases de militantes obreros precisamente en la pequeña y mediana industria, y por consiguiente les resultaba absolutamente imposible frenar las reivindicaciones de los trabajadores de esas empresas y "ganarse" a los patrones para "desarrollar la producción". Sectores políticos, además, que concebían el proceso chileno como una marcha ininterrumpida hacia el socialismo y que por tanto debía presentar desde su inicio un contenido anticapitalista y no solamente antioligárquico.

El resultado de esto fue que pese al predominio de las concepciones sustentadas por el Partido Comunista en el interior de la UP —que se harían casi exclusivas a partir de la reunión de Lo Curro, con la designación de Millas como ministro de Finanzas— no existía coherencia entre las fuerzas populares; la respuesta de los pequeños y medianos empresarios fue persistentemente negativa e importantes sectores de trabajadores fueron desmovilizados.

Esto último debe ser fundamentado con cifras para explicitar la magnitud de su importancia.

Hoy en día el Area de Producción Social no representa más que el 20% de la producción y un poco menos del 20% de la mano de obra, e incorporando las 90 empresas monopólicas (establecidas en el programa) estas cifras llegarán a los alrededores del 30%. Esto significa que permanecerán en el Area de Propiedad Privada unas 10 000 empresas de más de cinco trabajadores y 20 o 25 000 unidades semiartesanales o artesanales, con un volumen de ocupación de 300 000 personas en el primer caso y de unas 80 000 en el segundo. Frente a esto, habrán unos 150 000 trabajadores en el Area de Producción Social. Una proporción aún más grande que en la industria corresponderá al Area de Producción Privada en el comercio.⁵

Lo anterior significa que la política impulsada por el Partido Comunista a través del gobierno no entregaba objetivos movilizadores y de clase a esa inmensa fracción de obreros industriales que formaban la mayor parte del proletariado urbano. Esos 300 mil trabajadores que constituían más del 50% de la clase obrera industrial se desempeñaban en pequeñas y medianas empresas, en las cuales debían sostener una acción "eficiente" en alianza con los propietarios de las mismas. La carencia de un programa social y político para este vasto sector de trabajadores produjo resultados negativos para la UP y facilitó principalmente la penetración y el afianzamiento de la influencia demócrata cristiana.

Esto se vería confirmado con los resultados de las elecciones de la Central Unica de Trabajadores, que constituyeron una sorpresa jamás explicada para los dirigentes de la Unidad Popular.

Con un poco más de ochocientos mil miembros, la Central Unica de Trabajadores no había logrado en 1972 incorporar a la sola organización sindical chilena, fundada en 1953, más del 25% de la población activa y probablemente sólo un 10% del campesinado asalariado. Las dificultades de la legislación vigente y la oposición tradicional de los gobiernos que se habían sucedido desde esa fecha (que jamás reconocieron la existencia legal de la CUT), además de las estructuras burocráticas de su organización, explican este bajo porcentaje de inscritos. Pese a lo anterior, la CUT había conquistado en duras batallas la legítima representación de los trabajadores, y en mayo de 1972 —fecha en la cual se realizan por primera vez las elecciones de su directiva en votación universal y secreta— participan en ella todas las tendencias políticas con representación popular, reuniendo sindicatos obreros, empleados y campesinos.

Los resultados —que demoraron casi sesenta días en ser entregados y fueron objeto de reiteradas reclamaciones por parte de socialistas y demócrata cristianos— proporcionaron las siguientes cifras: partidos que integran la Unidad Popular, 68.8%; Democracia Cristiana y gremialistas (disfraz del Partido Nacional), 27.6%; MIR (con el apoyo de la Izquierda Cristiana), 1.8%; USOPO (fuerza de izquierda escindida del Partido Socialista), 1.0%; Partido Comunista Revolucionario (escisión maoísta del Partido Comunista), 0.7%. Esto es: las fuerzas que se planteaban contrarias al programa que impulsaba la Unidad Popular obtuvieron más de la cuarta parte de los votos de los trabajadores sindicalizados, comprobando así que la política de alianzas con las "clases medias" no solamente no producía los frutos esperados en ese sector, sino que tampoco contribuía a ganar a importantes fracciones de obreros y campesinos que al no encontrar un programa de acción que transformara las relaciones existentes en el interior de la pequeña y mediana propiedad industrial y agraria, caían bajo la influencia de los dirigentes sindicales demócrata cristianos.

⁵ Alberto Martínez en la revista *Chile Hoy*. Santiago de Chile, 1o. de septiembre de 1972.

Cuadro resumen

Principales organizaciones políticas chilenas en 1972

	Orígenes de la organización	Ideología	Extracción de la directiva	Fuerza electoral	
				Abril 1971	Marzo 1973
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)	Aglutinamiento de varios grupos revolucionarios en 1965, luchas estudiantiles, rechazo a los partidos obreros tradicionales.	Marxista-lenista, con fuerte influencia del Che Guevara y en menor medida, del trotskismo.	Pequeña burguesía universitaria.	No se presentó.	Apoyo al PS
Partido Socialista de Chile (PS)	Alianza de intelectuales marxistas con disidencia de izquierda del PC y sectores masones progresistas, en el año 1933.	Marxista, con tendencias trotskista y socialdemócrata. Antimperialismo. En el último período se refuerzan tendencias leninistas.	Pequeña burguesía profesional. Cuadros obreros y campesinos.	22.38%	18.66%
Partido Comunista de Chile (PC)	Transformación del Partido Socialista Obrero en sección de la Tercera Internacional en el año 1922, sobre la base de organizaciones sindicales obreras.	Marxista, con desarrollo stalinista, acentuada influencia de la línea frente populista.	Obreros, pequeña burguesía profesional; estructuración de la directiva con base en funcionarios del Partido.	16.97%	16.22%
Partido Demócrata Cristiano (DC)	Surge con el nombre de <i>Falange</i> en el año 1938; desde la juventud del Partido Conservador, con base en intelectuales y profesionales cristianos.	Liberal con influencia de Maritain y las encíclicas papales. Sociedad "comunitaria" alternativa al capitalismo y comunismo.	Intelectuales y profesionales vinculados a la oligarquía criolla, medianos empresarios industriales.	25.62%	29.12%
Partido Nacional (PN)	Producto de la fusión en 1966 de los partidos Conservador y Liberal, que datan de la primera mitad del siglo pasado.	Liberal manchesteriano, con influencias conservadoras y tendencias autoritarias.	Restos de la oligarquía agraria, grandes empresarios vinculados a compañías de EU.	18.12%	21.31%
Movimiento Nacionalista Patria y Libertad (MNPL)	Aparece en 1970 como respuesta al gobierno popular desde la pequeña burguesía alejandrista.	Nacionalista, reaccionario, antipopular, con tendencias corporativistas y fascizantes.	Pequeña burguesía profesional y restos de la oligarquía.	No se presentó.	Apoyó al PN.
Partido Radical (PR)	Sectores masones de la minería, profesionales, burocracia estatal, en el último cuarto del siglo diecinueve.	Reformismo burgués, laico, con fuerte influencia de la masonería.	Pequeña burguesía profesional, empleados públicos, comerciantes.	8.00%	3.72%
Derecha Radical			Pequeña y mediana burguesía agraria e industrial.	3.83%	4.07%

Cuadro resumen [continuación]

	<i>Clases y sectores sociales de apoyo</i>	<i>Programa a corto plazo</i>	<i>Métodos de lucha</i>	<i>Fuerza Sindical en la CUT en 1972</i>
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)	Estudiantado, campesinos (especialmente zonas indígenas), pobladores; en menor medida obreros de la pequeña y mediana industria.	El socialismo, el poder popular, la dictadura del proletariado.	La acción directa, la vía armada (foquista insurreccional); rechazo a los mecanismos institucionales y electorales.	1.8%
Partido Socialista de Chile (PS)	Obreros, campesinos, empleados, pobladores, estudiantes, pequeña burguesía no propietaria.	El Programa de la Unidad Popular, iniciando la construcción del socialismo; desarrollo del poder popular.	Acción parlamentaria, apoyo al gobierno, denuncia de la inevitabilidad del enfrentamiento armado, impulso a las acciones de masas.	27.5%
Partido Comunista de Chile (PC)	Obreros, empleados, estudiantes, pequeña burguesía, pobladores, campesinos.	El Programa de la Unidad Popular, con amplias garantías para la burguesía no monopólica; una "sociedad avanzada".	Acción parlamentaria, apoyo al gobierno, respeto irrestricto a la institucionalidad establecida, concentraciones.	29.5%
Partido Demócrata Cristiano (DC)	Burguesía industrial, comercial y financiera, pequeña y mediana burguesía, pobladores, estudiantes, campesinos, obreros, empleados.	Defensa de las "clases medias", oposición al gobierno, "reconstrucción nacional".	Obstrucción parlamentaria, alianza con la extrema derecha, chantaje al gobierno, golpe de Estado.	26.0%
Partido Nacionalista (PN)	Burguesía agraria, financiera, industrial y comercial; pequeña y mediana burguesía, estudiantes.	Defensa a los gremios patronales, "resistencia civil", "reconstrucción nacional".	Obstrucción parlamentaria, alianza con la DC, sabotaje económico, golpe de Estado.	--
Movimiento Nacionalista Patria y Libertad (MNPL)	Burguesía agraria, pequeña y mediana burguesía profesional, estudiantes.	Sociedad "integrada" con gremios empresariales, partidos de "orden" y fuerzas armadas.	Sabotaje, disturbios callejeros, golpe de Estado.	--
Partido Radical (PR)	Empleados públicos y particulares, pequeños comerciantes.	El Programa de la UP; garantías a la propiedad privada.	Acción parlamentaria, apoyo al gobierno.	6.0%
Derecha Radical	Mediana y pequeña burguesía agraria, comerciantes.	Defensa de las "clases medias", "reconstrucción nacional".	Destitución del presidente; golpe de Estado.	--

EL PROYECTO ECONOMICO Y LAS LEYES DEL MERCADO

En la década de los sesenta se acentúan las características de Chile como país capitalista, monoprodutor, dependiente, y con tendencia creciente a la monopolización de los sectores básicos de la producción, acompañada de un estancamiento general en los promedios sumamente bajos de inversión.

La distribución del ingreso era consecuencia de las tendencias a la concentración del capital: en 1968 un 3.2% de la población remunerada obtuvo el 42% del ingreso nacional, mientras un 47% de la población solamente recibía el 12%, y el 90% de la población activa ocupada obtenía el 45% del ingreso.

En el sector industrial, un 3% de los establecimientos generaba el 51% del valor agregado industrial, con un 58% del capital, y controlando el 52% de los excedentes brutos. La concentración financiera era también notable: en 1969, el 0.4% de los deudores controlaba el 25% del crédito bancario. El promedio de crecimiento de la producción entre los años 1967 y 1970 fue de un 2.7% inferior al promedio del conjunto de América Latina que crecía a un 5% anual. La inflación alcanzaba en los años 1968, 1969 y 1970 las cifras del 28, 29 y 35% respectivamente, en una tendencia establemente creciente. La desocupación observaba esa misma dirección, con una tasa del 4.9%, 5.0% y 6.0% respectivamente. La deuda externa contribuía a este panorama: el año 1964, ésta era de 1 869 millones de dólares, y el año 1970 el gobierno de Frei la había aumentado a 3 866 millones de dólares, con el porcentaje por habitante más alto del mundo.¹

A todo lo anterior, debemos agregar que las principales

riquezas del país se encontraban en manos del capital internacional, que se dedicaba a la explotación de minas, industrias y servicios, sin dejar de lado el mercado financiero y el comercio exterior. Señalemos que en 1967 la salida de divisas por concepto de rentas al capital extranjero alcanzaba la cifra de 201 millones de dólares, esto es, el 20% del total de ingresos de divisas de ese año.² En 1968, de las 100 mayores empresas industriales, 61 tenían participación extranjera y en 40 de ellas éste era dominante.³

En definitiva, Chile estaba muy lejos en 1970 de ser un país en "vías de desarrollo" y todas las tendencias indicaban que la continuación de las políticas económicas seguidas no permitía esperar cambios en esa situación, ni a mediano ni a largo plazo.

El programa básico de gobierno de la Unidad Popular, llevado a la práctica con decisión durante los primeros doce meses posteriores al 4 de noviembre de 1970, pretendía transformar profundamente las relaciones existentes mediante la aplicación de las siguientes medidas principales:

La nueva economía se compondrá de tres áreas básicas: la de propiedad social, la mixta y la privada. El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropian. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así, quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:

² Ibid.

³ Ibid.

¹ Oficina de Planificación Nacional, Santiago de Chile, 1971.

1. La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral
2. El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros.
3. El comercio exterior.
4. Las grandes empresas y monopolios de distribución.
5. Los monopolios industriales estratégicos.
6. En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones, la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados incluido el gas licuado; la siderurgia; el cemento; la petroquímica y química pesada; la celulosa; el papel.

Otro sector será mixto porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado con los de particulares.

El Area de Propiedad Privada comprende aquellos sectores de la industria, la minería y la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción. Estas empresas en número serán la mayoría.

Aceleración del proceso de reforma agraria, expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida (80 hectáreas de riego básicas) según las condiciones de las distintas zonas. Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad.

En los párrafos precedentes podemos observar que las medidas tendientes a las transformaciones en la estructura económica, apuntaban en tres direcciones básicas: nacionalización de las riquezas mineras en poder de empresas extranjeras, creación de una área estatal extractiva-industrial-financiera-comercial que se constituiría en el motor del desarrollo y permitiría dirigir y planificar el conjunto

de la economía; intensificación de la reforma agraria ya iniciada, para terminar con todas las propiedades superiores a las 80 hectáreas de riego.

En esta forma, el programa constituía un peligro inmediato de expropiación para los intereses imperialistas y la gran burguesía industrial, financiera, comercial y agraria, y respetaba y garantizaba la propiedad en todos estos planos a la pequeña y mediana burguesía.

Con el objeto de superar el estancamiento de la economía y coherente con las transformaciones en la propiedad citadas, el programa pretendía llevar adelante una política de impulso y desarrollo basada en los siguientes puntos:

Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas. Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones. Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria.

En consecuencia, podemos observar que las transformaciones previstas estaban dirigidas a terminar con la dominación de las empresas transnacionales del capital financiero, de ciertos grandes monopolios industriales, y del latifundio, pretendiendo liberar así las fuerzas productivas de las principales trabas para obtener una expansión rápida y sostenida. Un programa que debía ser llevado adelante por el Estado desplazando a la gran burguesía, demasiado débil y profundamente imbricada con los intereses extranjeros como para proseguir dichos objetivos. Por lo tanto, el proyecto económico diseñado intentaba ser coherente con la alianza de clases que se pretendía establecer, y entregaba la gestión de la mayoría de las

empresas a propietarios particulares que verían favorecidos sus intereses por la expansión de la demanda en las ciudades y en el campo y facilitada su gestión por el apoyo que encontrarían en los organismos de gobierno, insertos en un contexto económico nacional que pondría término a la sujeción a las líneas de las grandes empresas internacionales.

Sin embargo, también en este plano el programa contenía una cuota importante de ambigüedad, ya que consideraba el periodo de realización de las medidas indicadas como “una etapa necesaria para la construcción del socialismo”, o sea que lo consideraba como parte de una estrategia conducente a una nueva sociedad cualitativamente distinta. En el plano económico también se darán las dos líneas que coexistían en la Unidad Popular, ya que mientras unos llevarán al nivel de perspectiva política definitiva y de largo alcance las medidas de carácter antimperialista y antioligárquico, otro sector pretenderá que éstas constituyen solamente un paso táctico que forma parte de un proceso único e ininterrumpido hacia el socialismo. Y ambas concepciones del proyecto económico tenían su correspondiente en la política de alianzas de clases.

Sin embargo, durante un periodo importante del mandato de la Unidad Popular que abarca al menos hasta el inicio del año 1972, estas divergencias de fondo se desdibujaban frente al primer plano de las realizaciones que estaban contempladas, las cuales existía acuerdo en impulsar, con mayor o menor rapidez y profundidad. Veamos este proceso.

La principal riqueza de Chile estuvo constituida durante la mayor parte de este siglo por el cobre, explotado principalmente por dos grandes compañías norteamericanas, explotación que representa una muestra típica de la exacción de los recursos de un país dependiente, ya que por concepto de utilidades esas compañías “exportaron” de Chile una cifra cercana a los tres mil millones de

dólares, para una inversión neta del orden de los 750 millones de dólares. Para comprender mejor el significado de estos valores, precisemos que en 1970 el capital nacional de Chile era de 10 000 millones de dólares, esto es, que solamente las empresas norteamericanas del cobre se habían llevado hasta esa fecha el equivalente al tercio de todo lo que Chile ha sido capaz de acumular en su territorio desde el tiempo de la Colonia.

Más aún, las empresas extractoras del cobre son parte de grupos financieros propietarios de empresas elaboradoras de cobre en EU y, por tanto, les interesa llevarse el mineral al precio más bajo posible. Durante la segunda guerra mundial el precio de la libra se fijó en 11.5 centavos de dólar en momentos en que en el mercado de Londres su cotización era sustancialmente más elevada. Esto era justificado como un “aporte” de Chile a la lucha contra las potencias del Eje. Durante la guerra de Corea el precio se estableció en 24.5 centavos en similares condiciones, y con motivo de la invasión imperialista en Vietnam, en 36 centavos, en la misma fecha que en el mercado de metales de Londres, el cobre se cotizaba a 60 centavos. Estas manipulaciones de precios habían sido permitidas y amparadas por todos los gobiernos que había sufrido Chile hasta esa fecha, incluyendo en particular los del Frente Popular dirigido por los radicales, el del general Carlos Ibáñez y el del demócrata cristiano Frei. Pero esto no impidió que las empresas norteamericanas obtuvieran las enormes utilidades ya señaladas, las cuales eran superiores a las que las mismas empresas obtenían por la explotación de otras minas de su propiedad en otros puntos del planeta. Así es como la Anaconda, dueña de las minas chilenas de Chuquicamata, El Salvador y Potrerillos obtuvo como promedio durante el periodo 1955-1970 en el mundo una rentabilidad del 3.67% mientras que en Chile esa rentabilidad alcanzaba el 21.51%, y la Kennecott que lograba un promedio de 9.95% ganaba para sus negocios en Chile el 52.87%.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el presidente Allende planteó la recuperación de los yacimientos en suelo chileno y de sus instalaciones, mediante el pago del valor de libros de las empresas norteamericanas, al cual sería deducido el monto de las utilidades que excedieran el 10% anual sobre ese valor de libros. Esta posición configuraba una política de rescate antimperialista que podía repercutir con profundas consecuencias para las propiedades de las grandes firmas transnacionales que operaban en todo el llamado Tercer Mundo.

Una vez más, conforme a las características del proceso chileno, esto se llevó a cabo mediante el envío de un proyecto de reforma constitucional que establecía lo siguiente:

c) Intercálase el siguiente inciso nuevo entre los actuales incisos 5o. y 6o.: Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas mineras que la ley califique como gran minería, la nacionalización podrá comprender a ellas mismas, a derechos en ellas, o a la totalidad o parte de sus bienes. La nacionalización podrá también extenderse a bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades o empresas. El monto de la indemnización o indemnizaciones, según los casos, podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia. También podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a treinta años y en las condiciones que la ley determine. El Estado podrá tomar posesión material de los bienes comprendidos en la nacionalización inmediatamente después que ésta entre en vigencia.

Las rentabilidades superiores al 10% que las grandes compañías norteamericanas obtuvieron en el periodo 1955-1970 resultaron mayores que el valor de libros de sus inversiones netas a esa fecha. Las empresas eran deudoras del Estado chileno.

La política de rescate de las riquezas naturales propugnada y realizada por el gobierno de Allende superaba ampliamente las fronteras de Chile; la tesis de las "rentabilidades excesivas" constituía un ejemplo peligroso para el imperialismo que éste, por razones coyunturales, no estaba en condiciones de combatir con el recurso de la invasión armada que practicó, especialmente en Latinoamérica, durante varias décadas. Por esto, llevó adelante una política de presión y bloqueo económico que se expresó en numerosos aspectos: cancelación de préstamos, créditos e inversiones por parte de todos los organismos financieros influidos por el gobierno de EU, así como de empresas privadas; nuevas exigencias en la cancelación de la deuda externa; demandas de embargo de los envíos de cobre chileno a Europa Occidental. El resultado en la balanza de pagos fue brutal, como podemos comprobar en el siguiente cuadro:

Año	Saldo de la balanza comercial	Saldo de cuenta cte.	Entrada neta de capital	Errores y omisiones	Saldo de la balanza pagos
1967	111.5	- 127.4	123.9	- 21.5	- 25.0
1968	119.7	- 135.3	303.5	- 41.2	127.0
1969	252.9	- 5.6	238.2	-	232.6
1970	62.1	- 57.4	148.5	-	91.1
1971		- 211.5	- 99.7	-	- 311.2

Fuente: Banco Central de Chile (en millones de dólares).

Esto significó que numerosos proyectos que estaban en curso y aprobados con anterioridad debieron suspenderse, especialmente en lo que se refiere a planes de inversión a mediano y largo plazo.

La renegociación de la deuda externa realizada con los acreedores de Chile reunidos en el "Club de París" fue larga y difícil ya que éstos planteaban medidas de carácter regresivo tradicional. Como declararan los integrantes de la delegación nacional, "a Chile se le está aplicando la política del talón de hierro". Finalmente fue concedido un *stand by* consistente en facilidades y prórrogas que mantenían la situación como una permanente amenaza frente a la eventualidad de la incapacidad del Estado chileno para pagar su deuda e imposibilitaban planes de inversión a largo plazo.

En octubre de 1972, y coincidiendo con una gran ofensiva reaccionaria de la burguesía en el interior de Chile, la Kennecott demandó a la justicia francesa el embargo de un cargamento de cobre que era esperado en El Havre. Poco más tarde, la Anaconda también iniciaría gestiones en el mismo sentido. Maniobras que no prosperaron del todo pero que también incidieron negativamente sobre las exportaciones chilenas y mantuvieron la amenaza de la acción judicial de las empresas norteamericanas en todo el mundo y en todo momento.

La nacionalización de las minas de cobre no dio todos los frutos esperados en el plano de los ingresos debido principalmente a la baja en el precio del metal en los mercados internacionales durante la mayor parte del periodo, así como al sabotaje en la producción que impidió alcanzar las metas fijadas. Lo cual, por supuesto, no disminuye absolutamente en nada el significado profundo de esa política nacional y antimperialista que debería haber permitido, en un plazo suficiente, hacer de las entradas de divisas correspondientes el pilar de los programas de inversiones del país. En el plano ideológico, la nacionalización fue profundamente favorable al gobierno popular, tanto por el mecanismo por el cual se realizó como por el sentimiento de unidad y dignidad que produjo en los más vastos sectores de trabajadores y que permitió continuar con otras medidas del mismo carácter

tendientes a disminuir la dependencia tradicional de la economía chilena del capital foráneo y especialmente norteamericano.

Durante el año 1932, Chile vivió una experiencia singular. El 4 de junio de ese año, un sector de los militares tomó el poder proclamando la República Socialista de Chile que duraría solamente 13 días para ser derrocada por un nuevo golpe de las fuerzas armadas que restableció el "orden". Esos acontecimientos dejaron tras sí una serie de leyendas: la aureola de una utopía inalcanzable que había sido arrebatada de las manos que ya la estaban atrapando... Casi cuarenta años después, se descubrió que no eran sólo leyendas, existía también el Decreto Ley No. 520 promulgado durante la República Socialista y posteriormente jamás derogado, que permitía la intervención estatal en una industria amenazada de quiebra o con problemas originados en conflictos sociales. Conforme al proceso que Chile estaba viviendo, la constitución del Área de Propiedad Social siguió el camino de combinar la movilización de masas y recurrir a las leyes vigentes. Los conflictos sociales se desataron precisamente en las empresas que estaban consideradas en el programa para ser incluidas en el área social: la clase obrera industrial estaba incorporada y comprometida en el proceso. En esta forma, con la participación efectiva de los trabajadores, comenzó a desarrollarse el sector estatal de la economía, ya que además de las intervenciones llevadas a cabo se procedía a la expropiación de algunas y a la adquisición de otras.

Durante el año 1971, la mayor parte de las textiles, metalúrgicas, cemento, empresas pesqueras, electrodomésticas, el monopolio de la cerveza, la gran editorial Quimantú: en total 70 empresas industriales, pasan a formar parte del complejo de propiedad social y, junto a las empresas nacionalizadas del cobre, hierro, salitre y carbón, a 16 bancos cuyas acciones son adquiridas y que le permiten al poder ejecutivo controlar el 90% del crédito

y, en fin, junto al sector estatal más antiguo del petróleo, ferrocarriles, línea aérea, electricidad, aceros, etcétera, permiten a los organismos planificadores estructurar un proyecto de desarrollo basado en los planes del gobierno.

La realización del Área de Producción Social no se logró sin vencer —parcial y momentáneamente— la resistencia de la burguesía y de las instituciones del Estado que ésta controlaba. La creación del APS fue lograda fundamentalmente por la movilización obrera y la determinación, en ese periodo, del Ministerio de Economía que era el encargado de concretarla.

Ya el 29 de junio de 1971 la Contraloría de la República se niega a dar curso a la resolución de requisamiento de Manufacturas Yarur, S. A., uno de los más grandes consorcios textiles y monopolio de diversos productos: “La ocupación de una industria, por constituir un ilícito penal, no autoriza ni haría viable la requisición de los establecimientos de que se trata.” El rechazo del instituto contralor de las medidas tendientes a la creación del área social, ya mostraban en esa temprana época del proceso las limitaciones de los mecanismos legales. Esto se vería confirmado por la defensa sistemática que mantendría la Contraloría de los intereses patronales durante todo el año 1971, rechazando en todas las oportunidades las demandas, a lo cual los trabajadores respondían con nuevas movilizaciones. El 8 de septiembre, el Partido Nacional presenta la primera acusación constitucional contra el ministro de Economía, asegurando que los requisamientos de empresas que éste impulsa “son ilegales y configuran un flagrante atropello a la Constitución y a la legalidad vigentes”.

En los primeros meses del año 1972 el gobierno popular había logrado, pese a las resistencias, avanzar firmemente en el cumplimiento de esta parte del programa y por tanto adquirir la herramienta que le debía permitir dinamizar la producción nacional y acelerar su crecimiento.

Un aspecto particularmente importante en la constitución del área social tiene relación con la participación de los trabajadores en la administración de las empresas que la componían, en función de lo cual éstos pasaban a integrar los consejos de administración de las mismas. En esta forma, las tradicionales relaciones de dependencia de los obreros dentro del engranaje de la producción material eran transformadas profundamente. En conformidad al acuerdo CUT-gobierno, los consejos de administración de todas las empresas estatales pasaron a constituirse con 5 integrantes designados por el gobierno, un presidente también designado, y 5 representantes de los trabajadores elegidos en votación universal y secreta. Estos consejos de administración resolvían todos los problemas de la empresa dentro de los lineamientos generales propuestos por el organismo planificador central, y por tanto poseían la facultad de decidir en todos los planos: producción, remuneraciones, inversiones, contrataciones, todos los aspectos de la marcha de la unidad eran resueltos con la participación de los representantes de los trabajadores de esa empresa en el consejo de administración. Por otra parte, los funcionarios designados por el Estado eran en su casi totalidad militantes de los partidos de la Unidad Popular, por lo que se lograba una relación y una praxis más estrecha aún entre éstos y los trabajadores del APS. Cuando llegue la hora de la primera insurrección burguesa en octubre de 1972, éstos serán los más entusiastas y decididos defensores de las conquistas populares.

La aceleración de la reforma agraria se llevó adelante por intermedio de la ley aprobada durante el periodo de Frei, que establecía la posibilidad de expropiación de todas las propiedades rurales superiores a las 80 hectáreas de riego básicas, con indemnización para el propietario y permitiendo a éste mantener una reserva de tierra seleccionada hasta el máximo señalado, además de las casas correspondientes, máquinas, herramientas y animales. En consecuencia, la ley existente afectaba los intereses de los

restos de la oligarquía chilena, pero daba origen a una mediana burguesía agraria que se constituía en el sector más poderoso del campo. Además, para llevar adelante la reforma agraria eran indispensables fuertes sumas de capital para pagar las correspondientes indemnizaciones.

Durante el año 1971 se avanzó en la expropiación de tierras tanto como durante todo el periodo de Frei, pero aún permanecían en manos de sus antiguos propietarios miles de fundos. En esas circunstancias el movimiento campesino adquiere nuevos niveles de lucha, impulsado fundamentalmente por el semiproletariado agrícola: medieros y aparceros que llevan a cabo 1 278 "tomas" durante ese año. Así es como el proceso de reforma agraria toma un ritmo acelerado y a mediados de 1972 lo fundamental en la liquidación del latifundio se había realizado, no sin que una intensa lucha de clases se desarrollara diariamente. El hecho es que, si bien la ley permitía a extensos sectores de campesinos sin tierra acceder a su disfrute —principalmente en forma cooperativa—, las 80 hectáreas de tierra de reserva para el antiguo propietario constituían en determinadas zonas una extensión considerable de cultivo que le permitía, junto a la propiedad de las máquinas, animales, capital y relaciones comerciales, mantenerse como el eje dominador de las relaciones de propiedad en el campo chileno. El proceso de reforma agraria fue impulsado por vastas capas de campesinos pobres en función del crecimiento de su nivel de conciencia y organización, que era alentado tanto por funcionarios de izquierda de los organismos agrarios como por los dirigentes regionales de algunos partidos populares. En efecto, en el campo se enfrentan desde finales de 1971 las dos líneas divergentes que existían en la Unidad Popular, resultado de las enormes dificultades para concretar la alianza de clases propugnada. A mediados de 1972 la guerra de clases rural estaba extendida a todo el centro y sur de Chile, y la producción agraria se deterioraba por efecto de la misma y de la acción de los propietarios que

resistían mediante el contrabando hacia Argentina, el sabotaje y la violencia armada.

El resultado del avance en el cumplimiento del programa se comprobó con entusiasmo en la reunión de El Arrayán realizada en febrero de 1972 por el Comité Nacional de la Unidad Popular:

[. . .] en 1971 se obtuvieron grandes éxitos en la batalla de la producción. En el año de la Nacionalización del cobre, Chile produjo 730 mil toneladas, esto representa 40 mil toneladas más que en 1970 (6% aumento); [. . .] se inició en 1971 la construcción de alrededor de 100 mil viviendas, cifra sin precedentes, que significará solucionar los problemas habitacionales de más de 300 mil personas[. . .] Los éxitos anteriores han significado dar ocupación a 200 mil nuevos trabajadores. Hoy día tienen empleo remunerado 3 140 000 chilenos[. . .] Se expropiaron 1 378 latifundios, con casi dos millones seiscientos mil hectáreas, lo que equivale a todo lo que el gobierno anterior hizo en seis años. . . Simultáneamente, se alcanzaron un crecimiento del producto nacional cercano al 9 por ciento y un aumento de la producción industrial del orden del 13 por ciento. La tasa de desocupación disminuyó del 8.3 por ciento al 3.8 por ciento. El ingreso real se elevó 20 por ciento y el nivel de consumo de los asalariados aumentó 13 por ciento, con lo cual los obreros y empleados pasaron a controlar el 60 por ciento de la renta nacional, contra un 51 por ciento anterior. Los aumentos de precios fueron sustancialmente menores a los de 1970.⁴

Sin embargo, el balance optimista no impedía comprobar la existencia de factores de mayor profundidad, cuya peligrosidad no era puesta en evidencia en toda su significación:

⁴ Conclusiones de la reunión del Comité Nacional de la UP, febrero de 1972.

Los reajustes de remuneraciones excedieron los términos previstos. El no pago de los dividendos adeudados por las compañías del cobre, la reducción con cierre de líneas de créditos en el exterior y la fuerte caída en los precios del cobre, obligaron a utilizar reservas para seguir pagando deudas anteriores, en tanto que las importaciones aumentaron 9.6% en comparación con 1970. Estos factores motivaron, además, la insuficiencia del abastecimiento de algunos productos, si bien en general a niveles de consumo apreciablemente mayores que los del año anterior.⁵

En estas líneas ya estaban comprendidos algunos de los elementos que desarticularían la economía chilena: la presión exterior que cerraba una fuente importante de los ingresos y la disminución de las divisas; el aumento de las importaciones que el gobierno no controlaba, y el inicio de la escasez de algunos artículos importados, principalmente materias primas y repuestos. Agregaba el documento de El Arrayán:

La propia reactivación económica ha llevado a altos grados de utilización la capacidad productiva, lo que impone limitaciones reales a nuevas expansiones del consumo y plantea, como necesidad urgente, aumentar las inversiones. La fuerte acumulación de liquidez en el sistema resta flexibilidad a la política financiera y hace indispensable un manejo más estricto y selectivo.⁶

Aunque este análisis no agotaba la problemática planteada, de él podían inferirse las conclusiones que señalaban el agotamiento del equilibrio implícito en el modelo de desarrollo económico. Los técnicos de la Unidad Popular no ignoraban esta realidad, pero el resultado fue una suerte de compromiso; por una parte se acordaba

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

acelerar la constitución del área social con el objeto de restar fuerzas al poder de la reacción en algunos grandes monopolios y en su acceso a cuantiosos recursos financieros. Simultáneamente, se reiteraban las garantías a las "amplias capas de intereses del sector no monopolístico", esto es, a los medianos empresarios industriales, agrícolas y comerciales.

¿Qué estaba ocurriendo en la economía chilena? El sistema capitalista se encuentra basado en la actividad de empresarios privados que obtienen una cuota media de ganancia en función de su capital invertido (ésta es superior para los monopolios), y esta cuota fue aumentada debido a la política del gobierno que al incrementar la demanda posibilitó una rotación más rápida del capital. La exigencia de mayores cantidades de bienes y servicios no fue acompañada de una mayor producción notable (según parece, las estimaciones sobre la capacidad de producción no ocupada fueron sobrestimadas por los técnicos del Ministerio de Economía) como ya era comprobado con preocupación en febrero de 1972, lo cual produjo una fuerte presión sobre los precios. Existen algunos factores secundarios que en conjunto no son despreciables: el contrabando de productos hacia los países limítrofes, especialmente Argentina y Perú, aprovechando el alto precio del dólar del "mercado negro" en Chile y los menores costos de producción; y la constitución de *stocks* especulativos por parte de industriales y comerciantes. El factor principal se encontraba en que la producción no creció de acuerdo a las necesidades reales del proyecto económico.

Frente a esta situación que el gobierno no controlaba, ya que ni lejanamente el Área de Producción Social podía abastecer los requerimientos más apremiantes de productos (por otra parte, el APS se concentraba fundamentalmente a la mediana y pequeña industria de materias primas y semielaboradas baratas), no tenía más que dos caminos:

augmentar fuertemente la inversión para asegurar un rápido crecimiento en la oferta de productos, o reducir y dirigir el consumo en el otro extremo de la cadena.

En Chile, tradicionalmente, el Estado efectuaba el mayor porcentaje de la inversión, que como ya hemos visto, se encontraba prácticamente estancada en los últimos años. La situación no mejoró durante el gobierno popular. Al contrario. Los ingresos provenientes de las exportaciones, debidos principalmente al cobre, no correspondieron a lo esperado ya que el precio internacional cayó a 50 centavos de dólar la libra. Los créditos externos, que siempre habían sido una de las fuentes principales, se redujeron de tal manera que ya hemos visto cómo produjeron, sumado al factor anterior, un resultado negativo de 300 millones de dólares en la balanza de pagos. En consecuencia, para obtener fondos de inversión, el gobierno solamente tenía el camino de redefinir drásticamente su política de impuestos, esto es, gravar fuertemente los beneficios de la pequeña y mediana burguesía. Pero esto implicaba dar un golpe de timón profundo a toda la concepción de transformaciones que se estaba aplicando.

Las inversiones del sector privado tampoco se producían y el gobierno carecía de herramientas legales para forzarlas. En efecto, la mediana y pequeña burguesía no eran solamente productores, también eran consumidores. Y con los altos beneficios obtenidos buscaban dar satisfacción a sus objetivos de automóviles, casas, y artículos de lujo y semilujo en general. Más importante aún, frente a la inestabilidad política pretendían obtener "seguridad" y para conseguirla invertían sus utilidades en la compra de dólares en el mercado paralelo, que alcanzaba hasta 40 veces el valor de mercado bancario restringido a las operaciones de importación.

En esta forma, las necesarias inversiones no se producían en la magnitud requerida, ni por parte del Estado ni de los empresarios privados.

La posibilidad de dirigir el consumo era aún más difícil. Ya hemos visto que la Unidad Popular, basada en la alianza con las "clases medias", no modificó los modelos ideológicos de objetivos que eran reproducidos por los medios de comunicación afines al gobierno. La insuficiencia del poder político y económico alcanzado se hacía evidente dramáticamente: no existían condiciones para suprimir la oferta de determinados productos cuya necesidad defendía la oposición como inherente al sistema democrático, y por tanto crecía la psicosis creada por una escasez real y aumentada por los órganos de difusión de la derecha. A mediados del año 1972, se comprobaba la inviabilidad de aumentar fuertemente el poder adquisitivo de las masas populares y simultáneamente desarrollar la economía de mercado, dentro del esquema de la vía institucional.

Nuevamente, las dos tendencias centrales en el interior de la Unidad Popular entraban en profundas divergencias sobre los caminos a seguir para intentar resolver la situación.

En el libro *Chile, una economía en transición*, Sergio Ramos planteaba en los siguientes términos el papel de la pequeña y mediana burguesía propietaria:

En una economía como la chilena, en que existe un número tan elevado de pequeños y medianos productores capitalistas, sometidos a la explotación y dominación de los grandes monopolios[...] se generan al menos dos condiciones muy importantes de tener en cuenta: en primer lugar, desde el punto de vista de sus intereses objetivos en cuanto capitalistas, la eliminación de la concentración monopólica privada y la creación de un nuevo dinamismo del crecimiento económico les abre condiciones nuevas mucho más favorables para su acción, toda vez que uno de los objetivos centrales del nuevo sistema deberá ser la elevación rápida y permanente de la producción y la productividad. En segundo

lugar, desde el punto de vista más general de la economía en su conjunto, la nueva articulación de la producción y la distribución en torno a un sector estatal dominante y las necesidades de elevar al ritmo de crecimiento económico necesitan la mantención del sector privado de la economía cuya vastedad y complejidad no es posible remplazar bruscamente por empresas socializadas.

Efectivamente, siempre han existido contradicciones entre distintos sectores de la burguesía y en particular entre la burguesía monopólica aliada a los intereses imperialistas y otros sectores de la misma. Pero es fundamental distinguir entre contradicciones secundarias y principales. Todos podemos acordar que la totalidad del sector privado no puede ser remplazado "bruscamente" por empresas socializadas, pero cuando está en marcha un proceso social revolucionario, las clases amenazadas no solamente actúan en función de sus intereses presentes sino, especialmente, de su supervivencia como clase. Por lo tanto, a los medianos empresarios no les bastaba una alianza a corto o mediano plazo, y reducían sus diferencias con la gran burguesía a la calidad de secundarias frente a la contradicción principal con los trabajadores y el proyecto de "iniciar la construcción del socialismo". Evidentemente que éste es un problema de poder real, ya que un gobierno que efectivamente disponga de los mecanismos y recursos necesarios no abordará de inmediato la socialización de toda la economía, pero estará en condiciones de forzar la oferta y la demanda así como la inversión y el ahorro de la pequeña y mediana burguesía. Este no era el caso, por supuesto, y las previsiones de crecimiento de "la producción y la productividad" en las favorables condiciones previstas no se vieron confirmadas.

Esta posición ya era planteada por la izquierda socialista que en octubre de 1971 impugnaba las tendencias expresadas más arriba:

Más aún, esta opción conservadora [consolidar lo adquirido] peca claramente por economicismo puesto que ella pone la instancia económica, "la producción, por ejemplo", por delante de la instancia política "el poder", esto en circunstancias que la hegemonía no está aún consolidada. Este no era el caso de la NEP en 1921 en la URSS, cuando Lenin llama a consolidar y a recuperar los niveles de producción perdidos durante la guerra civil, pero *después* que esta última hubiese sido ganada.⁷

A mediados del año 1972 la situación económica había desembocado en una inflación acelerada de altísimo nivel (superior al 100% anual) y una escasez generalizada de numerosos artículos de consumo y repuestos. En esa fecha se realiza la reunión de Lo Curro donde se afrontan dos líneas divergentes: la de la izquierda revolucionaria representada más lúcidamente en esa ocasión por el MAPU, que plantea profundizar el proceso, acelerar el crecimiento del APS, discriminar en la producción y en las importaciones a favor de los asalariados, impulsar una política de precios, remuneraciones e impuestos perjudicial a la burguesía, control del gobierno y los trabajadores sobre las empresas privadas más importantes, y desarrollo de los organismos de control de las JAP, además de otras medidas.

La línea impulsada por el Partido Comunista, que esencialmente pretendía "consolidar" el proceso, esto es, detenerlo en la etapa alcanzada otorgando nuevas garantías de largo alcance a las "clases medias", consistía en una jerarquización estratégica del proyecto táctico en el plano económico, que se traducía en encontrar fórmulas de entendimiento con la principal representación política de la mediana burguesía: la Democracia Cristiana. La

⁷ Revista *Indoamérica*, n.º 5, Santiago de Chile, mayo de 1971.

política propugnada por el Partido Comunista se impone plenamente en la reunión de la Unidad Popular con el presidente Allende en Lo Curro, y Orlando Millas es designado ministro de Finanzas.

Esa línea económica sería aplicada sin contrapeso desde esa fecha, mediados de junio del año 1972, hasta el día del golpe de Estado, dentro de un cuadro agudizado por la inflación, la escasez, y la desarticulación de los mecanismos que enlazaban la distribución y la producción. No solamente los pequeños y medianos empresarios no fueron convencidos de la conveniencia de efectuar inversiones para aumentar la producción, sino que, junto a otros sectores de la gran burguesía, volcaron parte importante de sus activos a la especulación, acelerando la penuria de artículos de consumo popular y contribuyendo a la inflación que azotaba al país.

Por lo tanto, Chile se encontraba como un barco en la tempestad que intentaba seguir un camino —la alianza con las “clases medias”— y era empujado en otra dirección y sacudido violentamente por esos mismos presuntos “aliados”.

En el año 1973, la economía se habrá deteriorado verticalmente, y los caminos posibles, reales, eran profundamente antagónicos: la estabilidad, recuperación y desarrollo solamente podían efectuarse a partir de la superexplotación de los trabajadores asalariados, o de la expropiación de la burguesía, grande y mediana. No existían otras alternativas. Las leyes del mercado capitalista no podían torcerse con promesas y declaraciones de buena conducta.

Nosotros queremos que sea muy claramente comprendido que el orden público, de una parte, y un nuevo orden social, por la otra, son dos cosas distintas. El orden público obedece a normas jurídicas, a normas legales. El orden social implica realidades materiales, posiciones de clase, el enfrentamiento de intereses diferentes. El gobierno que yo presido es el producto del esfuerzo de las masas populares. Nosotros hemos mantenido el orden público porque esa es nuestra obligación. Nosotros realizaremos las transformaciones sociales porque para eso hemos sido elegidos. Pero las realizamos y las realizaremos en un marco legal y jurídico. La Constitución política entrega la posibilidad de establecer una nueva Constitución, distinta de la actual y este camino, también lo utilizaremos.¹

En estas líneas encontramos el pensamiento de Salvador Allende que al hacer estas afirmaciones estaba profundamente convencido de la posibilidad de avanzar por una senda revolucionaria, de transformaciones estructurales, utilizando para ello la institucionalidad forjada por la sociedad capitalista chilena, y pretendiendo cambiarla sin apartarse del marco de las normas establecidas por la misma. Para ello, el gobierno debía llevar adelante una política de cambios profundos al mismo tiempo que cumplir su papel de garante del orden público; desarrollar el programa de la Unidad Popular con base en la combinación de la actividad de las masas con el aprovechamiento de la legalidad vigente, que debía favorecer esos cambios. Durante una corta etapa, esa vía pareció ser efectiva por la

¹ *El Mercurio*, Santiago de Chile, 7 de marzo de 1971.

realización de numerosas medidas que encontraban a una burguesía desconcertada, dividida, y el avance en las transformaciones acentuó el predominio de quienes en el movimiento popular habían planteado su factibilidad con mucha anticipación. Sin embargo, ya hemos visto como inmediatamente después de las elecciones nacionales de abril surgían las primeras voces en el interior de la izquierda, para alertar sobre las limitaciones y los obstáculos que se levantaban en el futuro. En rigor, se trataba de la reelaboración, en circunstancias objetivamente diferentes, de las dos principales tendencias en el movimiento obrero y popular, representadas por la estrategia del Frente de Trabajadores del Partido Socialista y la estrategia del Frente de Liberación Nacional, creado por el PC.

La línea del Frente de Trabajadores, aprobada en un esfuerzo de definición de las alianzas de clases, correspondía, para el Partido Socialista, al reagrupamiento de los trabajadores asalariados en un frente del cual era expresamente excluida la burguesía, con el objeto de llevar adelante la lucha por las reivindicaciones y objetivos independientes del proletariado y sus aliados. En los congresos de Chillán y Linares el PS había precisado aún más esta estrategia al definir el carácter socialista del proceso y la violencia revolucionaria como vía para realizarlo. Esta línea conducía, durante la fase concreta que vivía Chile desde el año 1970, a las siguientes posiciones:

El Partido Socialista concibe el proceso revolucionario como una marcha ininterrumpida —sin etapas ni consolidaciones prematuras dentro del actual sistema capitalista— dirigida a conquistar la totalidad del poder por los trabajadores, para realizar en forma simultánea las tareas democráticas aún pendientes y las nuevas tareas socialistas. En esta forma, el proceso asume, desde su inicio, un carácter socialista [. . .]

Las reformas consideradas como un objetivo en sí, aisladamente, constituyen mero reformismo. La propia

nacionalización del cobre, la reforma agraria, la estatización de la banca, por importantes que sean, si tuvieran ese exclusivo propósito, no serían medidas revolucionarias. El carácter revolucionario se determina cuando estas reformas están insertas en una estrategia global revolucionaria, que apunta a la sustitución de una clase por otra, en el manejo y control de la nueva sociedad.

Enfatizando este análisis, afirmaba sobre el carácter del gobierno:

El gobierno de la Unidad Popular tendrá sentido revolucionario en la medida que deje de apoyarse exclusivamente en la institucionalidad burguesa y contribuya a abrir paso a la nueva institucionalidad.²

Esta posición socialista era expresada con mayor fuerza aún por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria que, encontrándose al margen de la Unidad Popular, no tenía ninguna responsabilidad en el conjunto de la táctica del gobierno. En octubre de 1971 planteaba Miguel Enríquez, secretario general del MIR:

El gobierno de la UP ha golpeado los intereses de la clase dominante. Pero se ha vuelto cada vez más débil al no incorporar las masas al proceso y no golpeando el aparato del Estado y sus instituciones. A pesar de las medidas positivas de este gobierno, de los progresos que la UP ha efectuado, las debilidades, las concesiones y las tentaciones de algunos de estos sectores de erigirse en árbitros de la lucha de clases, no dejan a los trabajadores otra posibilidad que retomar una parte de la confianza entregada [al gobierno] y apoyando las medidas positivas del gobierno y combatiendo sus concesiones, definir ellos mismos una vía que les sea propia [. . .]

² Carlos Altamirano, op. cit.

Ciertamente ambas posiciones tienen un denominador común, constituido esencialmente por la necesidad de obtener el poder en su totalidad para los trabajadores, planteando una profunda desconfianza en las instituciones creadas por la burguesía y que parcialmente en esa fecha serían controladas por el gobierno. La diferencia en el acento es también evidente: en tanto la posición socialista parece valorar altamente la herramienta conquistada (el gobierno) y partir de esa situación concreta para desarrollar nuevas relaciones de poder, el MIR propone levantar un poder alternativo basado exclusivamente en la energía y capacidad de las masas movilizadas.

El Partido Comunista planteaba desde hacía largos años la necesidad de aglutinar fuerzas tendientes a realizar una revolución que fuese fundamentalmente antimperialista y antifeudal, y en consecuencia consideraba que, dentro del Frente de Liberación Nacional tenía válidamente un lugar la "burguesía nacional" cuyos intereses estarían de acuerdo con el carácter de esa revolución. En noviembre de 1969, en el XIV Congreso del PC, decía Luis Corvalán:

El objetivo de la Unidad Popular es conquistar el poder y hacer la revolución. Para nosotros, marxistas, el contenido del nuevo poder y el carácter de esta revolución son determinados ante todo por la realidad. No se puede decidir subjetivamente, obedecer a esquemas artificiales, bajo pena de retardar la marcha del proceso. Este contenido, este carácter, están definidos por el tipo de contradicciones fundamentales propias de nuestra sociedad, por la significación concreta de los cambios revolucionarios a la orden del día, por los intereses comunes del conjunto de las clases comprometidas en la transformación de la sociedad, finalmente por el marco internacional en el cual se inscribe la revolución chilena. He aquí por qué el poder popular que nosotros queremos instaurar, la revolución que necesitamos, son en su esencia y objetivamente antim-

prialistas y antioligárquicos y desembocan en la perspectiva del socialismo. Es por esto también, digámoslo al pasar, ciertas afirmaciones tendientes a dar, inmediatamente, un carácter socialista al conjunto del proceso que nosotros debemos echar a andar, no nos parecen muy serias ni científicamente rigurosas.³

He aquí las posiciones fundamentales en la izquierda que se harán presentes, con distinta influencia, sobre la dirección del gobierno y la movilización de las masas, en el proceso que se había iniciado en Chile. Transcurrido el primer periodo de realizaciones del programa de la Unidad Popular, las diferencias se expresaron en torno al ritmo que debía seguir el cumplimiento del mismo, y ya hemos visto cómo en abril los socialistas propusieron la realización de un plebiscito que no se llevó a cabo debido a la oposición de los comunistas.

Se inicia entonces un periodo en el cual los actores principales no entran de inmediato en la escena; a los trabajadores chilenos se les exigiría disciplina, aún más disciplina y siempre disciplina; e inmediatamente después de las elecciones de abril de 1971 y de la demostración de conciencia que habían expresado, manifiestan su disposición a otorgar la iniciativa al gobierno. Este tenía que avanzar en la realización del programa y en el cambio de las estructuras sopesando cada paso: en esa etapa toda su legitimidad nace de las instituciones burguesas y es en ella que se apoya siempre para justificar sus medidas; el sustento popular en esas condiciones le resulta secundario y su preocupación no será desarrollarlo sino por el contrario, mantenerlo dentro de los cauces que a su vez le permiten las leyes. Las contradicciones y las limitaciones que esto significaba serán comprobadas en el curso del proceso. Por su parte, la burguesía chilena observaba con

³ Luis Corvalán, *Chili, les communistes dans la marche au socialisme*.

expectación a sus dos principales intermediarios políticos esperando una orientación única que no llegaba; la Democracia Cristiana manifestaba en ese momento su aceptación de ciertos cambios siempre que éstos se realizaran “respetando la democracia” y se cuidaba de diferenciarse del Partido Nacional que aparecía netamente como una fuerza retrógrada y defensora de intereses minoritarios. En el fondo que se escondía detrás de la apariencia de las declaraciones, se trataban de dos proyectos diferentes que tenían mucho en común: impedir las transformaciones socialistas.

En el mes de junio de 1971 se produce un hecho totalmente ajeno a la iniciativa del gobierno y del movimiento popular: una pequeña organización, probablemente infiltrada por la CIA, da muerte al ex-ministro del interior del gobierno de Frei, el industrial Edmundo Pérez Zujovic. Durante varios días el ambiente se cargó de tensiones que obedecían fundamentalmente a las violentas críticas que desencadenaron Frei y todo el sector del Partido Demócrata Cristiano que buscaba aliarse con el Partido Nacional, responsabilizando al gobierno del hecho ocurrido. Lamentablemente, la respuesta fue defensiva: se rechazó toda injerencia en el suceso y se repudió la acción del grupo seudorrevolucionario, pero sin utilizar la oportunidad para denunciar la violencia tradicional de la burguesía y sus instituciones. El haber entrado a formar parte de la misma institucionalidad imponía sus propias reglas. Faltaba comprobar si ésta le permitiría avanzar en el cumplimiento de una política revolucionaria o si por el contrario ésta se convertiría en una traba para la organización y conciencia de las masas populares.

Hasta esa fecha el Partido Demócrata Cristiano no lograba fijar una línea coherente frente al gobierno. Si bien la administración de Frei había entrado en contradicciones con fracciones bien determinadas de la burguesía agraria y financiera, lo sustantivo de su gestión consistió en el desarrollo de un capitalismo modernizante.

Pese a lo cual existían en su seno tendencias que aspiraban a concretizar un modelo desarrollista, tíbiamente nacionalista, que permitiera la expansión de la burguesía industrial, basado en la existencia de una fuerte estructura económica estatal. Esta política respondía además a la presión de capas populares que formaban parte de la “clientela” de dicho partido. El problema es que esos sectores demócrata cristianos eran sumamente débiles para imponerse al conjunto de la clase burguesa. Ya hemos visto que la penetración del imperialismo norteamericano convertía en socios menores, atados a sus intereses, a los propietarios del núcleo fundamental de las empresas industriales chilenas más importantes. Lo mismo ocurría en los planos financiero y comercial. Por otra parte, la debilidad relativa, frente al resto de su clase, de la mediana burguesía, era una de las razones principales que impedían concretar tanto el proyecto de liberación nacional del Partido Comunista como el programa del ala “progresista” demócrata cristiana.

Pese a encontrarse desorientadas, estas capas eran lo bastante fuertes en junio de 1971 para impedir transitoriamente la reconstitución de la unidad de la burguesía. Sin embargo, ya en julio de ese año se produce el primer hecho significativo, debido a la realización de elecciones de un diputado en la provincia de Valparaíso: el conjunto de la oposición presenta un candidato común, que derrota a la Unidad Popular por un estrecho margen. Los sectores progresistas de la Democracia Cristiana fueron impotentes para impedir la marcha hacia esa reunificación derechista, y en agosto de ese año renuncia un grupo de parlamentarios y dirigentes de esa tendencia para constituir la Izquierda Cristiana. Los hechos posteriores demostrarían que la esencia del Partido Demócrata Cristiano era profundamente reaccionaria y pese al valor cualitativo del grupo escindido, lo cierto es que la votación electoral, la capacidad de movilización en la base y la influencia de la DC en la superestructura política e institucional no fueron afec-

tadas por esta ruptura. Por el contrario libre de ese grupo, la dirección demócrata cristiana puede afirmar sus posiciones en el interior de la oposición burguesa buscando convertirse en la alternativa principal al gobierno popular.

En octubre es presentado al Senado un proyecto de ley tendiente a delimitar las tres áreas de la economía. Los parlamentarios Hamilton y Fuentealba, demócrata cristiano, son los autores del mismo, que en lo central dice:

Decláranse nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen, a contar del 14 de octubre de 1971, para adquirir acciones o derechos de personas jurídicas de derecho privado, con el fin de nacionalizar o estatificar empresas productoras de bienes o servicios, que no hubieren sido expresamente autorizadas por ley dictadas en conformidad a lo prescrito en el No. 16 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado.⁴

Los velos que ocultaban los intereses materiales de las clases sociales empezaban a ser desgarrados; la Democracia Cristiana se ubicaba claramente en las posiciones de defensa de la burguesía propietaria, y obligaba al gobierno a pasar por las horcas caudinas de la ley, que éste se comprometía casi diariamente a respetar. En el futuro, de imponerse el proyecto presentado en el Parlamento, las empresas que debían pasar a constituir al Área de Producción Social sólo podrían hacerlo previa aceptación de la mayoría de senadores y diputados, lo cual significaba la exclusiva conformidad y determinación de la Democracia Cristiana. El gobierno refutó la constitucionalidad de este acuerdo y, debido a eso, quedó planteado un conflicto de poderes que no fue resuelto jamás. La ley, la Constitución

⁴ El Mercurio, 15 de octubre de 1971.

y la institucionalidad se mostraban cada vez más fluidas y difíciles de precisar; su interpretación era el objeto del asedio de las clases sociales, su intemporalidad y pureza se mostraban cada vez más cercanas a este mundo y a sus concretos intereses materiales.

Hasta esa fecha la acción del gobierno para avanzar por el camino de la "vía institucional" se basaba en dos ejes principales: de una parte, la gran capacidad de acción que estaba reservada al ejecutivo en un régimen que se proclamaba "presidencialista" desde la Constitución de 1925, gracias a lo cual se habían concretado medidas que afectaban profundamente la estructura económica y social tradicional de Chile; por la otra, en la alianza con las "clases medias" a las cuales debía respetar sus intereses en todos los planos de la sociedad. Pero desde las elecciones de abril de 1971, que constatan la escasa influencia, siempre decreciente, del Partido Radical, esas "clases medias" comienzan a ser identificadas por el gobierno, en su representación política, con el Partido Demócrata Cristiano. En consecuencia, el segundo eje de la acción del gobierno pasaba cada vez con más insistencia por las relaciones con el partido indicado. Es bastante evidente que en este cuadro la movilización de las masas estaba limitada a servir de apoyo puntual, en las elecciones, en las grandes concentraciones y, finalmente, en la ocupación de las empresas que según el programa debían pasar al APS y que los técnicos del gobierno decidían efectuar. Pero no era fácil mantenerlas en la condición de "invitados de piedra"; en el campo los obreros agrícolas, los medieros y los aparceros se movilizaban cada vez con mayor energía y determinación, y ya en el mes de agosto los organismos patronales denunciaban que solamente en tres provincias alcanzaban a diecinueve mil los campesinos en huelga en 761 fundos. Los trabajadores urbanos estaban aparentemente más retrasados, pues sus huelgas tenían un carácter más específicamente economicista y solamente actuaban por objetivos de mayor profundidad

detrás de las iniciativas del gobierno. Pero tras la superficie se escondía un proceso diario y molecular de intensa y activa politización de las diferentes capas asalariadas; los problemas de la sociedad habían dejado de ser solamente materia de los más instruidos; aumenta el número de los sindicatos y la participación en ellos; y, principalmente, crece el público y la militancia efectiva de los partidos populares: en el curso de pocos meses son decenas de miles de hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores todos, que se incorporan a las filas socialistas, comunistas, miristas y mapucistas. En las empresas intervenidas, en las empresas estatales, la dirección de las mismas es analizada en los comités de secciones por decenas de miles de obreros, y los elementos más conscientes inician la discusión sobre el poder político y los caminos para lograrlo. El gobierno, pese a todas las limitaciones de su gestión, era apoyado a finales del año 1971 por la inmensa mayoría de los trabajadores chilenos, y una frase se hace célebre: “éste será un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. . .”

En diciembre de 1971, mientras el proceso de unificación de la reacción burguesa se consolidaba, en las filas populares se producía justamente lo contrario. En tanto los partidarios de la “vía político-institucional” no lograban sedimentar su proyecto y crecían las distancias con la mediana burguesía y la Democracia Cristiana, los que se identificaban con una izquierda revolucionaria en formación mostraban la creciente maduración de sus tesis y posiciones tácticas.

En el mes de diciembre de 1971 se suceden una serie de acontecimientos que muestran bajo distintos ángulos el conjunto de luchas que se estaban agudizando. Por primera vez desde las elecciones de abril, la burguesía intenta un experimento singular: organismos desconocidos, tras los cuales se esconden el Partido Nacional y el movimiento de extrema derecha Patria y Libertad, organizan una marcha de mujeres para protestar contra el “desabasteci-

miento y la carestía de la vida”, a la cual otorga calladamente su aprobación la Democracia Cristiana. La manifestación se transforma en una verdadera asonada callejera, ya que las mujeres son acompañadas y “protegidas” por jóvenes activistas de Patria y Libertad que son contratados para realizar toda suerte de desmanes. Espontáneamente se organizan contramanifestaciones de partidarios de la Unidad Popular y el resultado es un verdadero enfrentamiento en las calles de Santiago que la policía reprime parejamente, con los métodos habituales. No habían transcurrido 24 horas cuando el Partido Demócrata Cristiano acuerda acusar constitucionalmente al ministro del interior, José Tohá, con el objeto de destituirlo por la responsabilidad que le corresponda en la “agresión perpetrada contra miles de mujeres”. Un día después, el Partido Nacional se suma a dicha acusación. El “caso Tohá” fue en cierta medida un empate, pues el Parlamento destituyó, gracias a la mayoría reaccionaria, al ministro del interior, a lo cual respondió el presidente Allende aceptando la legalidad de dicha medida pero nombrando en otro importante ministerio al mismo funcionario.

El hecho es que la legalidad, que el gobierno había decidido respetar, se mostraba cada día más favorable a la reacción y negativa para el proceso revolucionario. Y es precisamente en este terreno que durante todo un periodo, hasta octubre de 1972, la burguesía intentará paralizar las realizaciones del programa popular y frenar la movilización de las masas mediante el recurso a las disposiciones constitucionales, de las atribuciones del Parlamento, de los tribunales de justicia, y de la Contraloría.

En la misma fecha, el presidente Allende se dirigía al 60. Congreso de la CUT:

Se sabe perfectamente bien que el proceso chileno es más difícil de construir porque aquí lo hemos hecho dentro de los moldes de la democracia burguesa y dentro de las leyes de la democracia burguesa. Dentro

de nuestra Constitución que no hicimos nosotros. Vamos a modificar la Constitución y a dictar las leyes del gobierno revolucionario[. . .] Sabemos que en otras partes no había otra posibilidad que luchar con las armas en la mano y respetamos y admiramos el heroísmo de los pueblos que así lo hicieron. El caso nuestro es distinto pero es también una auténtica revolución. Y como dijera aquí el presidente de la CUT, compañero y amigo Luis Figueroa, esta revolución tiene un costo social mínimo. Que lo oigan y que lo entiendan los que hoy día empujan la violencia. Esta revolución chilena tiene un costo social mínimo.⁵

El problema no estaba resuelto y el uso de la legalidad, de las instituciones democrático burguesas, para llevar adelante un proceso revolucionario despertaba la desconfianza de un sector de la izquierda que temía la desmovilización popular y el castramiento de la estrategia socialista. El 19 de diciembre de 1971 es publicado un documento que sería conocido como *El manifiesto de Linares*, que lleva las firmas de la Unidad Popular y del MIR de la provincia, así como del Consejo Comunal Campesino respectivo. Posteriormente, la dirección de Linares del Partido Comunista sería desautorizada. En lo esencial, el documento llama a impulsar los Consejos Campesinos o sea la participación activa de los trabajadores agrícolas independientemente de las iniciativas de los organismos gubernamentales, además de la profundización e intensificación de la reforma agraria con medidas como la expropiación inmediata de todos los fundos de más de 80 hectáreas; la expropiación de los mismos sin derecho a reserva para los patrones, ni a las casas, máquinas ni animales, y rebajar a 40 hectáreas el límite de los dominios no afectables. Todo un programa que era el

⁵ Ibid., 8 de diciembre de 1971.

reflejo del aumento de la actividad de los campesinos pobres, de las limitaciones de las leyes que permitían el proceso de reforma agraria y de la potencialidad de una tendencia de izquierda revolucionaria en el movimiento popular. Sin embargo, este programa no fue impulsado a escala nacional por el Partido Socialista y las otras organizaciones de la UP. Por su parte, el Partido Comunista lo atacó abiertamente como contrario a la alianza que debía afianzarse con las "clases medias" en el campo. El caso es que los propietarios de fundos de más de 40 hectáreas, y con mayor razón los de 80 hectáreas, eran en general capitalistas que, a la escala de la sociedad chilena, constituían el sector de los medianos empresarios agrícolas que habían concentrado la acumulación anterior en esas propiedades, y por tanto representaban la sucesión, en línea directa de continuidad, de la oligarquía agraria chilena, que mantenía al rojo vivo las contradicciones con el campesinado pobre.

Los tres primeros meses del año 1972 transcurrieron fundamentalmente dentro del terreno descrito de las escaramuzas permanentes de la oposición contra las iniciativas presidenciales, en un intento por impedir la realización de medidas cada vez más elementales de administración, llegando a desfinanciar los proyectos del gobierno en el sistema educativo, entre otras materias, a través del Parlamento. Por su parte, la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia, hacían uso y abuso de todos los mecanismos institucionales para oponerse a la creación del Área de Producción Social. El primero de estos organismos rechazaba invariablemente todos los decretos de intervención de las industrias, negando las causales legales que invocaba el Ministerio de Economía. Por su parte, los tribunales de justicia declaraban reos a los funcionarios designados para su administración y suspendían a autoridades provinciales nombradas por el ejecutivo.

En febrero se realiza el cónclave de El Arrayán, que no define con precisión ninguna alternativa y marca un

compás de espera en el desarrollo del proyecto económico y de la política de alianza de clases. En marzo un nuevo impulso a las requisiciones de empresas que estaban contempladas dentro de las 91 unidades iniciales que debían constituir el área social, provoca violentas críticas del Parlamento, rechazos de la Contraloría, declaraciones de la asociación patronal Sociedad de Fomento Fabril que denuncia las mismas como ilegales, y finalmente, acusaciones de la Democracia Cristiana de “desafío al Congreso” por las medidas realizadas.

En esta fecha comienzan a tomar fuerza los representantes directos de las diversas agrupaciones de empresarios burgueses, así como los de la pequeña burguesía, los cuales tradicionalmente habían intervenido solamente en defensa de sus más inmediatos intereses “gremiales”; inquietos ante lo que consideran falta de decisión de las directivas políticas intermediarias, en alguna medida las desplazan para entrar firmemente en el terreno de la política contendiente y ciertamente de la confrontación con el gobierno popular. En el mes de marzo, la Confederación de la Producción y el Comercio, que reúne a la casi totalidad de los propietarios chilenos en todos sus niveles y sectores, afirma que en el campo “sencillamente impera la ley de la selva, la situación parece fuera de control”; en la industria “se plantean situaciones de hecho, como en los casos de Ceresita y Sindelen, debido al apuro de un proceso forzado para incorporar a la industria al área estatal”, en el comercio “aguda escasez de artículos de diversa índole” en fin, “. . . no queremos aparecer como agoreros catastróficos, pero la economía se rige por leyes. Frente a determinados actos se producen determinados efectos”.⁶

En esa fecha crecía el número de conflictos en todos los ámbitos de la sociedad chilena: las huelgas en las industrias, los enfrentamientos en el campo, las manifesta-

ciones de pobladores y estudiantes, las presiones de los diversos grupos económicos se traducían en el endurecimiento de las representaciones sindicales patronales y políticas, de los intereses contrapuestos, y en la disminución de la flexibilidad en las relaciones entre los diferentes poderes del Estado.

En abril se produce un nuevo intento por parte del gobierno para llegar a un entendimiento con la Democracia Cristiana: señalemos que en esta ocasión, como en todas las siguientes, la iniciativa partirá del primero. Las conversaciones no conducen al resultado esperado y, por el contrario, se retira de la Unidad Popular un sector escindido del Partido Radical con la siguiente declaración: “Si el proyecto sobre las tres áreas fuere aprobado en los términos propuestos, significaría que los pequeños y medianos productores continuarían sumidos en una situación de total incertidumbre e inseguridad.” En realidad, la Democracia Cristiana —en contubernio con sectores burgueses del interior de la Unidad Popular— no había conseguido su objetivo: poner de rodillas al gobierno para reducir su contenido a un proyecto populista, para limitar el alcance de su gestión de tal manera que fuese garantizado el desarrollo capitalista de Chile. En la fluidez de las relaciones políticas de esa fecha, una fracción de la Democracia Cristiana aún encontraba puntos de contacto con un sector de la Unidad Popular y del gobierno, pero estas coincidencias no lograban cuajar en una posición coherente. Por otra parte, la radicalización del movimiento popular también se acentuaba y se hacía claramente evidente que una transacción en la realización del programa provocaría una división profunda en el seno de la clase obrera y llevaría a nuevos y distintos enfrentamientos.

Inmediatamente después del fracaso del “diálogo” con la Democracia Cristiana, tanto la Unidad Popular como la oposición realizan “marchas monstruos” con centenares de miles de asistentes cada una, si bien con una composi-

⁶ Jorge Fontaine, en *ibid*, 14 de marzo de 1972.

ción social marcadamente diferente: las clases se hacían presentes a ambos lados de la línea divisoria con tonos cada vez más definidos.

Mayo está marcado por el agotamiento pronunciado del esquema de desarrollo; Chile estaba llegando a una encrucijada y el sistema institucional que le había permitido cuarenta años de gobiernos civiles se mostraba inoperante frente a la lucha de clases agudizada por el empuje de los trabajadores que aspiraban a cambiar la sociedad y la resistencia que oponía la burguesía. Durante ese mes se producen innumerables pronunciamientos del Poder Judicial y de la Contraloría, marcadamente reaccionarios y antigubernistas, en las más diversas zonas de conflicto. La institucionalidad ya no favorecía al proceso revolucionario y por el contrario se convertía progresivamente en un fuerte obstáculo.

En mayo se realizan también las elecciones de la CUT con un resultado inesperado para las fuerzas de izquierda: comunistas, socialistas y demócrata cristianos se acercan en ese orden pero con escasa diferencia, al treinta por ciento de la votación cada uno. El apoyo que encontraba la Democracia Cristiana entre los trabajadores sindicalizados no era despreciable.

La dirección del movimiento popular se encontraba ante caminos divergentes y era necesaria una definición en torno a las dos líneas que se daban en el interior de la Unidad Popular. A principios de junio de 1972 finaliza la reunión de Lo Curro.

Los partidos políticos representan clases sociales. Pero esta representación no es homogénea ni directa. En primer lugar, las clases sociales tienen distintas fracciones en su composición, con un núcleo central en su definición y perspectiva histórica que es común a toda la clase, pero con objetivos no siempre coincidentes dentro de la misma, especialmente en lo que se refiere a la coyuntura en periodos cortos. Asimismo, la representación no es directa pues por encima de sus intereses económicos y sociales, a

corto y a largo alcance, se encuentra un ropaje que cubre a esos intereses con modelos ideológicos, con hábitos, con tradiciones, con formas de lenguaje, con aspiraciones diversas. Finalmente, los partidos generan una ideología que adquiere una dinámica propia, sin hacerse independiente de las clases, pero impidiendo una relación directa y transparente.

Durante un proceso social de grandes transformaciones y participación masiva de todos los sectores de la sociedad, los partidos políticos pierden su condición de compartimentos estancos; las cúspides direccionales se ven sometidas a fuertes y distintas influencias; se produce una intercomunicación entre partidos distintos que se acercan y se separan según los periodos y la intensidad de la lucha de clases. Esta situación se producía en Chile a través de la aproximación de unos y el alejamiento de otros, dentro y fuera de la Unidad Popular. Ante las señales que evidenciaban el agotamiento de la "vía político-institucional" a mediados de 1972, los partidos de izquierda enfocan de diferente manera el proceso, aumentando las diferencias que los separan.

Los comunistas pensamos que tenemos deberes que cumplir hacia nuestro pueblo, nuestra clase obrera, el gobierno, y es por esto que estamos dispuestos, decididos a superar esta crisis levantando bien alto la bandera de la unidad de los trabajadores, de la unidad del pueblo, de la aplicación sin restricción ni transgresión del programa de la Unidad Popular. Algunos afirman que la legalidad, las instituciones, constituyen una traba y un obstáculo insuperable, que nos impide avanzar. En cuanto a nosotros, estamos persuadidos que las instituciones, la legalidad en vigor, no nos ayudan particularmente. Es cierto que son un freno, un obstáculo al desarrollo del proceso revolucionario, pero no son un obstáculo insuperable puesto que, hasta el presente, se ha probado que se pueden hacer cosas

importantes en este marco legal y que, lo que puede ser realizado no depende tanto de la ley como de la lucha, de la organización, de la movilización de las masas, de la relación de fuerzas en un momento dado. Por lo demás, nosotros pensamos que actualmente no existe ninguna posibilidad de modificar esta legalidad, estas instituciones, por ningún medio, ni por una vía legal, ni por una vía extra legal.⁷

Frente a esta posición, era mucho más que un matiz lo que diferenciaba a los socialistas:

La burguesía predica un respeto sacrosanto a la legalidad mientras ésta le sirve para afianzar el sistema capitalista o, como ocurre en esta etapa en Chile, cuando la utiliza para frenar el proceso. Pero apenas ella deviene un obstáculo para sus objetivos políticos —como desde otro ángulo también ocurre hoy aquí— la burguesía se mete la legalidad al bolsillo, la lanza al canasto de los papeles inútiles y se lanza de lleno en las acciones ilegales, en la práctica de la subversión y el golpe de Estado. Si la propia burguesía abandona su legalidad cuando le conviene, para un revolucionario no puede haber razón alguna que le induzca a temerla y respetarla. El XXIII Congreso del PS señaló que las condiciones particulares en las cuales la UP accedió al gobierno, no deben constituir un pretexto para que el gobierno juegue un papel de árbitro en la lucha de clases. Subrayo, asimismo, que la presencia obrera en el gobierno no puede significar dependencia del movimiento de masas respecto del aparato gubernamental.⁸

Esta posición de rechazo a la legalidad burguesa y la

⁷ Luis Corvalán, en conferencia de prensa, el 25 de mayo de 1972.

⁸ Carlos Altamirano, op. cit.

*Delisión
Revolución
Quinienta
1973*

necesidad de destruirla y superarla mediante la conciencia, organización y movilización de las masas fue planteada con igual fuerza en el interior de la UP por el MAPU y la Izquierda Cristiana y en el exterior de la misma por el MIR. Sin embargo, la correlación de fuerzas en la cúspide de la UP y particularmente en el gobierno que presidía Salvador Allende fue favorable a las tesis comunistas. En el fondo, la posición del PC descansaba en la necesidad de entendimiento con sectores que se afirmaban en la estructura estatal, con una base populista y una directiva social de medianos empresarios. Esto es, la política comunista implicaba la reafirmación de la legalidad entendida como la superestructura del Estado burgués y el mantenimiento y garantía de los intereses de la mediana burguesía. En una palabra, comportaba el desarrollo de las estructuras capitalistas chilenas en una nueva fase reformista avanzada.

Chile se ha dado un gobierno popular correspondiente a una democracia avanzada que asegura condiciones favorables a la lucha por el socialismo. En esta democracia avanzada y con este gobierno popular, para que la clase obrera desempeñe su papel revolucionario es absolutamente necesario tener una política definida, muy clara y movilizadora de alianzas con las masas populares de la ciudad y del campo y con la burguesía pequeña y mediana, para aislar el imperialismo, los terratenientes y la oligarquía financiera.⁹

Esta línea del Partido Comunista fue aprobada en la reunión de la dirección de la UP e inmediatamente se reafirmó su contenido en el plano económico: las empresas del APS debían ser rentables y producir excedentes; la inflación debía ser disminuida mediante reajustes limitados de sueldos y salarios; la política de tributación fiscal

⁹ Orlando Millas, en *El Siglo*, Santiago de Chile, 5 de junio de 1972.

no sería cambiada. En el plano social se afirmaba la alianza con las "clases medias" condenándose enérgicamente toda movilización en torno a empresas o fundos que no estuviesen contemplados en el programa de la UP. Este proyecto económico y social debía ser puesto en práctica en el plano político mediante un acuerdo con la representación de los sectores a los cuales estaba dirigido, esto es, con la Democracia Cristiana.

Las conversaciones se iniciaron inmediatamente después de Lo Curro y el 17 de junio declaraba Renán Fuentealba, presidente de la Democracia Cristiana:

Hay sectores de izquierda y derecha que desean el enfrentamiento. Esto no favorece a nadie. Nuestro partido ha actuado dentro de su ética política y está defendiendo sus ideas con todas sus fuerzas. El Presidente de la República nos llamó para conversar sobre un proyecto demócrata cristiano. No variaremos nuestra posición. Seguimos y seguiremos en la oposición y en tal sentido denunciaremos y condenaremos todo hecho por el cual el gobierno se aparte de sus compromisos de las garantías institucionales, para conducir a un proceso de estatización que sólo tienda a desembocar en la dictadura.¹⁰

Este lenguaje es revelador de la debilidad interna del sector "progresista" de la DC frente a la fracción que respondía a los intereses de Frei y de la gran burguesía industrial. Fuentealba se sentaba a la mesa de las conversaciones con la obligación de responder a los sectores más reaccionarios que lo presionaban dentro de su partido y por tanto endureciendo su actitud frente al gobierno anticipadamente. Pocos días más tarde la casi totalidad de los senadores demócrata cristianos declaraban:

¹⁰ Renán Fuentealba, en *El Mercurio*, 17 de junio de 1972.

Los senadores manifestamos que las proposiciones que haga el gobierno serán analizadas con la mayor profundidad y serán defendidos intransigentemente los puntos de vista que ha tenido la Democracia Cristiana para plantear la reforma constitucional.¹¹

A pesar de los esfuerzos desplegados por un sector de la Unidad Popular y del gobierno, las conversaciones fracasaron a fines de ese mes y el acuerdo no fue logrado. Señalemos que en este propósito también se comprometió un sector de la Democracia Cristiana, que en esa fecha controlaba la mayoría de los organismos directivos de su partido. Debemos entonces preguntarnos por qué, en esas favorables condiciones, no se alcanzó el entendimiento que las dos partes parecían desear.

En primer lugar, todo proyecto de desarrollo económico debe obtener los fondos necesarios para una reproducción ampliada lo suficientemente dinámica que permita un crecimiento estable. Esas inversiones, en ese periodo en Chile, solamente se podían obtener de dos fuentes: mediante la expropiación de la burguesía o la explotación acentuada de los trabajadores. En consecuencia, una alianza como la proyectada carecía de estabilidad y los intereses de las clases fundamentales de la sociedad, gran burguesía y proletariado, se habrían enfrentado a corto plazo ya que el proyecto de alianza no resolvía esa contradicción. Además, la mediana burguesía comparte, con escasas diferencias, los mismos modelos ideológicos que la gran burguesía y en consecuencia, en periodos de agudización de la lucha de clases, tiende naturalmente a ubicarse al lado de los sectores dominantes. Finalmente, señalemos también que la lucha de clases ya no permitía un equilibrio inestable como el que habría correspondido al plan indicado, pues el desarrollo de los niveles de conciencia y organización de la clase obrera era demasiado

¹¹ *El Mercurio*, 20 de junio de 1972.

alto para ser reducido y constreñido a los límites de la institucionalidad burguesa y rompía las costuras del estado de derecho por los cuatro costados. Esto es, la mediana burguesía observaba con la más profunda desconfianza la posibilidad de un entendimiento a largo plazo con los trabajadores.

A la política de diálogo y entendimiento frustrado con la DC respondió el sector de la Unidad Popular que consideraba indispensable avanzar en el desarrollo de nuevas formas de movilización; en el mes de julio se reúne la Asamblea del Pueblo en la ciudad de Concepción. Esta agrupa a los socialistas, radicales, MAPU, Izquierda Cristiana y MIR, respondiendo a una iniciativa del Comité Regional de los primeros, en un esfuerzo por llevar adelante nuevas formas orgánicas y agitativas que superaran el pantano que se había producido, para el movimiento popular, con los vanos intentos superestructurales de buscar acuerdos, y con el propósito de criticar el irrestricto sometimiento a la legalidad democrático-burguesa que demostraban el gobierno y la cúspide de la dirección de la UP. Pese al éxito de la experiencia que movilizó amplios y combativos sectores de trabajadores y pobladores de la ciudad penquista, esta experiencia no continuará, y las directivas regionales, en particular la del Partido Socialista, son desautorizadas por los respectivos comités centrales y por el propio presidente Allende, frente al griterío indignado de la derecha y del Parlamento.

En agosto, agotadas las conversaciones entre la UP y la DC, los gremios patronales comienzan a levantar cabeza con fuerza, pasando a tomar en numerosas ocasiones la iniciativa. El 21 se realiza un paro nacional del comercio, establecido para "protestar enérgicamente por la desafortunada política económica del gobierno que ha tenido graves consecuencias para todos los sectores del país, y en especial, para nuestro gremio que ha sufrido una fuerte descapitalización a consecuencia de la creciente inflación

y escasez generalizada de productos".¹²

El 10. de septiembre se lleva a cabo un paro de los estudiantes de secundaria orientados por la Democracia Cristiana, que provoca contramanifestaciones con un saldo de centenares de heridos en una verdadera batalla campal en las calles de la capital. A los movimientos de masas de las fuerzas reaccionarias responde la Unidad Popular llamando a celebrar el segundo aniversario de la victoria el 4 de septiembre de 1972, ocasión en la cual se efectúa la concentración política más grande realizada nunca en la historia de Chile: aproximadamente un millón de personas salen a desfilar en Santiago en apoyo al gobierno de Salvador Allende.

Ya en esa fecha la inflación acumulada en los ocho meses transcurridos alcanzaba al 63.5% y al 30 de septiembre de 1972 sería del 99.8%. No solamente actuaban las fuerzas ciegas de la economía, sino que el acaparamiento y la especulación en todos los poros y niveles de la sociedad chilena imposibilitaban el funcionamiento de los mecanismos y normas habituales del sistema capitalista para imponer los modelos tradicionales de distribución.

En los mismos días, es abortado un burdo intento de conspiración llevado a cabo por un general, Alfredo Canales, que no ocultaba sus tendencias reaccionarias y autoritarias. Este proyecto no contaba con el respaldo de la burguesía y del imperialismo, que se preparaban para un enfrentamiento global con el movimiento popular.

En esa fecha, los "gremios patronales" pasan al primer plano; estaba en marcha la primera insurrección burguesa para retomar el control de la situación económica, social y política, y serían en los próximos días los verdaderos contrincantes, los que se enfrentarían abiertamente en la lucha de clases: proletariado y burguesía.

Enfrentados a esa situación, los trabajadores tenían necesidad de una mayor cuota de poder, de un mayor

¹² Ibid., 21 de agosto de 1972.

control del aparato económico, de robustecer no solamente la cantidad sino especialmente la calidad del movimiento popular, mejorando y superando las organizaciones tradicionales, sociales y políticas, creando nuevas formas de acción y agitación. La experiencia del periodo transcurrido, sin embargo, indicaba que las limitaciones del proyecto institucional habían frenado la capacidad de movilización del movimiento popular, habían disminuido la confianza en sus propias fuerzas entregando la iniciativa —disciplinadamente, como se lo exigían— a la cúspide del gobierno, de los partidos políticos y de la organización sindical.

Se acercaba una ocasión que exigiría poner las fuerzas sociales al máximo de tensión, y esta coyuntura no encontraba a los trabajadores en las mejores condiciones para ello; por el contrario, quienes actuaban a la ofensiva eran claramente las asociaciones directas de las diversas fracciones burguesas: los “gremios patronales”.

La “vía político-institucional” mostraba sus limitaciones y las desventajas dialécticas que conllevaban el respeto y el sometimiento a la legalidad del Estado capitalista, aun en las condiciones particularmente democráticas de Chile.

OCTUBRE DE 1972: PRIMERA INSURRECCION BURGUESA

Durante el periodo comprendido entre abril de 1971 y octubre de 1972, hemos observado un equilibrio inestable de fuerzas, en el cual los principales componentes han sido el gobierno popular y la Democracia Cristiana. En toda esa etapa, el gobierno se apoya fundamentalmente en la legitimidad de su origen y en la legalidad de su acción, para arrebatar parcelas del poder económico del imperialismo y de la gran burguesía chilena. Estos, desorientados en un principio, logran avanzar en la recomposición de sus fuerzas y en la unidad de sus diferentes sectores para hacer frente a la amenaza a su sistema tradicional de dominación, y consiguen frenar el proceso en importante medida utilizando los mecanismos constitucionales que corresponden al Parlamento, los tribunales de justicia, y la Contraloría de la República. El gobierno disminuye el ritmo de su avance, intenta repetidamente encontrar un terreno de entendimiento con la mediana burguesía a través del “diálogo” con la Democracia Cristiana y, por esta razón, utiliza sólo en determinadas ocasiones y parcialmente el inmenso potencial de apoyo revolucionario de las masas chilenas. Simultáneamente, la agudización de la lucha de clases en el campo y la ciudad progresaba cotidianamente en ausencia de la utilización tradicional de los aparatos represivos del Estado.

En los últimos días de septiembre de 1972, la situación ha variado sustantivamente con respecto a abril de 1971. Actualmente, es el gobierno el que se encuentra a la defensiva. El bloque de la burguesía, merced a su capacidad de movilización de sectores de masas, el uso de la institucionalidad vigente y su control de parte importante de los *mass media*, se ha fortalecido en un grado considerable. Por otra parte, la situación económica se ha deterio-

rado verticalmente: la inflación comienza a adquirir características incontrolables; amplios sectores capitalistas —que dominan en gran medida la distribución— han volcado su capital a fines especulativos, con lo cual el acaparamiento y la escasez de artículos de consumo popular constituyen una diaria provocación a los trabajadores.

En estas circunstancias, la burguesía, que no ha logrado convertir al gobierno del presidente Allende en un nuevo gobierno reformista-populista, cree llegado el momento de enfrentarlo decisivamente mediante una ofensiva combinada de su poder económico, de la institucionalidad que controla, y del peso de su representación política, con todo lo cual considera factible provocar el caos y la desarticulación completa de la sociedad chilena. En esta forma, esperaban obligar a las fuerzas armadas a intervenir para derribar el gobierno, o bien obligar a éste a claudicar en todas las posiciones que había mantenido hasta la fecha. Señalemos que la evolución de las tendencias en el interior de la oposición favorecían el proyecto golpista, ya que la Democracia Cristiana había pasado de un periodo de indefinición y demagogia a otro de implacable reacción frente a las iniciativas presidenciales. Los ofrecimientos del gobierno y las garantías del Partido Comunista habían sido del todo insuficientes para concretar un proyecto de alianza y entendimiento.

Después del fracaso de las conversaciones del mes de junio, que revelaban la inviabilidad de un desarrollo centrista y reformista en Chile, los sectores dirigentes de la mediana burguesía se aliaban claramente con la gran burguesía tras los objetivos de esta última, y esto también se traducía en la Democracia Cristiana con una mayor homogeneización de su directiva en torno a las líneas propugnadas por Eduardo Frei. En los últimos días del mes de agosto, en la etapa de preparación del movimiento insurreccional de los patronos, es el senador Fuentealba quien se dirige al gobierno para plantearle, esencialmente, que no puede hacer uso de los carabineros y de las

fuerzas armadas para reprimir las manifestaciones de estudiantes y comerciantes —grupos sociales movilizados por la derecha— que asumían cada día un carácter más violento y provocativo. En esta forma, no solamente pretendían neutralizar al gobierno en la lucha de clases desatada en el país, sino que llevaban sus posiciones al interior de las fuerzas armadas pública y abiertamente. Esto último no era casual, pues en esa fecha aumentaban las presiones dirigidas a los oficiales de alta graduación con el objeto de provocar manifestaciones internas de rechazo al gobierno. Si bien, como quedó demostrado por la orfandad en que dejaron al general Canales, la intención de la DC no era la de provocar un golpe de Estado en ese momento, preparaban el terreno para impedir el uso de los aparatos armados por parte del gobierno —uso al que legítimamente tenía derecho— en vísperas de la huelga patronal insurreccional de octubre. Así participaba la Democracia Cristiana, por intermedio de su dirección “progresista”, en la gestación y desarrollo del ataque convergente que preparaba la burguesía contra el proletariado, esperando definir en el curso de los acontecimientos su eventual apoyo a un intento de intervención militar.

La Unidad Popular se encontraba a la defensiva, a la zaga del gobierno, pues los acuerdos de Lo Curro se mostraban tan escurridizos como inalcanzables: más concesiones se hacían a las “clases medias” y más se endurecía la posición del Partido Demócrata Cristiano. Debido a esa respuesta, el gobierno quedaba sin política que realizar y debía mantener un compás de espera hasta que nuevos factores le permitieran retomar la iniciativa. En cuanto a las masas de trabajadores, permanecían como puntos de referencia, excelentes para convocar a las grandes manifestaciones, a los aniversarios, pero sometidas a una disciplina que mucho tenía de encuadramiento riguroso, de escuela de sometimiento a las decisiones que paternalmente tomaba la cúspide de la UP y del gobierno. El hecho

más significativo de un proceso revolucionario lo constituye precisamente la participación multitudinaria, en todos los frentes y en todos los instantes, de esas masas que pasan, de ser objetos pasivos bajo la voluntad de las clases dominantes y las fuerzas económicas, a la condición de sujetos determinantes en el mundo material y social que las rodea. Hasta los últimos días de septiembre de 1972 los trabajadores chilenos habían permanecido en la retaguardia, como una fuerza de combate que tiene todos sus músculos en tensión, pero en la reserva. Habían aprendido que los patrones, los "momios", podían ser derrotados, estaban participando en la administración de las empresas estatales, en el Área de Producción Social; en el campo se movilizaban con mayor empuje para derrotar a los propietarios agrícolas y, especialmente, se incorporaban masivamente a las filas de los partidos políticos de izquierda. Sin embargo, la camisa de fuerza que le habían puesto al proceso chileno quienes lo conducían por el estrecho camino de la legalidad democrático-burguesa, de una institucionalidad que cada día más evidentemente no lo favorecía en la áspera lucha de clases, constituía un pesado lastre pleno de negros presagios. Al llegar los días de la insurrección patronal, la burguesía está en las mejores condiciones para emprender su embestida, frente a un gobierno debilitado, una Unidad Popular desconcertada y pasiva y amplias masas de trabajadores que desconocían la capacidad de su energía y no habían desarrollado su propia iniciativa.

En la primera semana de octubre se inicia la acción concertada de las fuerzas reaccionarias.

El 4 de octubre, el Gran Tribunal de París ordena el embargo de un cargamento de cobre chileno que debía llegar al puerto de El Havre, por valor de hasta 1 360 000 dólares, acogiendo la demanda de la empresa norteamericana Kennecott, ex-propietaria de la mina subterránea más grande del mundo, El Teniente, ubicada en territorio chileno y nacionalizada el 11 de julio de 1971.

Así demostraba el imperialismo que su acción se extendería a todos los planos, exponiendo las principales exportaciones de Chile a su incautación en todos los países capitalistas del mundo.

El 7 de octubre, diversos representantes de los partidos de la Confederación Democrática (partidos Demócrata Cristiano, Nacional, Democracia Radical e Izquierda Radical), constituida recientemente para unificar la acción de todas las fuerzas reaccionarias opuestas al gobierno popular, desencadenan la ofensiva con diversos matices dentro de su objetivo común. El senador nacional Bulnes declara: "Un gobierno que nace legítimo pero que viola la Constitución sistemática y planificadamente se convierte en un gobierno ilegítimo; la opinión del Partido Nacional es que este gobierno se ha constituido en ilegítimo."¹ El señor Bulnes, calificado irónicamente de "marqués Bulnes" por el pueblo, debido a sus ridículas pretensiones aristocráticas, representaba los intereses de la decadente oligarquía chilena. El mismo día, el senador Julio Durán, de la Democracia Radical, furibundo defensor de los medianos y grandes agricultores del centro y sur de Chile, afirmaba: "Allende se ha salido de la Constitución política." Por su parte, el senador demócrata cristiano Aylwin acusaba al presidente de llevar a cabo "una farsa democrática" y de no respetar el Estatuto de Garantías establecido antes del 4 de noviembre de 1970.

El 9 de octubre iniciaban la arremetida los "gremios patronales", esto es, las diversas agrupaciones de propietarios. Ese día, León Vilarín, oscuro personajuelo que había realizado dos viajes durante el curso del año a EU, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, declara un paro indefinido con el fútil pretexto de protestar "debido al conflicto planteado al transporte de la provincia de Aisen". El desafío era de magnitud. Dicha confederación agrupaba a 169 "sindicatos" de propieta-

¹ *El Mercurio*, 8 de octubre de 1972.

rios de camiones a través de todo el país, o sea que controlaba totalmente el transporte carretero terrestre. Combustible, materias primas, descarga de los embarques marítimos, alimentos: más de la mitad del transporte se realizaba por este medio. La confederación agrupaba desde empresas que poseían más de treinta camiones pesados y modernos hasta el modesto propietario de un destartado vehículo con más de diez años de antigüedad. León Vilarín había conseguido arrastrar a la casi totalidad de los propietarios de camiones gracias a la compra masiva de los mismos con ayuda de las generosas donaciones de dólares que aportaba la CIA, como posteriormente quedó comprobado en una comisión de investigaciones del Senado de EU.

El 10 de octubre se realiza una marcha de la Confederación Democrática que consigue reunir a más de cien mil santiaguinos, en la cual se expresa por parte de un orador del Partido Nacional: "No queremos más declaraciones. Está bueno de quejas y diagnósticos. Se han empleado demasiadas palabras en cada denuncia. De ahí que ha llegado la hora de la acción."²

El 13 de octubre entran en acción la mayor parte de las agrupaciones que controlaba la reacción en el plano de las actividades empresariales:

Un paro nacional en apoyo al gremio de los transportistas acordaron a partir de hoy la Confederación del Comercio detallista y Pequeña Industria, Sindicato de choferes de taxis, la Confederación de la Producción y el Comercio, y la Confederación nacional única de la Pequeña Industria y Artesanado.³

El detonante estaba encendido. La prueba de fuego había comenzado. El mismo día, la Sociedad de Fomento

² Ibid., 11 de octubre de 1972.

³ Ibid., 13 de octubre de 1972.

Fabril, que agrupa a la mediana y gran industria, esto es, a sus propietarios, acordaba "instruir a los industriales para que procedan a paralizar sus actividades en forma indefinida a partir de hoy".

Es importante constatar el éxito que había alcanzado la gran burguesía reunida especialmente dentro de la Sociedad de Fomento Fabril, para aglutinar detrás de sus intereses y arrastrar en su defensa a la mediana y pequeña burguesía propietaria. En efecto, en los organismos anotados se concentran los pequeños comerciantes e industriales, así como los medianos y grandes comerciantes que pertenecen a la Confederación de la Producción y el Comercio, junto a los medianos y grandes industriales que la dirigen.

Al día siguiente, los partidos opositores declaran unánimemente su apoyo al movimiento huelguístico de los gremios patronales, acordando instruir a sus militantes y dirigentes su completa participación en la escalada reaccionaria. Los estudiantes de la Universidad Católica también se suman al paro y los médicos se declaran en "reunión permanente" para "observar el curso de los acontecimientos".

El 15 de octubre, un editorial del diario de la gran burguesía chilena, *El Mercurio*, orgulloso decano de la prensa latinoamericana que precisamente en esos días era financiado por la CIA, elaboraba la siguiente tesis:

[. . .] si la legalidad está siendo usada para sacar al país de los quicios constitucionales y para implantar la dictadura del proletariado en forma paulatina, se daría la paradoja de que los actuales defensores del orden público estarían del lado de la revolución marxista, esto es, por definición contra el orden vigente, mientras que los que desobedecen a esa autoridad revolucionaria estarían del lado del orden público y de las garantías constitucionales.

En esa fecha, las diversas tendencias de la burguesía apuntaban en una sola dirección: detener de una vez por todas el proceso de cambios y asegurar definitivamente la permanencia de sus intereses; pero los matices aún existían. Así, *El Mercurio*, representante de la gran burguesía y del imperialismo, tentaba una carta: ¿no habría llegado el momento de deponer a Allende por la fuerza mediante la acción de los institutos armados? En efecto, el llamado a “los actuales defensores del orden público” no podía ser más transparente, y en la tesis de *El Mercurio* encontramos lo sustantivo de la respuesta “jurídica” de la reacción a los partidarios de la “vía político-institucional”; puesto que “por definición” los marxistas están contra el orden vigente, la legalidad se encuentra del lado de los que combaten el gobierno marxista, y las fuerzas armadas no pueden prestarse a ser utilizadas para impedir su derrocamiento.

El país se había dividido en dos grandes bloques que parecían no tener otro punto de contacto que los enfrentamientos; la lucha de clases generalizada había polarizado a todos los elementos actuantes de la sociedad chilena; parecía no quedar un rincón para los indecisos a los neutrales. Y sin embargo, éstos constituían en ese momento una fracción importante, más tarde fundamental, de los elementos que configuraban la batalla desencadenada: las fuerzas armadas.

El gobierno había respondido a la huelga de los camioneros con plena conciencia de que se trataba de una prueba decisiva de la burguesía contra el conjunto de su política y no solamente de un movimiento gremial. Y para enfrentarse a ese desafío escogió no el único camino, pero sí el mismo que había seguido hasta entonces: el de la utilización de los mecanismos legales que le permitía a Allende su condición de jefe del Poder Ejecutivo, con control de una parte importante de la administración pública. Y también con todas las ambigüedades del caso utilizando la sujeción constitucional de los aparatos arma-

dos al presidente de la República. De esta manera, el Ministerio del Interior había declarado a trece provincias, incluyendo la de Santiago, zonas de emergencia, con lo cual éstas quedaban bajo la autoridad militar.

En esa fecha las fuerzas armadas no estaban cohesionadas en torno a una posición única. En octubre de 1970 tampoco lo estuvieron y los generales Schneider y Prats, que representaban a un sector de las mismas, impidieron la realización de un golpe de Estado, en el cual estaban comprometidos otros generales de máxima graduación. Esto había significado un debilitamiento del sector golpista, lo cual había sido hábilmente desarrollado por el presidente Allende quien siempre dentro del terreno de la legalidad, cuidó de respetar sus tradiciones, sus mecanismos internos de ascensos y retiros, sus beneficios económicos y sociales, incorporando numerosos oficiales a tareas de dirección en empresas estatales, incluso con la designación del ministro de Minería, en abril de 1972; todo lo cual permitió que el ejército permaneciese como un cuerpo separado del proceso de cambios y enfrentamiento que estaba viviendo la nación. Sin embargo, no estaba tan ajeno que no fueran crecientes las opiniones y definiciones de su oficialidad, entre la cual aumentaba la influencia de los partidos derechistas y en particular del movimiento fascistizante Patria y Libertad. Pese a lo anterior, el presidente Allende podía contar con que en ese periodo las fuerzas armadas no podrían actuar al lado de la reacción sin una división profunda en sus filas, lo que significaba arrastrar al país a la guerra civil. Los altos oficiales que actuaron como jefes de gobierno provinciales durante el mes de octubre de 1972 aparecieron entonces como los árbitros de la situación, que hacían oscilar el equilibrio inestable de fuerzas de acuerdo a sus decisiones. Y se mantuvieron en ese papel durante todo el tiempo que duró el estado de zonas de emergencia.

Desde octubre se refuerza considerablemente el papel de las fuerzas armadas dentro de la sociedad chilena. Sin

precisar en esa coyuntura su definición, se afirman desde esa fecha como los árbitros en las relaciones entre gobierno y oposición; en la lucha por ganarse su apoyo, también el proyecto de la “vía político-institucional” se mostrará encuadrado por la dialéctica de fortaleza táctica y debilidad estratégica que correspondía al uso estricto de los estrechos márgenes de acción que entregaban la Constitución y la legalidad vigente.

Pese a las zonas de emergencia, la escalada de la insurrección burguesa continuaba: el 18 de octubre se suman los dueños de autobuses y taxibuses al inicio de un paro nacional indefinido. El mismo día, los empleados bancarios, los médicos, los abogados, dentistas, oficiales de la marina mercante, sectores de estudiantes de secundaria y de profesores de la Universidad de Chile declaran huelgas y se incorporan a violentas manifestaciones en la mayor parte de las ciudades de todo Chile, contra el gobierno.

El 20 de octubre los partidos unidos de la reacción declaraban:

El único responsable de las causas que han dado origen al conflicto[. . .] que los chilenos estamos viviendo, es el gobierno que preside el señor Salvador Allende, que ha atropellado permanentemente los compromisos contraídos y cuya nefasta política económica ha creado un caos total[. . .] Los partidos confederados, fieles a su tradición democrática, lucharán sin vacilar en el cumplimiento de sus deberes, aunque ello los conduzca hasta las consecuencias más extremas.⁴

En la misma fecha, la Corte de Apelaciones iniciaba un proceso contra un ministro del gobierno a petición de la derecha, en tanto la Contraloría declaraba ilegal una medida del mismo.

⁴ Ibid., 21 de octubre de 1972.

En efecto, los partidos de la oposición pretendían llegar “hasta las consecuencias más extremas”, esto es, hasta el cambio de gobierno o al menos su rendición, pero habiendo transcurrido ya cerca de dos semanas de huelga patronal, no parecían estar más cerca de alcanzar su objetivo. ¿Cuál era el obstáculo que encontraban en su camino?

Cuando los patrones agrupados en la Sociedad de Fomento Fabril, en el organismo que reunía a los dueños de las empresas industriales de Chile, llamaron a sus afiliados a “paralizar sus actividades en forma indefinida” desataron un movimiento de consecuencias insospechadas para sus intereses. Hasta esa fecha hemos visto que la clase obrera industrial respondía disciplinadamente a las iniciativas del gobierno y de los partidos de la Unidad Popular. Los conflictos de reivindicación económica se resolvían conforme a los mecanismos tradicionales forjados en la historia de la lucha de clases en Chile, y los patrones podían continuar administrando y ejerciendo su propiedad privada —salvo escasas excepciones— en la casi totalidad de las unidades productivas. Entre los trabajadores de la pequeña y mediana industria, incluso, existía una presencia más importante que en el resto tanto de la Democracia Cristiana como del MIR, debido a la carencia de un programa para ese sector del proletariado por parte de la UP. Pero al intentar llevar adelante las instrucciones del organismo patronal los empresarios encontraron la respuesta unida, consciente y combativa de los trabajadores que decidieron hacer producir las fábricas sin necesidad de patrones y gerentes. En contados días, la gran mayoría de las industrias del país estaban en manos de sus obreros, que demostraban en los hechos, frente al *lock-out* patronal, que los empresarios no eran necesarios en el proceso de producción. La presencia y capacidad de respuesta activa del proletariado demostró que su nivel de conciencia, madurez y organización superaba la praxis y orientación de la Unidad Popular, y se constituía en una

barrera mucho más poderosa que la legalidad para el cumplimiento de los objetivos insurreccionales reaccionarios. Esta conciencia y esta decisión habían nacido en los centros de trabajo, en las fábricas, en las empresas del Area Social y en las del Area Privada, fueran grandes, medianas o pequeñas. La actividad de los obreros frente al paro empresarial sobrepasó todas las limitaciones autoimpuestas en torno al tamaño de las empresas: súbitamente, los propietarios de las mismas aparecían como una sola clase, como un solo enemigo. Todas las discusiones sobre la cantidad de empresas que debían pasar al Area Social parecieron ridículas y estériles, ahora eran todas las fábricas las que se encontraban en manos de sus trabajadores. La "vía político-institucional" también se vio sobrepasada por los hechos que la burguesía desencadenaba, puesto que dejó de ser materia del Parlamento o del Poder Ejecutivo determinar las relaciones sociales del país y decidir sobre las estructuras económicas. En octubre, proletariado y burguesía se enfrentaron sin intermediarios, abiertamente, como clases enemigas, en torno al problema concreto de la producción material y de la distribución. También las divisiones que existían en el interior de la clase obrera se vieron inmediatamente borradas, superadas: socialistas, comunistas, mapucistas se encontraron hombro con hombro al lado de miristas e incluso demócrata cristianos, luchando todos por impedir el triunfo patronal, unidos en la ocupación de las industrias, con la misma preocupación por obtener las materias primas y distribuir la producción de "su" fábrica. Los días de octubre sellaron momentáneamente la más sólida y compacta unidad de la clase obrera por encima de todas las diferencias que se habían dado hasta la fecha. Ciertamente, los partidos de la UP no eran ajenos a esta batalla y eran sus militantes, especialmente socialistas, los que impulsaron la gran "toma" de las industrias de todo Chile, pero encontraron en todas partes a un proletariado que estaba dispuesto a ir mucho más lejos aún. En efecto, en

los días de octubre surgen otras estructuras creadas por los trabajadores que no estaban contempladas en la Constitución ni en los planes y el programa de la Unidad Popular.

Los trabajadores aprendieron inmediatamente que los problemas de abastecimiento podían ser resueltos con menos dificultades si actuaban coordinadamente en sectores que agruparan un conjunto de fábricas. También resultaba más fácil defender el sector, los edificios y las calles, frente a las bandas fascistas de sabotaje, si actuaban de acuerdo, en una determinada zona geográfica. Lo mismo ocurría para el problema de la movilización colectiva y otros más. Así surgen en los días de octubre los cordones industriales, organizados sobre la base de la representación obrera directa de las unidades productivas de los distintos barrios urbanos industriales. En los mismos días, las juntas de abastecimiento y precios (JAP), formadas principalmente por las mujeres de las comunas urbanas, se preocupaban de asegurar el aprovisionamiento de los alimentos esenciales, ya fuera con la colaboración de los comerciantes locales respectivos o sin ella, denunciando y requisando los acaparamientos, contribuyendo a abrir los comercios cerrados y obligando a sus propietarios a atender a la población.

Los comandos comunales se organizan sobre la base superior de reagrupamiento de tareas y objetivos en zonas mucho más amplias y son el resultado de la convergencia de representantes de los cordones industriales, sindicatos, juntas de abastecimiento y precios, centros de madres, juntas de vecinos, centros de estudiantes, comités de pobladores, partidos populares. Todos estos organismos reunidos nombran una directiva que asume los problemas más esenciales del momento: defensa y vigilancia contra las acciones de sabotaje, mantenimiento de la producción industrial, asegurar la movilización colectiva de la comuna, el orden público en las poblaciones, los circuitos de distribución de los alimentos indispensables, las relaciones

con los consejos campesinos más cercanos para asegurar la provisión de productos agrícolas. Tras el cumplimiento de todas estas tareas, que significan en los hechos un poder local que reemplaza al conjunto de la estructura anterior, los representantes de los distintos organismos que componen el comando comunal, distribuyen las tareas, asumen las responsabilidades, planifican la marcha de la sociedad a la escala correspondiente a su sector.

En octubre de 1972, los trabajadores demostraron no solamente su capacidad para hacerse cargo de la producción en las industrias al margen de los patrones, sino también para impulsar la marcha del país paralelamente a las estructuras estatales que aparecían dislocadas por la acción de la burguesía. En las calles y fábricas de las principales ciudades del país se produjo, en los hechos, la unidad de obreros, pobladores, estudiantes, amas de casa, empleados públicos y particulares, que discutían para organizarse e integrarse más allá de su militancia política partidaria, demostrando su voluntad de cerrar el camino a la reacción, de impedir una vuelta atrás en la marcha del país.

En los días de octubre fue la actividad consciente de las masas populares chilenas —dirigidas por el proletariado urbano— la que se opuso y finalmente derrotó a la insurrección patronal, alcanzando el nivel de conciencia y organización más alto que se haya producido hasta esa fecha en Latinoamérica.

En octubre de 1972, los trabajadores se dieron una perspectiva revolucionaria que superaba el programa de la Unidad Popular, construía la unión del pueblo sobre una base cualitativamente más alta, y sobrepasaba la legalidad que la misma burguesía había demostrado no respetar.

Son esos hechos, sumados a la neutralidad de las fuerzas armadas, los que impiden el éxito del programa de los gremios patronales que confiaban en paralizar el país y provocar el caos, disminuyendo al mínimo el apoyo popular al gobierno y forzando a intervenir en su favor a

los militares. Son los trabajadores los que derrotan este plan, restan simpatías a la Democracia Cristiana en los medios de obreros y pobladores, y elaboran una unidad superior y una perspectiva que el proceso chileno no se había dado hasta el momento.

Los trabajadores extendieron su acción a todas las ciudades del país; encontramos un ejemplo en el sur, en la zona industrial de Concepción:

Los trabajadores de la Industria Metalúrgica Cerrillos procedieron ayer a tomarse las instalaciones de la planta situada en el complejo industrial de Talcahuano para exigir la intervención de la empresa y el traspaso de ella el área social. En la toma participaron los 140 empleados y obreros de la industria, que ayer negaron el ingreso a la planta de sus ejecutivos e ingenieros. En ella se fabrican estructuras metálicas, estanques y vigas de acero. Según se informó, no existe en estos momentos conflicto laboral alguno, tanto económico como social, entre las partes para justificar dicha toma y ésta se habría llevado a cabo como una represalia de los trabajadores hacia la empresa, por la actual situación del país. También se dijo que la Industria Metalúrgica Cerrillos no estaba contemplada entre las 91 empresas que el gobierno anunció estatizar. El gerente de ella con el abogado F. Saneger concurrió ayer al Primer Juzgado de Talcahuano para hacer la denuncia del caso a la justicia ordinaria.⁵

Aquí encontramos los factores principales: la unanimidad de los trabajadores, su exigencia de traspaso al Área Social a pesar del carácter de mediana industria, la inexistencia de todo conflicto particular sino su acción enfocada a responder a la acción de los propietarios; finalmente, la extrema debilidad de éstos que no encuentran otro

⁵ Ibid., 28 de octubre de 1972.

camino que recurrir a los tribunales de justicia para limitarse a "la denuncia del caso".

En esta fecha el gobierno se había fortalecido considerablemente y la burguesía comprobaba con espanto que perdía día a día nuevas fábricas y, por lo tanto, poder económico; la influencia demócrata cristiana se debilitaba entre obreros y pobladores; y no lograba su objetivo declarado de paralizar al país. La acción del gobierno había conseguido hacer funcionar parcialmente el transporte terrestre requisando camiones con ayuda de los militantes de los partidos de izquierda; las JAP obligaban a los comerciantes a abrir las puertas de sus locales para atender los requerimientos de la población; los obreros y empleados trabajaban, distribuyendo y comercializando la producción. La huelga patronal tampoco conseguía hacer intervenir en su favor a los militares, precisamente por los factores señalados, por la fortaleza de la respuesta popular. Y ahora, no solamente debían enfrentarse al gobierno, sino a un nuevo poder en formación, independiente de la institucionalidad y por tanto mucho más peligroso para sus intereses. El presidente Allende denunciaba que por diversos conceptos el país había perdido, debido al paro patronal, una suma cercana a los 100 millones de dólares, pero una parte importante de este valor correspondía a productos perecibles que no habían vendido los comerciantes, con lo cual éstos comenzaban a reaccionar contra los promotores de lo que constituía un descalabro para sus pequeñas economías. La burguesía veía reducido su frente social cada día que pasaba y a fines de octubre prácticamente todos sus sectores reclamaban terminar con la huelga y encontrar un arreglo con el gobierno.

La insurrección estaba derrotada. Se abrían ante el gobierno tres caminos de desarrollo cualitativamente diferentes, divergentes, sobre la base de la nueva relación de fuerzas producida entre las clases. El primero consistía en el desarrollo del poder popular con la perspectiva a corto plazo de terminar de destruir la institucionalidad burguesa

y crear nuevas leyes revolucionarias. El segundo se fundaba en profundizar la legalidad vigente en función de una concepción de acuerdos del proletariado con otras clases y capas sociales que excluyera categóricamente la mediana y gran burguesía. El tercer camino se basaba en la insistencia del modelo ya seguido de alianza con las "clases medias" y sujeción al régimen social, jurídico y político establecido.

Jamás en la historia de Chile se encontró tan débil, disminuido y vacilante el sistema capitalista con todas sus instituciones. Parlamento, tribunales de justicia y Contraloría se habían comprometido en un proyecto anticonstitucional, al lado de los gremios patronales, para derribar a otro poder del Estado. Este intento había fracasado y esas instituciones aparecían, ante los ojos del país, desnudas, como aliadas de los intereses de una clase minoritaria y derrotada. Más importante aún, habían surgido los embriones de un poder alternativo, ya que los cordones industriales, los consejos campesinos y los comandos comunales demostraron su capacidad de organizar a vastos sectores de la población para administrar los asuntos comunes y mantener en marcha el país al margen de las estructuras estatales. Sin embargo, aún estaba en pie un tercer elemento: los institutos armados.

Quienes desconfían de la energía popular, de su capacidad de organización y de lucha, tienen siempre un último argumento para defender la imposibilidad de llevar a cabo una revolución, de destruir el Estado capitalista y construir un nuevo orden social basado en el liderazgo de la clase obrera: la técnica, organización y potencia de fuego de los aparatos represivos modernos. Con esto no hacen más que repetir, esencialmente, los argumentos de los reformistas socialdemócratas alemanes de fines del siglo pasado, a pesar de lo cual en el mundo se han sucedido varias revoluciones victoriosas desde esa fecha... Para otorgar mayor énfasis a su posición, agregan consideraciones sobre el "contexto internacional" y la capacidad

militar del imperialismo, olvidando la derrota que éste ha sufrido en Vietnam y que ha marcado una época, abriendo un ancho camino para el progreso de la humanidad.

La neutralidad de las fuerzas armadas en el mes de octubre no es un hecho casual. Ella obedece en primer lugar al peso de las tradiciones de los cuerpos represivos chilenos, que institucional y constitucionalmente estaban sometidos al Poder Ejecutivo, esto es, al presidente Allende. En segundo lugar, a la debilidad relativa en que quedaron los sectores golpistas después del fracasado intento del general Viaux, en octubre de 1970, en que pasaron a retiro varios altos oficiales comprometidos, y la "teoría Schneider" se constituyó en el dogma constitucionalista de los institutos armados como cuerpo, representados por el comandante en jefe, Carlos Prats. En tercer lugar, es fundamental recalcar que las fuerzas armadas no constituyen un organismo estanco, separado, ajeno al cuerpo social formado por las clases del país. La mayoría de la oficialidad estaba penetrada con anterioridad al inicio del gobierno popular por la ideología del imperialismo; una parte importante de sus miembros eran de extracción correspondiente a la mediana burguesía y, en octubre de 1972, sus simpatías personales estaban, fuera de toda duda, del lado de los "gremios patronales". No faltan síntomas de esto. El 26 de octubre declaraba el general Héctor Bravo, jefe de la Zona de Emergencia de Santiago: "Se notifica a la ciudadanía que el suscrito ha ordenado a la fuerza pública bajo su mando que proceda al inmediato desalojo de todas aquellas industrias o empresas que sean tomadas."⁶ Al día siguiente, el suscrito debía modificar sus órdenes y precisar que lo anterior no era válido para aquellas industrias en las cuales sus propietarios habían unilateralmente paralizado sus actividades. Una parte importante de la oficialidad vacilaba, y lo hacía no solamente por las razones de sujeción consti-

⁶ Ibid., 26 de octubre de 1972.

tucional y por la presencia de un comandante en jefe leal al presidente Allende, sino también y principalmente porque en octubre de 1972 no estaban en condiciones de asegurar el sometimiento del conjunto de oficiales, suboficiales y tropa, ante el entusiasmo y decisión con que los trabajadores se organizaban y actuaban para enfrentar la insurrección de la burguesía.

En octubre de 1972 se reunían tres condiciones que no se volverán a repetir y que hacían extremadamente factible un desarrollo revolucionario para una conducción audaz y resuelta: extrema debilidad de la burguesía como clase y de las instituciones del Estado en que estaba atrincherada; un movimiento popular en ascenso, cohesionado, en actividad intensa y con embriones de poder alternativos a las instituciones tradicionales; división e indecisión en las filas militares, que se encontraban maniatadas por el desarrollo concreto de los hechos.

La posibilidad de profundizar la legalidad democrática burguesa vigente constituía una alternativa evidente. El objetivo en tal caso habría sido restar poder y capacidad de maniobra al Parlamento, tribunales de justicia y Contraloría, que aparecían comprometidos en una intentona fracasada y que retrocedían buscando una nueva línea de defensa. Era el momento de golpearlos. Existía la inmejorable oportunidad para llamar a plebiscito sobre los puntos que el gobierno decidiera, como la formación del Área de Producción Social, la disolución del Parlamento y la creación de la cámara única, sobre la democratización de la generación de la Corte Suprema y los otros organismos judiciales. La posibilidad de demostrar energía y decisión en función de la derrota de los "gremios patronales" debería haberse basado en una política de alianza de clases, en que, bajo la conducción del proletariado, sumarían fuerza los campesinos, pobladores, empleados públicos y particulares, pequeños comerciantes e industriales, artesanos, profesionales: todas las capas de la población que podían diferenciarse de los intereses de la mediana y gran

burguesía. Esta política y esta alianza habrían sellado definitivamente una unidad superior, que habría permitido, incluso dentro de los moldes de la "vía política" avanzar en el cumplimiento del programa. Ciertamente, esta política no habría resuelto en forma definitiva, ni mucho menos, los problemas planteados por el proceso chileno; anotamos solamente que habría llevado la lucha entre gobierno popular y oposición, así como entre trabajadores y burguesía, a una nueva etapa cualitativamente más favorable a los primeros.

El tercer camino, de insistencia en la alianza con las "clases medias", tal como había sido entendido hasta el momento, se encontraba con dos dificultades principales. La primera consistía en la radicalización del movimiento popular, que debía ser nuevamente encuadrado dentro de los moldes que establecía la institucionalidad vigente. El segundo obstáculo consistía en la reiterada negativa de la Democracia Cristiana a establecer un acuerdo con el gobierno en representación de las "clases medias". Por otra parte, la derrota de la insurrección de octubre la hacía aparecer demasiado comprometida ante los trabajadores y por tanto la invalidaba como interlocutora. En consecuencia, para llevar adelante la puesta en práctica de la "vía político-institucional" en las nuevas circunstancias, era indispensable encontrar un nuevo intermediario de esas ambiguas y reticentes "clases medias". Por consiguiente, el proyecto fue reformulado de tal manera que se incorporaba a la realización del programa un nuevo elemento que debía permitir que éste se llevara a cabo dentro de los cauces de la acción política tradicional chilena.

Este es el camino que siguió el gobierno, incorporando al nuevo gabinete, el 3 de noviembre de 1972, al general Carlos Prats, como ministro del Interior; al contralmirante Ismael Huerta, en el Ministerio de Obras Públicas, y al general de brigada aérea Claudio Sepúlveda, en el Ministerio de Minería.

Es difícil precisar el trasfondo de las intensas discusiones que se llevaron a cabo en la Unidad Popular en torno a esta salida política que había escogido el presidente Allende. Diversas declaraciones permiten entender que en el Partido Socialista se produjo una reacción profundamente desfavorable y numerosos comités regionales expresaron públicamente su desacuerdo. El comité central la rechazó por unanimidad, pero acató la medida. El secretario general del PS declaró que éste "nunca se ha opuesto para que uniformados integran el nuevo gabinete" añadiendo sugestivamente "atribuciones exclusivas del Primer Mandatario". Por su parte, Luis Figueroa, presidente de la CUT, nuevo ministro de Trabajo y miembro del comité central del Partido Comunista, encontraba un tiempo verbal adecuado para emitir sus opiniones: "creo que las fuerzas patrióticas asumirán la gran responsabilidad de impedir la paralización del país para consolidar el proceso y normalizar las actividades nacionales".

En el campo de la burguesía se recogió con alivio y optimismo la formación del nuevo ministerio: el retroceso podría ser llevado a cabo ahora en forma ordenada y tranquila, con la presencia de los institutos armados como garantes del nuevo equilibrio y de la preservación de la legalidad social vigente. Esto se expresa en las siguientes declaraciones, todas del 4 de noviembre:

Senador Renán Fuentealba, presidente demócrata cristiano:

Deseo manifestar que estimo que el general Carlos Prats reúne las condiciones requeridas para el desempeño de las delicadas funciones de Ministro del Interior. Más aún, por tratarse de un hombre de armas, creemos que está en inmejorables condiciones de dar seguridad de una actuación imparcial.⁷

Senador Rafael Moreno, demócrata cristiano:

⁷ *El Mercurio*, 4 de noviembre de 1972.

La conformación del nuevo gabinete constituye una derrota para los sectores más duros del gobierno y del Partido Socialista.⁸

Senador Francisco Bulnes, nacional:

[...]En cambio, los ministros de las fuerzas armadas justificarían plenamente su ingreso al gabinete si su labor se orientara a tres grandes finalidades: restablecer la paz social, volver al gobierno a la legalidad, y asegurar que las elecciones de marzo se realicen dentro del imperio irrestricto de las libertades cívicas.⁹

Editorial de *El Mercurio*:

Las últimas expresiones del Comandante en Jefe del Ejército [Carlos Prats, ministro del Interior], dan satisfacción al anhelo más sentido del país y particularmente a la mentalidad democrática de la mayoría de los chilenos.

General Carlos Prats:

Se trata de colaborar con el gobierno en la tarea que se ha impuesto de asegurar la paz social, gravemente amenazada por las dramáticas proyecciones del movimiento de paros, y contribuir a que el proceso electoral que culmina en marzo próximo se realice dentro de las más amplias garantías para todos los sectores de opinión.¹⁰

El 6 de noviembre todos los gremios patronales daban instrucciones de terminar con el movimiento huelguístico. El intento insurreccional de octubre estaba derrotado. Transitoriamente.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ *Revista Chile Hoy*, n. 22, 10 de noviembre de 1972.

EL PODER POPULAR

La historia de Chile es la historia de la lucha de clases. Durante el gobierno de la Unidad Popular se desarrolla el combate de un pueblo que pretende terminar con el dominio secular de las clases poseedoras, que intenta abrirse camino para construir una nueva sociedad, derribando las estructuras tradicionales que afianzaban el atraso de las fuerzas productivas en el campo y la ciudad, que establecían la injusticia social y económica y que mantenían la dependencia del imperialismo en todas las materias esenciales a los intereses nacionales.

En esta lucha contra el sistema establecido, los trabajadores contaron —durante una etapa— con una importante base de apoyo: el Poder Ejecutivo, que fue obtenido por los partidos de izquierda mediante las elecciones que tuvieron lugar en 1970.

Sin embargo, la experiencia histórica y la teoría marxista han mostrado hasta qué punto es insuficiente apoderarse del aparato estatal de la clase dirigente para cumplir las nuevas tareas que implica la transformación profunda de una sociedad, y cómo, en consecuencia, es indispensable la destrucción de todos los mecanismos que regulan la marcha de la misma durante la hegemonía de la burguesía, para construir un nuevo Estado en la supremacía de los modelos ideológicos, sociales, económicos y políticos del proletariado.

La historia de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, por lo tanto, es la historia de una lucha de clases llevada a un nuevo nivel, en el cual se cuestiona, no solamente la apropiación, por los capitalistas, de la plusvalía producida por el proletariado, sino —lo que es mucho más importante y constituye una etapa cualitativamente diferente— el lugar que ocupan las clases sociales y el

derecho de la burguesía a dirigir el conjunto de las relaciones económicas y políticas.

En todos los procesos de transformación triunfantes hasta la fecha, la clase obrera ha logrado constituir un embrión primero, un poder alternativo luego, que se ha erigido frente al poder tradicional dominante para cuestionarlo, derribarlo y hacerlo desaparecer. Este poder alternativo se ha levantado siempre al margen del desarrollo institucional capitalista, y por lo tanto siempre surgió netamente como un modelo cualitativamente distinto, que no tiene su origen en el interior del sistema burgués, pues se desenvuelve independientemente del mismo y en una situación de crisis generalizada de la legalidad histórica vigente.

Durante el proceso revolucionario chileno surge el gobierno popular como un poder que se enfrenta al poder de la burguesía en el interior del sistema institucional democrático burgués, proceso en el cual se destaca el grado de participación revolucionaria independiente de los trabajadores a partir de octubre de 1972, y los objetivos estratégicos que estaban caracterizados en su programa.

Sin embargo, aquí debemos recordar que en el gobierno popular confluyeron distintas tendencias, y que, a partir de junio de 1972, con ocasión de los acuerdos de Lo Curro, las tesis del Frente de Liberación Nacional del Partido Comunista se hicieron predominantes en la línea política seguida y, en consecuencia, los objetivos tácticos de transformaciones adquirieron rango estratégico definitivo; el movimiento popular debió superar la orientación impartida desde el gobierno y, con base en esta contradicción, todo el proceso adquirió un carácter extremadamente confuso en torno a sus objetivos y mecanismos de enfrentamiento al sistema capitalista.

El poder de una clase social, en definitiva, está constituido por su capacidad para imponer sus modelos de dominación en los planos económico, ideológico y político. Por lo tanto, podemos asegurar que la conquista del Poder Ejecutivo por la Unidad Popular derivó en una

pérdida importante para la capacidad de la burguesía de afirmar y mantener su predominio; sin embargo, a través de su desarrollo hemos constatado, y lo haremos hasta el final, cómo este Poder Ejecutivo fue absolutamente insuficiente para enfrentar el conjunto coherente dominante y mucho menos para impulsar e imponer un nuevo modelo que asegurase un devenir socialista a Chile.

Es precisamente a partir del mes de junio de 1972 cuando las limitaciones de la "vía político-institucional" se hacen evidentes, y el ejercicio del Poder Ejecutivo se manifiesta encuadrado y sometido por los mecanismos que permitieron su acceso; cuando surgen las primeras expresiones —cualitativamente nuevas— de organización obrera independiente de las estructuras institucionales: los cordones industriales.

Para comprender el origen de los cordones industriales es preciso intentar previamente una reseña del papel de la Central Unica de Trabajadores, fundada en 1953 bajo la presidencia del combativo dirigente Clotario Blest. Desde esa fecha, la CUT debió luchar para obtener la afiliación de los sindicatos repartidos por todo el país sobre un criterio de pluralismo político —con una presencia importante de dirigentes demócrata cristianos en su seno— y con las limitaciones del Código del Trabajo, que establecía un mínimo de 25 trabajadores para la constitución legal de un sindicato. Es debido a esto que la CUT en 1972 solamente agrupa un total aproximado de ochocientosmil trabajadores sobre una cifra cercana a los tres millones de trabajadores asalariados. También por este motivo la fuerza de la CUT se concentraba en la industria grande y mediana, así como en las dependencias estatales. En 1967, es la huelga general declarada por la CUT la que señala el inicio de un movimiento ascendente de los trabajadores; pero durante los años 1970, 1971 y 1972 se desata una oleada huelguística que no siempre es controlada por este organismo. Para un promedio de 1 000 conflictos laborales en el periodo 1967-69, tenemos que el número

aumenta a 1 819 en 1970, 2 709 en 1971, y 1 763 conflictos solamente para el primer semestre de 1972, lo cual demuestra la intensidad de la lucha de clases. Además, la mayor parte de estas huelgas no tienen el carácter legal que requería la ley y el promedio de trabajadores por huelga disminuye de 355 en 1970, a 108 en 1971, cifra que se mantiene en 1972.¹

Todo lo anterior señala la incorporación masiva de los obreros, empleados y campesinos de las empresas mediana y pequeña a las luchas más antiguas de la gran minería e industria. En efecto, debido a la ausencia de represión, los trabajadores se incorporan con decisión a la presentación de sus reivindicaciones de diverso carácter, en particular economicistas, en las cuales la CUT desempeña un papel secundario, ya que a los elementos anteriores debemos agregar que el porcentaje de huelguistas sindicalizados es del 22% en el primer semestre de 1971, 26.6% en el segundo semestre y 32.4% en el primer semestre de 1972. Así tenemos que ese gran sector de trabajadores de las empresas no monopólicas dirigen sus energías en todo ese periodo a la obtención de una mayor participación en el ingreso nacional, y lo consiguen ampliamente, si bien hasta el final del gobierno mostrarían que no estaban encauzados por la CUT.

Lo anterior se revela con claridad en el mes de junio de 1972, fecha en la cual asistimos precisamente al nacimiento del primer cordón industrial del país: el cordón Cerrillos. En esa oportunidad, los obreros de una empresa conservera mediana, la industria Perlak, se encontraban en huelga por diversas reivindicaciones y ante la intransigencia patronal habían procedido a ocupar el local, expulsando a patrones y gerentes, y demandando el paso de la empresa al APS. Es en esa fecha que la reunión de Lo Curro había procedido a desautorizar al hasta entonces

¹ Emir Sader, *Movilización de masas y sindicalización en el gobierno de la UP.*

ministro de Economía, Pedro Vuskovic, y en el gobierno se imponía categóricamente la línea auspiciada por el Partido Comunista de reforzar la alianza de clases con la mediana burguesía, "consolidando" el proceso con base en lo realizado hasta entonces. En esas condiciones, le correspondió a la ministro del Trabajo, militante comunista Mireya Baltra, repudiar violentamente las demandas de los trabajadores de Perlak y exigir el desalojo de la industria. Simultáneamente, la justicia había ordenado por segunda vez la devolución de la misma a sus propietarios, con uso de la fuerza pública.

La CUT no podía intervenir en el conflicto, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, pese a que comunistas, socialistas y demócrata cristianos tenían aproximadamente la misma fuerza en la base (de acuerdo a las elecciones de mayo de 1972), la dirección de la misma, y esencialmente su aparato funcionario tenía un neto predominio comunista que difícilmente podía impulsar un movimiento opuesto a la orientación táctica del PC y del gobierno en ese momento. En segundo lugar, la CUT tenía una organización piramidal basada en ramas industriales lo cual se correspondía netamente con el carácter de las luchas economicistas llevadas hasta entonces. En efecto, para reclamar reivindicaciones de mejoramiento salarial, de escalafón, jubilación, de condiciones de trabajo, etcétera, es evidente que la mejor forma organizativa es la de agrupar a los trabajadores que tienen en común los mismos problemas originados en la similitud de su ocupación.

Pero en el conflicto planteado en la industria Perlak el objetivo de los obreros superaba con mucho ese carácter tradicional: se trataba de la propiedad de la empresa. Es entonces, el 30 de junio de 1972, que en respuesta a los patrones de la industria, a la justicia institucional, y al Ministerio del Trabajo, los trabajadores de la zona se solidarizan con los de Perlak, ocupan algunos locales, bloquean los caminos de acceso al sector industrial de

Maipú, y manifiestan su repudio a las distintas instituciones que se oponen a sus reivindicaciones. En esta forma, nace un nuevo modelo de organización obrera, basado en los intereses comunes de los trabajadores del sector, territoriales, y por lo tanto potencialmente distintos a las luchas económicas habituales, ya que su solidaridad se extendía a otro tipo de problemas generales, sociales, y no a los particulares correspondientes a esa rama fabril. Había surgido el cordón industrial Cerrillos. La experiencia fue exitosa. La industria Perlak fue intervenida; posteriormente sería incorporada al APS y sus trabajadores estarían entre los más activos y conscientes de la comuna.

Los cordones industriales tienen un desarrollo notable durante los grandes enfrentamientos de octubre. En esa coyuntura surgen a través de todas las principales ciudades del país y en Santiago se constituyen los siguientes: O'Higgins, Vicuña Mackenna, San Joaquín, Cerrillos y Recoleta. Posteriormente serían organizados los cordones Santiago Centro y Mapocho Cordillera. Las directivas se establecen por representación directa de los trabajadores de las fábricas del sector que en asambleas escogen a los delegados que han de participar en ellas.

Un modelo de las actividades y objetivos de los cordones se encuentra en el instructivo del cordón Vicuña Mackenna, realizado en un momento crítico del proceso:

- 1] Tomar todas las industrias.
- 2] Organizar brigadas de once compañeros, donde uno es el jefe. Los jefes de estas brigadas junto con los miembros de la directiva sindical serán quienes dirigirán las industrias.
- 3] Centralizar en el interior de la industria los vehículos y materiales que sirvan para la defensa de la industria, de la clase obrera y del gobierno.
- 4] Cada hora las industrias tocarán las sirenas como señal de que su situación es normal. En caso de que la situación sea anormal, se tocará la sirena en forma

permanente, como señal de que se necesita ayuda y así recibirán auxilio.

5] ...

6] Sintonizar constantemente Radio Corporación [perteneciente al Partido Socialista], aunque exista cadena nacional.

7] Ubicar un vigía en el lugar con más visibilidad de la industria.

8] Estar en permanente comunicación con las fábricas de los lados a través de compañeros que actuarán como mensajeros.

9] El comando funcionará en... Si no se puede llegar hasta... habrá compañeros de la dirección del cordón en...

10] Organizar asambleas e informar a todos los compañeros de estas instrucciones en cada industria.²

En octubre los cordones fueron impulsados fundamentalmente por los militantes del Partido Socialista y, en menor medida, del MIR y del MAPU. Su papel fue decisivo para derrotar el *lock-out* patronal y la paralización del país, y se logró una coordinación efectiva, a escala del sector, para realizar las tareas más fundamentales de movilización de los trabajadores, transporte de materias primas y productos terminados, establecimiento de lazos con los habitantes de la comuna, especialmente con las directivas de los campamentos vecinos y juntas de vecinos de las poblaciones, y en algunos casos con los consejos comunales campesinos de las zonas agrícolas cercanas. Asimismo, la coordinación resultó efectiva para el cumplimiento de tareas de vigilancia y control en las avenidas de acceso a los respectivos sectores.

Sin embargo, la organización de los cordones fue en gran medida instintiva, y por lo tanto no respondió a un plan orientado por ningún partido popular. El Partido

² Revista *Chile Hoy*, n. 56, 6 de julio de 1973.

Comunista, que veía en los mismos un peligro de “paralelismo” con la CUT y que temía justificadamente ser incapaz de canalizarlos tras sus líneas políticas, dio instrucciones a sus militantes de no participar. Por otra parte, si bien el Partido Socialista llamó al desarrollo y fortalecimiento de los cordones, no entregó ningún plan concreto, en esa fecha, para su organización más allá de los límites sectoriales y las características espontáneas con que surgieron. Los cordones aparecen como una respuesta en la base al ataque desencadenado por la burguesía, pero también y principalmente, como una herramienta de defensa del gobierno popular.

Finalizado el paro de los patrones en los primeros días de noviembre, el gobierno da un vigoroso golpe de timón a la derecha y los cordones, faltos de impulso por parte de los partidos de la Unidad Popular, languidecen sin tareas concretas a pesar de los esfuerzos del MIR que no logra ampliar su base entre la clase obrera industrial.

En el mes de enero, frente al “proyecto Millas” que contempla la entrega a sus propietarios de numerosas industrias tomadas por los obreros en octubre, los cordones tienen un vigoroso renacer. El Partido Socialista llama a resistir la política de devoluciones y crece nuevamente la actividad de sus militantes que logran arrastrar a la enorme mayoría de los trabajadores tras sus posiciones de “avanzar sin transar”. Es a fines de enero que manifiestan precisamente los cordones para impedir la concreción del “proyecto Millas”, y efectivamente éste será retirado poco tiempo después, ya que su realización habría significado el uso del aparato represivo contra los trabajadores organizados en los cordones industriales.

Pero una vez terminada esta coyuntura, los cordones nuevamente disminuyen su actividad. El Partido Socialista, en su Pleno, declara:

El Poder Popular en todas sus formas de expresión, pero sobre todo bajo forma de control y dirección de la clase obrera en el campo de la economía, debe

poder darse como base una estructura institucional distinta frente a la institucionalidad burguesa tradicional, con el apoyo del gobierno popular.

Ciertamente, esta línea no bastaba para el desarrollo e impulso de los cordones industriales que no podían cumplir un papel destacado limitándose exclusivamente al “campo de la economía”. Las directivas del Partido Socialista en el periodo comprendido entre el 4 de marzo y el 29 de junio, fecha de la primera insurrección militar, carecían de precisión y no respondían a las numerosas tareas que los cordones habían demostrado estar en condiciones de llevar a cabo.

El Partido Comunista, por su parte, en carta de Luis Corvalán del 7 de febrero, decía:

No es el fantasmagórico “poder popular” independiente del gobierno, de que habla el MIR y que sólo existe en la cabeza calenturienta de sus dirigentes lo que debe apoyarse sino el gobierno del Presidente Allende que es un hecho concreto. . .

Posteriormente, esta actitud evolucionaría y, en una entrevista, declaraba Corvalán:

En el caso particular de los cordones industriales nosotros los concebimos como parte integrante de la CUT, como organizaciones de base de la CUT, y no como organizaciones paralelas y divisionistas del movimiento sindical.³

En el mes de junio se produce un abortado intento de golpe militar y la CUT y el gobierno llaman a los trabajadores a tomarse las industrias como respuesta defensiva. Comienza el periodo de mayor crecimiento, clarifi-

³ Ibid., 12 de abril de 1973.

cación y actividad de los cordones industriales, que respondieron con toda energía al intento sedicioso:

La estrategia marxista para lograr el control total de industrias y fábricas que se amplió el 29 de junio con la orden de ocupación dada por la CUT, logrando la toma de 34 000 empresas, servicios y talleres, según datos que proporcionaría el Comité Económico de Ministros, le permite a la Unidad Popular tener en su poder diversos medios de producción, muchos de los cuales han sido incorporados forzosamente al área estatal.⁴

Ciertamente que la cifra entregada por *El Mercurio* es una exageración tendiente a provocar el pánico entre los pequeños propietarios. Durante los procesos revolucionarios no siempre existe todo el tiempo necesario para la realización de estadísticas, pero lo efectivo es que los trabajadores pasaron a ocupar la mayor parte de la mediana y gran industria de Santiago y las principales ciudades, y que la coordinación estuvo a cargo de los cordones industriales.

En esa fecha la experiencia ya permitía precisar las expectativas abiertas y las diferencias explicitadas entre la organización de los cordones industriales, CI, y la Central Unica de Trabajadores, CUT. Así podemos leer en el semanario *Aurora de Chile*, publicado por el Comité Regional Santiago Centro, del Partido Socialista, el más importante de dicho partido y dirigido por las tendencias de izquierda revolucionaria:

1] Los CI incorporan nuevos contingentes de clase que la CUT no integra, sindicatos no afiliados, trabajadores sin organización sindical, empleados del terciario.

2] La dirección de los CI se ejerce en función de la mejor proximidad geográfica para facilitar su movilización y su convocación.

⁴ *El Mercurio*, 15 de julio de 1973.

3] Los CI no están incorporados a la legalidad burguesa, en tanto que la CUT lo está a través de los sindicatos y de su nueva personería jurídica.

4] La CUT entrega una imagen de subordinación al gobierno, lo cual provoca una cierta sospecha en la clase, hábilmente explotada por la burguesía en las elecciones del último Congreso; los CI en cambio, han nacido de los intereses superiores de la clase y aparecen batiéndose por las masas.

5] Los CI si bien admiten en su seno un profundo pluralismo ideológico (incluso participan los trabajadores de la DC) no traducen esta participación en una integración y una repartición del poder como en el caso de la CUT donde un tercio de los dirigentes pertenece incluso a la dirección de la burguesía.

6] Los CI pretenden lograr las directivas más representativas y por tanto otorgan una gran importancia a la Asamblea de cada empresa, soberana para la designación de delegados a estos organismos de trabajadores.

7] Finalmente —y principalmente— los CI son los únicos organismos de clase capaces de transformarse en un poder territorial en una situación de enfrentamiento directo con la burguesía, con todas las ventajas estratégicas que esto significa y que han sido demostradas claramente en las recientes coyunturas. Por consiguiente, nosotros pensamos que en la medida que no son organismos alternativos, los CI y la CUT pueden darse una perspectiva de trabajo en común que los alimentará mutuamente y que servirá para comenzar a estimular el poder popular en todo el país.⁵

En la misma fecha, el desarrollo orgánico de los cordones permite dar un importante paso adelante: a fines de julio se crea la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales de la provincia de Santiago, que elige como su

⁵ Semanario *Aurora de Chile*, n. 33, 26 de julio de 1973, citado por Maurice Najmann en: *Le Chili est proche*.

presidente al militante socialista Hernán Ortega, principal dirigente del cordón Vicuña Mackenna, y que señala los siguientes objetivos a los cordones:

- 1] Defender y aumentar las conquistas del gobierno y de la clase obrera,
- 2] Representar bajo formas de democracia directa a los trabajadores de cordón,
- 3] Constituirse en organismos de defensa del gobierno actual en la medida que éste representa los intereses de los trabajadores,
- 4] Profundizar el proceso y agudizar las contradicciones de clase,
- 5] Luchar por una participación más amplia de la clase obrera en las decisiones que corresponden a sus intereses y desarrollar el poder de los sindicatos y de las organizaciones de la clase obrera,
- 6] Cooperar de manera decisiva en la organización y la preparación de organismos de defensa del sector, de manera de asegurar a la clase obrera el control territorial y político.⁶

Este sería el último esfuerzo organizativo y creativo de los obreros de Chile para enfrentar la reacción de la burguesía. Menos de dos meses después el golpe militar arrasaría con la escasa resistencia que se concentraría en unas pocas decenas de grandes fábricas y en algunos campamentos y poblaciones. La desproporción de los medios armados fue tan enorme que, en la medida que no hubo vacilación por parte de los miembros de las fuerzas armadas, la organización de defensa de los cordones se mostró absolutamente ineficaz. Pese a lo anterior, es indispensable señalar que éstos constituyeron en los hechos un poder totalmente autónomo del gobierno y de todas las instituciones del Estado capitalista chileno, que

⁶ Revista *Chile Hoy*, n. 59, 27 de julio de 1973.

desarrollaron de manera cualitativamente nueva la conciencia y la influencia de la clase obrera en los sectores geográficos donde se constituyeron, que impidieron el crecimiento de una burocracia estatal ajena al control obrero y aumentaron la participación de los trabajadores en la administración de las empresas. La capacidad para dirigir la sociedad, en los sectores territoriales, se mostró sumamente débil y solamente en casos particulares se llevó a cabo; sin embargo, el germen de un poder obrero democrático, independiente, y con un proyecto de organización social revolucionario se mostró mucho más real que "fantasmagórico". A la luz de las declaraciones y directivas de los partidos populares podemos afirmar que la capacidad de los trabajadores para superar el pantano legalista de la lucha de clases existió y se desarrolló, y fueron las vacilaciones de sus organizaciones políticas y las limitaciones de la "vía institucional" las que impidieron su concreción en un real poder alternativo al poder de la burguesía.

Los cordones industriales no fueron el único elemento organizativo nuevo gestado por los trabajadores durante el proceso revolucionario chileno. Aunque en medida más limitada, en su desarrollo también se crearon los comandos comunales de trabajadores y los consejos comunales campesinos.

En los comandos comunales se reunieron, fundamentalmente, los trabajadores de la industria a través de representantes de sindicatos o de los cordones industriales, representantes de las poblaciones o campamentos del sector, las mujeres principalmente a través de las juntas de abastecimiento y precios (JAP), sindicatos agrícolas y centros de estudiantes en algunos casos, así como representantes de los partidos de la izquierda revolucionaria. Pero antes es preciso observar los antecedentes de organismos de participación popular que existían en Chile: juntas de vecinos, centros de madres, centros de estudiantes, comités de pobladores, sindicatos campesinos.

La relativamente temprana industrialización y urbanización de Chile, la organización y lucha de la clase obrera, el crecimiento de un importante sector de empleados de la administración pública, la inexistencia de conflictos agudos entre las distintas fracciones de la burguesía, la estabilidad y capacidad de las instituciones del Estado capitalista durante la mayor parte de este siglo, permitieron en Chile el desarrollo de diversas formas democrático-burguesas que se profundizaron en los últimos años, y que se expresaban también en la existencia de organismos de base de representación popular.

Es durante el sexenio demócrata cristiano de Frei que fueron creadas las juntas de vecinos, legalizadas el año 1968, que llegaron al número de 3 487 en 1970. El objetivo de las mismas debía ser la atención de los problemas relativos al barrio o población, y participaban en ellas todos los habitantes del mismo. De hecho se desarrollaron principalmente en sectores populares y dieron origen a permanentes elecciones vecinales, en las cuales la DC obtenía una influencia mayoritaria. En las juntas de vecinos se destacaban las "personalidades" del barrio, esto es, los comerciantes, los profesionales, los pequeños propietarios, todos aquellos que de acuerdo a la ideología dominante sobresalían con respecto a la masa indiferenciada, lo cual también explica el que se constituyeran en bastiones del reformismo demócrata cristiano. Simultáneamente, el gobierno de Frei impulsó la creación, especialmente en las poblaciones, de los centros de madres, que alcanzaron la cantidad de 6 000.⁷ En los centros de madres se pretende racionalizar la preparación de la comida, desarrollar las labores de tejido, en fin, separar aún más netamente las labores "propias" de la mujer para afianzar el papel conservador que ella juega en la sociedad chilena.

Por otra parte, la estrategia demócrata cristiana se

⁷ Informe presidencial, mayo de 1970, Santiago de Chile.

dirigía hábilmente a su amplio sector desposeído de la población urbana, los "sin casa", que se organizaban en comités de pobladores al margen de las luchas sindicales y, por tanto, podían ser ganados más fácilmente para una política reformista, que obtiene una influencia considerable a través de la canalización de sus aspiraciones en la obtención de una vivienda, y posteriormente, en el mejoramiento de la infraestructura vecinal. A comienzos del gobierno popular se encuentran viviendo en campamentos alrededor de 55 000 familias, esto es, el 10% de la población total del Gran Santiago⁸ y en mayo de 1972 el Ministerio de la Vivienda entrega la cifra de 83 000 familias residentes en campamentos, esto es, el 15%. Este enorme sector popular había comenzado a ser influido por los partidos de izquierda desde los últimos años del gobierno de Frei —en ásperas batallas con los funcionarios demócrata cristianos— cuando contribuyen a la organización de "tomas" ilegales de terrenos baldíos en los cuales los pobladores se instalan, y posteriormente los dirigen en sus luchas por obtener los elementos más indispensables para su residencia. Esto coincide con las crecientes dificultades económicas de los últimos años de Frei debido a lo cual los recursos fiscales y las consiguientes soluciones al problema habitacional habían disminuido considerablemente y por lo tanto el gobierno demócrata cristiano endurecía su actitud frente a las ocupaciones de terrenos, llegando a masacrar a los pobladores en Puerto Montt en el año 1969. Es así como durante los años 1971 y 1972 crece la influencia socialista, comunista y mirista en los comités de pobladores, que en su mayor parte pasan a ser dirigidos por los mismos, que desplazan a los dirigentes de la DC.⁹

⁸ Duque y Pastrana, "La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile". *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*, n. 4, Santiago, Chile.

⁹ Pastrana y Threlfall, *Pan, techo y poder*.

Las juntas de abastecimiento y precios (JAP) fueron propuestas por primera vez en una reunión del ministro de Economía, Vuskovic, con las dueñas de casa en julio de 1971. Cuando aparecen los primeros síntomas de desabastecimiento a fines del mismo año, son impulsadas por el Partido Comunista y, en abril de 1972, el gobierno establece su existencia legal con la promulgación del respectivo Decreto cursado por la Contraloría. Los objetivos de las JAP eran los siguientes: control de precios y acaparamientos, facilitar el abastecimiento, educación del consumidor, lucha antiburocrática. Estas eran tareas asesoras y no ejecutivas, ya que la acción de las JAP debía limitarse, en el caso de un acaparamiento, por ejemplo, a la denuncia respectiva a las autoridades, puesto que no tenían autorización para actuar de ninguna otra manera. El hecho es que el gobierno popular había enviado el proyecto de Decreto con un contenido diferente, pero la Contraloría objetó el mismo al señalar que para otorgar calidad ejecutoria toda iniciativa del gobierno debía ser aprobada por el Parlamento. En los días de octubre de 1972 las JAP superaron ampliamente el papel "asesor" y contribuyeron efectivamente a quebrar el acaparamiento y el cierre de los locales comerciales. Podían hacerlo: en enero de 1973 ya hay más de 2 100 JAP en el país, y en Santiago son más de 1 000, repartidas en 34 comunas,¹⁰ y su número aumenta a 2 500 en marzo.¹¹ A partir de la segunda mitad de 1972 la lucha de clases encontraba en el problema del abastecimiento uno de sus principales ejes, de ahí la importancia de las JAP, que se constituyeron en una herramienta importante de los sectores populares.

Sin embargo, en los campamentos y, en menor medida, en las poblaciones, también se desarrollaron otras formas de distribución: el abastecimiento directo, en el cual jugaron un papel importante las distribuidoras de productos

alimenticios estatales. Se crearon dos mecanismos orginales: la "canasta popular" que era entregada a los almacenes del pueblo, el primero de los cuales aparece en la población Lo Hermida en diciembre de 1972, para ser repartida directamente a los pobladores a través de las JAP, y el abastecimiento directo desde los supermercados móviles de las distribuidoras estatales. En las JAP confluyeron principalmente las militantes de la Unidad Popular, y su acción contó con la oposición más enérgica de la burguesía, que pretendió, y en gran medida con éxito, oponerlas al comerciante establecido. Sin embargo, durante 1973 constituían una realidad indispensable para asegurar el poder adquisitivo de vastísimas capas populares, logrando ganar para el apoyo al gobierno popular a amplios sectores femeninos.

Los centros de estudiantes existen en Chile desde la segunda década de este siglo, y la generosidad juvenil ha demostrado muchas veces su capacidad de sacrificio y de entrega a la causa de los trabajadores. Sin embargo, la polarización de clases producida en Chile llevó a extensas capas del estudiantado, por su extracción social pertenecientes a las "clases medias", a participar de la oposición al gobierno popular. Durante el año de 1973 los estudiantes de secundaria y universitarios se encontraban profundamente divididos y encontramos a centros de estudiantes participando junto a comités de pobladores en tareas de desarrollo del poder popular, así como otros en la misma fecha ocupaban facultades y manifestaban violentamente contra el gobierno.

El primer llamado a la organización de comandos comunales fue realizado durante la asamblea del pueblo que tuvo lugar en Concepción en el mes de julio de 1972. Sin embargo, la violenta crítica que sufrió de parte del Partido Comunista y del presidente Allende, así como la reconversión del comité central del Partido Socialista al respectivo comité regional de Concepción, hizo que la iniciativa no se concretara, sino muy embrionariamente,

¹⁰ Revista *Chile Hoy*, n. 32.

¹¹ *Ibid.*, n. 40

en escasas comunas del país. Fue durante el paro patronal de octubre que, paralelamente a los cordones, se desarrollan los comandos, agrupando las organizaciones ya señaladas: sindicatos, comités de pobladores, partidos políticos de izquierda de la zona respectiva, juntas de abastecimiento y precios, centros de estudiantes y otros organismos vecinales, así como, en algunos casos, organizaciones del campesinado. Las motivaciones principales para la formación de los comandos fueron indiscutiblemente, el cumplimiento de tareas que el aparato estatal no podía realizar debido a la desarticulación provocada por la insurrección burguesa, y la defensa del gobierno. Los objetivos principales fueron, en primer lugar, asegurar la continuidad del trabajo en la industria frente al *lock-out* empresarial, lo cual significaba asegurar la marcha de esa industria pese al abandono de sus directivos y en muchos casos de sus técnicos; regular la recepción de las diferentes materias primas y canalizar la distribución de la producción; disponer de la movilización pública necesaria para el transporte; implantar todo un nuevo sistema de distribución de productos alimenticios, tanto a los trabajadores de las empresas como a los habitantes de los campamentos y poblaciones; formar consejos de salud para atender las necesidades más indispensables en este terreno, frente al abandono que hicieron de sus responsabilidades la mayor parte de los médicos y técnicos; finalmente, poner en práctica medidas de protección y vigilancia frente al sabotaje de los comandos terroristas de las organizaciones y partidos de la derecha.

En esta forma, en los comandos comunales de trabajadores se produce la convergencia de distintos sectores y capas sociales: obreros de la gran industria junto a trabajadores de la mediana y pequeña empresa, pobladores que en su mayor parte eran obreros de la construcción y de baja calificación, cesantes, trabajadores por cuenta propia, junto a empleados de dependencias estatales, especialmente del gremio de la salud y del profesorado, estudiantes, campesinos del sector reformado y pequeños

propietarios agrícolas. En total se forman aproximadamente 100 comandos comunales,¹² de los cuales alrededor de 20 en el Gran Santiago y los otros repartidos en las provincias de Valparaíso, Concepción, Ñuble, Cautín y Linares. Una idea sobre la composición de los comandos la puede dar un documento del Comité Coordinador del Área Norte que establece la presencia de 21 organizaciones de masas, de las cuales 4 son poblacionales, 3 son de industrias importantes, 2 son campesinas, 2 son estudiantiles, y el resto, de industrias pequeñas y talleres.¹³

Ya hemos anotado las razones fundamentales que dieron origen a los comandos comunales. Inmediatamente después de la derrota del paro patronal el gobierno pareció afirmarse sólidamente con la presencia de los jefes militares. Igualmente, el aparato estatal retomó su funcionamiento normal —si bien con problemas graves en abastecimiento— y, por lo tanto, los comandos comunales iniciaron una vida vegetativa, aún más que los cordones industriales.

Con posterioridad al “tancazo” de fines de junio de 1973, los comandos comunales tendrían una reactivación, pero aquí encontramos también diferencias importantes en la evaluación política: en tanto el MIR pretende impulsar particularmente los comandos, las tendencias de izquierda revolucionaria del Partido Socialista apoyaban de preferencia los esfuerzos de desarrollo de los cordones industriales y consideraban indispensable asegurar primero la hegemonía de la clase obrera, antes de pasar a nuevas formas orgánicas en las cuales confluyeran otras capas populares. Esto es, los socialistas no se oponían al desarrollo de los comandos pero consideraban necesario previamente implantar con mayor solidez los cordones. Es así como en la revista *Tarea Urgente*, órgano de expresión de los nuevos organismos, fundamentalmente inspirada por

¹² Ibid., n. 26.

¹³ Pastrana y Threlfall, op. cit.

los militantes socialistas del Regional Cordillera de Santiago, se decía lo siguiente:

La situación política nacional exige hoy en día más que nunca desarrollar y crear nuevas formas de poder popular, crear los cordones industriales y, una vez que éstos estén completamente estructurados y funcionando, a través de sus direcciones más elevadas, constituir los comandos comunales en tanto la más alta expresión del poder de la clase. Es así como se desarrollará un poder popular que se tornará irreversible.¹⁴

El tiempo ya no jugaba a favor de las fuerzas revolucionarias de la sociedad chilena. La experiencia fue trunca antes de que la conciencia y capacidad organizativa popular se desarrollaran plenamente.

A finales de 1970, el gobierno envió a la Contraloría un Decreto creando los consejos comunales campesinos, en los cuales debían participar los sindicatos agrícolas (tres a la fecha), los representantes de las cooperativas de las respectivas comunas (campesinos minifundarios) y los representantes de los asentados (campesinos de los predios expropiados durante el gobierno de Frei). Las atribuciones de los consejos campesinos de acuerdo al Decreto 481, cursado por la Contraloría después de algunas observaciones a principios de 1971, son meramente consultivas e informativas en materias relacionadas con la política de reforma agraria, de precios, de créditos, de comercialización, de tributación, etcétera. Sin embargo, durante el año 1971 y con mayor empuje aún durante 1972 la guerra de clases se había establecido firmemente en el campo chileno. El número de campesinos sindicalizados había pasado de cien a ciento cuarenta mil durante 1970, y a fines de 1971 alcanza los doscientos diez mil.¹⁵

¹⁴ *Tarea Urgente*, n. 13, 22 de agosto de 1973.

¹⁵ Fondo de Extensión y Educación Sindical (FEES).

Por otra parte, los campesinos no siempre tenían la paciencia necesaria para realizar ordenada y metódicamente la reforma agraria. A pesar de los organismos encargados de llevarla adelante, a fines de 1970 y durante 1971 crecen permanentemente las tomas de los predios agrícolas: 148 en 1969, 456 en 1970, y 1 278 en 1971.¹⁶ Por una parte, estas tomas obedecían al anhelo de los campesinos de expulsar a los patronos de la propiedad de los grandes fundos para obtener una mayor recompensa a su trabajo; pero en numerosas ocasiones se daba una contradicción más profunda con la Ley de Reforma Agraria, ya que ésta contemplaba una reserva para los propietarios de 80 hectáreas y la propiedad de todo el ganado, maquinarias, casas, graneros, etcétera. Los campesinos —en numerosas tomas que eran impulsadas por el MIR, primero, y posteriormente, también por el Partido Socialista y el MAPU— pretendían pasar por encima de las disposiciones que garantizaban a la poderosa mediana burguesía rural. El gobierno popular, ante la situación desatada, aceleraba la realización de la reforma agraria, evitando cuidadosamente el uso de la fuerza pública que era reclamada por los tribunales de justicia. Es debido a este violento y áspero despertar de la conciencia y organización del campesinado pobre y del proletariado agrícola que los latifundistas, carentes del tradicional apoyo que le prestaban los aparatos represivos del Estado, se organizan a lo largo de todo Chile para defender sus propiedades amenazadas. Es así como la Sociedad Nacional de Agricultura llamaba a los propietarios a “repeler en uso de la legítima defensa, cualquier ataque que, atentando contra sus personas o bienes, persiga la ocupación o toma de predios, sean propios o vecinos”.¹⁷

En estas condiciones de desplazamiento del aparato estatal, los consejos comunales campesinos (CCC) también

¹⁶ E. Klein, ICIRA.

¹⁷ *El Mercurio*, 8 de mayo de 1973.

pasaron por encima de las limitaciones de su gestación, e impulsados principalmente por los militantes socialistas, del MAPU y del MIR, se constituyeron en forma democrática con representación por la base, esto es, con base en una representación más proporcional a la composición social de la comuna. Un estudio¹⁸ señalaba que un 27% de los CCC tenían una directiva dominada por el proletariado agrícola, un 15% por los asentados; un 16%, por los pequeños propietarios, y un 42%, por una combinación de fuerzas. Esta composición cambiaría posteriormente, ya que los CCC los organizarían precisamente los campesinos sin tierra y los asentados, para hacer frente a la contraofensiva reaccionaria.

A fines de 1971, el consejo campesino de la provincia de Linares firma un llamamiento junto a los comités regionales de la UP y del MIR, documento que muestra un notable avance en los objetivos de estos organismos de poder popular y que reclama:

1] Eliminación inmediata del latifundio, 2] Expropiación de los fundos a puertas cerradas, 3] Rebajar de 80 a 40 hectáreas el límite de expropiación de los terrenos, 4] La tierra expropiada no debe ser pagada, 5] No a la reserva del patrón [...] 11] Impulsar los consejos campesinos.¹⁹

Los consejos comunales campesinos se extendieron prácticamente a todas las provincias agrícolas de Chile, pero su capacidad de decisión se daba en función de diferentes condiciones; en las zonas donde las reivindicaciones eran más fuertes, los CCC se radicalizaban y pasaban de las tareas asesoras a las ejecutivas, planificando

¹⁸ Gómez y Klein, ICIRA.

¹⁹ Semanario *El Rebelde* (órgano del MIR), n. 11, 13 de diciembre de 1971, Santiago.

las tomas de fundos y exigiendo la remoción de funcionarios de los organismos agrarios de gobierno, planes de producción agropecuaria, determinación de la política de comercialización.²⁰ Sin embargo, este nivel no era generalizado. En el campo chileno, los CCC constituían un embrión de poder efectivo que vivía un rápido proceso de solidificación y de toma de conciencia de nuevos objetivos.

Hemos intentado mostrar el grado de organización y capacidad de acción de las diferentes formas que asumió el poder popular en Chile durante el proceso revolucionario. En este plano es importante también precisar que respecto a las relaciones de este poder popular con el gobierno no existía unanimidad. El Partido Comunista, que después de la insurrección militar de junio apoyó tíbiamente su desarrollo, fue enfático para afirmar su necesaria ligazón, dependencia y complementación con el gobierno. Los otros partidos de la Unidad Popular tomaron posiciones más matizadas, pero en general ninguno pretendió oponerse mediante ese poder al gobierno. El más categórico al respecto fue el MIR, que planteaba con energía la independencia total de "toda la institucionalidad burguesa", entendiéndolo como comprendido en ésta al Poder Ejecutivo. La izquierda socialista por su parte siempre consideró al gobierno popular un apoyo indispensable para el desarrollo del proceso revolucionario y el enfrentamiento con la burguesía.

Lo cierto es que en Chile el gobierno jamás se opuso al movimiento popular. Sin embargo, las limitaciones de su encuadramiento en el sistema institucional que había creado y perfeccionado la burguesía, no le permitieron convertirse en un impulso al desarrollo de las nuevas organizaciones del poder popular. Por el contrario, es a partir del mes de junio de 1972 que se muestran las

²⁰ *Resoluciones del II Congreso de Consejos Campesinos de la provincia de Cautín.*

primeras señales de una alianza de clases que no era favorable a la iniciativa de la clase obrera, y a continuación el gabinete Prats-Millas se convierte objetivamente en un freno al desenvolvimiento de las organizaciones creadas por los trabajadores durante octubre. Posteriormente, el gabinete que tiene a su cabeza al socialista Gerardo Espinoza, ministro del Interior, declararía al asumir: "Los actos de fuerza o de violencia, de donde quiera que ellos provengan, no van a ser aceptados por el Ministerio del Interior. Tampoco vamos a permitir que las 'tomas' se transformen en una norma general."²¹

El hecho es que en Chile se habían dado una serie de características propias que lo diferenciaban netamente de otros países latinoamericanos: en primer lugar la fortaleza de las instituciones cívicas chilenas que había permitido la profundización de las conquistas democráticas sin jamás poner en peligro las bases mismas del sistema, pues tanto las diferentes capas dominantes de la burguesía como sectores importantes de la burocracia estatal encontraban en él las vías necesarias para expresar sus intereses y participar en las determinaciones de la renta nacional. Esto mismo había alejado las aspiraciones de los institutos armados que debían contentarse con el papel de guardianes del régimen, relativamente postergados. El desarrollo industrial de Chile se correspondía con la existencia de sindicatos y central de trabajadores con fuertes tradiciones de independencia. La subordinación, por otra parte, del grueso de la economía a las grandes empresas extranjeras confería, aparentemente, el carácter de reivindicación nacional a la política de rescate de las riquezas básicas. Pero todas esas características —si bien permitieron un estado democrático-burgués avanzado— no cambiaban cualitativamente las bases del sistema que continuaba siendo capitalista y, asimismo, profundamente dependiente, pues la burguesía chilena estaba sometida en los principales aspect-

²¹ *El Mercurio*, 29 de marzo de 1973.

tos al sistema capitalista mundial. En primer lugar dependía del mercado capitalista para realizar su producción de cobre, en seguida debía abastecerse de maquinaria y tecnología, en Estados Unidos particularmente, y además sus créditos y préstamos los obtenía de la misma fuente. En consecuencia, para la burguesía —fuera monopólica o no— era indispensable mantener los lazos que la unían al sistema capitalista mundial.

En noviembre de 1970, los partidos obreros llegan al centro más dinámico del sistema institucional chileno, pero, progresivamente y a medida que se intenta realizar el programa disminuye el poder económico de la burguesía y transfiriéndolo al Estado, cuya presidencia controla la Unidad Popular, los mecanismos institucionales manejados por la clase dominante a través de su control de los otros centros del Estado: Parlamento, tribunales de justicia, Contraloría, y su influencia en las FA, unidos a su capacidad económica, que siempre fue decisiva, le permitieron maniar la disponibilidad de los márgenes de acción del Poder Ejecutivo y su administración. Esto no fue reconocido oportunamente por la Unidad Popular, y en particular por el presidente Allende y el Partido Comunista que pretendieron mantener hasta el final una legalidad suicida, que frenaba el desarrollo de una nueva institucionalidad obrera frente a la institucionalidad burguesa. El gobierno rechazó y criticó la asamblea popular de Concepción: desautorizó y frenó el desarrollo de los cordones y comandos; apagó y sometió la iniciativa de los trabajadores. Debido a su origen y perspectiva, en ningún momento se puso a la vanguardia en la creación de nuevas formas orgánicas de real poder popular. Al contrario. En esas circunstancias, con base en el nivel objetivo alcanzado por el proceso, en la capacidad institucional de la burguesía, en un momento dado los trabajadores se encontraron defendiendo al gobierno, pero éste ya no era su principal base de apoyo, si bien no podían dejar de contar con él. Y se encontraron ante la alternativa de seguir dos caminos

que no eran contrapuestos pero sí divergentes: gobierno popular y poder popular.

En estas condiciones, no podemos extrañarnos de que la creatividad de los trabajadores se viera limitada por el aparato estatal y no fuera capaz, cuando la institucionalidad se había convertido claramente en una fuerza reaccionaria, de pasar por encima de ese aparato y hacer efectiva toda la potencialidad contenida en los embriones de poder alternativo. En otras palabras, cuando el régimen institucional se muestra neta y definitivamente contrapuesto a las necesidades del gobierno y del movimiento popular desde los primeros días de julio de 1973, los partidos populares, la clase obrera y sus aliados, así como el aparato estatal controlado por el Poder Ejecutivo no podrán cambiar su orientación y su táctica repentinamente, pues todo el proceso anterior había condicionado su desarrollo y limitado su acción a los moldes establecidos por la legalidad capitalista.

Las posibilidades contenidas en todas las diferentes formas de poder popular no escaparon jamás a la burguesía. Gran parte de sus campañas ideológicas estuvieron dirigidas contra los consejos campesinos, las juntas de abastecimiento y precios, los cordones, y las repetidas exigencias de nacionales y demócrata cristianos de cumplimiento de la Ley de Control de Armas. Así es como Eduardo Frei, presidente del Senado, declaraba en el mes de julio:

...se ha ordenado la ocupación de fábricas y predios rurales, se han reforzado los cordones industriales con los que se pretende cercar la ciudad, y lo que es más grave, existe la certeza de que se reparten armas y se adoptan disposiciones estratégicas y se lanzan instructivos como si Chile estuviera al borde de una guerra interior. El llamado poder popular no es el pueblo de Chile. Son grupos políticos que se autocalifican como pueblo y que pretenden someter por la fuerza a otros

trabajadores, sin titubear ante ningún medio para conseguirlo.²²

Este monumental discurso al cinismo contrarrevolucionario era expresado pocos días después del intento frustrado de golpe militar conocido como "tancazo" y dos meses antes del *putsch* del 11 de septiembre, que arrasara a sangre y fuego con el pueblo de Chile y sus organizaciones. Frei conocía el principal obstáculo que se oponía a sus proyectos de "reconstrucción nacional": el poder popular.

²² Ibid., 8 de julio de 1973.

MARZO DE 1973: LA "VIA PARLAMENTARIA" DE LA DERECHA

En las luchas por la independencia de Chile a principios del siglo XIX, un joven revolucionario, José Miguel Carrera, caudillo popular, desempeñó un papel fundamental para asegurar la libertad de su patria. A fines del año 1812 se produce un hecho significativo, de acuerdo a lo que relata el historiador Encina:

Como quiera que las principales resistencias emanaran del Congreso decidió Carrera disolverlo sin más trámites. No era difícil, por cierto, contando con la fuerza. Emplazó varios cañones frente a la sala en que sesionaban los diputados, acordonó la plaza con tres batallones y dio orden de que no se permitiera la salida a nadie. Ante tan manifiesta coacción, el presidente y diez diputados firmaron el acta de clausura y el traspaso de todos sus poderes al ejecutivo.

Durante el año 1972, en la batalla por "la segunda independencia", no se produjo en Chile nada semejante. Lo que estaba a la orden del día eran las elecciones parlamentarias de marzo. Es cierto que el Congreso se había constituido en el principal obstáculo a las transformaciones impulsadas por el Ejecutivo, pero nada estaba más lejos de las perspectivas de la UP que una acción decidida encaminada a terminar con el mismo. Todo lo más, una nueva Constitución debía permitir su modificación. Así, terminado el paro insurreccional de la burguesía con su derrota, le correspondió al gobierno transformar el triunfo popular en una semivictoria. Ante las distintas alternativas que se presentaban a fines de octubre de 1972, la solución encontrada sorprende a diversos sectores: la incorporación de los representantes de los institu-

tos castrenses al nuevo gabinete, con el objetivo declarado de asegurar "la paz social" y permitir el desarrollo democrático de las elecciones de marzo de 1973.

Durante gran parte del año 1972 se había producido una distinta acumulación de fuerzas sociales que desembocaron en los grandes enfrentamientos que conocemos; el "diálogo" con la Democracia Cristiana estaba interrumpido y no había posibilidades de reanudarlo a corto plazo; por otra parte, en ese momento el sistema de coordinación de las distintas instituciones había perdido gran parte de su flexibilidad y los organismos estatales que regulaban la marcha de la sociedad se estrellaban permanentemente en todos los puntos conflictivos. En otras palabras, el sistema institucional chileno estaba agotado.

En esas circunstancias, el presidente Allende reformula la táctica seguida hasta la fecha, y puesto que las representaciones políticas de las clases sociales no lograban una plataforma de entendimiento, se dirige a los militares para obtener el consenso que le permita desarrollar el programa de gobierno y reordenar las relaciones económicas y sociales. Este nuevo proyecto se basaba entonces en considerar que los partidos políticos, y particularmente la Democracia Cristiana, podían ser marginados de la defensa de las "clases medias", pasando éstas a integrarse directamente en una alianza dirigida por el gobierno (y no por la Unidad Popular), la cual sería asegurada por la presencia militar en las decisiones administrativas.

Es desde esa fecha que los militares aparecen como una fuerza predominante en el interior del Estado chileno y, al menos durante un periodo, jugarán el papel de árbitros en la lucha de clases que lo conmueve. Sin embargo, la dinámica de ésta, y las profundas contradicciones en la economía del país, se encargarían a corto plazo de disipar las ilusiones basadas en su participación.

El eje central del nuevo gobierno estaba constituido por el ministro del Interior, general Carlos Prats, encargado de asegurar el orden y el funcionamiento del sistema cívico

chileno, y por el ministro de economía el comunista Orlando Millas, quien debía hacer efectivo el postergado proyecto de alianza con los medianos empresarios.

La tarea correspondiente al primero fue relativamente fácil de llevar a cabo; el periodo pre-electoral comprendido entre noviembre de 1972 y los primeros días de marzo de 1973 no se caracterizó por una carga de violencia superior a la de un país como Chile en ocasiones similares anteriores. Las libertades de reunión, asociación, prensa, manifestación y propaganda se vieron plenamente aseguradas y se desarrollaron conforme a los medios que las distintas organizaciones poseían. El peso de la presencia militar se imponía.

En el plano de regulación de los intereses sociales, le correspondió al ministro comunista enviar al Congreso el proyecto de ley conocido como *Proyecto Millas* o bien como *Proyecto Prats-Millas*, con fecha 24 de enero, que pretendía redefinir las tres áreas de la propiedad en Chile. En el mismo se contemplaba el paso de 49 empresas al Area Social asegurando los derechos de los propietarios a una adecuada indemnización, incluso mediante la creación de un tribunal de apelación en el cual participarían miembros designados por los tribunales. Más importante que lo anterior, el *Proyecto Millas* planteaba la devolución de una cantidad de 123 empresas que estaban en manos de los trabajadores desde octubre, expresando textualmente:

El gobierno ha resuelto, además, apresurar la solución de los problemas suscitados en otras empresas que no corresponden al Area Social y que, por diversos asuntos y conflictos, se encuentran intervenidas o requisadas. . . Con vistas a crear las condiciones que permitan levantar a la brevedad posible tales resoluciones, se ha encargado proponer rápidamente las medidas adecuadas.¹

¹ *El Mercurio*, 25 de enero de 1973.

De esta manera, todo el inmenso avance que en el terreno de la propiedad de los medios de producción habían realizado los trabajadores al derrotar a la burguesía en octubre era anulado por una fría medida burocrática que intentaba así frenar la actividad obrera y garantizar nuevamente el interrumpido desarrollo capitalista de Chile.

Una prueba de “buena voluntad” fue inmediatamente otorgada al plantear Millas la devolución a los patrones de las industrias electrodomésticas concentradas en la ciudad de Arica. La “consolidación” del proceso constituía la tarea central del nuevo gabinete.

Pero la dinámica de la lucha de clases era mucho más difícil de detener con medidas administrativas o proyectos de ley: la efervescencia en los cordones industriales se concreta en una respuesta inmediata, y el 30 de enero miles de obreros dirigidos por socialistas, miristas y mapucistas manifiestan en las calles del centro de Santiago su repudio a la política conciliadora del nuevo gabinete, a los gritos de “Trabajadores al poder”, exigiendo que ninguna empresa fuese devuelta a los patrones.

El Partido Socialista desempeña un papel fundamental en esta movilización. Respondiendo a los intereses de las nuevas oleadas de militantes incorporados en los días de octubre, declaraba Altamirano:

Con la misma autoridad moral con que el compañero Allende tiene el deber de criticar a los trabajadores cuando no cumplen eficientemente su responsabilidad en las empresas del Area Social los obreros y campesinos tienen también derecho a criticar al gobierno cuando comete errores.²

En carta dirigida al Partido Comunista, Altamirano llega mucho más lejos en su crítica:

² *Ibid.*, 27 de enero de 1973.

La política que hubo de exponer al país el Ministro de Economía, compañero Orlando Millas, objetivamente ofrece nuevas garantías a la burguesía y a los partidos que la representan. . . El nuevo proyecto reduce, por el momento, el número de empresas monopólicas y estratégicas que se incorporan al APS y ofrece a los propietarios condiciones de indemnización y de pago mucho más favorables que el anterior[. . .] se contempla la devolución de empresas requisadas o intervenidas por problemas laborales e incluso por actos de sabotaje de sus empresarios.³

En la misma polémica abierta por esta política conciliatoria con la burguesía chilena, el presidente Allende defendió el *Proyecto Millas*, a lo cual respondió el Partido Socialista afirmando que la Comisión Política de éste “conoció los términos en que fue concebido y ellos fueron rechazados categóricamente”.

Lo sorprendente es que en esos mismos instantes en que el gobierno lleva adelante una política de claro y neto entendimiento con sectores empresariales, mantenía el orden y la “paz social” mediante el concurso de los institutos armados, frenaba los organismos populares como los cordones, en fin, se trazaba una línea de importantes retrocesos con respecto al programa y se hacían no menos importantes concesiones a la oposición y a la burguesía, el Partido Socialista permanecía como la principal organización de la Unidad Popular, y sus militantes Almeyda, Del Canto y Calderón continuaban solidarios con el resto del gabinete del cual formaban parte. La explicación de esta aparente contradicción se basa en la consecuencia y homogeneidad del gobierno y en la falta de continuidad y la heterogeneidad del Partido Socialista.

El Partido Socialista tiene un largo historial al servicio de las causas populares y el 19 de abril de 1973 celebrará

su 40 aniversario como la principal organización de los trabajadores chilenos. Pero esa historia está también marcada por la coexistencia en su seno de diversas corrientes: tendencias revolucionarias marxistas, pequeña burguesía revolucionaria, pequeña burguesía reformista y una tendencia reformista burguesa. A partir del año 1947 y de su XI Congreso, se inicia un periodo de mayor definición programática e ideológica, y la estrategia del Partido Socialista, depurado de la corriente reformista burguesa que fue expulsada, se establece sobre la base del reagrupamiento de los trabajadores y la denuncia de la clase propietaria chilena como aliada del imperialismo y enemiga de las transformaciones. Los congresos de Chillán y Linares confirman esta tendencia, proclamando en 1967:

El Partido Socialista, como organización marxista leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. . .

La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clases. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. . .

La política del Frente de Trabajadores propugna la unidad de acción del proletariado, campesinos y clases medias pobres, bajo la dirección del primero. El Frente de Trabajadores se ve reforzado por la incorporación de sectores estudiantiles y de intelectuales revolucionarios a la lucha política por el socialismo. . .

Postulamos la independencia de clases del Frente de Trabajadores, considerando que la burguesía nacional es aliada del imperialismo y de hecho es su instrumen-

³ Carlos Altamirano, op. cit.

to; por lo tanto ha terminado por ser irreversiblemente contrarrevolucionaria.⁴

Sin embargo, esta línea no había eliminado la existencia de diversas tendencias fraccionales, tanto en los niveles de cuadros medios como en la directiva superior. Por ello, a pesar de las posiciones adoptadas en sus congresos, el Partido Socialista se distinguía por su inconsecuencia con los acuerdos respectivos. En 1971 se realiza el XXIII Congreso de La Serena donde un nuevo viraje a la izquierda reafirma:

El triunfo de la Unidad Popular al acceder a una parte fundamental del Estado, abre vastas perspectivas para alcanzar el objetivo de los trabajadores de conquistar el poder e iniciar la construcción de la sociedad socialista. Pero la obtención de la Presidencia de la República en el marco de la institucionalidad burguesa no es suficiente para producir el paso automático de un gobierno burgués a un gobierno de los trabajadores;⁵

y en la víspera de las elecciones de marzo de 1973 su secretario general afirmaba:

No olvidemos que no estamos viviendo una revolución sino un proceso revolucionario. Proceso revolucionario que debemos profundizar, porque de lo contrario corremos el riesgo de quedarnos sin revolución. Y hasta podríamos quedarnos sin proceso revolucionario.⁶

El hecho es que estas declaraciones no se traducían en una praxis correspondiente. El Partido Socialista, profun-

⁴ Voto aprobado por unanimidad en el Plenario del XXII Congreso General del PS.

⁵ Voto aprobado en el XXIII Congreso General del PS en La Serena.

⁶ Carlos Altamirano, op. cit.

damente enraizado en las masas y receptivo ante sus cambiantes impulsos, no logró jamás homogeneizar su dirección y enfrentar la política del presidente Allende y del Partido Comunista salvo en contadas ocasiones. Así podemos explicarnos que en las principales coyunturas se producía una mayoría en el interior de la dirección de la Unidad Popular y del gobierno que era profundamente discordante con los planteamientos oficiales del Partido Socialista, pues sus propios sectores pequeño-burgueses, tecnócratas y reformistas, se aliaban indefectiblemente con las tendencias, orientaciones y tácticas que compartían con otras fuerzas en el exterior de su partido.

El gobierno, por su parte, era suficientemente coherente bajo la dirección del presidente, y la existencia en su seno de militantes socialistas —designados por Allende y no por el partido— no constituía ningún obstáculo. Ante el violento enfrentamiento de octubre que amenazaba tirar por la borda el desarrollo de la vía política, el gobierno opta por frenar la lucha de clases llevando hasta sus últimas consecuencias un proyecto de alianza social. Así, la derrota de la burguesía es aminorada y los militares pueden participar en un gabinete que profundiza las libertades democráticas burguesas manteniendo todos los derechos e instituciones inherentes al sistema capitalista. Y enviando al Congreso un proyecto de ley que disminuye el alcance del APS y determina las reglas del juego futuras, mediante las cuales los trabajadores quedaban desarmados institucionalmente y sin expectativas de avances significativos. El Partido Socialista, en este trance, protesta pero acata, como resultado de las relaciones de fuerza de las distintas tendencias existentes en el interior de su comité central, que favorecían la corriente que propugnaba, en lo fundamental, seguir la línea del Partido Comunista.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria visualizaba correctamente los peligros que presentaba el devenir con-

creto de esa política. El 15 de marzo de 1973 afirmaba Miguel Enríquez, secretario general: "Desde hace algunos meses han estado impulsando en conjunto una política que en su contenido general tiende a consolidar la paz social y el orden burgués." Pese al diagnóstico acertado, el MIR no tenía capacidad para influir en la lucha cotidiana, su influencia en la clase obrera era extremadamente reducida y en el conjunto de los trabajadores no era mucho mayor.

El MIR es fundado en el local de los obreros del cuero y el calzado, en agosto de 1965, como resultado de la confluencia de diversos sectores. Su primer secretario general, el doctor Enrique Sepúlveda, intenta determinar el desarrollo del vigoroso movimiento mezclando el impulso de la revolución cubana con una proletarianización de su militancia. El resultado es distinto y, para el 2o. Congreso del MIR, triunfan ampliamente las corrientes foquistas inspiradas en la acción del Che Guevara, y sostenidas por una base estudiantil. A partir de esa fecha, diciembre de 1967, el MIR buscará afanosamente su militarización bajo la conducción de Miguel Enríquez, con el resultado de una carencia casi completa de enraizamiento en la clase obrera. En 1970 son prácticamente sorprendidos por el triunfo de Salvador Allende y para los sucesos de octubre de 1972 juegan un papel sumamente limitado. La voluntad, el heroísmo y la lucidez eran absolutamente insuficientes. Ninguna revolución se puede impulsar al margen de las masas y el MIR, como resultado de su concepción de organización política elitista, jamás logró una influencia significativa en el seno del movimiento obrero.

El Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) constituía también una fuerza pequeña aunque sumamente activa. Desgarrado en su interior por dos corrientes contradictorias que lo neutralizan: una que forma parte de la izquierda revolucionaria y otra que posteriormente asumirá posiciones de carácter reformista burgués, estallará en estas dos fracciones en los primeros días de marzo

de 1973, debilitándose aún más su escasa capacidad de acción. El MAPU intentará convertirse en la izquierda consecuente de la Unidad Popular, creando tácticas y políticas de valor, pero impedido de influir en el curso de los acontecimientos.

El Partido Comunista, por el contrario, gozará de una gran homogeneidad al mismo tiempo que de una poderosa influencia en el movimiento obrero y popular. Con una tradición de cincuenta años de antigüedad, es notable la continuidad de sus líneas estratégicas así como de sus niveles de dirección. La línea del Frente Popular es diseñada y llevada a la práctica el año 1938, en que asume la presidencia un representante de la "burguesía nacional", con el apoyo del PC. Posteriormente, será otro miembro del Partido Radical, el presidente Gabriel González, el que desatará la represión sobre el Partido Comunista el año 1948, cerrando así un ciclo de colaboración a nivel gubernamental. Posteriormente el PC desarrolla la estrategia del Frente de Liberación Nacional, que contemplaba la participación de la "burguesía no sometida al imperialismo" en una alianza con los trabajadores para impulsar las fuerzas productivas y transformar la economía del país. Será básicamente la política que intentarán aplicar durante el gobierno de la Unidad Popular. Su directiva no es menos estable que su política y su secretario general en 1973, Luis Corvalán, lo era desde el año 1958. Asimismo, su concepción del traspaso del poder de una clase social, la burguesía, a una nueva alianza en la cual el proletariado debería ser determinante era fundamentalmente gradualista y evolutiva, planteándose no solamente la posibilidad de conquistar el poder por una "vía no armada" sino la factibilidad de alcanzar este objetivo paso a paso: primero el Ejecutivo, luego una mayoría parlamentaria, el poder económico, a continuación la transformación del Poder Judicial, hasta llegar a una sociedad socialista y pluralista. En el curso del proceso esta concepción no fue modificada y se integraba

plenamente en las posiciones propugnadas por Allende, más elaboradas y definidas.

El nuevo periodo iniciado con el gabinete Prats-Millas respondía al profundo escepticismo de los sectores determinantes de la UP, en la posibilidad de transformar las estructuras del Estado con la energía y voluntad de los trabajadores y al margen de la institucionalidad vigente. En consecuencia, consideraban que no existiría antagonismo entre el gobierno popular y las fuerzas coercitivas del Estado, en la medida que no se hirieran los valores de la pequeña y mediana burguesía propietaria. El proceso chileno debía, por lo tanto, afectar solamente los intereses del imperialismo y de la gran burguesía monopólica. El nuevo gabinete, la participación de las fuerzas armadas y el proyecto Millas sobre las tres áreas de la economía, obedecían precisamente a estos objetivos.

Sin embargo, simultáneamente con el crecimiento de las luchas sociales y su expresión política, el país se había desviado de la senda económica tradicional. Entendamos bien que no se había producido un cambio cualitativo; pese al enorme avance del área estatal y la consiguiente pérdida de poder de la burguesía, ésta aún desempeñaba el papel determinante y las reglas de oferta y demanda del mercado capitalista estaban plenamente vigentes. En efecto, durante los días de octubre hemos constatado que la burguesía controlaba la mayor parte de la economía chilena. El gobierno popular había procedido a una real redistribución del ingreso nacional y el APS comprendía una parte importante de la producción y los servicios. Sin embargo, el gobierno estaba lejos de controlarlos y además era particularmente débil en el terreno de las importaciones y la distribución. Por convicción y por necesidad de responder a los vastos sectores populares que constituían su base social, la política del gobierno tendía a aumentar primero, y a mantener después, el poder adquisitivo de los asalariados. En esta situación se había producido una escasez de numerosos artículos, en parte

por insuficiencia de la producción, pero también, desde fines de 1972, por desviación de importantes capitales de todos los estratos propietarios al acaparamiento y la especulación. El aumento de las inversiones en la producción no se realizaba, tanto por interés material como por decisión política, y la concentración de los capitales se realizaba en torno a la distribución.

La agresión económica del imperialismo jugaba un papel no despreciable. El 5 de diciembre de 1972 denunciaba Salvador Allende en las Naciones Unidas:

En el transcurso de los últimos doce meses el descenso de los precios internacionales del cobre ha significado al país, cuyas exportaciones alcanzan a poco más de mil millones de dólares, la pérdida de ingresos de aproximadamente 200 millones de dólares.⁷

Además, Allende señalaba que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Internacional para el Desarrollo habían suspendido créditos tradicionales por un total aproximado de 130 millones de dólares. Asimismo, la línea de crédito a corto plazo de la banca privada norteamericana había sido suspendida por un valor de 220 millones. Más aún, diversos organismos, como el Eximbank, exigían el pago anticipado de compromisos adquiridos por el gobierno anterior. Toda esta situación incidía dramáticamente en la balanza de pagos de Chile, cuya economía se mantenía profundamente dependiente del sistema capitalista mundial. Un esfuerzo por aumentar su margen de acción en este sentido es intentado por Allende durante su visita, también en 1972, a la Unión Soviética. Los resultados no fueron los esperados. En declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Almeyda, se constataba lo siguiente:

⁷ *El Mercurio*, 6 de diciembre de 1972.

Se consiguió que la Unión Soviética se comprometiera a contribuir al abastecimiento de nuestro país [...] por un volumen cercano a los 30 millones de dólares. La URSS aceptó obtener la consolidación o postergación correspondiente a las líneas de créditos de moneda convertible y en divisas que se obtuvieron el año pasado y que alcanzan a 103 millones de dólares.

Almeyda también declaró que la mayoría de los créditos disponibles soviéticos fueron suscritos durante el periodo Frei.⁸ El hecho es que estos aportes de la URSS a la balanza de pagos de Chile durante el gobierno popular eran absolutamente insuficientes, no ya para romper la dependencia del país de los centros del sistema capitalista mundial, sino incluso para mantener la dañada economía a flote. Ciertamente, no existían compromisos previos por parte de la Unión Soviética, solamente reflejaba una opción política y el grado de confianza que a ésta le inspiraba la conducción de la Unidad Popular.

Pese a todo, la fuerzas productivas no estaban destruidas. Al contrario. Durante el año 1972, declara Vuskovic, "las empresas que están en el Area de Producción Social han aumentado su producción en un 15%". Esto era confirmado por un cuadro que entregaba la Sociedad de Fomento Fabril, la asociación patronal de la burguesía industrial chilena, en el cual se señalaba la variación porcentual de la producción y ventas del producto industrial durante los primeros once meses de 1972, con respecto a igual periodo de 1971 durante el cual, no olvidemos, se había obtenido ya un aumento sumamente significativo.

En otras palabras, el desquiciamiento de la economía, la inflación que alcanzó el 163.4% durante 1972, el acaparamiento y la especulación eran el resultado del enfrentamiento de clases, de la presión de las masas

⁸ Ibid., 21 de diciembre de 1972.

	<i>Producción</i>	<i>Ventas</i>
Bienes de consumo habitual	+ 0.5	+ 0.7
Bienes de consumo durable	- 5.8	- 6.0
Materiales de transporte	+ 20.6	+ 1.8
Productos intermedios para la industria	+ 4.8	+ 6.0
Bienes intermedios para la construcción	+ 9.3	+ 5.2
Artículos manufacturados diversos	+ 14.8	+ 13.4
Total industria ⁹	+ 4.0	+ 3.5

populares por obtener un mejoramiento inmediato de sus niveles de vida, de la redistribución del ingreso que era en gran medida determinada por el gobierno, favoreciendo a los trabajadores, y por supuesto, también el resultado de la respuesta de la burguesía en defensa de sus intereses y en una perspectiva de agudizar la crisis política, todo lo cual se traducía en el acaparamiento, en la especulación y en el mercado negro. La economía no está destruida: los trabajadores aumentaban la producción; las ineficiencias de las empresas administradas por el Estado tenían una magnitud limitada. La explicación de fondo, real, de la dislocación de los diferentes procesos de producción e intercambio era la lucha de clases que había sido trasladada en una importante medida a este terreno.

El Estado chileno, a través de la Dirección de Industria y Comercio, regulaba tradicionalmente los intereses de diversos sectores, tanto entre distintos estratos de la burguesía como en sus relaciones económicas con el resto de la población, mediante la fijación de precios de los "artículos de primera necesidad". En esta forma, el Ejecutivo disponía de una poderosa herramienta para

⁹ Ibid., 27 de enero de 1973.

determinar la distribución del ingreso. El gobierno había favorecido las expectativas de los trabajadores al fijar precios de una gran cantidad de productos de consumo habitual, alimentos, vestuario, semidurables, que permitieron su adquisición por nuevas capas de la población asalariada. Ante esta situación, los empresarios exigían como una de sus reivindicaciones fundamentales, "la libertad de precios para poner término al mercado negro", que era defendida casi sin matices, tanto por *El Mercurio* como por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana.

La distribución se realizaba a fines de 1972, como durante todo el resto del periodo del gobierno popular, a través de tres canales: el mecanismo tradicional del comercio establecido, el mercado negro y la distribución directa.

Con el objeto de luchar contra el mercado negro, que en gran parte se realizaba en su última etapa a través de los establecimientos de la mediana y pequeña burguesía comercial, el gobierno había impulsado la constitución de las juntas de abastecimiento y precios (JAP), como ligas de consumidores, que finalmente fueron creadas legalmente por resolución del 3 de febrero de 1972. Sin embargo, como lo señalaba el ministro del Interior a principios de 1973, "...la Contraloría cursó la resolución señalando que las atribuciones que competen a las JAP tienen un carácter meramente asesor y cooperador a la función pública... y por ende, carecen de toda facultad ejecutiva o decisoria". Pese a lo anterior, y al recordatorio del general Prats, las JAP se convirtieron en un formidable instrumento de los trabajadores en todas las ciudades del país para combatir el acaparamiento y la especulación. Fueron principalmente las mujeres, directamente afectadas por el problema del abastecimiento, las que se organizaban en todos los barrios y poblaciones para obligar a los comerciantes no solamente a vender los productos que recibían, sino también a hacerlo a los precios oficiales, como lo "denunciaba" una declaración del organismo que agrupaba a los comerciantes, SIDEKO:

Al momento de ser obligados violentamente a salir de sus casas, cada comerciante tenía frente a su negocio una "cola" formada por personas traídas por los mismos miembros de las JAP... procedía a vender los productos existentes a los precios que ellos fijaban, entregando al comerciante una suma de dinero que ni ellos mismos sabían a qué correspondía... la gestión de estas JAP no terminó hasta haber agotado todos los productos que se tenían para una venta normal.¹⁰

A pesar de estos inconvenientes, a principios de enero la burguesía inicia una desenfadada campaña de acaparamiento, con el objeto de aumentar el desabastecimiento y facilitar así su éxito en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973.

Ante las insuficiencias de los mecanismos estatales, el gobierno crea, con fecha 10 de enero, la secretaría Nacional de Distribución que pretende ordenar y regular la distribución mayorista y minorista, estableciendo:

Sobre la base de una cuota de productos necesarios por familia... de alrededor de 30 productos, las organizaciones del pueblo a nivel local (JAP, comandos comunales) en las que participan los comerciantes, programarán las necesidades periódicas de productos esenciales y determinarán las responsabilidades que en su comercialización cabe a cada local comercial.¹¹

Además, se establecía que toda la producción del APS pasaría a las distribuidoras estatales; se impulsaba también la canalización de la producción agrícola del sector reformado a través del Estado, y se planteaba la distribución directa, sin pasar por los comerciantes, a los estratos de menores ingresos de la población, esto es, a las poblaciones y campamentos.

¹⁰ Ibid., 5 de enero de 1973.

¹¹ Ibid., 11 de enero de 1973.

El golpe daba en el blanco. La reacción de la derecha alcanzó niveles de histerismo ante una situación que se le escapaba de las manos. *El Mercurio* del 11 de enero acusaba "Racionamiento arrasa garantías democráticas" y, en un artículo de primera plana titulado "El umbral de la dictadura", planteaba que las libertades de opinión, de expresión, de reunión y la inviolabilidad del domicilio quedaban amenazadas, en tanto que "el derecho de propiedad sobre los establecimientos comerciales y sobre las mercaderías en poder de comerciantes o de particulares pasa a ser letra muerta con la entrada a saco de las JAP en la distribución de mercaderías". Efectivamente, el vocero de la burguesía defendía el derecho a la propiedad privada, al acaparamiento, a la especulación, en una palabra, a la cuota de ganancia más alta que se podía obtener en Chile en esa fecha, aunque fuera pasando por encima de las necesidades esenciales de la población, y ofreciendo como única alternativa la amarga libertad de precios.

Pese a vacilaciones y retrocesos en su cumplimiento, las medidas tomadas produjeron un impulso importante a la difusión a través de todo el país de las JAP, que combatieron con energía y con resultados positivos la acción de los acaparadores. En definitiva, la batalla de la distribución no sería jamás resuelta; posteriormente las distribuidoras estatales pasarán a ser dirigidas por militares que darán mayores garantías a los comerciantes, pero la acción de las JAP equilibrará la balanza. En todo caso, el resultado de las elecciones de marzo no será ajeno a esta iniciativa.

En efecto, desde la constitución, a principios de noviembre del nuevo gabinete que pretendía establecer un respiro en la intensa lucha de clases que vivía el país, la atención de los partidos de la Unidad Popular y de la oposición estaba centrada en el resultado de los comicios de marzo de 1973. El gobierno popular, coherente dentro de su estrategia predominante, debía buscar su fortaleci-

miento dentro de los marcos de la Constitución vigente y, por tanto, pretendía a través de las elecciones de marzo encontrar el respaldo de una sustentación de fuerza que le permitiera restablecer en mejores condiciones el "diálogo" con la Democracia Cristiana.

La oposición por su parte había elaborado distintas vías para impedir el desarrollo del proceso revolucionario, vías que correspondían tanto a los intereses precisos de fracciones de la burguesía como a etapas diferenciadas de acumulación de fuerzas durante el transcurso de ese proceso, superponiéndose y combinándose en distintas ocasiones. Las diferentes opciones de la reacción fueron las siguientes:

1] El golpe militar, con apoyo de la CIA, intentado por el general en retiro Viaux en octubre de 1970, fracasado por la existencia del sector "constitucionalista" de las fuerzas armadas y por la presencia vigilante del movimiento popular.

2] El intento de nombrar presidente al candidato Alessandri, que había obtenido la segunda mayoría relativa, en octubre de 1970, con el objeto de abrir camino a una nueva elección en la cual todos los componentes de la burguesía se habrían presentado coaligados. Este proyecto no tiene éxito por el rechazo de un sector minoritario pero importante de la Democracia Cristiana. Precisemos también que en esa fecha una salida semejante habría significado violentos enfrentamientos que la clase dirigente esperaba evitar.

3] La integración del gobierno popular y del proceso al carácter reformista-populista, que impidiera el desarrollo de una conciencia y organización revolucionarias. Esto fue frustrado parcialmente por las convicciones del presidente Allende y por la radicalización de los trabajadores, que se expresaba principalmente en el Partido Socialista. Este proyecto se llevó a cabo durante los primeros meses de 1971, orientado por la Democracia Cristiana.

4] Derribar o someter al gobierno mediante la insurrec-

ción burguesa de "masas", que fue intentada por todas las fuerzas de la reacción, ya reunificadas, en octubre de 1972. Esta vía fue derrotada esencialmente por la acción de los trabajadores y en parte determinada por la neutralidad de las fuerzas armadas, que en esa coyuntura no podían actuar de otra manera.

5] La destitución del presidente por el Parlamento, para lo cual constitucionalmente precisaban los dos tercios de los congresistas. Opción planteada para las elecciones de marzo de 1973 y derrotada por la respuesta abrumadora que dieron los trabajadores de apoyo electoral a la Unidad Popular. Proyecto de toda la oposición.

6] Forzar la renuncia de Allende o el llamado a plebiscito, que abría el camino a su remplazo, propuesto durante los últimos meses primordialmente por la Democracia Cristiana. Su fracaso se debió a la resolución de Allende, si bien en septiembre de 1973, el mismo día del golpe militar, éste tenía preparado un discurso para anunciar la realización del plebiscito.

7] El "golpe blanco" consistente en la formación de un gabinete enteramente militar del cual Allende habría sido un prisionero "constitucional". Este proyecto, de inspiración demócrata cristiana, habría significado el aplastamiento del movimiento popular y fue resistido por el presidente Allende, plenamente consciente de su significado. Fue propuesto por la DC en los últimos días del gobierno.

8] El golpe de Estado militar, planteado inicialmente por los "gremios patronales" y por Patria y Libertad, posteriormente impulsado por el Partido Nacional inmediatamente después de las elecciones de marzo de 1973 y finalmente apoyado por la Democracia Cristiana, tendrá éxito en septiembre de 1973.

9] La guerra civil, considerada como alternativa por las organizaciones señaladas anteriormente, no se concretó debido a la debilidad del movimiento popular para resistir el golpe de Estado, así como al desarrollo predominante

de los conspiradores en las fuerzas armadas durante los últimos meses del gobierno.

En marzo de 1973, la derecha unificada pretende llevar adelante su proyecto "parlamentario" de reconquista del Poder Ejecutivo para lo cual debía obtener el 67% de la votación y los dos tercios del número de parlamentarios. Con un matiz diferente, la Democracia Cristiana participaba del mismo proyecto, si bien como óptima posibilidad e insistiendo en que las elecciones debían ser consideradas como un plebiscito ante el cual debía inclinarse la voluntad del gobierno.

Para comprender las aparentes vacilaciones e inconsecuencias de la Democracia Cristiana es indispensable recordar que durante toda su trayectoria ésta trató de erigirse en una alternativa frente al capitalismo y al socialismo a través de una vaga filosofía comunitaria y socialcristiana. Durante su mandato Frei pretendió modernizar el sistema de relaciones económicas, con lo cual entró en contradicciones secundarias con los estratos empresariales más antiguos y los restos de la oligarquía agraria. Asimismo, en la masa simpatizante demócrata cristiana existían amplios sectores populares que, distorsionadamente, también se hacían sentir en sus rangos directivos. Sin embargo, Frei mantuvo siempre su liderazgo desde el año 1958 en que solicita el apoyo del Partido Liberal a su candidatura presidencial.

Así, más allá de las diferentes opciones que acoge en determinadas coyunturas, la Democracia Cristiana se caracteriza como defensora del sistema capitalista a través de toda su historia, a lo cual no es ajena la intervención del imperialismo que la ha privilegiado con sus relaciones en repetidas ocasiones. Sin embargo, la DC no estaba fundamentalmente interesada en la destrucción del aparato estatal; por el contrario, su ambición era controlarlo. Asimismo, no se sentía demasiado afectada por la pérdida de poder de algunos sectores burgueses retardatarios, en la medida que los intereses de la mediana y gran burguesía modernas se fortalecieran.

Pese a lo anterior, hemos observado que en todas las ocasiones en que el gobierno y el Partido Comunista se proponían un entendimiento duradero con la DC, sobre la base de una política que contemplaba en gran parte los presupuestos de esta última, no solamente no lograban llegar a acuerdos sino que se interrumpían las conversaciones y la Democracia Cristiana se acercaba al Partido Nacional para llevar adelante con mayor dureza la oposición.

El hecho es que la DC desconfiaba profundamente, no de las intenciones de sus interlocutores, pero sí de su capacidad para frenar el proceso, impedir la radicalización del movimiento popular golpeando a la extrema izquierda, y “consolidar” la situación. En las palabras de Renán Fuentealba, presidente de la DC y dirigente de su ala “progresista”:

El Partido Demócrata Cristiano llama a los chilenos a tomar plena conciencia de lo que significa la amenaza antidemocrática representada por un gobierno incapaz de controlar los procesos económicos y sociales, pero al mismo tiempo ansioso de conservar todo su poder actual y de acrecentarlo en forma desmedida.¹²

Esto es, si bien la DC reprochaba ciertamente al gobierno la profundidad de su política en diferentes planos, y algunos de sus sectores se manifestaban dispuestos a todo para retornar a la situación anterior al 4 de noviembre de 1970, el grueso de la misma planteaba principalmente la necesidad de frenar la capacidad de iniciativa de los trabajadores; borrar los gérmenes de “poder popular”, las JAP, los cordones industriales, los comandos comunales, a través de sus repetidas exigencias de desarmar los “ejércitos paralelos”; cambiar las formas de participación de los trabajadores en el APS; retornar a

¹² Ibid., 12 de abril de 1973.

una economía “normal” mediante la libertad de precios y la suspensión de las estatizaciones; sujeción del gobierno al Parlamento donde el componente determinante sería la propia DC. En una palabra, exigía del gobierno popular que “controlara” los procesos económicos y sociales, que hiciera desaparecer el espectro de la revolución.

Allende no estaba dispuesto a pagar un precio tan alto. Su política era la de dar dos pasos adelante y uno atrás. Incluso en muchas ocasiones llegó a dar un paso adelante y dos atrás, pero jamás aceptó encerrar al movimiento popular en el anillo de hierro que pretendía la DC. Su concepción del acceso al poder y las transformaciones emprendidas subordinaba el apoyo de la clase obrera y los trabajadores a una política paternalista e incluso limitaba su capacidad de iniciativa, pero jamás se orientaba contra ella. Allende pretendía dirigir el movimiento popular de acuerdo a sus concepciones, pero sus convicciones y trayectoria le impedían absolutamente ponerse en contra del mismo y llevar adelante una política de gobierno en tal sentido. Y eso era precisamente lo que exigía la Democracia Cristiana para llegar a un acuerdo, desde mediados del año 1972, cuando lúcidamente consideraba que el proceso revolucionario contenía una potencialidad que sobrepasaba la táctica que pretendía implementar el Partido Comunista.

La Democracia Cristiana intenta obtener en marzo de 1973 un apoyo de tal envergadura que le permita desarrollar su política al interior del sistema institucional, enfrentar al gobierno con el respaldo de una votación fuertemente mayoritaria, e incluso con los dos tercios que le permitan deponer constitucionalmente al presidente Allende.

En esa misma fecha, otros sectores de la burguesía, se preparaban para entrar en una fase diferente. El 22 de febrero, Thieme, dirigente del fascitizante movimiento Patria y Libertad, con amplias vinculaciones entre los grandes empresarios y fuerte influencia en el Partido Nacional, declaraba:

El sistema democrático liberal muere para nosotros el 4 de marzo. O sea, hay un plebiscito, hay mucha gente que se va a defraudar y que va a decir que aquí ya no hay solución. Pero nosotros vemos que no hay solución política, nosotros sabemos que la solución no se va a dar por los cauces tradicionales de los partidos políticos. Se va a dar por los cauces de las fuerzas armadas, de los hombres de trabajo.¹³

Las dos vías marchaban por diferentes planos. Finalmente, la Democracia Cristiana quedaría excluida del juego el 11 de septiembre de 1973. La lucha de clases habrá destruido al sistema institucional chileno, aunque no al Estado capitalista.

El terreno electoral no ha sido jamás el más adecuado para las fuerzas que pretenden transformar la sociedad. La ideología siempre marcha atrasada con respecto a las cambiantes relaciones materiales y por tanto constituye una superestructura que actúa en defensa del régimen establecido. Lo nuevo, lo desconocido es siempre temido. Lo presente, aunque no corresponda a las aspiraciones del individuo, constituye lo real. Por otra parte, todas las fuerzas materiales actúan en favor del mantenimiento del sistema y los medios de comunicación juegan un importante papel. "Los obreros no tienen otra cosa que perder que sus cadenas...", pero numerosas capas populares, obreros calificados, pequeños campesinos, pequeños comerciantes, artesanos temen por sus insignificantes intereses, incluso muchos temen por el insignificante "prestigio social" que poseen frente a otros sectores más explotados.

En septiembre de 1970, la Unidad Popular obtiene el 36.3% de la votación. En abril de 1971, en la euforia producida por las primeras medidas, con la burguesía dividida y desorientada, la Unidad Popular alcanza el 50.5%. En marzo de 1973, con el Congreso, los tribunales

¹³ Revista *Chile Hoy*, n. 39.

de justicia, la Contraloría oponiéndose con encarnizamiento a todas las medidas del Ejecutivo, incluso impidiendo legislar sobre los reajustes de remuneraciones, con el acaparamiento y la especulación llevados a los niveles de la Europa de posguerra, con la oposición unida en torno a una sola política central, con todo el poder de la gran burguesía que había logrado arrastrar a la totalidad de los medianos propietarios y a gran parte de la pequeña burguesía propietaria, en resumen: con la totalidad de las fuerzas tradicionalmente dominantes empeñadas en una encarnizada batalla en su contra, los partidos de la Unidad Popular obtienen el 43.4% de la votación con un millón seiscientos mil sufragios.

El resultado no solamente sorprendió a la oposición, sino también a los dirigentes de los partidos de izquierda. La respuesta de los trabajadores demostraba nuevamente las inmensas potencialidades de un pueblo dispuesto a abrirse paso por la senda de las transformaciones socialistas, a pesar de todos los obstáculos y sacrificios que significaba ese compromiso. El gobierno popular había obtenido el porcentaje de votos más alto que gobierno constitucional alguno hubiese logrado hasta la fecha en Chile después de 26 meses de ejercicio.

Sin embargo, este triunfo no tenía posibilidades de materializarse dentro del esquema institucional seguido por la UP y el gobierno. En efecto, la composición relativa de parlamentarios dentro del Congreso no cambiaba: con un 54.5% la oposición conservaba su mayoría y, por lo tanto, podía continuar sin ninguna dificultad adicional la obstrucción sistemática que realizaba hasta entonces. Por supuesto, el resultado electoral modificaba mucho menos las relaciones de fuerza con los otros organismos del Estado: Poder Judicial, Contraloría, fuerzas armadas.

El hecho es que la clase obrera no se encontraba aislada, junto a ella se alineaban amplias masas de campesinos, de pobladores, de empleados de la administración pública y de empresas privadas, de artesanos, y en menor

medida de otras capas de la población, pero este peso social no se traducía efectivamente en las instituciones estatales. El gobierno, además, debía considerar la división en dos grandes líneas del espectro político que constituía su base de sustentación. En tanto la izquierda revolucionaria consideró este triunfo como el mejor impulso y demostración de la posibilidad de “avanzar sin transar” y desarrollar los nacientes organismos de “poder popular”, el sector partidario de la “vía institucional” esperó que lo sólido del apoyo electoral expresado por el pueblo pudiese finalmente conducir a buen término las conversaciones con la DC y establecer un largo periodo de consolidación de las transformaciones realizadas dentro del marco constitucional. En consecuencia, el sector predominante dentro de la UP y el gobierno no tenía otra alternativa que reiterar el tantas veces intentado esquema de alianza con las “clases medias”. Los triunfos electorales son tales cuando se tiene la posibilidad de ponerlos en práctica, cuando se tiene detrás la fuerza de coacción necesaria, o cuando la oposición que inspiran no es predominante dentro de la sociedad. El “triunfo electoral” del 4 de marzo de 1973 de la UP dentro del sistema democrático burgués no tenía otro significado que revelar el inmenso apoyo popular de que disponía. Y eso lo hacía aún más peligroso.

La oposición se sorprendió durante un cortísimo periodo. Pero no perdió la serenidad en ningún instante. Dentro de ella crecieron en influencia, inmediatamente, los sectores que habían planteado un camino diferente al “proyecto parlamentario”. Y disponían de la enorme ventaja de la iniciativa que les entregaba el gobierno. Y mantenían absolutamente incólumes todos los mecanismos de poder que habían utilizado hasta entonces. Dado que la deposición constitucional del presidente estaba fuera de su alcance, pasaron a desarrollar las otras alternativas.

Una vez más el gobierno popular no utilizaba las posibilidades que le entregaban la conciencia y energía de los trabajadores. La burguesía sabía aprovechar esta debilidad.

Cuadros de la evolución electoral de Chile

Cuadro I

	1969	1970	1971	1973
Unidad Popular	889 490 36.9%	1 011 209 36.3%	1 431 357 50.5%	1 589 025 43.4%
Democracia Cristiana	716 547 29.8%	774 424 27.8%	723 623 25.6%	1 049 007 29.1%
Partido Nacional y Derecha Radical	582 130 24.2%	972 209 34.9%	619 861 22.0%	915 360 25.4%

(Nota: Hemos dividido la votación del año 1969 recibida por el Partido Radical en esa fecha, en los porcentajes que se establecieron en el año 1971 entre Partido Radical y Derecha Radical, para repartirlos en esa proporción entre Unidad Popular y Partido Nacional.)

Cuadro 2

	1967	1969	1971	1973
Partido Comunista	346 105 14.8%	383 049 15.9%	479 206 17.0%	584 303 16.2%
Partido Socialista	324 965 13.9%	294 448 12.2%	631 939 22.4%	672 200 18.7%
Partido Radical	377 074 16.1%	313 559 13.0%	225 851 8.0%	134 008 3.7%
Democracia Cristiana	834 810 35.6%	716 547 29.8%	723 623 25.6%	1 049 007 29.1%
Partido Nacional	334 656 14.3%	480 523 20.0%	511 669 18.1%	767 663 21.3%
Derecha Radical	En este periodo, sus votos están incluidos en la columna del Partido Radical.		108 192 3.8%	147 697 4.1%

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO CAPITALISTA

El Estado es el conjunto de leyes, instituciones y poderes que regulan la marcha de una sociedad en un determinado contexto histórico. En el programa de gobierno de la Unidad Popular se afirmaba:

Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por los sectores de la burguesía que están ligados estructuralmente al capital extranjero y que no pueden resolver los problemas fundamentales del país puesto que éstos se desprenden precisamente de sus propios privilegios de clase a los cuales no renunciarán jamás voluntariamente.

En consecuencia, el año 1970 el Estado chileno era la expresión superestructural de reglamentación de la marcha de una sociedad capitalista, dominada por la burguesía. Ahora bien, esa hegemonía significa que las leyes e instituciones de Chile estaban elaboradas precisamente para someter la resistencia de las clases explotadas, para fundamentar y afirmar el poder económico, social, y político de la clase dominante; esto es, el Estado estaba organizado en función de intereses de clase.

A lo anterior debemos agregar que el Estado no consistía en la simple suma aritmética de las diversas instituciones y poderes que lo componen, sino en el todo coherente y complementario de las mismas, que en su conjunto expresaban un valor superior y perfeccionado del sistema capitalista imperante.

Las instituciones del Estado chileno se basaban en la Constitución del año 1925, que estableció una profunda interdependencia entre los tres poderes clásicos de las democracias capitalistas —poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial— en función de la cual se expresaban en el interior del Estado las diversas capas de la burguesía financiera, industrial, agraria y comercial, obligando precisamente por la estrecha ligazón que establecía entre los distintos poderes, a buscar permanentemente la convergencia de los diferentes intereses de las fracciones propietarias. Esto es, el año 1925 la burguesía chilena se dio un mecanismo de gobierno lo bastante dúctil y elástico para permitir que la resolución de la conducción del país no pusiese jamás en peligro los intereses fundamentales, de ninguno de los estratos capitalistas pese a sus permanentes fricciones.

El Estado chileno en 1970 era una compleja máquina constituida por diversos elementos que, como resultado del funcionamiento armonioso y complementario de todos ellos, dirigía y organizaba la sociedad en beneficio de la clase dirigente explotando a obreros y otros sectores de clase que carecían de propiedad, a través de una “democracia representativa” que permitía elegir por sufragio universal y secreto al presidente de la República así como a los parlamentarios. A las instancias nombradas debemos agregar, como piezas fundamentales de la máquina estatal por las atribuciones y funciones que cumplen, la Contraloría general y las fuerzas armadas.

Es preciso indicar que la temprana industrialización relativa de Chile produjo un grado importante de conciencia y organización de los trabajadores, que con sus luchas fueron arrebatando diversas conquistas de carácter democrático las cuales, si bien jamás alteraron o pusieron en peligro el sistema social imperante, permitieron el desarrollo —desde el año 1933 en adelante— de expresiones populares de defensa de sus intereses más inmediatos a través de su participación en instituciones estatales.

En efecto, éstas no eran organismos estáticos, aislados de la sociedad, sino justamente al contrario: expresaban con deformaciones, retrasos y saltos, las distintas etapas del conflicto de clases en Chile.

Además, es preciso señalar que debido justamente a la

solidez del aparato estatal y a la capacidad de los distintos estratos propietarios para encontrar políticas de acuerdo y convergencia, así como para dirigir el país y dominar el conjunto de la sociedad, estos sectores hegemónicos no precisaron, desde 1933, de la presencia de las fuerzas armadas sino en ocasiones coyunturales, lo que hizo que éstas no desempeñaran un papel dominante durante un largo periodo, a diferencia del resto de América Latina; de ahí nace el mito de la prescindencia y profesionalismo de los aparatos armados chilenos.

Las instituciones del Estado capitalista no eran ajenas al desarrollo de la sociedad con todas sus contradicciones, pero cuatro décadas de evolución “pacífica” habían creado una imagen de perfeccionamiento que alimentó en vastos sectores populares la ilusión de su transformación al servicio de cambios revolucionarios como continuación ininterrumpida de esa misma evolución. Dirigentes y partidos que pretendían representar una concepción socialista y científica de la sociedad chilena, postularon avanzar gradualmente para trasladar el poder económico, social y político de la clase burguesa a una alianza donde el proletariado sería la fuerza principal. De ahí sus planteamientos de que los distintos organismos del Estado continuarían funcionando armónicamente y serían progresivamente sometidos a la voluntad de la clase obrera, permitiendo su muerte y superación. Veamos la actuación de estas instituciones durante el gobierno de la Unidad Popular, o sea en un periodo de intensa lucha de clases y encontrándose cuestionado el modelo de dominación capitalista en Chile.

Dentro del equilibrio y complementación de poderes que establece la Constitución de 1925, le corresponden a la presidencia de la República amplias atribuciones: el nombramiento de los ministros de Estado y de los principales cargos en todos los organismos públicos; representantes diplomáticos, intendentes y gobernadores; la supervisión de los ingresos del erario nacional y su

inversión con arreglo a la ley; fijación de los precios de venta de los artículos de "primera necesidad"; determinación de los reajustes a los trabajadores del Estado así como en la empresa privada; la ejecución de todas las leyes aprobadas por el Parlamento; y la disposición de las fuerzas armadas que están sujetas a su autoridad.

El Poder Legislativo es bicameral y está compuesto por la Cámara de Diputados, que tiene 150 miembros, y la de Senadores, con 50. El sistema electoral establece la división del país en 31 circunscripciones que eligen un diputado por cada treinta mil electores y fracción superior a 15 000. Los senadores se eligen en 10 agrupaciones provinciales. Tienen derecho a voto todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetas o no, inscritos en los registros electorales que están abiertos todo el año. El sufragio es secreto; diversas disposiciones eliminaron la posibilidad del cohecho, y su amplitud es tal que en las elecciones parlamentarias de 1973 para una población que no alcanzaba los diez millones votaron efectivamente 3 355 000 electores.

Las atribuciones del Poder Legislativo establecen su necesaria aprobación para la promulgación de todas las leyes del país propuestas por el presidente. La Cámara de Senadores, a proposición de la de Diputados, puede decidir por simple mayoría la destitución de los ministros de Estado, y con los 2/3 del Congreso pleno la destitución del presidente. El Congreso Nacional tiene la facultad de aprobar o rechazar el proyecto de presupuesto de gastos presentado por el Poder Ejecutivo. El Parlamento puede oponerse por simple mayoría a todo proyecto de ley originado en la presidencia, pero también necesita de los 2/3 de los votos para hacer aprobar su criterio por encima del criterio del presidente, en un proyecto originado en una de las dos cámaras.

En todas estas disposiciones observamos claramente la profundidad de la interdependencia de estos dos poderes, y su necesaria complementación para asegurar la marcha

armónica del país. El conflicto constitucional de Chile se desarrolló durante un largo periodo debido, precisamente, a que la Unidad Popular controlaba la presidencia y más de un tercio del Parlamento. La oposición no podía imponer su voluntad justamente porque tenía menos de los dos tercios necesarios, pero sí disponía de más de la mitad suficiente para trabar e impedir todas las iniciativas de ley del Poder Ejecutivo.

El Poder Judicial tiene una estructura de gran independencia que incluso establece la autogeneración de sus autoridades, en un orden estrictamente jerarquizado, que le permite requerir el uso de la fuerza pública para ejecutar sus fallos, los cuales se basan en un cuerpo de leyes extraordinariamente anticuados y clasistas. Toda la estructura de los tribunales está impregnada de un espíritu reaccionario, absolutamente al margen de cualquier expresión popular debido a su completa autonomía. No solamente las leyes correspondían a un sistema clasista, sino que los magistrados en su interpretación contribuían a despejar todo equívoco.

La Contraloría general es un organismo que reviste facultades de un cuarto poder estatal. Sus atribuciones son las de fiscalizar a la administración, esto es, al Ejecutivo, y decidir si ésta actúa conforme a la Constitución. En consecuencia, para ser cumplidos los decretos, órdenes y resoluciones del Poder Ejecutivo, se requiere que previamente el contralor declare que se ajustan a la ley. Señalemos que tanto el cargo de contralor general como el de presidente de la Corte Suprema de Justicia son a perpetuidad.

La primera institución en reaccionar en defensa del sistema capitalista y de lo más esencial del mismo, la propiedad de los medios de producción, fue la Contraloría general. El gobierno procedió a aplicar el Decreto vigente No. 520 que permitía la intervención en toda industria con conflictos laborales, con el objeto de constituir el Área de Producción Social, restando poder a la burguesía

y desarrollando un modelo económico con intervención dominante del Estado en su planificación. Es a mediados de 1971 que la Contraloría empieza a rechazar los decretos del Poder Ejecutivo, interpretando las leyes al expresar: "la Contraloría General se ve en la necesidad jurídica de manifestar a usted que no es posible, en derecho, mantener la eficacia de las resoluciones". Las resoluciones se referían a la intervención de Manufacturas Sumar, Paños Oveja Tomé, Lanera Austral, Algodones Hirmas, Rayonhil y Yarur, S. A., esto es, al núcleo de los monopolios textiles. El problema para el Ejecutivo podía ser resuelto de acuerdo a la ley mediante un decreto de insistencia, al cual debía someterse la Contraloría, pero dicho decreto debía llevar las firmas de todo el gabinete, lo cual obligaba a una gran homogeneidad del mismo.

La acción de la Contraloría continuó en este terreno y agudizó su actuación a principios de 1973 al rechazar numerosos decretos del gobierno, que en esa fecha contaba con tres ministros militares y que por ello no insistió. Asimismo, la Contraloría rechazó un decreto de democratización de la enseñanza y, anteriormente, se había ocupado de limitar las atribuciones de organismos creados por el gobierno como los consejos comunales campesinos y las juntas de abastecimiento y precios, arguyendo que los decretos del Ejecutivo sólo podían conferir funciones asesoras, ya que para las ejecutivas se requería de una ley, esto es, de la aprobación del Parlamento. En marzo de 1973 la Contraloría cuestiona el desempeño de un organismo gubernamental, y precisa que "ni la Constitución Política, ni ley alguna, dan al señor ministro de Economía ni a ningún otro, el poder de fiscalizar los actos de la Contraloría General".

El primer conflicto importante del Ejecutivo con el Parlamento surge cuando en este último se aprueba por simple mayoría un proyecto de reforma constitucional que define las tres áreas de la economía y que, en sustancia, entrega a la mayoría de la oposición la decisión

sobre las empresas que pueden pasar a constituir el sector estatal. En esta forma, el Parlamento aparece claramente como defensor de los intereses y propiedades de la burguesía monopólica y se propone recuperar parte del poder que de acuerdo a la Constitución no se encontraba en sus manos. En julio de 1972 el Congreso rechaza por simple mayoría los vetos del Ejecutivo al proyecto presentado en abierta infracción a la Constitución, ante lo cual el gobierno reacciona anunciando que someterá la controversia al Tribunal Constitucional, organismo creado por el Estatuto de Garantías en 1970. Por otra parte, en los primeros días de 1972 se produce la primera acusación aprobada contra un ministro de Estado, procedimiento mediante el cual el Parlamento obliga a la destitución del mismo y advierte al gobierno su decisión de desarrollar todos los mecanismos que le posibilita la ley para oponerse a su política.

En la misma fecha, el Poder Judicial avanzaba también en el bloqueo de la capacidad de acción del Ejecutivo, respaldando las medidas de los otros poderes al servicio del mantenimiento del sistema capitalista. Así, *El Mercurio* del 5 de enero de 1972 informaba:

los Tribunales de Justicia restituyeron a su dueño el diario *La Mañana* de Talca, después de una huelga con toma del edificio que se prolongó por más de cuatro meses. Los trabajadores huelguistas realizaron toda clase de maniobras para lograr la intervención del diario por parte del gobierno, sin alcanzar su cometido.

En efecto, y de acuerdo a la información objetiva entregada por el principal vocero de la burguesía chilena, la acción clasista del Poder Judicial no podía ser más transparente; así como las limitaciones del Ejecutivo dentro del marco de las leyes capitalistas vigentes. Exactamente en la misma fecha, también *El Mercurio* proclamaba con visible satisfacción:

La Corte Suprema de Justicia, al acoger el recurso de queja de la S. A. Yarur Manufacturas Chilenas de Algodón, abrió el camino para que la empresa peticionaria apelara contra la resolución de la Dirección de Industria y Comercio que dispuso la requisición de la fábrica.

En esta forma, el poderoso monopolio textil chileno encontraba su defensa natural en las instituciones del Estado.

A fines de 1972, el mecanismo de regulación de la sociedad mostraba claras señales de entramamiento: la Corte de Apelaciones nombraba un Ministro para sustanciar un proceso contra un miembro del gabinete de gobierno; la Contraloría declaraba ilegal la actuación del mismo, y la Cámara de Diputados aprobaba un proyecto que declaraba: "El gobierno ha violado en forma permanente y reiterada disposiciones constitucionales, y aun en materias tan fundamentales para una democracia como lo es la libertad de expresión, lo cual coloca a dicho gobierno al margen de la legalidad."¹

En esta forma se acentuaba el ataque concertado del Parlamento, los tribunales y la Contraloría, contra el gobierno que, conforme a su proyecto, debía coherentemente mostrarse plenamente sujeto a una legalidad que era la de un régimen democrático burgués y que, además, carecía desde esa fecha, y como resultado de sus vacilaciones, de la posibilidad de modificar. En el mes de febrero de 1973 el poder de obstaculizar la capacidad de acción del Ejecutivo, fue mostrado aún más claramente por el Parlamento, que se negaba a aprobar el proyecto de reajustes de sueldos y salarios del gobierno, esperando provocar así la reacción de los trabajadores que daban muestras de angustia, y creyendo en esta forma, además, influir en las próximas elecciones de marzo.

¹ *El Mercurio*, 26 de octubre de 1972.

El hecho es que en esta fecha el Poder Ejecutivo había dejado de ser el centro dinámico que dirigía el Estado, pues las fuerzas de oposición que defendían la continuidad del régimen capitalista encontraban, en los distintos poderes que controlaban, el mecanismo necesario y suficiente para interrumpir todas las iniciativas del gobierno. Las leyes vigentes eran interpretadas y su aplicación cautelada por el Poder Judicial y la Contraloría, y nuevas leyes no podían ser aprobadas sin el concurso de la Democracia Cristiana en el Congreso.

El equilibrio de poderes y la indispensable complementación de los mismos, impedía la regulación de la sociedad. El agotamiento del sistema institucional comenzaba a mostrar inequívocas señales. Simultáneamente, el gobierno no olvidaba que su mayor cuota de poderío la extraía, de acuerdo a las tesis del presidente Allende y del presidente comunista, de la legitimidad de su origen y de la legalidad de su actuación. Por ende, al mismo tiempo que se enfrentaba a la oposición de la burguesía en el interior del sistema institucional, se preocupaba de someter y disciplinar al movimiento popular, a través de múltiples expresiones, como la siguiente del ministro del Interior:

El gobierno está cierto que esas actitudes irresponsables no corresponden al sentir real de los trabajadores y de los pobladores que en su inmensa mayoría rechazan estos procedimientos y apoyan los planes de las autoridades. . . El gobierno será inflexible en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relativas al mantenimiento del orden público.²

En esa fecha, todo un sector de la izquierda comprendía que los antagonismos entre las clases sociales no podían resolverse en el interior de la institucionalidad

² Declaración de Gerardo Espinoza, ministro del Interior, en *El Mercurio*, 31 de marzo de 1973.

capitalista, y un *Documento político* del Regional Santiago Centro del Partido Socialista declaraba:

Todo sector del Estado que se llegue a controlar es importante, mientras no se pierda de vista el objetivo central, que es la liquidación del Estado burgués. Esa inmensa máquina burocrática, en todos los aspectos que abarca, es inservible para la construcción del socialismo. No se puede hablar de construir el socialismo mientras no se conquiste el poder que, a su vez, implica la destrucción del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado, obrero, socialista, que comenzará a extinguirse a medida que el socialismo se vaya construyendo... La situación ha llegado a un punto en que, sin definirse quién manda en este país no se podrá avanzar sustancialmente... Los trabajadores chilenos han dado hasta el presente una muestra creciente de disposición ofensiva y de disciplina. Únicamente la vacilación, la indecisión y los titubeos en la cúspide han impedido avances más profundos. Esos mismos trabajadores se desalentarán si su fuerza no se utiliza efectivamente contra la derecha, o si se la utiliza simplemente como presión para después negociar.³

Las elecciones de marzo de 1973 estuvieron muy lejos de resolver el conflicto de poderes, puesto que no alteraron la relación proporcional entre Unidad Popular y oposición en el Congreso. En consecuencia, se produce un endurecimiento de las fricciones entre los distintos poderes. El 11 de mayo, el presidente Allende se dirigía al país en los siguientes términos:

...en el día de ayer requerí la intervención del Tribunal Constitucional. Lo hice para pedirle un pronunciamiento sobre la forma en que el Congreso tramitó los

³ Citado por la revista *Arauco*, julio de 1974.

votos que formulé al proyecto que modifica la Ley Fundamental. Esta iniciativa obstaculiza la formación del Área Social y consolida el régimen capitalista. El procedimiento seguido por la actual mayoría de ambas Cámaras encierra una grave amenaza contra la esencia misma de nuestro sistema institucional.⁴

La respuesta no se hizo esperar y el 31 de mayo Frei, como presidente del Senado, y otro demócrata cristiano, Pareto, presidente de la Cámara de Diputados, enviaban a la Contraloría el proyecto aprobado por la mayoría reaccionaria de ambas Cámaras expresando:

No le cabe al Presidente de la República sino dar cumplimiento al texto del artículo 109 de la Constitución Política del Estado, que establece que si el Ejecutivo no llama a plebiscito dentro del plazo constitucional, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.⁵

Arreciaba también la crítica de los tribunales de justicia, y el 17 de mayo, la Corte Suprema se dirigía en los siguientes términos al presidente:

El juez Subrogante de Melipilla don Mario González ha comunicado que en el proceso por usurpación de terrenos del fundo "Las Rosas" se dio orden a carabineros de Melipilla para el desalojo de las personas extrañas a dicho predio que lo habían ocupado, pero que como en casos anteriores y similares el mayor de carabineros don Sergio Silva no dio cumplimiento a dicha orden devolviéndola al tribunal y expresando que por intrucciones del Intendente de Santiago procedía en esta forma.⁶

⁴ *El Mercurio*, 11 de mayo de 1973.

⁵ *Ibid.*, 10 de junio de 1973.

⁶ *Ibid.*, 18 de mayo de 1973.

La defensa de los propietarios agrícolas fue una de las características del Poder Judicial que, desde el presidente de la Corte Suprema hasta la base de la jerarquía piramidal, estaba constituido precisamente por latifundistas o familiares de los mismos. Por su parte, el gobierno, pese a sus mejores deseos de actuar estrictamente dentro de las leyes vigentes, no podía —salvo negándose a sí mismo— utilizar los aparatos de represión contra el movimiento campesino y, por tanto, dejaba de aplicar dichos requerimientos haciendo uso de la sujeción constitucional que le debían el cuerpo de carabineros y los otros aparatos armados.

A fines de ese mes se avanza un paso en el cuestionamiento de la legalidad del gobierno, cuando la Corte Suprema se dirige al Ejecutivo en estos términos:

... así como la obstrucción de carabineros en el cumplimiento de órdenes emanadas de un Juzgado del Crimen que, de acuerdo a la ley, deben ser ejecutadas por dicho cuerpo sin obstáculo alguno, todo lo cual significa una abierta pertinacia en rebelarse contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales alteraciones u omisiones producen en el orden jurídico, lo que además significa, no ya una crisis del estado de derecho, como se le representó a SE en el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país.⁷

La respuesta del gobierno no pudo ser más defensiva, y el presidente Allende respondía a la Corte Suprema expresando:

Resulta inadmisibile, en consecuencia, sostener que estas autoridades deban prestar el amparo policial en forma del todo indiscriminada, por cuanto ello podría

⁷ Ibid., 29 de mayo de 1973.

conducir a situaciones que atenten precisamente contra la paz social y el orden público que están llamadas a cautelar.⁸

Por su parte, el último ministro del Interior después que el Tribunal Constitucional, llamado a pronunciarse en el conflicto planteado entre Poder Ejecutivo y Parlamento, se hubiese declarado incompetente, afirmaba:

La aceptación de la tesis del Congreso significaría terminar con el sistema presidencial y caer en un nefasto régimen de seudoparlamentarismo... La Contraloría, en un sorprendente dictamen, se ha atribuido facultades que constitucionalmente no tiene...⁹

Lo cierto es que la llegada de los partidos obreros al Poder Ejecutivo había dado como resultado una profunda dislocación de toda la máquina institucional, restado a la burguesía capacidad de acción en el plano económico impidiéndole realizar normalmente la plusvalía y, más importante aún, le habían cerrado a ésta el acceso a la utilización de los cuerpos represivos del Estado con el consiguiente desarrollo de las luchas reivindicativas populares y el surgimiento de nuevas formas organizativas de obreros y campesinos. Sin embargo, a fines de mayo, el sistema institucional demostraba también que, lejos de haberse autonomizado de las clases sociales que lo habían creado y perfeccionado, se adaptaba a las nuevas circunstancias para obstruir todo el proceso de cambios y llevaba el enfrentamiento a una situación en la cual no había salida "legal", "pacífica" o "institucional" si no era mediante el retorno a la burguesía del Poder Ejecutivo.

Los llamados a las fuerzas armadas se multiplican por parte de los garantes de la Constitución, lo que demuestra

⁸ Ibid., 14 de junio de 1973.

⁹ Declaración de Carlos Briones, en *ibid.*, 10 de julio de 1973.

la verdadera función de esos organismos, al servicio de una clase social, y los partidos de la oposición exigen nuevamente:

Una vez más la institucionalidad del país se ha quebrado como consecuencia de las "tomas" de establecimientos fabriles... Es de gravedad extrema que el Presidente de la República haya dado su respaldo a los organizadores de estos atentados... Esta situación, incompatible con nuestro régimen democrático y republicano, hace necesario que las fuerzas armadas hagan cumplir la Ley de Control de Armas, para evitar la formación de un ejército extremista...¹⁰

El llamado no caería en el vacío.

El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprueba mediante la mayoría de nacionales y demócrata cristianos, una declaración, calificada de "histórica" por la derecha, en la que afirma: "el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta", y exige a las fuerzas armadas la desautorización de la política del gobierno, declarando que, en caso contrario, la presencia de ministros militares en el gabinete comprometería gravemente el carácter profesional de las mismas "con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y grave deterioro de su prestigio institucional".¹¹

En esta forma se había cerrado un ciclo. El sistema institucional chileno había mostrado claramente su carácter clasista y, ante la imposibilidad de resolver a su favor el entramamiento que se había producido, la clase dominante no vacilaba en facilitar su quiebra y ruptura definitivas —a través de las mismas instituciones del Estado—

¹⁰ Declaración de la Confederación Democrática en *ibid.*, 7 de julio de 1973.

¹¹ *Ibid.*, 23 de agosto de 1973.

con el objeto de mantener el sistema capitalista, someter al movimiento popular y retornar a una economía "normal" que le permitiera la obtención de la plusvalía y la seguridad de sus propiedades. Sería otra pieza del Estado que pasaría desde esa fecha a reglamentar la sociedad chilena: las fuerzas armadas.

El Estado chileno se desarrolla, desde la caída de la dictadura del general Ibáñez, a través de diversas etapas que expresan el grado de compromiso y las relaciones de diversas clases y capas sociales. A partir de 1938 se suceden una serie de gobiernos con participación de comunistas y socialistas, que contribuyen a una mayor estabilidad del sistema institucional por cuanto integran a los partidos que representan los intereses inmediatos de los trabajadores a las responsabilidades de administración de la sociedad capitalista, hecho que también significa un avance en el reconocimiento del peso específico de las clases explotadas en la regulación de la sociedad. Esta participación, sin embargo, debe entenderse como profundamente limitada y encuadrada dentro del sistema de supremacía económica, social y política de la burguesía. El desarrollo del modelo democrático de dominio fue interrumpido en el año 1948, cuando la burguesía industrial cree necesario someter y paralizar el crecimiento de las luchas sindicales obreras, para lo cual promulga la Ley de Defensa de la Democracia, que pone fuera de la legalidad al Partido Comunista y persigue al movimiento popular en su conjunto. A partir del año 1953, se sucede una serie de hechos que posibilitan nuevas relaciones de fuerza entre las clases puesto que los trabajadores logran crear un frente de partidos independientes de la burguesía y una central sindical que mejora su capacidad de negociación. Pese a la presencia dominante de los intereses de la burguesía en el conjunto del Estado, éste se democratiza progresivamente a través de la ley electoral, del código del trabajo y de la participación institucionalizada de los partidos obreros en el Poder Legislativo. Finalmente, la

división de la burguesía en dos modelos diferentes de desarrollo hace que lleguemos a las elecciones presidenciales de 1970 con un Estado democrático avanzado, en el cual el frágil equilibrio de sus diversos componentes sociales mostraba lo precario de la preponderancia capitalista y señalaba la maduración de la conciencia, organización y capacidad de la clase obrera para dirigir el país. En otras palabras, se abrió en esa fecha un periodo en el cual el sistema de dominación tradicional pasó a ser profundamente cuestionado.

El gobierno popular lleva a la práctica una política que correspondía a la idealización de la democracia como ajena a la dialéctica de la lucha de clases, y que entendía poder separar al aparato estatal, creado por la sociedad chilena bajo la hegemonía de la burguesía, precisamente de los intereses materiales y políticos que lo habían forjado. El hecho concreto e histórico es que, durante el gobierno de la Unidad Popular, el conjunto de las instituciones que forman el Estado chileno pierde la coherencia y la armonía que le habían permitido hasta la fecha dirigir el país. Se produce entonces un conflicto de poderes constitucionales que reflejan la agudización de la lucha de clases en su grado máximo: lo que estaba en juego era la dirección de la sociedad por una de las dos clases fundamentales que la componen: proletariado o burguesía. En marzo de 1973, ésta tiene la última oportunidad de reunificar las instituciones del Estado bajo su hegemonía, para lo cual debía obtener los 2/3 del Parlamento y así recuperar los mecanismos constitucionales que le habrían permitido subordinar o deponer al Poder Ejecutivo. Habiendo visto frustradas sus expectativas debido a la extraordinaria votación obtenida por la Unidad Popular, la oposición burguesa, tanto política como "gremial", entra directamente en la vía de subvertir la legalidad vigente como objetivo inmediato.

Enfrentado a esta situación, el gobierno efectuó la crítica de las instituciones que se encontraban al servicio

de la oposición reaccionaria, pero, aun cuando éstas pasaban incluso al terreno de la extralimitación ilegal de sus atribuciones, no llegó jamás al cuestionamiento de su existencia. Esto es, la crítica de la UP se mantuvo en el terreno de las declaraciones, sin pasar jamás al de la acción, a la presentación de un modelo activo y coherente de remplazo. Por lo cual, además, debió permanentemente reclamar la subordinación de los trabajadores a la legalidad vigente, a la legalidad capitalista, desalentando las nuevas expresiones de organización cifradas en el poder popular.

En resumen, podemos decir que el ascenso de los partidos obreros en el interior del régimen institucional a través de la presidencia de la República significó:

1] Una cuota importante de los medios materiales pertenecientes a la administración del Estado pasaron a ser controlados por los partidos de izquierda y sirvieron al desarrollo de las organizaciones populares.

2] La sujeción del aparato de represión del Estado al Poder Ejecutivo implicó que hasta julio de 1973 éste no fuera utilizado contra la emergencia de las luchas de los trabajadores de la ciudad y del campo, posibilitando así un poderoso crecimiento de su fuerza en detrimento de la de los propietarios, que se veían privados del uso tradicional de ese aparato.

3] Una importante redistribución del ingreso nacional en beneficio de los asalariados y la formación de un Área de Producción Social, extremadamente significativa en el plano de la economía nacional, al no encontrarse en manos de la burguesía, produjeron como consecuencia la desarticulación completa del sistema capitalista y debilitaron la capacidad de acción de ésta.

4] Los mecanismos institucionales controlados por el Poder Ejecutivo no fueron suficientes en ninguna etapa —pese a los reiterados esfuerzos que en este sentido hicieron el gobierno y un sector de la UP— para "consoli-

dar” el proceso y estabilizar las relaciones entre las clases en los planos económico y político.

5] El movimiento de masas se vio encuadrado dentro del sistema legal democrático burgués, con todas las limitaciones que ello comportaba, principalmente como freno al desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de poder popular que apuntaban a una nueva forma de dirección estatal.

6] El sistema institucional chileno se mostró profundamente ligado a los intereses de la clase que lo había creado y perfeccionado y, por tanto, absolutamente inadecuado para asegurar la marcha al socialismo y permitir el acceso de los trabajadores al predominio de la sociedad.

En el núcleo del Estado encontramos, entonces, la capacidad para disponer de la propiedad y de la fuerza armada. Ya hemos visto cómo la burguesía encontró los mecanismos necesarios para oponerse al avance del gobierno y de los trabajadores en el control de la propiedad de los medios de producción y de conducción de la economía nacional. Veamos ahora qué ocurrió con los institutos armados.

El ejército chileno nace con la independencia de España, profundamente ligado desde sus inicios a las estructuras del joven Estado. Su historia, durante todo el siglo pasado, estará ligada a los enfrentamientos de las distintas fracciones propietarias, y el más notable será el de la guerra civil de 1891, cuando el almirante Montt derrotará a los sectores constitucionalistas de Balmaceda, cerrando un ciclo de gobiernos liberales y dando inicio a una era de parlamentarismo. Entre 1924 y 1932, jugará un papel determinante a través de distintos golpes de fuerza, siendo notables la heterogeneidad de los mismos, pues se suceden distintas tendencias en un periodo en que el ejército aparece dividido en fracciones que llegan difícilmente a una estabilización basada en su sometimiento a la Constitución, aprobada en 1925. Junto a esta estrecha dependencia de las estructuras del Estado es preciso señalar

también otra característica de su continuidad, que es la de ejecutor irrestricto de las medidas de violencia necesarias para mantener sometidos a los trabajadores: las masacres de los obreros salitreros en Santa María de Iquique en 1907; San Gregorio en 1921; La Coruña en 1925; en las ciudades de Vallenar y Copiapó en 1931; en la capital, Santiago, el 2 de abril de 1957; en la población Caro en 1962; en el mineral de El Salvador en 1968; finalmente, en la ciudad de Puerto Montt el año 1969 fueron todas expresiones de la función de las fuerzas armadas al servicio del Estado capitalista para someter la rebelión de los trabajadores contra la explotación de la que eran objeto.

Hemos dicho anteriormente que el desarrollo de las instituciones chilenas, la capacidad de los distintos estratos propietarios para converger en políticas de consenso de su clase y la integración al sistema de los partidos obreros hicieron que los institutos castrenses no desempeñaran un papel dominante desde 1933 en adelante. Sin embargo, en 1939, con el general Ariosto Herrera; en 1948, con Ramón Vergara; durante el gobierno constitucional de Ibáñez en dos ocasiones, y en 1969, a través del general Viaux, fracciones de los cuerpos armados intentaron repetidamente —en las coyunturas en que las instituciones cívicas parecían debilitadas o por lo menos requerían de la fuerza de coacción para someter a fases de mayor insurgencia popular— acceder al control del Estado.

Así, cuando llegamos al año 1970, las fuerzas armadas aparecen marcadas con dos características fundamentales: su dependencia de las instituciones del Estado, que se confunde con su supuesto “profesionalismo”, y su tradición de represión de todas las coyunturas de insurgencia popular, características estrechamente relacionadas.

Es necesario agregar los antecedentes de la composición social de los altos mandos del ejército, de acuerdo a un estudio realizado en 1967: a] condición de clase de los líderes graduados en la academia de guerra y en la escuela

politécnica: clase alta, 29 por ciento; clase media, 65 por ciento; media baja, 6 por ciento; b] ocupaciones de los padres de 37 generales retirados entre 1952 y 1964: empresarios, 22 por ciento; profesionales y gerentes, 51 por ciento; agricultores, 19 por ciento; empleados, 8 por ciento; c] ocupaciones de los cinco mejores amigos civiles de los militares entrevistados: gerentes y profesionales, 86.1 por ciento; terratenientes, 8.3 por ciento; políticos, 2.8 por ciento; empresarios, 2.8 por ciento; empleados, ninguno; obreros, ninguno.¹²

Los objetivos declarados de los institutos armados chilenos consistían en la defensa de la seguridad nacional, concepto dinámico que propugnaba el mantenimiento de la integridad territorial contra todo agresor extranjero y que, desde el inicio de la “guerra fría”, incorporó también como elemento ideológico la defensa de las instituciones “republicanas y democráticas” frente al enemigo interno. Es decir que, desde esa época, las fuerzas armadas chilenas incorporaron a su ideología un profundo anticomunismo basado en el antagonismo planetario de EU contra la URSS, y entendían como parte de su misión el mantenimiento de la sociedad capitalista. La ideología de las fuerzas armadas se encontraba profundamente impregnada de los conceptos de jerarquía, disciplina, autoridad, orden, y su representación ideal de funcionamiento de una sociedad se basaba en esos elementos para su desarrollo y progreso: en una traslación mecánica de su esquema organizativo al conjunto del Estado.

Por otra parte, las relaciones de los aparatos castrenses chilenos con sus congéneres norteamericanos fueron sumamente estrechas a partir de 1947, cuando se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La mayor parte de la infraestructura de las FA chilenas estaba

¹² Estudio del sociólogo norteamericano Roy Allen Hansen, “Military Culture and Organizational Decline”, citado por Pío García en *Las fuerzas armadas y el golpe de Estado en Chile*.

formada por material, técnicas y adiestramiento proporcionados por EU, lo cual se vio acrecentado por el Pacto de Asistencia Militar que revitalizó todo su equipo y proporcionó a Chile la “ayuda” militar más alta otorgada a un país latinoamericano después de Brasil. Esta situación jamás sería puesta en cuestión durante el gobierno popular. Al mismo tiempo que la economía chilena era bloqueada por acción de diversos organismos públicos y privados de EU, los préstamos orientados al aprovisionamiento militar de Chile se mantenían íntegramente, así como las escuelas de entrenamiento de oficiales en los centros de la Zona del Canal y en territorio norteamericano. Señalamos de paso que numerosos altos oficiales organizadores del golpe salieron con los grados más elevados de la United States Army School of Americas, que funciona en la Zona, y que los cuatro miembros de la junta del 11 de septiembre de 1973 recibieron entrenamiento militar e ideológico en EU y en la escuela citada.¹³ Asimismo, se realizaron maniobras navales conjuntas de unidades de la flota de EU con la marina chilena, durante los tres años del gobierno popular, con el objeto de desarrollar planes de enfrentamiento al “enemigo común”, en las operaciones llamadas “Unitas”. La presencia material, técnica e ideológica de las fuerzas armadas norteamericanas en sus relaciones con las chilenas tenía un impacto que nunca fue debidamente valorado y mucho menos cuestionado, y respondía a las líneas estratégicas trazadas por el *Informe Rockefeller* del año 1969, el cual, en lo sustantivo, recomendaba para América Latina gobiernos militares que deberían ser ayudados por EU.

Es preciso también anotar la incidencia, en los institutos armados, de la situación internacional en el cono sur de América Latina durante el periodo analizado. Perú aparecía con un gobierno militar “progresista” que, desde

¹³ Revista *Newsweek*, 24 de septiembre de 1973.

1968, reordenaba la sociedad peruana con base en la confluencia de distintas tendencias capitalistas que tenían el común denominador del papel fundamental del Estado en el desarrollo de las fuerzas productivas y como un peligro potencial frente a las aspiraciones de la burguesía chilena en el mercado andino. El gobierno del general J.J. Torres en Bolivia fue derribado durante el año 1971, dejando paso a un nuevo militar, el coronel Banzer, que aparecía nítidamente ligado a los afanes expansionistas del llamado "subimperialismo brasileño", el cual aumentaba paulatinamente su participación en América del Sur bajo la conducción de una dictadura militar que permanecía desde 1964. En Argentina, finalmente, llegaba al gobierno J.D. Perón, después de un compromiso con los institutos armados del país que determinaban la política efectiva de esa nación desde comienzos de la década del 40 y se mantenían como la fuerza decisiva. En Uruguay, los aparatos castrenses constituían claramente, desde 1973, el poder detrás del trono. En síntesis, en el año 1973, el cono sur de América Latina mostraba la neta preponderancia o dirección, en los países vecinos y cercanos a Chile, de las fuerzas armadas respectivas.

El artículo No. 22 de la Constitución política chilena establece que

la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes.

En efecto, en los inicios del gobierno popular, estas disposiciones correspondieron a la realidad, y los institutos castrenses respondieron a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Pero esto también se debió a la relativa debilidad en que quedaron los sectores militares reaccionarios después del abortado intento de golpe de Estado de octubre de 1970, que pretendió impedir preci-

samente la investidura de Salvador Allende como presidente de la República.

La política de la Unidad Popular hacia las FA buscaba la sujeción de éstas al gobierno durante el proceso de transformaciones, basando esta perspectiva en su inserción coherente en el conjunto de su proyecto. Es decir, el carácter "profesional" de los aparatos armados, la legalidad de las medidas económicas y sociales aplicadas dentro de la institucionalidad vigente y la alianza de clases que se esperaba implementar constituían los fundamentos de la política global que esperaba encontrar en el interior de las FA una resistencia que sería progresivamente desarmada, junto con la introducción de un nuevo contenido que permitiera reforzar los sectores "patriotas y constitucionalistas". Fundamental en el análisis desarrollado por el gobierno era la fuerte ligazón y dependencia del Estado que mostraban las FA y, en segundo lugar, la extracción y el vínculo social de la alta oficialidad, que se identificaba con las "clases medias".

El hecho es que esta política pareció demostrar su viabilidad durante cierto periodo, ya que hemos observado cómo en los primeros 24 meses de gobierno la resistencia de los sectores reaccionarios militares no logró desarrollarse e incluso, durante la insurrección burguesa de octubre de 1972, las FA mantuvieron su disciplina y obediencia al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, lo cierto es que las fuerzas armadas se dividieron tempranamente, incluso antes del 4 de noviembre de 1970, en dos fracciones: una "constitucionalista" representada primero por el general Schneider y, después de su asesinato, por el general Prats, sector de carácter reformista que esperaba la realización moderada de una política de transformaciones sin poner en peligro la "paz social" y la "seguridad nacional". Las declaraciones de Carlos Prats y la actitud de otros ministros militares en el gabinete que inició sus actividades el 3 de noviembre de 1972 son suficientemente netas e ilustrativas al respecto.

El otro sector, "institucionalista", respondía a una concepción más definidamente reaccionaria; desconfiaba profundamente de las ideologías, tácticas y estrategias gubernantes; observaban con particular recelo la participación del Partido Comunista en el gobierno, y entendían su dependencia de las instituciones del Estado no en la sujeción al Poder Ejecutivo sino en el mantenimiento de las estructuras económicas y sociales.

El 21 de octubre de 1972 se promulga la Ley No. 17 798 de Control de Armas, basada en un proyecto del gobierno al cual la oposición y, en particular, la Democracia Cristiana incorporaron numerosas cláusulas que, en definitiva, entregaron a las FA, totalmente al margen de la autoridad del Poder Ejecutivo, los elementos legales para hacer pesquisas, allanar, controlar y detener a quienes fuesen denunciados por tener en su poder armas de cualquier calibre o tipo. Errores técnicos que nunca fueron suficientemente explicados impidieron que el Ejecutivo, en uso de sus prerrogativas constitucionales, vetara las modificaciones presentadas por la oposición, y permitieron así que se extendiera una herramienta legal que posteriormente sería ampliamente utilizada por el sector reaccionario de las FA.

En los últimos meses de 1972 se producen varios hechos significativos. El sector "constitucionalista" de los militares ingresa, con Carlos Prats, al ministerio con el objeto de asegurar la "paz social". Esta situación era interpretada por el socialista Calderón, ministro de Agricultura, de la siguiente manera:

Las fuerzas armadas... entran en el gabinete para asegurar un sistema institucional que pretende ser quebrado por los sectores más exaltados de la oposición. Y de esta manera contribuyen a asegurar las condiciones para que el programa siga adelante.¹⁴

¹⁴ Revista *Chile Hoy*, n. 23, 17 de noviembre de 1972.

Con una mayor profundidad, pero refiriéndose en esencia al mismo sistema institucional, un editorial de *El Mercurio* interpretaba así la presencia de los ministros castrenses:

El papel que asumen [las FA] desde el paro de octubre no ha sido deseado ni provocado por los altos mandos. Surgió como consecuencia del fracaso de los cuadros políticos del gobierno de la UP para el mantenimiento de las condiciones mínimas de la seguridad nacional... La inquietud de los marxistas por el papel predominante que juegan las FA en este momento es muy explicable. Si bien los uniformados no se prestarán para cumplir objetivos políticos de la oposición partidista ni desean una especie de restauración de derechos y situaciones económicas pasadas, es seguro que tampoco están dispuestos a admitir que este país se desintegre como entidad nacional.¹⁵

En esa fecha, un pleno del Partido Socialista expresaría en sus resoluciones: "la participación de miembros de las FA contribuyeron a impedir las maniobras de una contrarrevolución burguesa e imperialista que ha buscado sin cesar por sus manifestaciones fascistas desatar la guerra civil para poner fin al gobierno popular". También el Partido Comunista concordaba en esta apreciación: "... la presencia de las FA en el gobierno ha sido altamente positiva para el país... era necesario recordar... la estabilidad que alcanzó el gobierno con los tres ministros militares".¹⁶ Lo cierto es que ambas declaraciones comprendían sólo una parte del proceso que era complementado con el análisis del vocero de la burguesía. Los hechos posteriores mostrarían que la acción y participación de las FA en el gobierno no logró la "paz social" ni concertar la

¹⁵ *El Mercurio*, 21 de marzo de 1973.

¹⁶ Declaraciones de Luis Corvalán en *ibid.*, 23 de marzo de 1973.

alianza de clases propugnada. Si bien el gabinete Prats-Millas daría estabilidad al gobierno durante esos cinco meses en que ejerció, también produjo un significativo debilitamiento en la dinámica de formación de nuevas estructuras del movimiento popular y, por otra parte, contribuyó a desgastar el sector "constitucionalista" que era incapaz de impedir la polarización de la sociedad chilena.

En el mes de diciembre de 1972 se produce otro hecho de importancia. El Poder Judicial acuerda reducir "a dos años de presidio menor en su grado medio la pena impuesta al reo Roberto Viaux como autor del delito de secuestro simple del general Schneider".¹⁷ En esta forma una de las instituciones del Estado mostraba claramente su carácter y objetivos, al emitir un increíble fallo rebajando a dos años la pena del autor del asesinato del que fue comandante en jefe de las FA, y mostraba abiertamente su apoyo a los sectores militares "institucionalistas" o reaccionarios, que en esa fecha comenzaban a levantar cabeza ostensiblemente ante la agudización de la lucha de clases en el país. A fines de diciembre ya se daban claros signos de división en el interior de las FA, y el general Prats declaraba sus temores al afirmar que "...con la guerra civil... el país sería lanzado a un caos del cual no se volvería a recuperar en 50 años".¹⁸

El fracaso del gabinete encabezado por Prats tendría como efecto acelerar las contradicciones en las fuerzas armadas y desarrollar las tendencias reaccionarias y fascizantes que eran hábilmente estimuladas por la burguesía. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, organismo máximo de agrupamiento de los distintos sectores de propietarios, declaraba inmediatamente después de las elecciones de marzo:

¹⁷ Ibid., 28 de diciembre de 1972.

¹⁸ Ibid.

Corresponde a tres fuerzas fundamentales asumir un papel decisivo en la nueva organización política y social. Ellas son: los partidos que estén dispuestos a construir y no a provocar el caos, las fuerzas armadas cuya acción es indispensable para restablecer la disciplina y la eficiencia e impulsar el progreso, y el poder gremial que constituye la palanca de desarrollo y el factor de cohesión de la comunidad nacional.¹⁹

A lo cual respondían los sectores "constitucionalistas", ya considerablemente debilitados, por intermedio de Prats, que declaraba:

De modo que los que calumnian e injurian al comandante en Jefe buscando empañar su prestigio profesional y debilitar su ascendiente de mando para separar a la oficialidad del alto mando se equivocan del mismo modo que quienes buscan introducir una cuña entre la oficialidad y la suboficialidad para quebrar la Institución.²⁰

El hecho es que quien efectuaba una evaluación equivocada era el general Prats. En el mes de mayo los sectores reaccionarios se habían fortalecido considerablemente, y el coronel Ackercknecht ordena el allanamiento de la sede del Partido Socialista en la ciudad de Rancagua, a raíz del enfrentamiento de sus militantes con bandas fascistas. La acción de dicho coronel contaría con el respaldo del entonces comandante en jefe subrogante del ejército, general Pinochet.

En la misma fecha, el cuerpo de generales y almirantes en retiro entrega una declaración abiertamente subversiva, que señala la extensión y la inminencia de las acciones golpistas, así como sus motivaciones:

...es insólito contemplar cómo la fuerza pública ha perdido su autoridad para imponer el orden... es

¹⁹ Ibid., 14 de marzo de 1973.

²⁰ Declaración de Carlos Prats en *ibid.*, 27 de abril de 1973.

decepcionante observar el escaso resultado que ha dado la aplicación de la ley sobre control de armas y la forma notoriamente parcial con que se ha usado.

Y añade a continuación una ominosa advertencia:

Si la Constitución es mañosamente interpretada o no se la respeta, la acción que se derivaría sería ilegítima, lo que importaría cortar la conexión existente entre las autoridades y las fuerzas armadas.²¹

El 29 de junio se produce el levantamiento del regimiento blindado No. 2, al mando del coronel Souper, sofocado por diversas unidades que tuvieron a su frente directamente al general Carlos Prats. En esa fecha, los efectivos "constitucionalistas" aún eran lo suficientemente fuertes para provocar una guerra civil, por lo que los sectores golpistas no participaron masivamente en la intenciona. Pero al gobierno mostró su total incapacidad para generar políticas distintas frente a las FA y dejó la investigación y sancionamiento de los autores y responsables del frustrado golpe a la entera discreción de los servicios internos de las FA, como si no existiera un contenido político en toda la situación. El aplastamiento del llamado "tancazo" del 29 de junio de 1973, lejos de ser utilizado para expulsar a los oficiales golpistas apoyándose en el sector "constitucionalista", fue la señal para una escalada reaccionaria en todos los planos del aparato estatal y particularmente en las fuerzas armadas.

Frente al fallido intento de golpe de Estado, las instituciones del mismo respondieron con el silencio más absoluto. Las cámaras de Senadores y Diputados, la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General de la República, tan celosos de la defensa de la Constitución para criticar al gobierno y al movimiento popular, no consideraron

²¹ Ibid., 29 de mayo de 1973.

oportuno referirse al conato sedicioso, como si éste no se hubiera producido. Las instituciones evidenciaban una vez más su carácter de clase, y los diputados de la oposición rechazaban la solicitud del gobierno de establecer el estado de sitio.

En los primeros días de julio, las tres ramas militares inician una desenfrenada campaña de allanamientos de fábricas, locales sindicales, colegios e incluso de partidos de izquierda, con muertos, heridos y detenidos a través de todo el país, tras dos objetivos: el primero y más evidente, que se ocultaba tras la Ley de Control de Armas, consistía en detectar la capacidad militar efectiva de los trabajadores y amedrentarlos con el despliegue de la potencia de fuego de los aparatos regulares. Este objetivo, de carácter militar, fue plenamente conseguido, y fue constatada la inexistencia de "ejércitos paralelos" al mismo tiempo que los obreros y sus dirigentes comprobaban lo insuficiente de su organización frente a la capacidad operacional de las fuerzas armadas.

El segundo objetivo, también de carácter militar, se daba en el interior de sus instituciones y consistía en la comprobación de la fuerza de los efectivos "constitucionalistas" entre la oficialidad y suboficialidad con vistas a proceder a los "ajustes" necesarios. La operación, que, solamente entre el 2 de julio y el 3 de agosto, consistió en 23 allanamientos, resultó un éxito completo para la preparación de las maniobras golpistas, las que eran aplaudidas por los partidos de la oposición.

Pero también a raíz del abortado golpe del 29 de junio la deliberación se había generalizado en el interior de todas las ramas de las fuerzas armadas y, al mismo tiempo que en la oficialidad se acentuaba el neto predominio de los "institucionalistas", entre la suboficialidad se produjo una importante reacción en contra de las arengas fascizantes, ante lo cual los mandos detuvieron y torturaron —en la marina— a quienes expresaban sus convicciones de lealtad al gobierno. Mientras Altamirano, Garretón y

Enríquez, respectivamente secretarios generales del Partido Socialista, MAPU y MIR, eran acusados por los altos mandos de la armada del delito de "incitación a la subversión", el gobierno no solamente no pasaba a la defensa y apoyo de los marinos torturados sino que, en una nueva muestra de debilidad y "cretinismo" legalista, denunciaba las "tentativas de organización celular en los buques de la Armada Nacional" por parte de "sectores de ultraizquierda". El movimiento de resistencia a los oficiales golpistas fue cortado en ciernes, pues obviamente la carencia de apoyo por parte del Ejecutivo imposibilitaba su afianzamiento.

El MIR demostró desde temprano su preocupación por penetrar en las FA buscando el desarrollo de una tendencia favorable a sus posiciones, pero sus éxitos fueron extremadamente limitados. A mediados de julio intensifica su propaganda llamando a la suboficialidad y tropa a reclamar "el derecho a voto, escalafón único, derecho a reunirse libremente, salario justo, participación en las organizaciones del pueblo, a desobedecer a los oficiales que incitan al golpe". Asimismo, Altamirano se dirigía a los miembros de las fuerzas armadas afirmando:

Los soldados, ^{prestare} marinos, aviadores, y carabineros no pueden postrarse en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, para asesinar trabajadores. Aún más claro: no sólo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el gobierno de los trabajadores, sino de oponerse activamente. Estamos seguros que este criterio patriótico, nacional y revolucionario, prevalecerá por encima de las maniobras desesperadas de la burguesía.²²

Lo cierto es que la burguesía no se encontraba desesperada; por el contrario, había logrado en esa fecha modifi-

²² Revista *Chile Hoy*, 13 de julio de 1973.

car totalmente a su favor la relación de fuerzas entre "constitucionalistas" e "institucionalistas", y se preparaba con energía para barrer al gobierno. La polarización de la sociedad, el reclamo de la burguesía que exigía retirar a los partidos populares de la administración pública, el auge del movimiento obrero y de sus nuevas expresiones orgánicas, el fracaso del proyecto económico, el predominio de la campaña ideológica de la reacción constituyen las principales razones que explican el fortalecimiento de los reaccionarios en el interior de las FA y el debilitamiento de los reformistas.

El 22 de agosto renuncian los generales Sepúlveda y Pickering, debido a la pérdida de su autoridad de mando y en velada crítica a la increíble pasividad del gobierno. El 23 de agosto renuncia de manera irrevocable a su cargo de comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats. La salida de los tres implicaba la derrota definitiva del sector "constitucionalista". Los hechos se precipitaban y pocos días después, uno de los organismos dependientes del aparato estatal rompería toda la institucionalidad vigente para asegurar lo fundamental del Estado chileno: su carácter clasista.

En esta forma, las FA desempeñaron un papel pasivo desde noviembre de 1970 hasta octubre de 1972 y, desde esa fecha, su participación se hizo indispensable para asegurar la continuidad del sistema institucional ante el enfrentamiento de poderes, proyectos y clases que se producía en la sociedad chilena. Ante el callejón sin salida a que condujo el conjunto del proceso en el cual una de las dos fuerzas debía ser derrotada para la subsistencia de la otra, los militares actuaron aplastando al movimiento popular para asegurar la continuidad del sistema capitalista.

Las instituciones se mostraron como una cáscara que escondía lo esencial del fruto: el sistema social y económico capitalista, que puede asumir diversas formas de representación política sin perder su contenido.

SEPTIEMBRE DE 1973: EL TRIUNFO DE LA REACCION

Los resultados de las elecciones de marzo de 1973 demostraron certeramente que la dirección de la sociedad se corresponde con las relaciones de fuerza entre las clases, y que los votos sirven para contabilizar numéricamente la influencia respectiva en un momento dado, pero no para decidir el curso de los acontecimientos.

Esto fue inmediatamente comprendido por la reacción, y en particular por los representantes directos de las asociaciones patronales que, inmediatamente después del fracaso del proyecto "parlamentario" de la burguesía, intensifican sus llamados a las fuerzas armadas y cuestionan con mayor énfasis y determinación la legalidad del gobierno.

Este asume una posición estrictamente defensiva, y pretende estancar la lucha de clases con el objeto de repetir el proyecto tantas veces frustrado de establecer un acuerdo con las "clases medias" a través del entendimiento con la Democracia Cristiana. Para ello, el presidente Allende nombra un nuevo gabinete, el 28 de marzo, en el cual un socialista de su entera confianza es el nuevo ministro del Interior, con la tarea expresa de encauzar los contrapuestos intereses por vías legales:

La oposición y los partidos de gobierno deben entender que el Presidente de la República utilizará todos los caminos para evitar la violencia y aquéllos de cualquier sector que pretenden desatarla, encontrarán en la decisión del Ejecutivo la valla que impida que este país llegue al enfrentamiento.¹

¹ *El Mercurio*, 29 de marzo de 1973.

En los mismos días un pleno del comité central del Partido Comunista calificaba al MIR como "factor de división dentro del movimiento popular, que debe ser combatido para impedir que gane a sector alguno del pueblo con su política suicida" y en el pleno del Partido Socialista se reforzaban considerablemente quienes eran partidarios de la línea de conciliación con la burguesía y la Democracia Cristiana.

La dificultad encontrada en los dos extremos de la sociedad hacía muy difícil la prosecución de la política diseñada por el gobierno. El movimiento popular se rebelaba contra una situación que no tenía las ventajas del socialismo pero sí gran parte de los males del capitalismo, en condiciones de inflación y acaparamiento que lo mantenían además permanentemente amenazado en su cuota de poder adquisitivo. El 4 de abril se producen verdaderas batallas campales en las calles del sector de Vicuña Mackenna, por la represión que sobre los manifestantes de las poblaciones descargan las fuerzas de carabineros.

Considerablemente más enconada era la resistencia de la burguesía y de la Democracia Cristiana a la política gubernamental. El gobierno envía con fecha 10 de abril un decreto de insistencia a la Contraloría para dar curso a las resoluciones de requisición que afectaban algunas importantes industrias contempladas en el programa inicial del Área de Producción Social: "Un paso más en la escalada que ha desatado el marxismo desde que salieron [del gabinete] los ministros militares", declara la Sociedad de Fomento Fabril, agregando: "La medida es típicamente totalitaria por cuanto se impone por un abuso de poder sin tomar en cuenta la opinión del Congreso, de la Contraloría y de las mayorías nacionales."²

La coincidencia era casi simétrica con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Renán Fuentealba, que declaraba en la misma fecha:

² *Ibid.*, 11 de abril de 1973.

El gobierno está adoptando una serie de medidas que significan una verdadera agresión, una guerra entablada por él contra la democracia. Estas medidas son los ataques contra el Congreso nacional... y la utilización de resquicios legales, como los decretos de insistencia, para pasar industrias al área social.³

Por su parte, la fracción más decidida de la oposición burguesa, afirma a través del Partido Nacional:

...ha llegado el momento en que el Congreso... declare que el gobierno ha perdido definitivamente su autoridad y la legitimidad de su mandato... nadie está obligado a respetar ni a continuar obedeciendo a una autoridad que no respeta ni obedece las leyes del país.⁴

Todos los indicadores mostraban luces rojas que el gobierno y el sector de la UP partidario de la "vía chilena al socialismo" se negaban irrealistamente a reconocer. Incapaces de cambiar de política, inhabilitados para apoyarse en la energía revolucionaria de las masas, se veían obligados a caminar derechamente al precipicio que ya se encontraba a la vista. Todas las magras ventajas que había permitido la "vía institucional" se mostraban ahora insignificantes frente a la escalada reaccionaria y la imposibilidad de combatir ésta con las armas de la legalidad democrático-burguesa. Lo que había sido fortaleza se transformaba diariamente, cada vez con mayor claridad, en la fuente de la debilidad del gobierno y, aún más, del movimiento popular. Esta situación se transformaría en la larga agonía de un enfermo minado por los "remedios" que se le administraban, hasta el 11 de septiembre.

En el mes de abril se declaran en huelga los trabajadores de la mina de cobre El Teniente, revelando importan-

³ Ibid.

⁴ Ibid., 15 de abril de 1973.

tes fallas en el modelo ideológico de la Unidad Popular, ya que una capa numerosa y centralizada del proletariado, el mejor exponente de lo que pudiera calificarse de aristocracia obrera en Chile, era arrastrado por las consignas, los dirigentes y los planes de la burguesía. Esta huelga, que duraría 77 días, era la primera señal de la corrosión que amenazaba a ciertos estratos populares que aprovechaban la pérdida de autoridad del gobierno para impulsar reivindicaciones de carácter estrictamente economicista.

La oposición mantenía permanentemente y en varios frentes simultáneos la ofensiva contra las posiciones del gobierno: el proyecto de modernización y democratización de la enseñanza, las juntas de abastecimiento y precios, las empresas que estaban intervenidas e integraban el Área de Producción Social, la violencia que desataba la oposición y era achacada a la izquierda, la extensión ilegal del canal de televisión de la Universidad Católica, constituían los principales centros de conflicto precisamente debido a que la burguesía, tanto a través de los mecanismos del Estado que controlaba, como de los medios de comunicación de masas que le pertenecían, mantenía la iniciativa y obligaba al gobierno a una permanente campaña de desmentidos y aclaraciones que lo tornaban extremadamente vulnerable. Detrás de esta situación se encontraba la carencia de un modelo alternativo para el movimiento popular. Obligado a respetar la legalidad burguesa, el Poder Ejecutivo y su administración debían apurar hasta la última gota del veneno que apresuradamente habían etiquetado como remedio, y la derecha hacía uso y abuso de un contexto institucional que la favorecía abiertamente.

A fines de abril las calles de Santiago se transforman en campos de batalla, con centenas de heridos y detenidos provocados por las acciones vandálicas de estudiantes demócrata cristianos y nacionales confundidos con matones alquilados por Patria y Libertad. El 28 de abril, la CUT hace un llamado a los trabajadores para manifestar

en respuesta a las provocaciones derechistas, y un joven obrero comunista es asesinado desde las ventanas de la sede central del Partido Demócrata Cristiano.

En esta atmósfera de extrema tensión se celebra el 10. de mayo, ocasión en la cual no asiste, como el año anterior, el cardenal Silva Henríquez al declarar: "Con profundo dolor les manifiesto que este año no asistiré a la concentración de la CUT... como obispo y como pastor debo ser el centro de unidad de mi pueblo", lo cual lamentablemente no era obstáculo para que el cura Hasbún dirigiera desde el canal de televisión de la Universidad Católica la más increíble campaña antipopular y antigobiernista, confundiendo con el extremo de los fascistas rabiosos. En el mitin del 10. de mayo, el presidente Allende no deja de manifestar, frente a la amenaza de guerra civil que esgrimen abiertamente los "gremios patronales": "No le tememos, sabemos que las fuerzas del pueblo y la lealtad de las fuerzas armadas y de orden nos permiten mirar con tranquilidad."⁵ Pero estos tranquilizadores llamados sólo confundían a los trabajadores, y no a sus enemigos, pues la polarización del país avanzaba como una locomotora por vía despejada, y los que pretendían frenarla o atajarla eran sacudidos fuera violentamente.

Así, el sector "duro", "freísta", de la Democracia Cristiana pasaba a dirigir su partido, presidido, desde el 14 de mayo, por el senador Aylwin quien utilizaba expresiones como "desastre económico", "tendencias totalitarias del gobierno", "nueva burocracia estatal", "combatir el intento de la UP para establecer la dictadura por el estómago", para llegar finalmente a lo sustantivo:

Ante el recrudecimiento de la violencia en nuestro país, la Junta Nacional del PDC reitera la necesidad de que se dé estricto cumplimiento a la Ley de Control de Armas y representa a las FA la conveniencia de que se

⁵ Ibid., 2 de mayo de 1973.

usen todos los instrumentos contemplados en ese cuerpo legal para impedir la existencia o proliferación de grupos armados...⁶

Los partidos populares intentaban defender las posiciones conquistadas, pero no estaban en condiciones de afirmar una alternativa diferente, la legalidad y la institucionalidad burguesas los maniataban, en tanto la tensión aumentaba con nuevos bríos: a mediados de junio continuaba la huelga de los mineros del cobre y se producían nuevamente violentísimos enfrentamientos en las calles de Santiago y otras ciudades del país; los médicos declaraban una huelga; la Cámara de Diputados acusaba constitucionalmente y destituía a los ministros de Economía, Trabajo y Minería, iniciaba el trámite correspondiente para hacer lo mismo con el ministro del Interior y el secretario general de gobierno era declarado reo por un miembro de la Corte Suprema. Simultáneamente, una declaración conjunta de los obispos de Santiago, Valparaíso, Linares, Rancagua, San Felipe y Talca expresaba: "Hay cambios que toman una dirección equivocada cuando son inspirados por concepciones materialistas... Chile parece un país azotado por la guerra."⁷

Una muestra de la extrema debilidad a que las instituciones del Estado capitalista habían llevado al gobierno popular la encontramos en una instrucción de la Secretaría General de Gobierno a los ministros de Estado, subsecretarios e intendentes según la cual

a partir de esta fecha, no se concederán audiencias a parlamentarios, dirigentes o personeros del Partido Nacional... La referida organización política se ha colocado al margen de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la convivencia democrática del país,

⁶ Ibid., 14 de mayo de 1973.

⁷ Ibid., 5 de junio de 1973.

al manifestar que el Presidente de la República ha incurrido en ilegitimidad en el ejercicio de su cargo, y al expresar que los ciudadanos no están obligados a respetar ni obedecer al gobierno. . . Tal declaración es constitutiva de sedición.⁸

Digamos que, ante la sedición, la “pena” de negar las audiencias al partido de la burguesía que alentaba y organizaba en esos mismos días la preparación del golpe de Estado, parece por lo menos un poco desproporcionada. . . pero el gobierno no podía hacer mucho más, dentro de la legalidad, ya que los tribunales y el Congreso no prestaban mucha atención a la ilegalidad de los organismos de la derecha.

El 21 de junio se realiza una gigantesca manifestación convocada en apoyo del gobierno por la CUT, en la cual los llamados a “mano dura con los enemigos”, “trabajadores al poder” y “crear, crear poder popular” indican un cambio importante en la mente de las masas, que empiezan a cuestionar las limitaciones de la institucionalidad en forma extensiva, al mismo tiempo que defienden al gobierno pues comprenden perfectamente que éste es, hasta la fecha, la muralla que impide el desborde revanchista de la burguesía. Es una contradicción apretada como un nudo ciego pues ya hemos mostrado cómo la muralla del gobierno es estrictamente defensiva y sus cimientos van siendo progresivamente socavados a medida que se despliega la táctica de la oposición y que en esa fecha es cada vez más abiertamente golpista, como se comprobaría muy pocos días después. . .

En efecto, el 29 de junio las calles del centro cívico de Santiago se llenaron del pesado rodar de los tanques, del tronar de los cañones y del tableteo de las ametralladoras. El Regimiento Blindado No. 2 se había sublevado en complicidad con el movimiento fascista Patria y Libertad,

⁸ Ibid., 21 de junio de 1973.

y bombardeaba el Palacio de La Moneda y atacaba el edificio del Ministerio de Defensa en una intentona a la que por razones nunca del todo esclarecidas, no se incorporaron otros regimientos comprometidos. En esa ocasión, y mientras aún se desarrollaban los acontecimientos, la oficialidad golpista, especialmente en la Marina y en la Fuerza Aérea deliberaban abiertamente sobre la oportunidad para sumarse a la acción y establecer una junta militar en Chile. Todo parece indicar que la organización sediciosa aún no estaba suficientemente afinada en el ejército, lo que llevó finalmente a las fuerzas golpistas a restarse al intento del 29 de junio. Este fue sofocado con la intervención de algunos regimientos comandados personalmente por el general Prats, que mantendría hasta el final sus convicciones constitucionalistas.

Un revelador incidente es relatado por un observador periodista:

Por la Alameda, hacia Arturo Prat, los grupos de izquierda eran más y más nutridos. Por la calzada del Club de la Unión, enfrente, todos se arremolinaron alrededor de una figura alta: José Tohá, rodeado de tres soldados y encabezando una gruesa columna militar:

— ¡Viva el ministro de Defensa! ¡Viva Tohá!

Todos querían darle la mano o abrazarlo. Pero los tres soldados lo protegían. Un hombre joven se acercó exaltado y, tendiendo las manos a uno de los militares:

— Por favor, regálame ese juguete! . . .

— ¡Mira cómo te lo regalo! —respondió hostil, apuntándolo con su rifle.

Tohá reprendió severamente al que había sido víctima de un entusiasmo incontrolado. [. . .]

En la acera otro grupo, muy numeroso, lanzaba vivas a los militares, a Tohá, al ministro. El general Prats se les acercó:

— Váyanse, por favor, váyanse. Todavía hay muchos

problemas que arreglar. Déjennos trabajar con tranquilidad.⁹

En esta forma, el ministro de Defensa del gobierno popular, militante socialista, y el comandante en jefe, cabeza indiscutible de los militares "constitucionalistas", coincidían plenamente y expresaban con absoluta nitidez las potencialidades y debilidades de su orientación. Cuando se produzca el golpe definitivo, ese soldado ya no estará al lado de Tohá para defenderlo y, en cambio, el civil, el hombre de izquierda que reclamaba un arma, por cierto no la tendrá. Tohá y Prats estaban convencidos de que los enfrentamientos eran un producto exclusivamente interno de las fuerzas armadas, que los trabajadores no tenían nada que hacer, y que debían "dejarlos trabajar con tranquilidad". Cuando llegue el 11 de septiembre, cuando la relación de fuerzas en el interior de los institutos armados se haya volcado definitivamente a favor de los golpistas, ella será en primer lugar producto de la política del Ejecutivo de aislar los aparatos militares del resto de la sociedad, de la lucha de clases, ya que debido precisamente a ese aislamiento operó regularmente el mecanismo de disciplina y jerarquía característico de un organismo estructurado por el Estado capitalista, pues así se impidió la ligazón y solidaridad de los trabajadores en lucha contra la burguesía, con los soldados, suboficiales y sectores de oficiales que tenían vínculos de clase e intereses materiales comunes. Más aún, cuando llegue la hora del quiebre definitivo de la institucionalidad, los trabajadores y los militantes de izquierda no podrán luchar pues tendrán las manos vacías frente al operativo represivo. Y la responsabilidad corresponde a una política determinada que idealizó ciegamente, en los días en que la presencia golpista se afirmaba abiertamente en todos los

⁹ Periodista José Cayuela, en la revista *Chile Hoy*, 6 de julio de 1973.

cuarteles del país, el supuesto "profesionalismo" de las FA.

El fracasado "tancazo" del 29 de junio, lejos de constituirse en la ocasión para golpear, desarmar o al menos debilitar al sector "institucionalista" de las FA marcó, por el contrario, el inicio de una aceleración a fondo en la marcha confabulatoria que organizaban todos los componentes reaccionarios: políticos, económicos y militares.

Patria y Libertad, el movimiento fascizante que confesó su compromiso con los aprendices de golpistas, declaró que estaban comprometidos en el mismo "varias otras unidades militares que previamente nos habían manifestado su respaldo". Sin embargo, el Parlamento dirigido por Frei, que se presentaba como la contraparte institucional frente a la acción "desquiciadora" del Ejecutivo, le negó a éste la ley que establecía el estado de sitio, "lo que hubiera permitido disponer de elementos para asegurar una investigación profunda del atentado subversivo". Simultáneamente, el 3 de julio, la Cámara de Diputados, gracias a la mayoría formada por nacionales y demócrata cristianos, suspendió de su cargo al ministro del Interior; ¡apenas 5 días después del frustrado golpe militar! La reacción no disimulaba el desprecio que le inspiraban las instituciones vigentes y arremetida, frente a un gobierno en extremo vulnerable que se mantenía en una pasividad casi total.

Pero si el gobierno se encontraba sometido por el peso de la legalidad, no le ocurría lo mismo a los trabajadores que, como respuesta al "tancazo", ocuparon gran cantidad de empresas y desarrollaron con nuevos ímpetus las organizaciones de poder popular. Superando ampliamente las directivas de los partidos de izquierda, los obreros en las fábricas, los pobladores en sus sitios de vivienda, los mineros, los campesinos en el centro y sur de Chile, profesores, trabajadores de la salud, estudiantes, se lanzaron con renovadas energías a fortalecer sus nuevas estruc-

turas: asistimos al desarrollo de los comandos comunales, a la actividad renovada de los consejos campesinos, al afianzamiento e inicio de la coordinación de los cordones industriales. En la base misma, los sectores más conscientes y avanzados de diversas capas populares comprenden que ahora el enfrentamiento es inevitable, que se trata de ganar la suma del poder o perder la totalidad de las conquistas alcanzadas.

Este no era el análisis que hacían el gobierno y la cúpide de la Unidad Popular. Inmediatamente después del fracasado golpe, asume un nuevo ministerio, encabezado por un funcionario que había desempeñado importante cargo en la administración del conservador Jorge Alessandri y en la de Eduardo Frei. Se trataba de un gabinete cuya misión fundamental era facilitar el "diálogo con la Democracia Cristiana y otorgar el máximo de garantías en ese sentido. Esta era la estrategia, la única estrategia del gobierno, compartida principalmente por el Partido Comunista:

Pero cabe diálogo en el seno de la mayoría ciudadana. Hay gente que no está en el gobierno, pero que tampoco está por derribarlo, que está convencida que no se debe volver al pasado, que los cambios son necesarios y que la guerra civil debe evitarse. Entre los que así piensan, sí que cabe el diálogo y, eventualmente, uno que otro entendimiento. . .¹⁰

Estos llamados dirigidos al principal partido de oposición estaban destinados a caer en el vacío; en la misma fecha, las tres ramas de las FA desencadenaban una ola de violentos allanamientos en Santiago, mientras otras ciudades, como Punta Arenas y Osorno, adquirían características de territorio ocupado por un enemigo de la población.

¹⁰ Luis Corvalán en el Teatro Caupolicán, el 7 de julio de 1973.

En los mismos días, con el apoyo demócrata cristiano, se comenzaba a configurar un nuevo paro empresarial similar al de octubre, con la participación de los transportistas, de los médicos y de algunos sindicatos marítimos.

La posición del Partido Socialista era más matizada. En tanto Altamirano rechazaba "categóricamente todo diálogo con partidos y directivas reaccionarias, contrarrevolucionarias", refiriéndose con ello a los esfuerzos del gobierno para iniciar una nueva etapa de conversaciones con el Partido Demócrata Cristiano, el subsecretario socialista declaraba:

Nosotros somos parte del gobierno y por eso no podemos sencillamente, en su caminar en un momento determinado, quitarle los mecanismos para caminar. Somos también base de sustentación de él. Hay una diferencia de criterio sobre la perspectiva pero no hay oportunismo en el hecho que nosotros digamos que esa perspectiva se desarrolle. No consideramos que en un gobierno como el nuestro, pluripartidista, donde no puede predominar el criterio de una colectividad y donde tampoco puede un partido, por así decirlo, colocar al resto y al gobierno en una interdicción, sea oportunismo decir no, no creemos que sea oportunismo que la mayoría disponga lo que hay que hacer.¹¹

En otras palabras, la directiva del Partido Socialista reclamaba pero, una vez más y en las horas más dramáticas del proceso chileno, terminaba sometiéndose a las políticas y a las tácticas del Partido Comunista. Se trataba ni más ni menos que del destino de la revolución y de los trabajadores chilenos y, en esas circunstancias, la dirección socialista consideraba que la mayoría (?) debía disponer de todas las herramientas para continuar con sus fracasados intentos conciliadores.

¹¹ Adonis Sepúlveda, en *Chile Hoy*, 10 de agosto de 1973.

En la misma fecha, el MIR expresaba una posición similar a la que planteaban el MAPU, la Izquierda Cristiana y la enorme mayoría de las seccionales y regionales del Partido Socialista:

No es necesario dar un paso atrás para dar dos pasos adelante. La clase obrera y el pueblo no necesitan hoy una tregua o un respiro. Las clases patronales sí que necesitan de la tregua para el desarrollo de su táctica de emplazamiento. Nada sería hoy más peligroso y más suicida que abandonar las posiciones tomadas y abrir la tregua. Eso significaría, se quiera o no se quiera, se diga o no se diga, desmoralizar, desorganizar y dividir a la clase obrera y al pueblo; hacerla retroceder y desde allí implacablemente las clases patronales le caerían con toda su fuerza sanguinaria. . . .¹²

Efectivamente, en los primeros días de julio, si bien la relación en el interior de la oficialidad se vuelca netamente a favor de los golpistas y convergen los esfuerzos de los sectores influidos por demócrata cristianos de un lado, y nacionales y Patria y Libertad por el otro, se produce también un hecho nuevo: se inicia la deliberación a nivel de la suboficialidad y soldados, que en determinadas partes se resiste a sumarse a los preparativos reaccionarios.

Se trataba en esa fecha de abrir todas las compuertas que impedían la destrucción de la legalidad por parte de las fuerzas revolucionarias, ya que esa misma legalidad estaba siendo destruida abiertamente por los representantes de la burguesía; y para ello durante el mes de julio existieron condiciones que no aseguraban un desarrollo exitoso pero sí lo posibilitaban en condiciones infinitamente superiores a las que finalmente se dieron. En esas circunstancias, el gobierno y la dirección de la UP fueron fieles —incluso ante el abismo que se abría como conse-

cuencia del camino recorrido, de la táctica seguida— a su posición de respeto a la institucionalidad burguesa y al pretendido “profesionalismo” de las FA.

También es necesario señalar que, para hacer frente al modelo desarrollado por la derecha, que se aprestaba a aplastar al movimiento popular, éste se encontró en las horas decisivas en la más completa desorientación y abandono.

Los trabajadores carecieron del instrumento fundamental: de la organización política que unificara sus luchas, les diera una perspectiva global, nacional, y condujera teórica y prácticamente a la realización de todas las medidas de carácter material que eran indispensables. Los sectores de la izquierda revolucionaria revelaron en esa fecha toda su debilidad, tanto orgánica como política, para generar una dirección que fuera la vanguardia del movimiento obrero.

La izquierda socialista se confirmó como una “actitud”, una tendencia vastamente difundida en el seno de su partido, pero incapaz de impulsar acciones y líneas al margen de la dirección oficial y mucho menos de forzar a ésta a asumir las posiciones mayoritarias entre los militantes. Su praxis consistía en la labor dispersa de quienes se habían volcado al desarrollo de las diversas expresiones de poder popular, pero este activismo no correspondía a un plan de conjunto ni comprendía un centro que lo coordinara y concentrara sus energías. La izquierda socialista se agrupaba fundamentalmente alrededor de la mayor parte de los regionales de su partido, pero estos organismos dirigían su acción solamente en el marco geográfico correspondiente, pues no existía coordinación entre los distintos comités regionales que presentaban posiciones teóricas estratégicas básicamente diferentes al proyecto mayoritario de la dirección nacional del Partido Socialista.

Por su parte, el MIR y el MAPU tenían un escaso desarrollo partidario, no se encontraban con una influencia de masas apreciable, no estaban implantados en los

¹² Miguel Enríquez, en *Chile Hoy*, 6 de julio de 1973.

medios obreros y carecían de dirigentes salidos de sus filas. Tampoco estas organizaciones presentaban un proyecto político coherente e integrador que fuese capaz de cohesionar a los trabajadores en torno a su línea.

Así, la izquierda revolucionaria se encontraba dispersa entre varias organizaciones que no estaban en condiciones, separadamente, de presentar un plan y un programa alternativo a los de la reacción y del reformismo. En el fondo de esta situación se encuentra la sujeción, en el seno del movimiento de masas, de las posiciones de la izquierda revolucionaria a las del Partido Comunista, aliado al reformismo pequeñoburgués. A través de la historia del proceso hemos observado a distintos sectores, pertenecientes en particular al Partido Socialista, que pretendían impulsar, radicalizar, apresurar el ritmo, finalmente, de un programa y de un proyecto que era puesto en práctica por otras fuerzas, pero que jamás levantarán ante las masas, para la discusión por los trabajadores: un plan elaborado táctica y estratégicamente, que abarcara todos los problemas de la sociedad. En consecuencia, ante la carencia de ese proyecto, estos sectores se limitaban a la crítica y al rechazo de las políticas del gobierno y de la dirección de la UP, pero no disponían de un común denominador que posibilitara su unificación y la disputa de la dirección del movimiento popular. Todo este fenómeno está inextricablemente ligado a la historia del Partido Socialista, de sus ambigüedades, de la mezcla en todos sus planos de diferentes tendencias, de la inexistencia, finalmente, de una tendencia que se opusiera consecuentemente a la línea del gobierno, que elaborara sus dispersas tácticas y presentara un modelo firmemente alternativo a la corriente reformista que, por otra parte, siempre terminaba claudicando ante el Partido Comunista.

Por estos motivos, la izquierda revolucionaria no pasó jamás de ser una tendencia, de corresponder a amplios sectores del movimiento popular, de formar parte de la masa trabajadora, de existir principalmente en el interior de

la Unidad Popular, aunque también fuera de ésta; pero sin lograr madurar en una concepción única, en un programa alternativo y globalizador, sin alcanzar la coordinación de sus fuerzas y mucho menos de reclamar efectivamente la conducción del movimiento de masas y entregarle a éste una orientación definitivamente diferente. La izquierda revolucionaria se limitó lúcidamente a contestar, responder, criticar las concepciones de la "vía político-institucional", pero no levantó un cuerpo de proposiciones tácticas y estratégicas que conformaran un proyecto totalizador de transformación de la sociedad, y esto también se tradujo en la incapacidad para crear un centro de contenido leninista que disputara la conducción del proceso. En última instancia, la participación de las tendencias de izquierda revolucionaria en el interior del proceso conducido por la dirección de la UP y el gobierno se correspondió con la supeditación de estas corrientes. Esto no era en absoluto inevitable, desde octubre de 1972 la maduración de la vanguardia de la clase obrera presentaba las condiciones para su desarrollo y crecimiento orgánico; sin embargo, las consignas de "defensa del gobierno" y "unidad de los trabajadores", que eran ciertamente correctas y adecuadas con determinado contenido, se convirtieron en la defensa y unidad en torno a una línea que fue responsable en definitiva del trágico resultado.

La construcción de un partido revolucionario fue la tarea inconclusa de la clase obrera chilena y el eslabón más débil de la cadena forjada por los trabajadores para transformar la sociedad. La consecuencia de esto es que el proyecto esencialmente dirigido por el Partido Comunista se llevó adelante con un gran margen de autonomía, solamente limitado tácticamente en el campo de la izquierda por la dinámica de radicalización del movimiento de masas. Así, cuando se inicia el periodo decisivo después del 29 de junio, las expresiones más avanzadas del proletariado urbano se agrupaban en los cordones industriales, que intentarán crear prácticamente con las manos

vacías una alternativa de poder. La inexistencia de un partido que hubiese generalizado sus experiencias e impulsado y reunido a los trabajadores más conscientes para una política semejante —de carácter global y totalizador— impidió que el poder popular tomase el vuelo necesario.

Igualmente, en el plano ideológico se produjo en definitiva, en los hechos, la aceptación de todos los modelos de contenido no dialéctico, no leninista, propugnados e implementados por el gobierno y por el Partido Comunista, para ordenar y trazar el tránsito de la sociedad chilena hacia el socialismo. Así fueron aceptadas por amplias masas las concepciones de utilización de la institucionalidad democrático-burguesa que implicaban su sujeción y encuadramiento a lo que ésta establecía. Las corrientes de izquierda revolucionaria no fueron capaces de levantar y perseverar en una proposición ideológica distinta que significara el convencimiento y organización de la vanguardia de los trabajadores en torno a la necesidad de la destrucción del Estado capitalista. Expresiones teóricas existieron, pero éstas no tomaron cuerpo coherente en una formulación global alternativa y aún menos en una táctica diferente. Incluso, podemos afirmar que, en alguna medida y durante un cierto periodo, sectores de izquierda del Partido Socialista parecieron confundidos y convencidos por las posibilidades de avanzar ampliamente dentro de dicha legalidad y, aunque convencidos del inevitable enfrentamiento, consideraron que éste correspondería a una etapa aún lejana. Cuando se produce el intento del “tancazo”, se da una afiebrada actividad y búsqueda de soluciones, perspectivas, tácticas, organización y medios. Pero un pueblo sin tradiciones de lucha armada, imbuido en el respeto a las instituciones estatales por décadas, no solamente por la burguesía sino también por la izquierda, desalentado por una realidad que lo golpeaba subitamente, y que carecía de una dirección política solidamente organizada que le planteara

una salida insurreccional, se encontró derrotado y abandonado con anterioridad al 11 de septiembre.

El mes de julio transcurre marcado por la brutal acción de los militares que desplegaban su potencia para amenazar principalmente a la vanguardia de los trabajadores organizados en los cordones industriales, al mismo tiempo que procedían a desplazar a los oficiales “constitucionalistas” y destruían, mediante el arresto y la tortura, la resistencia en ciernes de la suboficialidad en la Marina. Simultáneamente, con la precisión de una máquina, la reacción utilizaba todos los mecanismos institucionales para legitimar el golpe de Estado que se avecinaba, y los “gremios” controlados de la pequeña burguesía desataban la escalada para provocar el caos y decidir la intervención armada. El 25 de julio se inicia un nuevo paro de los transportistas que se sumaba a una ola de atentados y sabotajes desencadenados por Patria y Libertad, y de movimientos de huelga de diversas asociaciones de médicos y otros profesionales y técnicos.

Mientras tanto, con una obstinación a toda prueba, el gobierno había iniciado un nuevo “diálogo” con la Democracia Cristiana desde el 26 de julio, en la que ésta última establecía condiciones draconianas. Así, *El Mercurio* de esa fecha informaba de las bases “intransables” impuestas por la DC:

- 1] Restablecimiento completo de la institucionalidad, con vigencia plena de las normas constitucionales y de la convivencia democrática.
- 2] Promulgación de las reformas constitucionales pendientes por la discrepancia del Ejecutivo con el quórum de la mayoría absoluta que sostienen los partidos de oposición.
- 3] Devolución de las industrias usurpadas a raíz de las órdenes de la CUT.
- 4] Intensificación de la campaña para obtener el desarme de grupos políticos, sindicales o civiles.
- 5] Garantía para el cumplimiento de los cuatro puntos mencionados con la organización de un gabinete.

te con representación institucional de las fuerzas armadas.¹³

En resumen, la DC pretendía el sometimiento del Poder Ejecutivo al Parlamento, donde los intereses de la burguesía estaban mayoritariamente representados, dirimir definitivamente en favor de ésta el conflicto en torno a la gran propiedad industrial, el aplastamiento del movimiento popular, todo lo anterior con la presencia activa de las FA controlando al presidente desde el gabinete. Dos días después, el jefe de la Democracia Cristiana, Aylwin, aclararía aún más su pretensión de poner al frágil gobierno de rodillas, al dirigirse a Allende:

V.E. afianzaría su autoridad constitucional y preservaría la estabilidad institucional de la República si constituyera un Ministerio con participación institucional de las FA con poderes suficientes, en mandos superiores y medios, para asegurar el efectivo cumplimiento de las decisiones de V.E. dentro del marco de la Constitución y las leyes, aplicadas a todos por parejo.¹⁴

Esto es, la DC intentó aplicar en Chile una receta similar a la que en esa fecha sufría Uruguay, en que el presidente constitucional se había convertido en el títere de los militares reaccionarios. La pretensión de la DC fue calificada de "golpe blanco" y, sin aceptarla, se constituyó un nuevo gabinete, con fecha 9 de agosto, que mantenía la puerta entreabierta para continuar las conversaciones, ya que en él se incluían nuevamente los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros. Se encargaría de bloquear estas posibilidades de entendimiento el propio presidente del Senado, E. Frei, quien declaraba:

¹³ *El Mercurio* 31 de julio de 1973.

¹⁴ *Ibid.*, 3 de agosto de 1973.

Este gobierno ha llevado al país a una catástrofe, y ahora, con un golpe de habilidad y audacia, utiliza a las FA para que se hagan cargo de este desastre y tengan que afrontar las consecuencias de una política funesta, en la cual no les cabe responsabilidad alguna.¹⁵

En esa fecha, todos los mecanismos preparatorios del golpe estaban funcionando aceleradamente como un engraje bien aceitado: las bandas de la Juventud Nacional asolaban el centro de la capital con la participación activa de los estudiantes secundarios dirigidos por la Democracia Cristiana, los actos de terrorismo y sabotaje aumentaban diariamente; el paro de los transportistas desarticulaba totalmente la marcha del país, se iniciaban huelgas en el comercio; la casi totalidad de los médicos y otros profesionales iniciaban un movimiento indefinido, y los militares reforzaban su campaña de amedrentamiento y represión de los trabajadores a través de todo el territorio.

Durante este último periodo, el movimiento popular intentaba desesperadamente conservar su fortaleza y generar nuevos centros de poder alternativos frente a la embestida reaccionaria. Pero las vacilaciones de los partidos de izquierda y la conciliación demostrada por el gobierno no habían dejado de hacerle mella. No se puede jugar impunemente con la voluntad y energía de las masas: las relaciones de fuerza en las coyunturas definitorias son extremadamente fluidas y cambiantes. La clase obrera no se encontraba aislada: en torno a ella se aliaban amplísimos sectores de pobladores, campesinos, funcionarios de la administración pública, empleados del sector privado; pero la fortaleza e iniciativa demostrada por los trabajadores inmediatamente después del "tancazo" se había desgastado y diluido inútilmente en una importante proporción, debido a todas las maniobras, que no impulsa-

¹⁵ *Ibid.*, 18 de agosto de 1973.

ban su actividad sino que, por el contrario, pretendían encontrar una salida mediante acuerdos superestructurales con el enemigo: cambios de ministerio que buscaban ofrecer “garantías democráticas” a quienes no tenían las menores intenciones democráticas, conciliar intereses sociales que eran inconciliables e intentar una “salida política” precisamente con quienes exigían la preponderancia militar en la conducción del país.

A fines de agosto, la táctica coincidente y convergente de demócrata cristianos y nacionales había logrado cuidadosamente todos sus objetivos: cuestionar ampliamente la legitimidad y legalidad del gobierno, generar un movimiento de masas en apoyo a su política sediciosa, debilitar la fuerza y consistencia de los trabajadores agrupados tras el gobierno popular y acentuar profundamente la relación favorable a los golpistas en las tres ramas de los institutos armados.

En efecto, con fecha 23 de agosto, Carlos Prats renuncia a sus cargos de comandante en jefe y ministro de Defensa:

...Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno constitucional.¹⁶

Lo cierto es que la renuncia de Prats no sirvió para los objetivos expuestos en la misma. Existían suficientes “pretextos” para la próxima acción de los golpistas. El sucesor de Prats sería el general Pinochet: así se completaba un ciclo en el interior de la institucionalidad militar,

¹⁶ Revista *Chile Hoy*, 31 de agosto de 1973.

pues los generales “constitucionalistas” habían impedido la deliberación entre la suboficialidad y la tropa y habían desanimado a los oficiales leales al gobierno, al mismo tiempo que fracasaban en su intento de mantener la disciplina por parte de los sectores “institucionalistas”, que en esa fecha se preparaban casi desembozadamente a asumir el poder.

La salida de Prats selló la derrota militar del gobierno con anticipación al golpe que encontraría en sus filas una resistencia limitada, y disminuida, y abriría las puertas al revanchismo reaccionario y totalitario que se descargaría con saña sobre los trabajadores y los militantes de izquierda.

Los acontecimientos se precipitaban. La agonía del gobierno llegaba a su fin. La situación de caos generalizado, provocado por la oposición política y los “gremios” de la burguesía, mantenía al país semiparalizado ya que los obreros, pobladores, campesinos y otras capas populares se encontraban indefensos ante la embestida militar que con pretexto de la Ley de Control de Armas, se llevó a cabo hasta los últimos días de gobierno constitucional.

El 4 de septiembre, el consejo nacional del Partido Demócrata Cristiano acordaba presentar una acusación constitucional contra todos los ministros de Estado para destituirlos conjuntamente. El mismo día, se realizaba la conmemoración del tercer aniversario del triunfo popular, con una inmensa manifestación de más de un millón de chilenos en la capital, y Salvador Allende pronunciaba extrañas y patéticas palabras:

Trabajadores de Chile: el invierno está terminando y aparecen ante nosotros horizontes económicos promisorios. En los últimos años recibimos el castigo del bajo precio del cobre en el mercado internacional. Hoy alcanza cifras altas que nos proporcionarán las divisas indispensables para importar materias primas y bienes de consumo. La producción de Chuquicamata en el

mes de agosto ha sido la más elevada de su historia. Las siembras de este invierno duplican la superficie sembrada el año pasado. Tenemos que repetirlo en las siembras de primavera. De este modo, la mayor producción minera, agrícola e industrial, la organización y capacidad creadora de los trabajadores, lograrán detener el año próximo la inflación y el desabastecimiento. . .

Los hechos probaron que en este enfoque se encontraba una concepción equivocada de la vinculación entre los procesos económicos, sociales y políticos. Ya anteriormente la campaña de la "Batalla de la Producción" inspirada por el Partido Comunista no había logrado sus objetivos: en efecto, los trabajadores se esforzaron más que nunca y la producción aumentó en muchos planos: recordemos que a fines de 1972, la producción del área estatal había aumentado un 15% con respecto al año anterior. Sin embargo, el desabastecimiento y la inflación jamás lograron ser detenidas por esos medios, pues respondían por una parte a la búsqueda de la tasa más alta de ganancia en las condiciones específicas del proceso económico que vivía Chile, y por otra parte a una intención política de los propietarios del capital.

En los momentos que las palabras de Allende fueron pronunciadas, ya nada de ello tenía sentido: la concentración y voluntad multitudinaria del pueblo eran absolutamente insuficientes para detener la determinación y poder de las fuerzas armadas de la reacción.

El 11 de septiembre, a las ocho horas de la mañana, los radios comienzan a transmitir el siguiente comunicado:

Teniendo presente: 1] La gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país, 2] La incapacidad del gobierno para controlar el caos, 3] El constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil; las fuerzas

armadas y carabineros deciden: 1. El Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su cargo a las fuerzas armadas y carabineros de Chile. 2. Las FA y carabineros están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la libertad de la patria y evitar que nuestro país caiga bajo el yugo marxista, y buscar la restauración del orden y la institucionalidad. 3. Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha, no sufrirán modificaciones en lo fundamental. 4. La prensa, radio-difusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante, de lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre. 5. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes.¹⁷

Ese mismo día, combatiendo personalmente a las fuerzas del ejército y la aviación que atacaban el palacio de La Moneda, fallecía Salvador Allende, presidente constitucional de Chile, asesinado por la institucionalidad que había respetado hasta el final, convirtiéndose en esa hora dramática en la negación y superación dialéctica del proceso que él había encarnado:

Ante estos hechos sólo me cabe decirles a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregaremos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.¹⁸

¹⁷ *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1973.

¹⁸ Citado por la revista *Arauco*, n. 1, julio de 1974.

Las horas más difíciles de toda la historia comenzaban trágicamente para el pueblo de Chile, que finalmente se encontró desarmado material, política e ideológicamente, como resultado de la línea aplicada por los sectores mayoritarios en la dirección de la Unidad Popular.

¿UNA VIA CHILENA AL SOCIALISMO?

El programa de la Unidad Popular fue el resultado del compromiso de distintas tendencias, entre las cuales cabe destacar fundamentalmente al Partido Comunista cuyo proyecto se expresaba en las tesis del Frente de Liberación Nacional, la tendencia reformista pequeñoburguesa que tenía particular fuerza en sectores de gobierno, y una posición obrera revolucionaria que correspondía a una parte del Partido Socialista, del MAPU, de la IC, y que en determinados momentos se aliaba al MIR.

Este programa, pese a su ambigüedad en ciertos puntos y particularmente en el problema del poder, caracterizaba correctamente la sociedad chilena y los pasos necesarios para desarrollar una política revolucionaria con la presidencia de la República al servicio de la lucha popular y de una estrategia socialista. Sin embargo, desde los primeros meses, las tendencias reformistas se aliaban y se sometían al proyecto gradualista del Partido Comunista, otorgándole un neto predominio en el seno de la dirección de la UP y del gobierno, e implementando una línea no revolucionaria y en contradicción con puntos esenciales del programa común. En consecuencia, la táctica seguida, en particular desde junio de 1972 cuando se realiza el cónclave de Lo Curro, será de la responsabilidad de un sector de la Unidad Popular que acometió un proyecto histórico que fracasó, en circunstancias en que disponía de todos los prerequisites anteriormente planteados como necesarios para llevarlo a cabo.

La llamada "vía chilena al socialismo" o "vía político-institucional", que tiene su antecedente en la estrategia diseñada por el Partido Comunista en su X Congreso, celebrado en 1956, fue puesta en práctica y desarrollada, bajo la dirección de la alianza de esta organización política

con los sectores reformistas de dentro de la Unidad Popular, durante todo el periodo comprendido entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973, puesto que las tendencias revolucionarias no tuvieron responsabilidad en los tres aspectos principales que sellaron el fracaso del gobierno: 1] El proyecto de alianza de clases, 2] La política hacia las FA, 3] La utilización del aparato institucional.

El proyecto de alianza de clases se encontraba explicitado en el Programa Básico de Gobierno de la UP, especialmente en el plano de la “nueva economía”, o “economía de transición”, en la cual se contemplaba, junto a una “área estatal dominante”, otro sector mixto que debía combinar los capitales del Estado con los particulares, y finalmente, un Área de Propiedad Privada que debía comprender la inmensa mayoría de las 30 500 industrias existentes en Chile, la casi totalidad de las empresas comerciales y todos los predios agrícolas inferiores a las 80 hectáreas (de riego básico). Asimismo, se consideraba que “el Estado procurará las asistencias financieras y técnicas necesarias a las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional...”; en consecuencia, el programa propugnaba y garantizaba la permanencia y desarrollo de la propiedad y los intereses de los pequeños y medianos propietarios. Además de estas formulaciones en el plano económico, el programa también pretendía establecer la alianza de clases del proletariado y otras capas de trabajadores no propietarios con la pequeña y mediana burguesía a través de la participación orgánica del Partido Radical, del Partido Social Demócrata y de la Acción Popular Independiente que las representaban en la Unidad Popular y en el gobierno. Asimismo, las reiteradas intenciones de respetar integralmente el sistema cívico constituían una plena garantía de carácter político para asegurar la expresión y permanencia de un importante sector de la burguesía en la sociedad chilena.

Por otra parte, la alianza de clases entre trabajadores y

burguesía no constituía un hecho absolutamente nuevo, puesto que desde 1938 se habían sucedido diversos gobiernos con la participación de los partidos que representaban a las fuerzas mayoritarias organizadas de las clases explotadas. Pero se daba una importante diferencia entre el Frente Popular de 1938 y la Unidad Popular de 1970: este último proyecto se llevaba a cabo bajo la hegemonía de los partidos obreros y de un militante socialista en la presidencia de la República, y con la perspectiva explícita de iniciar la construcción del socialismo. Esto es, las anteriores alianzas se habían desarrollado bajo la dirección de una fracción de la burguesía, en tanto que la última se pretendía realizar mediante una coalición conducida fundamentalmente por el Partido Comunista aliado a sectores reformistas pequeñoburgueses y con la presencia en su seno de una importante tendencia revolucionaria.

Este proyecto de alianza tenía dos aspectos: económico y político. En el plano económico la alianza pareció factible durante todo 1971 y parte de 1972, en que el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores provocaba también el crecimiento del volumen de utilidades de pequeños y medianos comerciantes, agricultores e industriales. Sin embargo, aquí se produjo una situación inesperada que derrumbó las ilusiones: súbitamente se desataron en Chile la inflación, el acaparamiento y la especulación. Evidentemente, una de las razones que explicaban este fenómeno era que una demanda mayor que la ofrecida por el mercado, y con las leyes del sistema capitalista permaneciendo plenamente vigentes, debía provocar los resultados consiguientes. Todos los sectores propietarios, grandes, medianos y pequeños, bajo la conducción del capital financiero y debidamente estimulados por los *mass media* de la burguesía, respondieron intentando obtener la tasa de ganancia más alta y ésta la encontraban en el acaparamiento y consiguiente especulación de todos los artículos de consumo. Chile se convirtió en un inmenso mercado corrompido donde todos los que disponían del

más insignificante capital traficaban con las necesidades y aspiraciones de los trabajadores. Las inversiones necesarias para aumentar la producción conforme a las ingenuas esperanzas de los técnicos de la Unidad Popular no se habían producido: las utilidades del sector privado eran desviadas al mercado negro, y el Estado chileno, golpeado con el bajo precio del cobre, con el bloqueo de los organismos financieros del imperialismo y con una demanda interna de consumo de artículos de importación crecientemente en aumento, se vio también imposibilitado para realizar las inversiones planeadas.

La economía chilena, mantenida en plenitud dentro del marco de la oferta y la demanda capitalista, se despeñó en una acelerada desarticulación a la cual solamente una brutal limitación del poder adquisitivo de los trabajadores podía frenar dentro del sistema.

Otro importante factor contribuía a impedir la alianza diseñada: la profunda desconfianza que le producía a la mediana burguesía, tanto la capacidad como la voluntad del gobierno y de la UP para mantener el movimiento popular dentro de los cauces “legales” y de las limitaciones producidas por sus dirigentes. En efecto, la alianza con las “clases medias” fue intentada reiteradamente durante el gobierno, para lo cual se manifestó una voluntad de legislar y de alcanzar acuerdos con la Democracia Cristiana en repetidas ocasiones. Después de las elecciones de abril de 1971, el gobierno desaprovecha la posibilidad de acelerar el proceso de realizaciones contemplado en el programa precisamente con el objeto de “no asustar a las clases medias” y el Partido Comunista rechaza la proposición de plebiscito. En abril y particularmente en junio de 1972, coherentemente con cambios de conducción en el gabinete y acuerdos para “consolidar” la situación, esto es, para detener la formación del Área de Producción Social, se llevan a cabo conversaciones con la Democracia Cristiana que prácticamente habían llegado a plenas coincidencias, las cuales fueron detenidas en el último minuto

por Frei, “patrón” de esa colectividad. A continuación del triunfo popular en octubre, que termina con la derrota de los “gremios patronales”, el gobierno muestra nuevamente su disposición al formar un ministerio con militares en cargos fundamentales y enviando al Parlamento el “proyecto Millas” que establecía amplias garantías en la propiedad a los intereses de la burguesía. Las conversaciones se mantuvieron durante todo 1973; en ellas el gobierno buscaba la convergencia con la Democracia Cristiana entendiéndole que ésta representaba a las “clases medias” sin que lograra jamás llegar a acuerdos. Después del “tancazo” de junio de 1973, el gobierno incluso intenta integrar en el gabinete al militante demócrata cristiano Castillo Velasco, al cual su partido no le dio autorización. Finalmente, en el mes de agosto, cuando la tensión llegaba a sus niveles más altos, el gobierno y la UP nuevamente intentan el “diálogo”, el entendimiento con una fracción de la burguesía, y es también nuevamente Frei el encargado de impedir esos acuerdos.

En resumen, la alianza del Partido Comunista con el reformismo pequeñoburgués, tuvo tanto en el gobierno como en la UP, las manos totalmente libres para llevar adelante su política de entendimiento con las “clases medias” tanto en los planos económico como político, y su fracaso debe ser atribuido al conjunto de su estrategia.

La política hacia las fuerzas armadas fue, tan netamente como la anterior, de la entera responsabilidad del sector predominante en el gobierno y la UP, que llevó adelante la tesis del “profesionalismo” y respeto a la Constitución por parte de las mismas hasta el último minuto. Asimismo, las decisiones sobre el ingreso de los militares a responsabilidades de gobierno y administración fueron parte de su táctica de fortalecer los sectores “patriotas” y “constitucionalistas” y es tardíamente que el fracaso de esta política se hace evidente, pero en esa fecha lo será con todo el dramatismo inherente a la represión brutal y generalizada. El intento de afirmarse en

los militares después de la derrota de la seminsurrección de la burguesía en octubre no sirvió para poner en práctica el proyecto de alianza de clases, y en cambio produjo un debilitamiento de los militares "constitucionalistas" que fracasaron en el camino de asegurar la "paz social". A medida que el rol de los militares se hacía más importante, el gobierno no podía hacer otra cosa que reafirmar los mitos tradicionales de la ideología dominante y, en los días después del "tancazo", el diario comunista *El Siglo* publica una página entera defendiendo las glorias del ejército. Simultáneamente se agitaba la consigna "No a la guerra civil", la cual finalmente se impondría terminando de desmóvilizar a los trabajadores y dejando librada la resolución de la lucha, del destino del proceso revolucionario chileno, a la relación de fuerzas interna de los institutos armados. Como corolario de toda esta línea, cuando surge la resistencia de los suboficiales y marinos en la armada, será precisamente el gobierno el encargado de desalentar su lucha contra los golpistas. Los llamados a la desobediencia por parte de sectores de la Unidad Popular, concretamente del Partido Socialista y del MAPU, así como del MIR, son tardíos y no lograrán su objetivo; cuando se producen, los reaccionarios ya habían tenido todo el tiempo necesario para unificar la casi totalidad de los aparatos armados tras la preparación del movimiento que se desataría el 11 de septiembre.

La política del gobierno y del Partido Comunista para mantener una fracción de las FA en las posiciones "constitucionalistas" se revelaría como un completo fracaso, al mismo tiempo que las vacilaciones y sujeción a su línea impidieron el desarrollo de una división más profunda, cuando se realizan los llamados de la izquierda revolucionaria a los militares. Así se confirmaría nuevamente la experiencia histórica de la imposibilidad de luchar contra unas FA modernas y la obligatoriedad de dividir las para alcanzar el éxito en los objetivos revolucionarios por el poder, política que jamás intentó el gobierno, lo cual

condujo en cambio, rectilíneamente, al desarrollo de la violencia fascistizante después de pasar por las experiencias previas del *putsch* del 29 de junio y de la oleada de allanamientos con pretexto del cumplimiento de la Ley de Control de Armas. Las FA, es cierto, se mostraron divididas durante un largo periodo, pero lo estuvieron entre "constitucionalistas" e "institucionalistas", es decir, entre reformistas y golpistas. Y la línea del gobierno condujo derechamente al afianzamiento de las posiciones reaccionarias hasta que los "constitucionalistas" eran ya tan débiles que fueron barridos sin dificultad. Es la historia de la política militar del gobierno y del sector predominante de la Unidad Popular.

La utilización de las instituciones del Estado democrático burgués chileno demostró tempranamente las limitaciones que ofrecía para el cumplimiento del Programa de la Unidad Popular. Si bien permitió la llegada de los partidos obreros al interior del sistema estatal, "legitimó" en términos institucionales sus reivindicaciones y entregó al movimiento popular importantes herramientas, lo cierto es que también desde el inicio encerró su desarrollo en el anillo de hierro de un cuerpo de leyes, disposiciones y mecanismos que estaban planificados y elaborados precisamente para el sometimiento de las clases dominadas a la hegemonía de la burguesía. La reacción no vaciló en sobrepasar y hacer caso omiso de la Constitución en varias oportunidades, a través de la acción del Parlamento (reforma de la Ley Fundamental por simple mayoría, ignorancia del Tribunal Constitucional), del Poder Judicial (reducción de la pena a Viaux a dos años, declaración de quiebra de la juridicidad en Chile) y Contraloría (interpretación de la ley al llamar a promulgar la reforma aprobada en el Congreso). Todo esto no encontraba su contrapartida en el gobierno que fue el más respetuoso de las leyes de los últimos 40 años, puesto que consideraba que la fuente principal de su fuerza radicaba en la legitimidad de su origen y en la legalidad de su acción. Lo

cierto es que esta proposición solamente mantuvo su validez mientras se decidía el pleito al interior de las FA, ya que cuando en éstas la balanza se inclina decididamente a favor de los "institucionalistas", no se precisaron mayores pretextos de su parte para legitimar su acción. Por el contrario, la subordinación al engranaje institucional tuvo un doble desastroso resultado: la desmovilización de las organizaciones populares y su impotencia frente al avance de los sectores golpistas en las FA. El gobierno, lejos de convertirse en una herramienta al servicio del proceso revolucionario, se transformó en un objetivo en sí mismo, y es así como, durante el año 1973, pocos meses antes del golpe definitivo, el Partido Comunista proclamaba su preocupación por... las elecciones presidenciales de 1976.

A mediados de 1973, el sistema institucional chileno se encontraba definitivamente agotado y era indispensable pasar a nuevas formas de organización de la sociedad, lo cual fue oportunamente comprendido por las fracciones más lúcidas de la reacción, que se expresaban en las asociaciones patronales, así como por las tendencias revolucionarias de dentro y de fuera de la UP que reclamaban e impulsaban el poder popular. Pero en tanto los primeros contaban con toda la experiencia que significaban decenios de predominio en los planos organizativo, económico, político e ideológico, así como sus estrechas relaciones con la oficialidad del aparato de represión, los segundos debieron partir prácticamente de la nada, y luchar no solamente contra las fuerzas de la burguesía sino también contra esa institucionalidad que era arduamente defendida por el gobierno y la cúspide de la Unidad Popular. Así, al llegar septiembre de 1973, las proposiciones reaccionarias constituían una realidad, en tanto la alternativa de poder popular no pasaba de ser una planta en crecimiento, pero extremadamente pequeña y débil aún.

La utilización del aparato institucional por parte del gobierno correspondió a la entera responsabilidad de la

fracción predominante dentro de la UP y podemos afirmar que dio el máximo de sus posibilidades al permitir una democracia burguesa profundizada y el consecuente desarrollo del movimiento popular, pero esa institucionalidad se reveló absolutamente inadecuada para asegurar una transformación revolucionaria de la sociedad y en última instancia se convirtió en un poderoso obstáculo a la clase obrera y a su lucha por el socialismo.

En resumen, la política aplicada puede ser caracterizada como de una extrema prudencia estratégica que llegó hasta transar por un plazo indeterminado los objetivos históricos de la clase obrera, incluso los parcialmente contemplados en el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. Esa prudencia se complementaba dialécticamente con un extremo aventurerismo táctico al plantearse metas y políticas para las cuales no contaba ni con las fuerzas necesarias ni con las alianzas indispensables para poner en práctica sus objetivos. Esta línea, aplicada ciegamente hasta los últimos días por el gobierno y la fracción directriz de la Unidad Popular, condujo como por una pendiente inclinada al desarme ideológico y organizativo de los trabajadores empeñados en el proceso revolucionario chileno.

Además de precisar los aspectos fundamentales en los cuales fracasó la política del gobierno, es preciso resumir también las razones principales que explican el profundo antagonismo de la burguesía, y su decisión de recurrir a la destrucción de las instituciones por ella creadas en décadas de laborioso esfuerzo y perfeccionamiento. Consideramos que estos motivos, que se desprenden de la historia del periodo, son los siguientes: 1] El proceso de organización y conciencia revolucionaria, 2] La ruptura de la estructura institucional, 3] La crisis del sistema económico, 4] Los intereses globales del imperialismo, 5] El papel al que fueron llevados los militares.

El largo proceso de organización de la clase obrera chilena y de otras capas de trabajadores tenía el año 1970

un antiguo historial. Pero a partir de esa fecha aumenta fuertemente el número de sindicatos, de huelgas, de ocupaciones de tierras. Sin embargo, este movimiento era en gran medida controlado y dirigido en función de la táctica seguida por el gobierno y por lo tanto, no solamente era un elemento secundario, coadyuvante de la acción legal emprendida por el mismo, sino que era necesariamente disciplinado y responsable, enmarcado por las leyes que seguían plenamente vigentes. Será la propia burguesía la que dará un fuerte impulso y modificará cualitativamente el nivel de enfrentamiento, al emprender en octubre de 1972 una huelga patronal insurreccional dirigida contra el gobierno.

En esa fecha surgen formas de poder popular que hacen marchar la sociedad a pesar del *lock-out* empresarial y de la desarticulación de la máquina estatal. Los cordones industriales, los comandos comunales y los consejos campesinos, además de otras formas orgánicas, se constituyen en un poder real, que no logra llegar a transformarse en una alternativa inmediata frente a las instituciones del Estado, pero que después del impulso posterior a junio de 1973 entró a cuestionar con fuerza el modelo de dominación de la burguesía como jamás lo había conseguido el gobierno. La organización y conciencia de los trabajadores chilenos y en particular del proletariado urbano, alcanzó en esos días los niveles más altos de la historia de América Latina, abriéndose camino hacia una nueva democracia que no estaba basada solamente en el número sino también en el lugar que ocupan las clases en el proceso productivo de la sociedad: estas nuevas estructuras poseían una capacidad superior de acción, de conciencia, de objetivos, y de reagrupamiento social.

Para la burguesía el poder popular constituía un peligro, una amenaza insoportable. La democracia existente en Chile y afianzada durante el gobierno de Allende había permitido precisamente el surgimiento del mismo y se revelaba incapaz de ponerle fin. Los ataques a los "ejérci-

tos paralelos" y los insistentes llamados a las FA que hacían los representantes de la burguesía tenían como objetivo precisamente quebrar los núcleos de poder popular, que potencialmente constituían el peligro principal a su sistema de dominación.

La burguesía debía terminar con la democracia para atajar el desarrollo del poder popular y puesto que no podía contar con el gobierno para asumir ese papel, debía también terminar con el mismo para dejar el paso a una nueva organización estatal que lo hiciera.

La ruptura de la estructura armónica de la institucionalidad chilena llevaba en sus entrañas un gran peligro para los intereses de la burguesía en su conjunto. Por una parte, esa institucionalidad había permitido tradicionalmente regular los intereses diversos de los distintos estratos propietarios, y por otra, había sido el instrumento de opresión para el sometimiento de los trabajadores. La llegada de los partidos obreros al Poder Ejecutivo significó la pérdida de estos dos valores indispensables para la clase dominante, que está dispuesta a entregar el aparato del Estado a las dirigencias del reformismo, burgués u obrero, pero a condición de que éste se convierta en eficiente administrador de la sociedad capitalista. Por el contrario, el impulso y la dinámica del movimiento popular y la presencia de la corriente revolucionaria reforzaban el contenido transformador del programa de la UP. En esta situación, la burguesía se opone, a través de la institucionalidad que controla, al manejo del Estado por parte del gobierno y se produce la ruptura de esta institucionalidad con mucha anticipación a la toma del poder por las FA, provocada por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana para impedir la realización constitucional del proyecto dirigido por Allende. En esta forma, quedaba en evidencia el contenido real de las instituciones del Estado capitalista y las limitaciones de la democracia que se convirtieron en obstáculos efectivos a una nueva organización de la sociedad. Desde octubre de 1972, la

institucionalidad chilena se mostraba agotada y se convertía en una tarea urgente para la burguesía encontrar nuevas formas que le permitieran mantener su hegemonía. Será finalmente el poder arbitrario de la fuerza militar la única respuesta que ésta encontrará ante el quiebre de su elaborada reglamentación constitucional.

El sistema que le permitió durante cuarenta años mantener un delicado equilibrio "democrático" se mostró absolutamente inoperante para dar paso a un nuevo equilibrio que no estuviera basado en la hegemonía de la burguesía. A ésta le resultaba indispensable recuperar el control absoluto del aparato estatal para reorientar la sociedad en función de las nuevas y apremiantes tareas que no admitían dilación para sus intereses, puesto que la antigua institucionalidad ya no le resultaba adecuada ante el cuestionamiento de su modelo de dominación.

La crisis económica no fue una de las razones secundarias que motivaron la ruptura del sistema constitucional. A partir de mediados de 1972, la burguesía se entrega con renovados ímpetus al quebrantamiento de la normalidad para impedir el afianzamiento del modelo redistributivo que aplicaba el gobierno, y tiene éxito en atraer bajo sus banderas a grandes sectores de la pequeña burguesía propietaria, así como a la totalidad de los medianos empresarios. La ausencia total de inversiones reproductivas, la canalización de todas sus utilidades y parte de sus activos en el acaparamiento y la especulación caracterizan las relaciones de producción e intercambio a partir de esa fecha. Pero esa era una situación de evidente transitoriedad, que en un momento dado debía permitir nuevamente la acumulación y desarrollo de los medios de producción.

Más aún, las tendencias de readecuación del sistema capitalista mundial precisaban de un nuevo modelo de participación estatal de primera importancia en la economía, pero integrado y al servicio de los intereses de largo alcance de las empresas transnacionales así como de la burguesía nativa monopólica. En consecuencia, las organi-

zaciones patronales necesitaban no solamente de la seguridad de sus propiedades garantizadas por las instituciones estatales, sino de la utilización de éstas como única manera de regular sus diferentes contradicciones y reordenar la estructura productiva y comercial de Chile dentro de las nuevas características capitalistas que se expresaban en América Latina a través de las fuertes tendencias estatizantes que cada vez adquieren mayor consistencia y permanencia y de las nuevas relaciones en el ámbito de los países "periféricos".

En efecto, los modelos "desarrollistas" que presuponen acuerdos sobre los términos del intercambio y complementación de las "burguesías nacionales" con las grandes empresas internacionales corresponden a proyectos obsoletos que demostraron su completa inviabilidad e irrealidad en la dinámica del presente periodo. La actividad acrecentada de las transnacionales forma parte de una nueva etapa del sistema capitalista mundial, caracterizada por la extrema internacionalización de la economía, así como por su integración en todos los planos. En esta nueva situación las empresas transnacionales se convierten en "universos" económicos que manejan presupuestos muy superiores a los del Estado chileno, con relaciones "internas" de gran volumen y fluidez entre sus diversos componentes, con transferencia de tecnologías dirigidas a la apertura de nuevos mercados y su explotación, integrándolos y planificándolos en función de sus intereses autónomos que abarcan campos muy variados y complejos.

Esta fase superinternacionalista del sistema capitalista es el resultado del extraordinario avance de las fuerzas productivas dentro de sus marcos, y apunta precisamente a impedir las crisis y recesiones periódicas así como a frenar la tendencia descendente de la tasa de ganancia que aparece a menudo en el origen de las mismas.

El impacto de la acción de las transnacionales sobre las débiles estructuras productivas, financieras y comerciales de los países latinoamericanos lleva a nuevos extremos el

grado de subordinación y dependencia de factores externos —tecnología, maquinarias y repuestos, capitales, políticas fiscales y comerciales, mercados, modelos de vida— forzando aún más el ritmo de concentración del ingreso en un pequeño sector y marginando la mayor parte de la población nativa del consumo en todos sus niveles.

Estas tendencias, sumadas al gigantesco crecimiento de la deuda externa de Chile a fines del periodo de Frei, tiende a agravar al máximo las tensiones sociales y políticas del país. En consecuencia, la ruptura iniciada con el imperialismo norteamericano y las transnacionales también ponía en peligro la supervivencia de la burguesía, en sus diferentes fracciones de clase, que estaba plenamente consciente de su absoluta incapacidad para resistir un bloqueo como era de temer ante la política del gobierno popular y la respuesta ya esbozada de las grandes empresas del cobre.

La prolongación, por lo tanto, de este modelo de integración —extremadamente subordinado— al sistema económico capitalista mundial, y la obtención de nuevas fuentes de acumulación para su repartición entre las transnacionales y los más poderosos estratos empresariales, solamente eran posibles mediante formas extremas de superexplotación de los trabajadores y su completo sometimiento político como condición previa e ineludible.

Los intereses del imperialismo norteamericano no se reducían a la defensa de sus propiedades en Chile, puesto que tanto o más importante le resultaba el “equilibrio” de toda la región estratégica de América del Sur, amenazado por el proceso revolucionario. En efecto, el intento de transformar las estructuras sociales y económicas a través de la experiencia estudiada, se inscribe como la última expresión, y la más profunda, consecuente y acabada de toda una época de grandes tensiones e inestabilidades en Latinoamérica. Por consiguiente, ya el triunfo de la Unidad Popular llevó el peligro a las puertas de todos los regímenes del cono sur del continente, cuyos pueblos

veían con esperanzado optimismo la posibilidad de una nueva época de independencia, de democracia y de justicia para sus aspiraciones. La perspectiva del inicio de un proceso de construcción socialista reforzaba considerablemente las tendencias revolucionarias de los trabajadores de los estados limítrofes: Perú, Bolivia y especialmente Argentina, países en los cuales la dominación de la burguesía se encontraba coyunturalmente debilitada ante el auge de las luchas populares.

El gobierno norteamericano y sus organismos contrarrevolucionarios, la CIA y los servicios de inteligencia de la marina, actuaron para “desestabilizar” el gobierno chileno y provocar su caída. Asimismo, ya hemos indicado los esfuerzos que en el plano económico realizaran en el mismo sentido organismos privados y públicos de EU, que además tenían importantes intereses que defender, como las grandes empresas transnacionales ITT, Kennecott, Anaconda y otras. El gobierno popular actuó en el plano de las relaciones internacionales con extrema prudencia, y si bien es cierto que mantuvo “buenas relaciones” con los gobiernos vecinos, no lo es menos que toda la zona adquiriría en ese periodo caracteres de extrema inestabilidad, que solamente era contrarrestada por la presencia de las diferentes fuerzas armadas.

El gobierno norteamericano debía, de cualquier manera, impedir el afianzamiento del gobierno de Allende que hubiera provocado en el sur de su “patio trasero” una situación que, con toda su especificidad, habría tenido algunas de las características más generales de las que en esa fecha vivía el sudeste asiático. Los objetivos e intereses de la estrategia imperialista norteamericana, definidos parcialmente para América Latina por el Informe Rockefeller, constituyen una de las explicaciones más importantes de sus relaciones con Chile, cuya mecánica va siendo conocida públicamente a medida que se revelan las actividades de los servicios de la contrarrevolución mundial bajo su dirección.

Durante los últimos cuarenta años la burguesía chilena fue sinceramente “civilista” e incluso condenaba al desprecio a los militares, que constituían una capa postergada y poco valorada de la sociedad chilena. Ciertamente, la administración de los asuntos estatales estaba en las manos adecuadas mientras se sucedían los diferentes gobiernos liberales, radicales, populistas, conservadores y demócrata cristianos, y no se requerían los oficios de los institutos castrenses. Pero desde la fecha misma de la elección de Salvador Allende los militares pasan a un primer plano inesperado: el aparato de represión del Estado pasaba a ser nuevamente el último sostén de los valores que defendía la burguesía chilena y el árbitro de los destinos de la nación.

El gobierno popular, por la fuerza de las circunstancias, o, mejor dicho, como consecuencia de su táctica política, no hizo sino reforzar la introducción de la alta oficialidad en las decisiones gubernamentales, ya que a partir de noviembre de 1972 entra a formar parte del ministerio y su influencia no dejaría de ser realizada desde ese momento por parte de reaccionarios y reformistas. Este nuevo papel que pasaron a desempeñar los militares adquirió su propia dinámica y todos los rangos de las fuerzas armadas se instalaron sólidamente en el papel de arbitros, primero, y se sintieron llamados a hacerse cargo, luego, de la conducción del país. En esta forma, los preceptos constitucionales de obediencia y disciplina fueron borrándose en todos los niveles al mismo tiempo que la deliberación se generalizaba, que se afianzaba la tendencia reaccionaria entre los oficiales de las tres ramas y la resistencia a la misma era coartada en ciernes entre la suboficialidad y tropa.

El papel al que fueron llevados los altos oficiales generó su propia fuerza y las ambiciones de éstos terminaron no solamente con el régimen constitucional sino también —al menos durante un periodo— con la intermediación de los políticos y burócratas de derecha que en Chile parecían

tener una firme y estable ubicación en la superestructura estatal.

El fracaso del gobierno y las causas del golpe de Estado no son suficientes para explicar la interrupción y derrota del proceso revolucionario: éste tenía también su propia dinámica, su fuerza y debilidad que, íntimamente ligadas a los puntos anteriores, marchaban en parte por sus propios carriles. Consideremos que de la historia de Chile durante el Gobierno de la UP se desprenden tres razones fundamentales que impidieron el éxito de los trabajadores chilenos por afirmar su predominio en la sociedad e iniciar la construcción del socialismo. Estas fueron: 1] La debilidad de la vanguardia política revolucionaria, 2] El escaso desarrollo de un poder alternativo a la institucionalidad burguesa, 3] La unidad del aparato represivo dependiente del Estado capitalista.

La clase obrera y los trabajadores, para dirigir sus luchas, necesitan de una formación ideológica, de una dirección en sus reivindicaciones cotidianas, de objetivos que no se pierdan de vista en el acontecer de mil pequeñas batallas, de una organización que les permita coordinar el enfrentamiento a escala nacional unificando en el tiempo y en la geografía los esfuerzos que, de otra manera, dispersos, se diluyen perdiendo energía y contenido. En otras palabras, en el combate por el socialismo, los trabajadores necesitan de un estado mayor que eduque, discipline, organice y dirija el enfrentamiento en las coyunturas precisas: es indispensable una vanguardia revolucionaria, que defienda las banderas históricas, los objetivos estratégicos y, como un verdadero cuartel general, asegure la irreversibilidad de las conquistas del proletariado en todos los planos.

La vanguardia revolucionaria chilena es aquella, potencialmente, que no adscribió —y por tanto no es responsable del fracaso sufrido— a la política seguida por el gobierno y la cúspide de la Unidad Popular, y estaba formada por un sector del Partido Socialista, el Movimien-

to de Acción Popular Unitaria (MAPU), la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Sin embargo, estas diferentes organizaciones —o tendencias de las mismas, como fue el caso durante todo el periodo de la izquierda socialista, y hasta marzo de 1973 en el MAPU— no lograron coordinar su acción, establecer objetivos tácticos comunes, ni mucho menos plantearse la unificación de sus fuerzas. En consecuencia, no llegaron jamás a constituir una verdadera dirección, manteniéndose en el terreno del cuestionamiento de la política seguida por la alianza que ejercía el gobierno. Además, este mismo cuestionamiento llegó solamente en contadas ocasiones a la expresión abierta de sus críticas, contribuyendo con ello a mantener a las masas en una cierta ambigüedad que fue también característica y que impidió la superación de la influencia de la línea ejercida por la dirección de la Unidad Popular. La educación, la disciplina y la organización que impulsaban las fuerzas revolucionarias chilenas fueron absolutamente insuficientes ante la magnitud de las tareas planteadas, y la coherencia y consecuencia de sus posiciones también estuvieron marcadas por la carencia de una firme decisión de presentar un modelo alternativo a las masas. El espejismo y el chantaje de la unidad, que no era otra cosa que la unidad en torno a las posiciones del Partido Comunista, impidieron que las organizaciones revolucionarias, y en particular la izquierda socialista, plantearan con energía sus propios postulados y desarrollaran la unidad en torno a la revolución. Así, la debilidad de la vanguardia impidió que ésta convirtiera en organización las múltiples expresiones de coraje, vigor, entusiasmo y conciencia que practicaron los trabajadores chilenos y se convirtió en el principal factor de frustración del proceso revolucionario.

Hemos señalado las diferentes formas de poder popular que crearon los trabajadores chilenos durante el periodo del gobierno popular, y que se desarrollaron y crecieron precisamente en las coyunturas de mayor agudización en

el enfrentamiento con la burguesía. El poder popular tuvo en Chile una existencia real, y se expresó clara y netamente como la capacidad de accionar sobre la marcha de la sociedad al margen de los mecanismos estatales consagrados por la Constitución.

Sin embargo, este poder popular fue insuficientemente elaborado para convertirse en un poder global alternativo a la institucionalidad burguesa. Esto se debió fundamentalmente a dos motivos. El primero fue la resistencia, el freno que le opuso un sector de la UP y el gobierno, que temían ver sobrepasado su esquema táctico en una dinámica incontrolada por ellos. El control que ese sector ejercía sobre una parte de los trabajadores le restó fuerzas al desarrollo del poder popular, y cuando se decidieron a impulsarlo conjuntamente con la izquierda revolucionaria ante la arremetida reaccionaria de fines de junio, ya era demasiado tarde para estructurar un organismo centralizado a escala nacional que representara, ante todo el país, un modelo propio de desarrollo y poder. Frente a la institucionalidad burguesa, se opuso un gobierno que fue acusado de ilegítimo e ilegal por esa institucionalidad, y no existió un poder, capaz de organizar nacionalmente a la sociedad, que se opusiera a la misma. Así, el proceso revolucionario careció del instrumento indispensable para dirigir el país y someter la resistencia de las clases explotadoras. La existencia del poder popular sólo amenazó potencialmente el orden vigente, no llegando jamás a constituirse en una alternativa inmediata y efectiva. Situación a la cual, ciertamente, no es ajena la debilidad de la vanguardia revolucionaria.

La unidad del aparato estatal represivo, al servicio de la contrarrevolución, fue el resultado —en definitiva— de la política militar aplicada por el gobierno. La división en “constitucionalistas” e “institucionalistas” se reveló fundamentalmente inscrita dentro de la táctica seguida y, en consecuencia, cuando ésta fue derrotada por la institucionalidad burguesa que la cercó y la sometió en todos los

frentes, se produjo también la derrota de su línea en el interior de las fuerzas armadas.

Sólo tardíamente se intentó llevar las posiciones revolucionarias a la discusión de suboficiales, tropa y oficiales, como resultado del sometimiento a los mitos de "profesionalismo" y "obediencia a la Constitución"; de manera que solamente la reacción y el reformismo tuvieron acceso permitido a la difusión de su ideología en los institutos militares. Cuando se pretende implementar una resistencia revolucionaria frente a los golpistas, ya se vivía un momento de reflujo y éstos tienen las manos libres para aplastar brutalmente los esfuerzos incipientes.

Una vez más, las concesiones y debilidades de las organizaciones políticas revolucionarias chilenas tuvieron como dramático resultado la confirmación de que un proceso de transformaciones profundas y la conquista del poder para permitir un cambio cualitativo de la sociedad sólo son posibles pasando por la división del aparato represivo y ganando una parte del mismo a través del coraje, conciencia política, decisión de lucha y organización material de los trabajadores.

El análisis de la experiencia chilena muestra, con todas sus particularidades, la plena vigencia de una teoría confirmada reiteradamente, expuesta por uno de los fundadores del socialismo científico, Federico Engels:

Según la filosofía, el Estado es la realización de la Idea, el reinado de Dios sobre la tierra, el dominio en que la verdad y la justicia eterna se realizan o deben realizarse. De aquí el respeto supersticioso al Estado y cuanto le concierne; respeto que se instala con tanta mayor facilidad en los espíritus cuanto que se está habituado a imaginarse que los intereses generales de la sociedad entera no pueden regularse de otro modo de lo que lo fueron hasta aquí, es decir, por el Estado y sus subordinados, debidamente instalados en funciones.

Se cree haber realizado un progreso o se emancipa

cualquiera de la creencia en la monarquía hereditaria para jurar en la república democrática; pero en realidad el Estado no es sino la máquina de opresión de una clase contra otra, lo mismo en una monarquía que en una república democrática y lo menos que puede decirse de él es que es un azote, y el proletariado, en su lucha para llegar al poder, deberá hacer lo que hizo la Comuna, atenuando todo lo posible sus malos efectos hasta el día en que una generación educada en la nueva sociedad de hombres iguales pueda desembarazarse de todo el confuso agregado gubernamental.

Todo observador atento de la historia de la humanidad habrá constatado que en la guerra de clases existe un arma mucho más eficaz que los fusiles y los cañones: la ideología.

Esto es particularmente evidente en los procesos revolucionarios triunfantes, durante los cuales las estructuras del Estado que sucumbe y, especialmente los aparatos represivos son demolidos, no por la acción de un ejército contrario, sino por la propaganda de un conjunto de valores, conceptos, ideas, modelos, que terminan arrastrando en su tempestad a los hombres que forman las tropas regulares.

Es así como durante las revoluciones francesa y rusa los sectores gobernantes buscaban con desesperación "tropas seguras" que no estuviesen contaminadas por las proclamas subversivas; la resistencia militar de la reacción fue mínima y los grandes enfrentamientos, en ambos casos, se produjeron fundamentalmente como resultado de la intervención extranjera.

Ciertamente, existen diferencias sustantivas entre ambas revoluciones, pero éstas tienen un rasgo común que consideramos fue esencial para asegurar el carácter irreversible de las transformaciones: en Francia el año 1789 y en Rusia en 1917 la clase dominante perdió el apoyo de todos los sectores de la sociedad hasta quedar disminuida y desnuda con sus intereses minoritarios debido al avance, desarrollo y finalmente imposición en la conciencia de la enorme mayoría de la población urbana de una ideología que cuestionaba en profundidad todos los valores establecidos hasta la fecha y proponía una nueva representación del medio material así como una nueva escala de juicios para la organización de la sociedad.

Podemos generalizar esta observación. Todo proceso revolucionario exitoso se desarrolló en torno a una intensa lucha ideológica, en la cual la clase dominada insurgente controvertía, cuestionaba, rechazaba los valores e instituciones de la clase dirigente hasta ese momento aceptados universalmente, y presentaba a la sociedad un conjunto de ideas y conceptos cualitativamente distintos que configuraban la base necesaria para una nueva organización económica y política.

También podemos afirmar que en las situaciones de crisis en que los sectores en rebelión se apoyan en una ideología vacilante que no cuestiona aspectos esenciales de los valores hegemónicos, no logran arrastrar a la mayoría de las clases subordinadas y menos aún provocar la disgregación, desmoralización y hundimiento de las instituciones del Estado atacado, comprendidas las fuerzas armadas.

Lo anterior forma parte de la experiencia histórica de la sociedad humana desde la época en que ésta ha existido dividida en clases y castas.

Los esclavos no lograron derrotar al imperio romano en una guerra de clases en que constituían la inmensa mayoría de la población a pesar de que llegaron a lograr en varios momentos de su lucha una organización armada superior. Asimismo, las gigantescas y periódicas sublevaciones del campesinado asediaron repetidamente el sistema feudal durante la Edad Media, pero jamás llegaron a imponerse sobre los barones que los oprimían.

Estas dos clases no consiguieron elaborar una explicación totalizadora del mundo de su época —no podían hacerlo— ni construir un proyecto alternativo de desarrollo de las fuerzas productivas. En suma, sus modelos ideológicos eran extremadamente reducidos y no llegaban a cuestionar lo esencial de la concepción dominante de esos periodos históricos.

Será en cambio la burguesía la encargada de abrir paso a una nueva organización social derribando el mundo

feudal con todos sus valores, así como hoy es la ideología de la clase obrera la que amenaza el dominio capitalista para iniciar la transición al socialismo.

En Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular, como en todo periodo de crisis de las instituciones, se libró una intensa lucha de ideas animada por las distintas fuerzas sociales en conflicto. El enfrentamiento de clases, las acciones de las mismas, sus políticas tácticas y estratégicas, se basaban en el eje central de sus respectivas ideologías, de la concepción del mundo que las distintas organizaciones postulaban.

Pero en tanto la burguesía defiende una ideología aceptada, explicitada y reproducida por la sociedad entera durante largos decenios, el proletariado debe construir una aplicación concreta de una nueva concepción a la coyuntura particular, cuestionando la validez, legitimidad y justicia de aquellos valores que se han infiltrado hasta los últimos intersticios del cuerpo social.

Más aún, la ideología de la burguesía, precisamente por ser dominante, es compartida y difundida por amplios sectores de trabajadores y, por tanto, su erradicación entre los mismos constituye el primer paso hacia un enfrentamiento global de clases.

Las ideas, los conceptos y valores, los modelos de vida, se transmiten, se difunden y se implantan en la conciencia de miles y millones de personas —en nuestra sociedad moderna— a través de medios e instituciones materiales. En una sociedad capitalista, éstos constituyen parte de la superestructura ideológica de la clase dirigente.

Los partidos políticos burgueses y pequeñoburgueses, los tribunales de justicia, las instituciones religiosas, el aparato sindical en aquella parte en que participaba de la colaboración de clases, el sistema escolar, el conjunto cultural formado por las editoriales, cine y teatro, las asociaciones de todos los estratos y sectores de empresarios, los medios de comunicación de masas, constituyeron en Chile los principales elementos de que se valió la clase

burguesa para defender y mantener sus privilegios ante la emergencia del movimiento popular.

Toda ideología distinta del pensamiento dominante encontrará naturalmente resistencia. Pero ésta será directamente proporcional al grado de diferenciación que presente de los modelos hegemónicos y, por consecuencia, son los valores y conceptos del proletariado en cuanto clase que se levanta para remplazar a la burguesía en la organización del Estado, en la medida que responden efectivamente a sus intereses históricos, los que provocan la oposición más enconada de toda la superestructura de la sociedad capitalista. En cambio, los conceptos y postulados de fracciones no dominantes de la burguesía o de la pequeña burguesía pueden coyunturalmente obtener una aceptación generalizada puesto que no cuestionan aspectos esenciales de las relaciones de producción vigentes.

Existe otro punto importante en esto último. Al hacerse predominante la ideología del proletariado se alcanza un nódulo de no retorno en los procesos de transformación social y por tanto comprende la desaparición del capital privado y de todos sus estratos de propietarios en un plazo relativamente breve. Esto no ocurre cuando es la ideología de la mediana o la pequeña burguesía la que logra una influencia mayoritaria. Experiencia de la cual están conscientes los medios políticos dirigentes de la clase propietaria.

Entre los años 1970 y 1973 la ideología de la burguesía se expresó con relativa homogeneidad en la oposición al gobierno, principalmente, a través de los partidos de la Confederación Democrática y de las asociaciones patronales, que desempeñaban el papel directriz.

En efecto, si bien existían diferentes proposiciones que correspondían a los modelos de los principales sectores de la burguesía, sus contradicciones eran secundarias y desaparecían cuando se trataba de combatir los valores del proletariado y afirmar la validez de los conceptos esenciales y comunes de su representación de la sociedad frente a

un enemigo cuya potencialidad estaba en vía de realización.

Todas las especulaciones, fundamentadas durante años teórica y políticamente, que pretendían encontrar profundas e importantes contradicciones entre una supuesta “burguesía nacional” y el imperialismo, así como entre ella y los “clanes monopólicos”, se vieron defraudadas en la forma más absoluta.

Los valores fundamentales de mantenimiento de la sociedad capitalista por parte de todos los estratos y sectores de la burguesía fueron defendidos dentro de una lógica que corresponde a la unicidad de esta clase, que encuentra en la conservación de la propiedad privada la condición esencial de su existencia. Por consiguiente, todas las contradicciones —reales— entre sus diferentes sectores, se demostraron completamente sobrevaloradas por el pensamiento contenido en el programa de la UP. La resolución de privilegiar determinados intereses dentro del campo de los propietarios fue postergada y todas las capas burguesas se plegaron en una cerrada oposición al gobierno que no garantizaba plenamente sus intereses más esenciales, y en la búsqueda de medios para interrumpir el ascenso de la clase obrera. Todos los sectores capitalistas homogeneizaron su pensamiento en torno a sus comunes valores fundamentales: la ideología burguesa.

No ocurría lo mismo en el seno del movimiento popular.

Ya hemos observado que a la formación de la Unidad Popular confluyeron distintas organizaciones en representación de diferentes clases y fracciones de las mismas. En el Programa de Gobierno de la UP se expresaban valores contradictorios con una influencia fundamental de sectores ideológicos profundamente diferentes al proletariado. En particular la pequeña burguesía se hace presente con fuerza en la concepción del programa, intentando equilibrar y armonizar los intereses contrapuestos de empresarios y trabajadores en un proyecto de desarrollo económi-

co cuya inviabilidad fue demostrada por la experiencia posterior.

Debido a esto, el gobierno de la Unidad Popular nace marcado por una fuerte heterogeneidad ideológica que frenará y finalmente neutralizará la elaboración de los valores, modelos e ideas propios a los intereses históricos del proletariado, al pretender asegurar la permanencia de la pequeña y mediana propiedad durante un periodo indeterminadamente largo.

Esta influencia preponderante del pensamiento pequeñoburgués en las filas del movimiento popular lo encontramos específicamente en el hecho de que este último no logra refutar las oposiciones “positivas”/“negativas” de la concepción de la burguesía y les ofrece una escasa resistencia.

Así encontramos los siguientes contrarios de la ideología propia al sistema capitalista como valores que no encuentran una respuesta decidida en el gobierno ni en los partidos de la Unidad Popular y, por consiguiente, son reafirmados y revalidados entre la mayor parte de los componentes de la sociedad chilena:

“propiedad” / “robo”
“legalidad” / “subversión”
“evolución” / “desorden”
“paz social” / “lucha de clases”
“propiedad individual” / “empresa estatal”
“ahorro” / “dispendio”
“cultura” / “ignorancia”
“labor intelectual” / “labor manual”
“dirección” / “espontaneísmo”
“justo término medio” / “extremismo”
“fuerzas armadas” / “ejércitos paralelos”
“instituciones legítimas” / “anarquía”
“estado (democrático-burgués)” / “caos”
“libertad (electoral)” / “dictadura
(régimen uniclasista)”

Frente a estas oposiciones de contrarios que difundía y mantenía la ideología dominante, especialmente con el objeto de ganar para las posiciones de la derecha la conciencia de todas esas extensas capas de la población cuyos intereses y modelos son contradictorios y vacilantes entre las clases fundamentales de la sociedad, el gobierno y la UP no estaban en condiciones de presentar un conjunto de ideas y valores cualitativamente diferentes que conformaran una nueva visión totalizadora de Chile. Precisamente, la presencia en su interior de la mediana y pequeña burguesía como aliados en un plano de igualdad, impedía el fortalecimiento de la ideología proletaria en el seno de la UP, única alternativa real y positiva frente a la sociedad que se pretendía transformar.

De lo anterior se desprende que, frente a las abrumadoras campañas de toda la superestructura ideológica de la burguesía, el movimiento popular sólo opuso con debilidad y moderación, incluyendo la persistente reticencia y rechazo de los sectores reformistas partidarios de la alianza con las “clases medias”, las siguientes parejas “positivas” / “negativas” que eran impulsadas por las tendencias revolucionarias:

“transformación” / “conservación”
“trabajadores” / “burguesía”
“solidaridad” / “lucro”
“participación” / “jerarquía”
“poder popular” / “institucionalidad burguesa”
“colectividad” / “individualismo”
“sindicato” / “patrón”
“tendencia igualitaria” / “afirmación de privilegios”
“socialismo” / “capitalismo”

Aquí encontramos los principales factores de la derrota ideológica del gobierno y de la Unidad Popular. Mientras la burguesía en su conjunto impulsaba, defendía y mantenía con éxito las oposiciones primeramente formuladas

frente a la no impugnación de las organizaciones de izquierda, éstas entraban en contradicción, se confundían, se restaban y, finalmente, un sector importante limitaba —y por lo tanto modificaba— las 9 parejas dialécticas principales de valores correspondientes al proletariado.

Así se afirmaba como válido y correcto un modelo de vida inherente al sistema capitalista que los dirigentes de la burguesía utilizaban hábilmente para desprestigiar, desvalorizar y rechazar el proyecto de transformaciones de la UP que tímidamente se presentaba en el interior de la superestructura institucional, y por tanto ideológica, vigente. En esta forma, la presencia de los valores de la pequeña burguesía impedían desarrollar la ideología proletaria y ante la polarización de clases, ésta terminaba haciendo abandono, en parte, de la UP para sumarse a los planes de la burguesía como respuesta ante la persistente y enconada campaña de toda la superestructura ideológica del Estado capitalista.

Las clases, en todos sus estratos y diferenciaciones, tienden a encontrar la representación de sus intereses inmediatos e históricos, así como de sus concepciones, en las organizaciones políticas. De esta manera, éstas presentan todas las posibilidades subjetivas de desarrollo y estructuración social y económica del Estado. Todo el espacio político tiende a ser ocupado. En consecuencia, los partidos constituyen un tejido continuo y dinámico, una constante interrelación de las distintas alternativas tácticas y estratégicas que corresponden a la interpenetración y permanente transmutación de los distintos sectores de la sociedad. Esto nos explica, parcialmente, la existencia de fracciones y tendencias en el interior de los partidos, así como los acercamientos y alejamientos de éstos, que encuentran transitoriamente un terreno común de coincidencias o la fuerza centrífuga necesaria para impulsar una ruptura.

En el interior de la UP los partidos que la componían expresaban lo anterior con variaciones coyunturales de sus

posiciones aunque en lo fundamental todos aceptaban y difundían en mayor o menor grado las ideas hasta entonces predominantes en todos los planos de la sociedad. En particular los dirigentes del Partido Comunista y los funcionarios tecnocráticos de la administración defendían, matizándolas, las parejas dialécticas que correspondían a valores de la burguesía y propugnaban el entendimiento con la Democracia Cristiana, con la cual encontraban un amplio terreno de coincidencias programáticas.

Esto fue comprobado, particularmente, en el mantenimiento casi intacto de la superestructura institucional de la ideología vigente, burguesa, que se expresaba con fuerza a través de los medios de comunicación de masas: los periódicos, radios, revistas y canales de televisión dirigidos por la UP también reproducían —en forma confusa, contradictoria, heterogénea— esos valores y esas instituciones que eran defendidas por la oposición.

Por otra parte, la UP se despeñó —desde abril de 1971, cuando es rechazada la proposición de plebiscito y con mayor definición aún desde junio de 1972 después del cónclave de Lo Curro, cuando se reafirma con nuevas garantías la política de “consolidación” del proceso— por la pendiente natural de buscar la línea de menor resistencia y de más amplia aceptación. Las proposiciones del PC de alianza con las “clases medias”, de desarrollo económico para golpear únicamente ciertos enclaves imperialistas y empresas monopólicas, de utilización de la institucionalidad democrático-burguesa para profundizarla y mejorarla, parecieron —inicialmente— conducir al éxito, dentro de una línea coherente que encontró aprobación difusa en la mayor parte de la población.

En realidad, fue precisamente esta línea, esta política, la que dialécticamente desarmó durante un largo periodo a vastos sectores de trabajadores impidiéndoles el desarrollo de una vanguardia consciente. Más aún, cuando se imponen las proposiciones de los partidos de derecha, éstos arrastran a la mayor parte de la pequeña burguesía

precisamente debido a lo anterior, pues no se había producido una diferenciación ideológica cualitativa que lo obstaculizara. En efecto, las concepciones difundidas por la UP y el gobierno no contenían nuevos valores sustantivamente diferentes sino que solamente habían relativizado las oposiciones “positivas” / “negativas” dominantes, contribuyendo a su reafirmación entre esas inestables capas de la sociedad chilena cuya influencia estaba en juego.

La inexistencia de un partido con vocación de poder, de un partido formado por militantes conscientes y profundamente compenetrados con el marxismo, con la ideología proletaria, resultó un factor decisivo en el fracaso del proceso.

Efectivamente, ya hemos observado anteriormente que las tendencias revolucionarias tanto en el interior como en el exterior de la UP no lograron cuestionar los valores esenciales del proyecto del gobierno, esto es, no refutaron en forma categórica los contenidos conceptuales de la pequeña burguesía que estaban incluidos en el mismo. Y por tanto no pudieron disputar la dirección del movimiento popular sino, a lo sumo, influir en su orientación.

Existe otro factor importante que explica también esta situación. La supeditación de las corrientes revolucionarias implicaba que éstas renunciaran a una estrategia independiente y se limitaran a una línea de presión interna sobre las otras fuerzas de la UP. Esta posición se complementaba con la incapacidad para elaborar una alternativa global del proceso cualitativamente diferente y superior a las concepciones pequeñoburguesas. En definitiva, esta estrategia política superestructural de presión se demostró totalmente inconducente para alcanzar los objetivos que se pretendían, pues las estables direcciones reformistas jamás se acercaron a la ideología proletaria como resultado de esta política. En cambio, fue la fuerza de las masas y su movilización las que en determinadas ocasiones hicieron variar —transitoriamente— el ritmo y la táctica del gobierno.

Durante el proceso chileno, los obreros avanzados políticamente, la vanguardia de los trabajadores, son conducidos —tentativamente— hacia una conciencia y organización adecuadas a sus propios fines, principal y fundamentalmente a partir del desarrollo de la lucha de clases —salto cualitativo en octubre de 1972— y sólo secundariamente por la labor de militantes de izquierda revolucionaria.

El resultado de lo anterior es que sólo tardíamente y en forma aislada y parcial una vanguardia popular y sectores de la izquierda alcanzaron conciencia de los objetivos históricos que estaban en juego, y comprensión de sus tareas en su lucha contra las instituciones del Estado capitalista, conciencia que fue empañada hasta el final por la presencia de la ideología democrático-burguesa.

La inexistencia de una dirección única con autoridad sobre las fracciones más activas de los trabajadores, la heterogeneidad, vacilación e inconsecuencia de los mandos superiores e intermedios del Partido Socialista, el aislamiento —no casual— de la militancia del MIR, la escasa influencia de otras organizaciones, conspiraron contra el afianzamiento de la corriente revolucionaria en el seno de las masas que se constituyó en una realidad durante los últimos meses del gobierno.

Esta situación se explica en el Partido Socialista en parte por la historia de esta organización. Lo cierto es que al realizarse el Congreso de La Serena las ideas del proletariado y de la pequeña burguesía se expresaban ampliamente en el interior del mismo. Durante el proceso esta contradicción no se resolvió, pues si bien por una parte se desarrollaba entre sus bases una dispersa corriente marxista, sus direcciones a diferentes niveles mantenían una extrema incoherencia como resultado de la penetración permanente de los valores de la ideología dominante en la UP y en el gobierno.

El hecho es que la alianza de carácter *estratégico* que

el PS había establecido con el reformismo obrero-burocrático¹ expresado a través del Partido Comunista, afirmaba las tendencias pequeñoburguesas mayoritarias en su comité central.

No es posible establecer e impulsar una alianza de largo alcance, tras objetivos estratégicos que suponen postulados y concepciones comunes, sin que los valores de los dos componentes se interpenetren mutuamente, con obvias ventajas para el más coherente. Todo acuerdo tiene su propia dinámica y un entendimiento que comprende un programa de gobierno implica un desarrollo en el mismo sentido durante un largo periodo y lazos ideológicos estrechos. El Partido Socialista no podía llevar adelante una campaña anticapitalista y simultáneamente apoyar y participar en un proyecto político-institucional, a través del gobierno y de la UP, que no contemplaba la destrucción del sistema sino por el contrario su mantenimiento.

El resultado de haber intentado seguir una política que entrañaba esa contradicción fundamental tuvo como consecuencia la esterilización del PS como fuerza determinante y la neutralización de su corriente marxista-revolucionaria.

Esto no invalidaba la imperiosa necesidad de establecer acuerdos sobre bases ciertamente más reducidas y limitadas, pero también más claras y precisas, con el objeto de hacer frente al enemigo común, cuidando de mantener las organizaciones unitarias de los trabajadores y desarrollando otras nuevas expresiones de la voluntad popular. Esto

¹ “Denomino como reformismo obrero-burocrático a una tendencia hoy bastante extendida dentro del movimiento político de los trabajadores que junto con proclamar explícitamente el socialismo como su meta, funda su acción política concreta en un tipo de razonamiento en que se hibridan, de un lado, la versión burocrática del marxismo, y del otro, formulaciones más o menos radicalizadas por ser fraseadas en marxismo —de esquemas de análisis social que provienen en gran parte del arsenal ideológico de las capas medias democrático-nacionalistas.” Aníbal Quijano, conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, 1973.

es, para un partido de ideología proletaria son perfectamente válidos —más aún, indispensables en ciertas ocasiones— los compromisos tácticos con organizaciones de carácter pequeñoburgués, reformistas, burocráticas, nacionalistas, populistas, a condición de conservar celosamente la más plena independencia para criticar a sus aliados transitorios y llevar la propaganda de su línea a todas las capas asalariadas, tras el desarrollo de sus propios objetivos estratégicos que serán necesariamente distintos a los de otras organizaciones con influencia popular. La conciencia política entre las grandes masas de trabajadores no es definitivamente estable durante los periodos normales, pero en las coyunturas de crisis es extremadamente fluida y variable. Es en esas circunstancias que es indispensable buscar, con mayor energía que nunca, objetivos perfectamente precisados y explicitados, para agrupar y movilizar a los trabajadores en el enfrentamiento con las instituciones del Estado capitalista.

El aislamiento del MIR tiene su origen en la concepción de partido y de proceso revolucionario que postulaba. Si bien su ideología era profundamente contradictoria con determinados valores de la burguesía, su vanguardismo, la sustitución de las masas por la “élite” partidaria que debía llevar adelante la lucha por la nueva sociedad, la relación establecida entre dirigentes y militares —jefes y subordinados—, su indiferencia frente a esas grandes multitudes de obreros “reformistas” que eran conducidos por los partidos de izquierda “tradicional”, fueron todas herencia de sus iniciales concepciones foquistas —guevaristas— que tan sólo durante el gigantesco proceso de participación de los trabajadores iban siendo superadas a pesar de la resistencia de algunos de sus dirigentes. Debido a esto, la dirección del MIR, además de las obvias limitaciones que eran consecuencia de su escaso desarrollo orgánico, carecía de la autoridad necesaria para cuestionar, directamente en el seno de la clase obrera, las políticas y la ideología de la UP y del gobierno.

Como resultado de la debilidad de las tendencias marxistas se produce una neta insuficiencia del movimiento popular en su lucha contra el régimen establecido. La actividad espontánea de las masas llegó a sus más altos niveles de organización y de conciencia en octubre de 1972 e incluso dio origen —no obstante carecer de una orientación global— a formas novedosas de poder popular. Esa experiencia fue el resultado de largos años de lucha superados súbitamente en su marco economicista, sindicalista y electoralista, a pesar de las direcciones reformistas y de la escasa solidez de las tendencias revolucionarias. Pero esta fuerza se diluyó como un gas en el espacio abierto. El espontaneísmo cobró el precio de sus limitaciones.

No existió la organización capaz de llevar esta experiencia de los núcleos más conscientes a todas las capas de trabajadores, de generalizar el enfrentamiento con la institucionalidad burguesa y plantear un mundo de nuevas ideas —la ideología marxista— concentrando las energías de la recién constituida vanguardia obrera industrial en los puntos y en las coyunturas críticas en que la clase dominante retrocedía amenazada: octubre de 1972: poder popular y gabinete homogéneo de trabajadores; marzo de 1973: poder popular y embestida contra las instituciones del Estado; junio de 1973: poder popular y división de las fuerzas armadas.

El fracaso del proceso de transformaciones chileno es el fracaso del movimiento popular en la construcción de una auténtica dirección revolucionaria, de un partido con la capacidad de enfrentar la ideología dominante y las incoherencias del programa de la UP para levantar una plataforma de lucha tras los objetivos históricos de la clase obrera. No solamente esto. Era necesario un partido que llevara estas proposiciones a los trabajadores más avanzados primero, a los constituyentes de los cordones industriales, de los comandos comunales, de los consejos campesinos, de las directivas de campamentos y poblacio-

nes y al seno de las masas luego, con la autoridad necesaria para convertir la experiencia en teoría política, y esta teoría en una organización nacional de poder popular que enfrentara las diversas instituciones del Estado al servicio del mantenimiento de las estructuras capitalistas, transformando la ideología proletaria en acción revolucionaria.

La conquista del poder político en Chile, no podía ser alcanzada por los trabajadores como hecho irreversible, sin clarificar el contenido del programa y la conducción de la Unidad Popular, para lo cual era indispensable un partido plenamente armado de una estrategia basada en un análisis marxista de las relaciones de clase y de las estructuras del Estado. Solamente un partido semejante, que hubiese conquistado con anterioridad autoridad política, que hubiese ganado previamente la confianza de sus militantes y de los elementos más conscientes de la clase obrera, habría podido organizar y movilizar el conjunto de los trabajadores urbanos y encontrar apoyo en vastos sectores campesinos explotados, durante el desarrollo de todo el periodo de crisis de las estructuras, en los momentos álgidos de lucha contra la reacción burguesa, y particularmente, impedir el gabinete de conciliación de clases instalado en los primeros días de noviembre de 1972 después del fracaso de la insurrección patronal.

Es en esta ocasión que se pone dramáticamente de relieve la fluidez de las relaciones de fuerza entre las clases y el papel decisivo que juega en su resolución la ideología. No obstante la fortaleza alcanzada por el movimiento popular frente a la debilidad de los patrones derrotados; los trabajadores, que habían sido los autores de ese triunfo, son vencidos a continuación —sin lucha— por la presencia de la ideología pequeñoburguesa en los niveles de dirección de los diferentes organismos del gobierno y en la UP. De esta manera, las corrientes revolucionarias que impulsaban el poder popular no logran mantener sus posiciones y los objetivos políticos del

proletariado no solamente son abandonados: el nuevo ministro del Interior asume su cargo con la tarea explícita de “asegurar la paz social” y de “garantizar las elecciones de marzo”.

En esta forma, es el gobierno el que reafirma los valores dominantes tradicionales, sostén de esa “democracia burguesa avanzada” que buscaba conservar, contribuyendo así decisivamente a impedir el avance de los conceptos propios de la clase obrera y a frenar la implantación de sus propias parejas dialécticas “positivas” / “negativas” en la conciencia de los sectores más conscientes y combativos.

En un cortísimo plazo, la actividad y movilización de los trabajadores se vio encuadrada nuevamente por el respeto a la “propiedad”, a la “empresa privada”, a la “legalidad”, a los derechos de las “clases medias”, al “Estado (democrático-burgués)”, y a la “libertad (electoral)”, esto es, dentro de los cauces determinados por los valores “positivos” de la reacción.

A la luz del estudio del proceso, podemos afirmar que esta situación se produjo en todos los momentos críticos —octubre de 1972, marzo de 1973, junio de 1973— en que aumentaba la influencia de la ideología proletaria en el movimiento de masas y particularmente entre los trabajadores industriales, ante lo cual el reformismo obrero-burocrático aliado al reformismo pequeñoburgués se encargaban desde el interior de la UP de reproducir y sostener los conceptos ideológicos dominantes.

Esta situación de mantenimiento de predominio del pensamiento burgués en el conjunto de la sociedad durante todo el periodo, la continuidad en la defensa de ciertos valores esenciales a través de las instituciones del Estado, la penetración e implantación de numerosos conceptos de la clase propietaria en los partidos de base popular que componían la UP, constituyen la contrapartida dialéctica de los esfuerzos de las fracciones más avanzadas y lúcidas de la clase obrera por adquirir con-

ciencia de sus objetivos, de sus tareas, de sus necesidades: la ideología proletaria.

Desde octubre de 1972 en adelante y hasta el final del proceso, la clase obrera chilena realiza esfuerzos titánicos por superar las confusiones del periodo precedente, por liberarse plenamente de la influencia de las concepciones populistas, estrechamente nacionalistas, antioligárquicas, reformistas, que en definitiva orientaron el movimiento popular y lo condujeron al resultado conocido.

La presencia de los valores y conceptos de la burguesía en el interior de los partidos de la UP —en distintos niveles— se reveló no solamente en la táctica seguida en las particulares coyunturas anotadas, sino también se inscribe en la estrategia general de transformaciones que las direcciones de los partidos de izquierda intentaron desde las posiciones de gobierno que habían obtenido.

Este no es un problema específico del movimiento insurgente desarrollado en Chile. Por el contrario, forma parte de la problemática universal de la sociedad humana en el actual periodo de derrumbe del sistema capitalista.

Marx y Engels plantearon ya, en el Manifiesto Comunista, que para alcanzar sus objetivos era indispensable abatir violentamente el orden social establecido. Después de la experiencia de la Comuna de París, llegaron a la conclusión de que lo anterior era insuficiente. El proletariado debía, no solamente conquistar el Estado, sino destruirlo, para construir uno nuevo que permitiera el desarrollo de una nueva ideología. La dictadura del proletariado, la clase obrera erigida en clase dominante de la sociedad, constituía el requisito fundamental para asegurar la irreversibilidad del proceso, destruir a la burguesía en tanto modelo alternativo de organización social e implantar una ética cualitativamente diferente de la anterior.

Sin embargo, a pesar de la extrema claridad y definición de los fundadores del socialismo científico, esos planteamientos son negados en el interior del movimiento obrero en forma sucesiva y reiterada por las organizacio-

nes políticas que lo expresan. En ocasiones con cierta originalidad, pero en la mayor parte con ninguna, se renuevan los partidos, dirigentes y sociólogos que desde Dühring en adelante, tienen como elemento principal en común negar la dialéctica y reducir los objetivos del proletariado a un materialismo vulgar.

Hasta la fecha se han elaborado dos modelos —con numerosas variantes— de pensamiento y actividad política en este sentido. Uno está constituido por la Segunda Internacional y fundamentalmente por la socialdemocracia europea que, lisa y llanamente, niega la necesidad de un salto cualitativo y propone la transformación del sistema a través de su mejoramiento mediante progresivas reformas que finalmente le otorgarían un contenido satisfactorio para las grandes mayorías de la población. Abierta y francamente, la socialdemocracia disputa la influencia y hegemonía en el seno del movimiento obrero con otras corrientes, rechazando lo esencial del materialismo dialéctico y reafirmando los principales valores de la ideología dominante como legítimos y propios.

Por su parte, el reformismo obrero-burocrático plantea la posibilidad de construcción de una nueva sociedad sin necesidad de destruir la actual, sino como una superación gradual de ésta a través de la presencia específicamente determinante de la clase obrera aliada a otras capas sociales, incluyendo a los propietarios de capital no monopólico. Reclamándose marxista, niega sin embargo, explícitamente o en los hechos, la dictadura del proletariado y postula la viabilidad de armonizar los intereses de trabajadores y burguesía durante un periodo indeterminadamente extenso.

Ambos movimientos tienen mucho más en común de lo que habitualmente se les atribuye, y esto es aún más evidente en sus resultados.

Unos y otros plantean su accionar político, sus proposiciones teóricas y sus objetivos transformadores, en el interior del actual sistema democrático-burgués, concibien-

do en consecuencia los resultados posibles de su gestión como una evolución del mismo en el plano de las instituciones de gobierno, de las estructuras económicas y de las relaciones entre las clases.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, el reformismo pequeñoburgués y el reformismo obrero-burocrático alcanzan un alto grado de entendimiento sobre la base de sus numerosas coincidencias en el plano del análisis de las contradicciones de la sociedad chilena, del carácter de las fuerzas armadas y de la utilización de las instituciones del Estado democrático-burgués.

Ya hemos observado cómo el intento de transformar la sociedad chilena —capitalista y dependiente— se vio conducido al más absoluto fracaso precisamente debido a la dirección estratégica que le dieran las fuerzas citadas. El hecho es que los dos sectores reformistas, además de las características anotadas, tenían y tienen en común el mantenimiento de valores esenciales creados y desarrollados por la burguesía, como válidos y permanentes a la sociedad humana, ya sea en una organización capitalista como en una “socialista”. Y estos valores corresponden, si no en su totalidad en gran parte, a las parejas dialécticas “positivas” / “negativas” de la ideología dominante, esto es, burguesa.

Esta reproducción de la concepción del mundo de la clase dirigente en las filas del movimiento obrero organizado encuentra su explicación, en una importante medida, en la fortaleza y estabilidad —dentro de la crisis— del sistema capitalista. Efectivamente, es el mantenimiento del sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, que no ha cesado de incorporar nuevas capas de la población del mundo a la economía de mercado, lo que asegura la reproducción de su ideología como ideología dominante.

El problema central es que, frente a esa situación, los partidos que nacen desde el seno mismo de la clase obrera, se enfrentan a una gran impermeabilidad en la

conciencia de los sectores sociales a los cuales se dirigen, y que deben ser, precisamente, los principales agentes del proceso de cambios revolucionarios. La ideología proletaria no facilita —por el contrario dificulta— el acercamiento a las grandes masas de trabajadores que están infiltrados y dominados por los valores de la sociedad capitalista. Justamente en la medida en que la nueva ideología se distingue de las creencias tradicionales, es rechazada o ignorada por la mayor parte de los obreros y trabajadores que durante una situación de desarrollo “normal” se encuentran integrados a la reproducción del sistema. El resultado de esta gigantesca dificultad ha sido, en casi todos los casos, la deformación primero y degeneración posterior —cuando no la sectarización—, de los partidos que han pretendido asumir la representación del proletariado.

Estas organizaciones, para conseguir acrecentar su influencia y dirigir a los obreros primero, luego a todos los trabajadores asalariados y a la pequeña burguesía, renuncian a los valores más disímiles de la ideología dominante, rechazan las ideas principales del pensamiento marxista. En esta forma creen avanzar al adoptar los conceptos más difundidos de la presente sociedad. Lo cual no corresponde siempre a sus esperanzas pues ese espacio político ya está ocupado por partidos más antiguos que representan integralmente, teoría, directiva y praxis, a distintos sectores sociales de ideología burguesa o pequeñoburguesa. Sin embargo, al transcurrir del tiempo, esas organizaciones que nacieron con la pretensión de luchar por una sociedad socialista, consiguen forjarse un espacio y ganar simpatías, una masa estable de adherentes y finalmente influencia institucional. Para ello, como primera medida, han debido poner el acento en las reivindicaciones de carácter económico que inciden en la distribución de la producción, esto es, limitar su programa —“durante una primera etapa”— a la redistribución del ingreso, al reparto de la plusvalía, lo que no afecta a la propiedad misma del capital.

Y que por tanto no cuestiona los valores principales de la ideología dominante. Toda práctica tiene su dinámica. Así estas organizaciones terminan reproduciendo, coherentemente primero, consecuentemente después, esos valores de la pequeña burguesía. Y por supuesto, llegando a ocupar también un espacio político.

Eventualmente, llegan también a constituir el gobierno o parte de él. Lamentablemente, con ello no ha avanzado mucho el proceso revolucionario, pues todos esos cambios que forman parte del sistema político, económico, social, posibilitan en cualquier instante una reinversión de las transformaciones, precisamente porque el elemento principal que está constituido por la ideología proletaria se encuentra ausente de la conciencia de quienes deberían ser los agentes y los actores, esto es, de los trabajadores y, en primer lugar, de la clase obrera industrial.

En su aplicación concreta en Chile, esa estrategia que contemplaba "cambios revolucionarios" en el interior del sistema democrático-burgués mediante su evolución y modificación graduales, a través de elecciones, con la obtención de la presidencia primero y de una mayoría parlamentaria a continuación, de afectar exclusivamente los grandes monopolios y los intereses imperialistas manteniendo la "mediana y pequeña propiedad", en alianza con las "clases medias" y respetando el carácter "profesional" de las fuerzas armadas así como todas las otras instituciones del Estado capitalista, esa estrategia llamada "vía político-institucional", "vía chilena al socialismo", "vía no-armada", esa estrategia llevó en este caso concreto a una extrema polarización social para desarmar luego a los trabajadores debido a su inserción en el marco de la ideología dominante, por la presencia principal de partidos y dirigentes que no obstante su base obrera se habían integrado a esa ideología a través de su devenir histórico.

Pareciera tratarse de un problema insoluble y cerrado como un círculo. Para ganar autoridad entre los trabajadores los partidos de origen obrero renuncian a las ideas

marxistas y terminan integrando valores fundamentales del pensamiento de la burguesía. Después de haber alcanzado un espacio político importante entre los asalariados, la ausencia de posiciones dialécticas les impiden convertirse en un instrumento de transformación revolucionaria y por el contrario, la sociedad capitalista los asimila como un elemento más de reproducción de la misma.

Sin embargo, este problema, el más importante que haya afrontado la humanidad, fue eficazmente resuelto por Lenin.

El partido bolchevique no se asimiló a los valores de la sociedad de su época. Por el contrario. Hasta febrero de 1917, en que se desata la crisis del sistema, había logrado alcanzar una presencia reducida estrictamente a los trabajadores industriales más avanzados, precisamente porque no se sometió a la ideología dominante. Esto fue particularmente evidente después de las Tesis de Abril, cuando Lenin es "acusado" de haberse pasado a las posiciones de Trotsky al defender la estrategia de la revolución socialista y, en medio de la euforia reinante, los bolcheviques son aislados de todos los partidos "democráticos" y "socialistas", debido a su táctica, a su programa, a sus objetivos.

Estos contemplaban, en primer lugar, la ruptura del sistema a través de la destrucción y disolución de todas las instituciones vigentes y "representativas" o "legítimas". La alianza de clases se basaba en el proletariado y en los campesinos sin tierra, bajo la hegemonía absoluta de los primeros. En el plano de la economía, se contemplaba la desaparición de la propiedad privada. En el campo la nacionalización de toda la tierra. En las relaciones internacionales la denuncia de los tratados secretos y la proposición de la paz sin anexiones a todos los pueblos de la tierra. Para hacer frente a los sucesivos gobiernos burgueses de transición posteriores al derrocamiento del zarismo, los bolcheviques plantearon como consigna "todo el poder a los soviets", vale decir, resolver la dualidad de

poderes en favor de los trabajadores y de los nuevos órganos de poder popular.

Ciertamente, las condiciones particulares de la revolución rusa no se repitieron ni se repiten en ningún país del mundo. Pero lo importante no son esas particularidades, sino lo esencial de la táctica y estrategia leninistas.

Y éstas eran profundamente dialécticas, marxistas, inscritas en el marco de una crisis nacional primero, internacional luego, que abarcaba al conjunto de la sociedad e impedía a las clases dominantes continuar dirigiendo la misma. Esto es, la teoría leninista no consulta la posibilidad de llevar adelante un proceso revolucionario en el curso del desarrollo "normal" de la producción y reproducción capitalistas, pues está demostrado que ello sólo corresponde a posiciones ideológicas voluntarias o reformistas. La estrategia de Lenin comprende la época actual caracterizada por las permanentes y sucesivas crisis del sistema capitalista cada vez más extendidas geográficamente y con ciclos cada vez más cortos en los países capitalistas más atrasados, producto de la contradicción fundamental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la propiedad privada de esos medios, resultado de la oposición entre el gigantesco avance de la ciencia, técnica, automatización e industrialización y su reducción y limitación para mantener el lucro, la plusvalía y las relaciones vigentes.

Sin embargo, no hay crisis económica por profunda que sea, que la burguesía no sea capaz de superar. Es en esas coyunturas que la presencia de un partido organizado en los centros mismos de la clase obrera, y armado del pensamiento vivo del marxismo, se muestra indispensable para dar el empujón que conducirá todo el sistema a su destrucción.

Esa estrategia, amoldada a las condiciones específicas de su historia y de la coyuntura, se encontraba ausente en el proceso chileno.

El hecho indudable es que las crisis del sistema capita-

lista se continuarán repitiendo indefectiblemente. Y por lo tanto, la ideología revolucionaria es más indispensable que nunca para permitir a la humanidad entrar en una nueva era.